



Informar: ¿Derecho o Deber?

¿De qué hablamos cuando
hablamos del derecho a
informar?

RODRIGO CETINA PRESUEL

LORETO CORREDOIRA Y
ALFONSO

FERNANDO GUTIÉRREZ
ATALA (eds.)



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

Edition/edición 2016 :

© Rodrigo Cetina Presuel, Loreto Corredoira y Alfonso, Fernando Gutiérrez Atala

© Universidad Complutense de Madrid

Este texto puede ser descargado y utilizado libremente con fines educativos o de investigación. Si la obra es citada en todo o en parte, debe hacerse referencia al nombre completo del (os) autor(es), editor(es), el título, el año y la editorial. Cualquier otra reproducción para cualesquiera otros propósitos, ya sea en formato físico o electrónico, requiere del consentimiento del(os) autor(es), editor(es).

This text may be downloaded and freely used for educational and research purposes. If cited or quoted, reference should be made to the full name of the author(s), editor(s), the title, the year and the publisher. Any additional reproduction for other purposes, whether in hard copy or electronically, requires the consent of the author(s), editor(s).

Para más información/for more information : cyberlaw.ucm.es

ISBN: 978-84-617-6255-2

First Edition : October, 2016

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

La sintonía entre información y derecho en el pensamiento de Desantes 1

CARLOS SORIA, *Chairman, Innovation Media Consulting*

PARTE 1 – EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN COMO CIENCIA Y COMO ORDENAMIENTO DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL

La enseñanza del Derecho de la Información en el Perú 9

MARISA AGUIRRE, *Universidad de Piúra, Perú*

El derecho y el deber de Informar, dos realidades, un único objetivo: Informar adecuadamente . 21

IGNACIO BEL MALLÉN, *Universidad Complutense de Madrid, España*

Repensando el Derecho a la Información: Entre las bases doctrinales y el reconocimiento constitucional y legal en México..... 39

WILMA ARELLANO TOLEDO, *Centro de Investigación INFOTEC-CONACYT, México*

Qué es y qué no es Derecho a la Información. La dificultad metodológica en la consideración histórica de la información por la diversidad de sus parámetros de observación. 68

LORETO CORREDOIRA Y ALFONSO, *Universidad Complutense de Madrid, España*

REMEDIÓ SÁNCHEZ FÉRRIZ, *Universitat de València, España*

Crisis, ignorancia y presión social: La formación en periodismo y el modelo Desantiano como propuesta/respuesta para una profesión convulsionada 135

FERNANDO GUTIÉRREZ ATALA, *Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile*

El algoritmo se convierte en editor: Responsabilidades éticas y legales de las redes sociales como plataformas de noticias..... 156

RODRIGO CETINA PRESUEL, *City University of New York, EE.UU.*

PARTE 2 – DESAFÍOS ACTUALES E INVESTIGACIÓN EN DERECHO Y ÉTICA DE LA INFORMACIÓN

Televisión pública ¿Nuevas organizaciones del servicio público de televisión en el entorno digital? Identidad y diversidad cultural, pluralismo, participación y sociedad de la información .. 201

ANA AZURMENDI Y MERCEDES MUÑOZ, *Universidad de Navarra, España*

Una aproximación a la fundamentación doctrinal de las libertades informativas 239

LEOPOLDO ABAD ALCALÁ, *Universidad San Pablo CEU, España*

El Derecho a la Información en la Doctrina Social de la Iglesia ¿Qué ha cambiado desde el decreto *Inter Mirifica*? 269

CARMEN FUENTE COBO, *Centro Universitario Villanueva, España*

La Ética en la formación periodística 307

ÓSCAR JARAMILLO Y LUCÍA CASTELLÓN, *Universidad Mayor, Chile*

El discernimiento prudencial en orden al ejercicio de la responsabilidad social del informador ... 326

JOSÉ ÁNGEL AGEJAS ESTEBAN Y TERESA DE DIOS ALIJA, *Universidad Francisco de Vitoria, España*

INTRODUCCIÓN

LA SINTONÍA ENTRE INFORMACIÓN Y DERECHO EN EL PENSAMIENTO DE DESANTES

Carlos Soria
Chairman, Innovantion Media Consulting

EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN SE FUE ENCONTRANDO POCO A POCO CON JOSÉ MARÍA DESANTES. Y EL MAESTRO DESANTES ACEPTÓ EL DESAFÍO CIENTÍFICO DE DARLE CONSISTENCIA. Buscó sus fundamentos, perfiló sus características y dibujó –casi en solitario, como un verdadero pionero- la identidad del Derecho de la Información.

Tenía Desantes una sólida formación jurídica y una larga experiencia profesional en el campo de la edición, la documentación y la información. Tal vez por eso, alumbró una mentefactura –como le gustaba decir- hecha de mimbres intelectuales clásicos y vanguardistas a la vez.

Las ideas que Desantes lanzó en 1974 en su libro *La información como derecho* eran revolucionarias. En un momento histórico en que apenas se hablaba de derechos humanos, fue Desantes el que asignó al derecho humano a la información la categoría de núcleo de cristalización del magma científico en estado de gran fluidez, en el que se encontraba entonces el Derecho de la Información.

1. PONDERACIÓN JURÍDICA DE LOS TÉRMINOS DERECHO E INFORMACIÓN

Desantes somete a una implacable ponderación los conceptos de Derecho e Información. Es decir, pesa, mide, analiza la compenetración que existe entre ambos conceptos, fija sus líneas de identidad, semejanza, y diferenciación.

Y en esa ponderación Desantes percibe una fuerte armonía entre Derecho e Información, entre Información y Derecho. “Sin que entre uno y otro concepto –mantendrá– se pueda afirmar la identidad total, su semblanza no es mera analogía, sino lo que la moderna investigación operativa conoce como <<acoplamiento>> o identidad en parte de sus elementos (...). Derecho e Información tienen así – concluirá Desantes– una tendencia a la comunicación que constituye su misma teleología y una trascendencia ordenadora que está en su propia raíz causal. (José María Desantes, *Derecho de la Información e Información del Derecho*, 1978, 22).

2. EL DERECHO Y LA ÉTICA DE LA INFORMACIÓN TIENEN UNA MISMA BASE

Tuvo Desantes un particular interés en recordar que la Ética y el Derecho, también la Ética y el Derecho de la Información, tienen entre sí una relación esencial.

Desantes defiende la necesidad de que todo el Derecho tenga una base ética. Se aleja así del positivismo inmanente, del materialismo de la jurisprudencia de intereses y del doctrinarismo de la jurisprudencia de conceptos.

Buscaba para el Derecho raíces más firmes y oxigenadas, sin animadversión alguna al derecho positivo, que tiene sus imprescindibles funciones determinativas y aclaratorias: “Ética y Derecho –dirá– reclaman la existencia de la ley positiva”. (José María Desantes, *Ética y Derecho, promotores de la técnica informativa*, 1988, 40).

En el pensamiento de Desantes, la Ética y el Derecho tienen un objeto formal propio y diferenciado y un objeto material parcialmente común. (José María Desantes, *Memoria Derecho de la Información*, 1978, 53).

La Ética no es sólo fundamento y subsidiaria del Derecho, sino su misma fuente, eso que “los juristas clásicos llamaron ratio”. (José María Desantes, *Ética y Derecho, promotores de la técnica informativa*, 1998, 40).

En una representación gráfica, “moral y derecho constituyen círculos concéntricos. Todo lo jurídico – que ocupa el círculo interior- es así moral hasta el punto de que la moral informa a todo el derecho. Pero no todo lo inmoral es antijurídico” (José María Desantes, *La función de informar*, 1976, 229).

El orden jurídico es orden de la comunidad y el orden ético es un orden de la persona. La comunidad humana no es sino el efecto de una dimensión personal y , en consecuencia, la moral es la base necesaria del Derecho.

Ante este modo de discurrir parece alzarse un problema bien característico de nuestro tiempo: el pluralismo ideológico y político, entendido como clave de la organización político-social de carácter democrático.

Dicho con otras palabras: ¿En qué queda la fundamentación del Derecho y de la Ética en un planteamiento pluralista que niega la homogeneidad cultural y política?

El pluralismo absoluto no permite resolver el problema que él mismo plantea. La relativización absoluta que genera, impide alcanzar cualquier solución de carácter objetivo. Instalados así en un subjetivismo absoluto, no cabe otro recurso que la fundamentación a través de la voluntad de la mayoría, lo que a su vez plantea el problema de en qué queda el pluralismo de las minorías discrepantes.

Desantes intenta resolver el problema del pluralismo con ayuda de algo que, ya en su tiempo y también en los momentos actuales, se alía con el pluralismo: la convicción generalizada de que existen unos derechos humanos - cuya última fundamentación, sin embargo, se deja entre paréntesis para poder avanzar-, que preexisten a la comunidad política y que tienen un contenido específico propio.

En el caso del Derecho de la Información, Desantes configura el derecho humano a la información como su piedra fundante. El derecho humano a la información pasa a ser el principio integrador del sistema iusinformativo, la medida crítica del Derecho de la Información, el criterio esencial interpretativo de las normas positivas.

Se da así un círculo de flujos y reflujos entre el ethos informativo y el Derecho de la Información. La interacción consiste, en términos técnicos, en el proceso continuo de positivización de normas éticas y también en la experimentación ética de los nuevos problemas antes de llegar a su positivización. Pero, sobre todo, en el pensamiento de Desantes, los principios éticos se transforman con frecuencia en principios generales del Derecho de la Información. (José María Desantes, *Fundamentos del Derecho de la Información*, 1977, 20).

3. LA IDEA DE JUSTICIA HA DE VERTEBRAR EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN

La finalidad del Derecho es la realización de la justicia. Esta idea es la que “ha de guiar todo estudio jurídico y, en consecuencia, el jurídico-informativo”. (José María Desantes, *Fundamentos del Derecho de la Información*, 1977, 285).

En este punto es donde las aportaciones de Desantes se hacen especialmente audaces y luminosas.

“El aspecto activo y actuante del derecho a la información –dirá– es, en su esencia, problema de justicia, no meramente cuestión de técnica o de negocio. La técnica es un recurso

(...)”. En cuanto a la dimensión de la información como negocio, “se debe ganar dinero para poder informar, no se puede informar sólo para ganar dinero”. (José María Desantes, *Derecho a la información*, 2004, 75).

En el sistema desantiano existe “una identidad completa entre el proceso informativo y la definición de justicia de Ulpiano” (...). El *suum cuique tribuere* “referidas a la Información significan, respectivamente, mensaje, sujeto y medio”. (José María Desantes, *El deber profesional de informar*, 1988, 12, nota 8).

La realización de la justicia es dar a cada uno ese *suuum*, sin excepción posible ya que es un derecho subjetivo universal.

La Información es, por tanto, un acto de justicia (José María Desantes, *Memoria Derecho de la Información*, 1978, 54), es dar a cada uno ese *suum* y el deber de informar es “dar a cada uno la información porque es suya”. (José María Desantes, *El deber profesional de informar*, 1988, 12).

De las empresas y los periodistas que informan bien se puede decir que son justos, que practican la justicia. De las empresas y los periodistas que informan mal se puede decir que son injustos, que no practican, sino que conculcan la justicia. La virtud de la justicia es, pues, la piedra angular de la Información y de los informadores.

4. ALGUNAS CONCRECIONES SOBRE LA IDEA DE JUSTICIA EN LA INFORMACIÓN

Del derecho humano a la información arrancan todos los postulados y principios que dan consistencia al Derecho de la Información.

Por ejemplo, el deber profesional de informar; el principio de cooperación social en las relaciones iusinformativas mediatas; el principio de titularidad relativa en el cumplimiento de las obligaciones iusinformativas; el principio de función pública, con independencia de que los agentes de la actividad informativa sean públicos o privados ; el

principio de libertad de empresa; el principio de universalidad subjetiva del derecho a la información, que impide pensar que la información sea un patrimonio exclusivo y excluyente de las empresas informativas o de los informadores profesionales; el principio de inviolabilidad del derecho a la información, que -a diferencia de lo que ocurriría cuando la información era entendida como una libertad- asegura que el derecho a la información tiene un contenido objetivo que no permite su limitación extrínseca; el principio pro communicatione.

Es más: en el pensamiento de Desantes el derecho a la información es un *ius nativum* que constituye el origen de otros muchos derechos. “Podría decirse – afirma- que el derecho radical a la vida, flanqueado por los derechos cardinales a vivir en comunidad y a vivir comunicándose, son la fuente de donde manan todos los demás derechos” (José María Desantes, *Caracteres del ius communicationis en Francisco de Vitoria*, 1988, 537).

El derecho a la información presta también una fuerte encarnadura a la idea de que la justicia – como ya he recordado líneas atrás- ha de vertebrar todo el Derecho de la Información. Ese derecho humano, *nativum*, dota de operatividad jurídica la idea de que la Información es un acto de justicia, da relieve y dimensiones acotadas a la afirmación de que la justicia – una idea en principio abstracta y desencarnada, es la columna vertebral del Derecho de la Información.

La justicia *iusinformativa* adquiere mayor consistencia y operatividad, en el pensamiento desantiano, a través de tres planteamientos.

El primero invita a entender que el derecho a la información, positivizado en el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948, tiene un sujeto, un objeto y un contenido concretos, bien delimitados. Su sujeto es universal, todos y cada uno de los hombres, sin excepción alguna. Su objeto, son las ideas, hechos y opiniones. Y su contenido,

las facultades centrales de investigar, recibir y difundir ideas, hechos y opiniones, por cualquier medio de comunicación, sin limitación de fronteras.

El segundo planteamiento -defenderá Desantes con un fecundo argumentario- es que los mensajes de ideas, hechos y opiniones han de tener – para que merezcan ese nombre y aspiren legítimamente a su difusión social- unos elementos constitutivos propios. Los mensajes informativos no son entre sí de igual naturaleza ni tienen una estructura aleatoria. No son simples manifestaciones fenomenológicas ni alcanzan el concepto de mensajes informativos por el simple hecho de que hayan sido vehiculados en un medio informativo o tengan los modos informativos o hayan sido elaborados por periodistas profesionales. Los mensajes de ideas, hechos y opiniones son verdaderos mensajes informativos si tienen, y tienen en las proporciones adecuadas, unos ingredientes constitutivos, es decir, cumplen con las exigencias propias de la naturaleza de cada tipo de mensajes.

Y el tercer planteamiento operativo de la justicia iusinformativa – en el pensamiento de Desantes- lleva a entender que el derecho humano a la información ha de jugar y conjugarse armónicamente con el resto de derechos humanos. “Los mensajes, como objeto del derecho humano a la información, no admiten límites, recortes desde fuera; pero tienen excepciones (...). (José María Desantes y Carlos Soria, *Los límites de la información*, 1991, 63).

5. CONCLUSIÓN

Termino con un pensamiento de Desantes, a la vez utópico y realista: “El derecho como técnica es más tocos que la justicia como valor. Por eso la justicia es una aspiración, una tendencia asintótica del derecho” (José María Desantes, *La información como derecho*, 1974, 228).

Parte 1 – El Derecho de la Información como Ciencia y como Ordenamiento de un Derecho Constitucional

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN EL PERÚ

Marisa Aguirre
Universidad de Piúra, Perú

LAS NOCIONES DE ÉTICA Y DERECHO ESTÁN EN EL CENTRO E IMPREGNANDO TODO EL TRABAJO INFORMATIVO. POR TANTO, ES ESENCIAL LA PRESENCIA DE ESTAS MATERIAS EN TODO PLAN DE ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN. Ambas materias van haciendo que el alumno aprenda a conjugar libertad con la consiguiente responsabilidad que, en nuestro caso, está apoyada en la ciencia de la Comunicación, y más específicamente, el Derecho de la información, el que junto a la Ética constituyen las disciplinas valorativas.

1. LAS DISCIPLINAS VALORATIVAS

En estos últimos años se han venido repitiendo con insistencia una serie de ideas referidas al ejercicio de la información que traducen el sentir de una mayoría de personas que se mueven en este campo. Ya sea desde la perspectiva de la empresa informativa, del público, de los medios, de las asociaciones gremiales o de los propios profesionales de la información, es frecuente oír hablar de: rigor informativo, veracidad, honradez, y demás adjetivos que pertenecen a la esfera ética del quehacer informativo. También son constantes las alusiones a: la libertad, los deberes, la justicia, términos todos que nos llevan directamente al ámbito del Derecho; en este caso, al Derecho de la Información. De esto se puede deducir una consecuencia evidente en sí misma: las nociones de Ética y Derecho están en el centro e impregnando toda la realidad del quehacer informativo.

Por disciplinas valorativas entiendo las que valoran los actos humanos en relación con la información. Es cierto que la labor informativa supone grandes esfuerzos de selección

de material, de interpretación de noticias, de encuadrar los hechos en las circunstancias espacio-temporales, labores todas que exigen en el profesional claridad de juicio para discernir lo conveniente en cada caso. Pero unos de estos juicios valoran el bien o el mal de esta selección y constituyen las asignaturas normativas que son la Ética y el Derecho de la Información; ambas, al marcar rumbos certeros para la acción, colaboran directamente en el ejercicio responsable de la profesión.

La especulación sobre los fines de la información facilita a la prudencia la orientación necesaria para actuar, no conforme las circunstancias lo vayan exigiendo, sino en conformidad a las rutas señaladas por la Ética y el Derecho que conforman el camino de la realización del bien y de una de sus manifestaciones; la justicia. El hacer práctico en que se traduce el deber de informar queda así enriquecido por la constante referencia a unos objetivos que le sirven de norte.

Al sostener que la Ética es ciencia normativa. Messner confirma que lo es “porque al responder a la pregunta ¿qué debemos hacer? Se ocupa del deber moral, así como del fundamento de su especificación y obligatoriedad, pero, sobre todo, porque se ocupa de lo moralmente mandado”. De modo que la Ética, como disciplina filosófica, es especulativa porque reflexiona sobre la correcta orientación de los actos humanos con el fin de obtener unos principios de validez universal; como disciplina científica es teórica y aplica estos principios a un objeto determinado; pero, a la vez, es ciencia práctica, ya que su objetivo es lo que el hombre ha de realizar, un operable. No es pues un saber sólo para conocer, sino encaminado al obrar y más precisamente al obrar rectamente. Es la disciplina que nos muestra el modo cómo debemos comportarnos y supone una superación del relativismo moral.

Un aspecto del comportamiento ético es el que se refiere al ejercicio profesional especialmente en su aspecto externo de relación con los demás, de eficiencia en el desempeño

profesional, de colaboración en la realización del bien común. Bajo esta perspectiva, esos aspectos están contemplados por la Deontología, que en sí misma es “ciencia o tratado de los deberes profesionales”. Al contemplar al hombre en el ejercicio de su profesión quedan normados aspectos como el propio desempeño de la profesión, límites y alcances de esa tarea y el actuar profesional especialmente en sus vertientes de honradez, responsabilidad, criterio. Si esta moral profesional debe ser observada en cualquier cometido profesional, no cabe duda que determinadas profesiones, por redundar de un modo mayor en el cuerpo social y por tener en sus manos la “salud pública”, exigen una especial atención a los valores que actúan.

Si queremos caminar hacia una más cualificada formación de los futuros informadores debe enfrentárseles directamente con el conocimiento de las normas y principios que orientan su futura tarea profesional. Los años de estudio son el momento adecuado para profundizar en la formación del criterio y de la conciencia. Dejar esta labor para más adelante equivale a renunciar al empeño por conseguir la calidad en la información y en el prestigio social de la profesión. No se pueden ejercitar derechos y cumplir deberes sin conocerlos previamente y hacia ese fin conducen directamente las asignaturas valorativas. Por eso, con rigor, se puede afirmar que Ética y Derecho constituyen las disciplinas más formativas del informador.

Ética y Derecho, como queda definido por la doctrina clásica, no sólo no se oponen sino que se complementan y coinciden en el sentido normativo y valorativo de las acciones. Como dice Rodríguez Paniagua, la totalidad de las acciones humanas son en principio objeto de la consideración, valoración o enjuiciamiento tanto por parte de la Moral como por parte del Derecho. Aun aquellas que pueden ser consideradas como indiferentes o irrelevantes, para la Moral o para el Derecho, han de ser previamente medidas o valoradas, conforme a los respectivos puntos de vista, para que puedan ser declaradas así: como indiferentes o

irrelevantes. La coincidencia y, a la vez, la diferenciación de ambas materias queda señalada por el punto de vista que adopta cada una y así, mientras la Ética se refiere más propiamente a acciones de un sujeto singular, el Derecho reviste una consideración más colectiva o social, distinción ésta que es más conceptual que real, ya que ambos puntos de vista se intercambian: interesa también a la Ética de lo social y al Derecho el sujeto en cuanto persona singular. Abundando en esta misma idea, pero centrando el tema en la relación Derecho y Ética informativa, Soria anota que bien puede decirse que el Derecho de la Información se integra en una esfera más amplia, - el conocimiento ético de la información-, pero se distingue de él cabalmente porque en la base del Derecho de la Información se encuentra la valoración de la actividad, los hechos y los efectos informativos con trascendencia intersubjetiva *o erga omnes*.

Otra diferencia importante estriba en que la Ética valora los actos en el fuero interno y el Derecho en el externo, por lo que la Ética nunca puede exigirse en forma de cumplimiento coactivo, mientras que el Derecho, aunque no tiene sustantivamente la característica de la exigibilidad coactiva, va en ocasiones, acompañado de ella. De ahí que se haya dicho, no sin razón, que el Derecho constituye el mínimo ético exigible en una sociedad para que en ella se pueda convivir. En todo caso, el Derecho se inscribe en la Ética, es como una esfera concéntrica a la esfera mayor de la Ética, no puede contradecirla. El Derecho es la realización de la justicia y la justicia es una virtud moral. Dado que la justicia es la virtud relacional o alternativa entre las cardinales, el Derecho estudia estas relaciones con el otro o con los otros. La ciencia del derecho descende al examen, interpretación y valoración de la ley positiva. Por eso la ciencia jurídica es – como la Ética- ciencia normativa; pero es también ciencia de las normas positivas.

La presencia de las disciplinas valorativas en un plan de estudios garantiza la formación de los estudiantes en la clara conciencia de responsabilidad frente a su propia tarea. Es más, el papel de estas materias en el período discente es una preparación concreta para el futuro quehacer ético que la sociedad reclama. Precisamente la crisis de credibilidad y confianza en los medios, que el público manifiesta, es una respuesta del público a una crisis del quehacer éticamente responsable en cada informador. Por eso, “la formación de la conciencia del hombre informante o informado tiene una importancia nuclear en una pedagogía de la libertad para que sea utilizada responsablemente. Y para que esta responsabilidad tenga un reflejo externo eficaz hay que contar con el Derecho.

Existe un consenso en los teóricos de la información, que se manifiesta en conclusiones y recomendaciones de toda reunión para tratar temas de comunicación, y el consenso estriba en la necesidad de la vigencia real de la Ética profesional y del conocimiento de las regulaciones jurídicas que norman la actuación en materias de información. Sin embargo, ese consenso no se suele ver reflejado coherentemente en los planes de estudio de las distintas Facultades de información.

Concordamos con Desantes al afirmar que si la orientación empírica y técnica de los estudios de información sigue en aumento y a la vez se desconoce y margina su orientación valorativa, la Universidad estará poniendo en las manos de los informadores unos instrumentos socialmente occisivos. “Cuando se discuten los planes de estudio o la orientación general de las nuevas Facultades, se olvida, o se pretende que se olvide, esta verdad. Sin Deontología informativa y sin Derecho de la Información el poder de informar perderá su función moderadora para producir inmoderadamente disfunciones sociales de difícil reparación”.

2. PLANTEAMIENTO DESANTIANO SOBRE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

El maestro José María Desantes Guanter, primer catedrático de Derecho de la Información, al referirse a esta disciplina describía que es una charnela de unión entre el aspecto jurídico y el aspecto informativo de la educación de nuestros informadores. No se trata de un estudio de técnicas sino una educación donde cada alumno vaya integrando las nociones de justicia y comunicación.

En su libro Fundamentos del Derecho de la Información (1) establece rigurosamente el ámbito de la ciencia hasta llegar a precisiones acerca de cómo debería ser la enseñanza de esta materia; algunas de esas ideas en torno a la enseñanza reseñamos.

- El informador es informador, no jurista y la asignatura lo sorprende a mitad de la carrera, por tanto, lo más importante es lograr que la comprenda. Es necesario que entienda que el estudio de la información exige la comprensión del derecho: es una ciencia de la información, pero un lugar –el derecho- desde donde se mira esta realidad

- Por su parte, el docente debe entender la finalidad de una materia valorativa; se trata de cultivar en el alumno su espíritu de justicia, es enseñarle a razonar jurídicamente, mostrarle las técnicas instrumentales para que se pueda desenvolver en el ámbito del derecho y para que sepa reaccionar ante los conflictos que su actividad informativa pueda acarrearle.

- Debemos concretar eso en formación técnica y formación humanística del informador: ciencia y conciencia, valor de la justicia, aprendizaje de lo normativo, saber documentarse, conocer las fuentes.

El propio Desantes estableció unos **elementos subjetivos de la enseñanza**: el profesor y el alumno.

El maestro.- sabemos que educar es sacar fuera, el profesor ayuda a cultivar la perfección aunque también es cierto que el esfuerzo por enseñar es el mejor modo de

aprender. Por eso el buen maestro necesita ser un buen pedagogo y un excepcional especialista, debe mantener un buen nivel en su actividad investigadora y tener autoridad intelectual que se enmarca en su autoridad moral. Enseñar en causar ciencia en otro... y eso supone muchas condiciones en quien lo hace.

El alumno.- ayudará mucho que entienda el sentido de la asignatura dentro del Plan de Estudios. Interesa tener en cuenta el ciclo de vida por el que transcurren que permite el arraigo de ideas nobles como: justicia, derecho, orden, responsabilidad... las va descubriendo y aprendiendo a incorporarlas. Es propio de esta etapa rebelarse ante situaciones que no son como deberían ser, y, en este ámbito, el derecho va adquiriendo todo su significado.

También se establecen unos **elementos objetivos de la enseñanza.-**

Se necesita un **programa** que clarifique los objetivos: la formación jurídica del alumno. Debe ser algo muy pensado para que cada unidad refleje uno de los temas que interesan en conjunto. La exposición de los objetivos constituye la base más importante para la motivación del alumno: sabe a dónde va, sabe por dónde va y sabe por qué va.

El Derecho de la Información es una disciplina singular en la Facultad de Ciencias de la Información pero es una signatura muy formativa; se puede llegar a saber mucha información a través del Derecho de la Información y eso es lo que se pretende.

Las unidades didácticas radiales quedan centradas cuando se establecen sobre los elementos del proceso; permiten una visión de conjunto, suministran conceptos y terminología para el tratamiento jurídico de la materia. Todo plan de estudio de la materia debe considerar:

Derecho de y Derecho a la Información

El sujeto universal de la Información

El sujeto cualificado de la Información

El sujeto organizado de la Información

Derecho de los medios de la Información

Derecho del objeto de la Información

De un modo sencillo quedan establecidas pautas que luego se abren para ir desglosando los temas que encierra cada unidad. Eso es lo deseable.

3. LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN COMUNICACIÓN EN EL PERÚ

En 2012, con ocasión del 10º Congreso CIEDI, se hizo un estudio en 38 centros universitarios que ofrecían esa formación con la intención de precisar el papel que juegan las disciplinas valorativas en dichos estudios. Se revisaron 19 planes de Estudio, 11 syllabus de Derecho de la Información y 15 syllabus de Ética (2).

En la mayoría de ellas se ofrecían estudios de pregrado que se realizan en cinco años, en los que se cursan más de 200 créditos. El título que se otorga es el de Licenciado en Comunicación. Algunas facultades ofrecen especializaciones o menciones; las más frecuentes son Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas; aunque cada vez hay mayor diversificación. Sólo 4 universidades ofrecían también estudios de postgrado.

Una mirada atenta a las disciplinas necesarias en la formación del informador lleva a mencionar que las Facultades de Comunicación peruanas ponen un mayor énfasis en las disciplinas técnicas. Sólo en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo dan prioridad a las fundamentales sobre las técnicas. El segundo lugar lo tienen las asignaturas fundamentales y el tercer lugar lo ocupan las disciplinas comunicativas.

a. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PLANES DE ESTUDIO

En los análisis de los 11 planes de estudio en el trabajo del 2012, se pueden observar las siguientes características:

* La asignatura tiene diversos nombres: Legislación en Comunicaciones, Legislación y Opinión Pública, Legislación y Libertad de Prensa, Política y Legislación en Comunicaciones, Legislación en Comunicación, Derecho a la Información , Democracia y Legislación Periodística, Legislación en las Comunicaciones, Derecho de la Información .

* Es una asignatura obligatoria en la mayoría en los planes de estudio. En casi todas las universidades se le asigna un valor de 3 créditos.

* Las asignaturas están programadas en quinto año (6 universidades) y en tercer año (4 universidades). Respecto a pre- requisitos para cursar la asignatura, sólo tres universidades exigen haber cursado la asignatura de Deontología de la Comunicación y dos, la asignatura de Introducción a las Ciencias Jurídicas.

* La Introducción a las Ciencias Jurídicas, como pre-requisito de la asignatura de Derecho de la Información en algunos planes de estudio, se sustenta en la conveniencia de que el estudiante conozca las nociones jurídicas fundamentales. La realidad informativa materia del estudio jurídico se puede aprender mejor cuando hay nociones previas de las Ciencias jurídicas para estudiar tanto la Información como Derecho. Se trata de adquirir conocimientos básicos. *

* Los Objetivos que se pueden ver en los syllabi coinciden en la finalidad: buscan familiarizar al alumno con los conceptos y definiciones básicas del Derecho y la Ética. Se trata de conocer las disposiciones legales en el campo del Derecho de la Información con referencia en algunos temas a la legislación peruana y a la legislación comparada.

Sólo algunas universidades estudian las figuras jurídicas propias de la Información: el Derecho de Rectificación, la Cláusula de conciencia, el Secreto Profesional, los Derechos de Autor.

Este análisis nos permitió no sólo conocer el estado de la cuestión en las facultades peruanas, sino, como profesores de las materias examinadas, reflexionar sobre la pertinencia de nuestra labor docente y la correspondencia de los contenidos con los objetivos y la bibliografía señalados. Un estudio detallado del mismo ofrece también la posibilidad de encontrar vacíos y de mejorar su planteamiento de modo que la enseñanza vaya siendo de mayor calidad.

En líneas generales podemos decir que todavía falta un mejor enfoque hacia el Derecho y sus principios fundamentales en cuyo centro está siempre la personal. El derecho a la información es un derecho personal que exige la justicia en lo que se informa, su campo es vasto y va más allá de lo que señalan los programas estudiados que se circunscriben a disposiciones del derecho civil, penal o constitucional.

El profesor Desantes, afirma que “La orientación normativa –deontológica o jurídica- del estudio de la información, además del valor formativo que tiene para el estudioso por ser estudio de la moral o del derecho y por ser estudio de la información, tiene indudable ventaja: que al contemplar la fenomenología informativa desde el plano superior de los valores la observa en su conjunto y no de una manera parcelada y, en consecuencia, unilateral” (3). Este enfoque permite que la realidad se mire no de acuerdo a las circunstancias sino en conformidad a las rutas que marcan la Ética y el Derecho; el “hacer” queda así enriquecido.

* En los Programas se observa también que, en muchos de ellos, no hay un estudio pleno de todos los elementos del proceso informativo quedando, una vez más, la realidad parcelada.

b. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DE LA ÉTICA EN LAS**FACULTADES DE COMUNICACIÓN PERUANAS: DATOS 2016**

Para este trabajo, realizado con mi colega Rosa Zeta (4) co-autora del estudio del 2012, se han analizado 27 universidades peruanas que tienen Facultad de Comunicación y que ofrecen acceso a los planes de estudio en sus páginas web.

Estos planes contienen 50 asignaturas correspondientes a las disciplinas valorativas:

27 asignaturas de Ética de la Información o Deontología

20 asignaturas de Derecho

3 asignaturas que unen la Ética y el Derecho¹

La mayoría de Facultades de Comunicación tienen asignaturas de ética (82%) y derecho de la comunicación (70%), entre las disciplinas valorativas de sus planes de estudio.

Los nombres de las asignaturas varían, pero prima la denominación Ética y Deontología y Ética Profesional.

El curso de ética es una asignatura obligatoria en todos los planes de estudio. Lo es, incluso para los alumnos que siguen especialidades distintas del periodismo.

En el área de Derecho, las nominaciones giran en torno a la Legislación en Comunicaciones. Solo en tres universidades se dicta la asignatura de Derecho de la Comunicación.

4. CONSIDERACIONES FINALES

Si vemos la situación del 2016 respecto a la del 2012 se evidencia que, en términos generales, nos encontramos frente a una situación muy parecida que permite asegurar que la propuesta del 2012 es válida todavía. Quizá el dato más interesante de estos últimos años -

aunque está obtenido por conversaciones y reuniones de profesores de FELAFACS y en seminarios de profesores de Comunicación- estriba en la falta de profesores idóneos para la enseñanza del Derecho de la Información.

El docente no es un comunicador, proviene y es preferible que salga de la cantera del Derecho pero con vocación –por lo menos- a entender el mundo de la comunicación. Son estudios más especializados que no parecen estar en el centro de las materias vistas desde el Derecho y, por tanto, se tiene poco conocimiento del contenido. Todavía no ha sido percibido seriamente el interés que tiene esta materia para cualquier estudiante de Derecho. Curiosamente, la vida práctica nos pone en constante alerta sobre temas de vida privada, derecho al secreto profesional, temas de honra y fama... que exigen un conocimiento especializado del cómo y para qué se usa la información. La relación estrecha entre comunicación-verdad-justicia-sociedad todavía necesita ser más y mejor conocida.

BIBLIOGRAFÍA

AGUIRRE, Marisa, (1986), El deber de formación del informador, Pamplona

DESANTES, J.M. (1974) La Información como Derecho, Madrid.

DESANTES, J.M. (1977) Fundamentos de Derecho de la Información, Madrid.

GALVEZ I., ZETA, R. (2012). La enseñanza del Derecho de la Información y de la Ética en las facultades de Comunicación peruanas. Libro de Actas del 10^a Congreso CIEDI, Comunicación 9. pp. 207- 229.

ZETA, R. (2001) “Nuevos Desafíos Y Desafíos de siempre en la Formación de Comunicadores”. Primer Encuentro de Facultades de Comunicación de La Región Andina, FELAFACS, Cali, noviembre 2001

EL DERECHO Y EL DEBER DE INFORMAR, DOS REALIDADES, UN ÚNICO OBJETIVO: INFORMAR ADECUADAMENTE

Ignacio Bel Mallén

Universidad Complutense de Madrid, España

S IEMPRE ME HA PARECIDO UN TEMA DE GRAN RELEVANCIA, TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA TEÓRICO/DOCENTE COMO DEL PROFESIONAL, LA CORRELACIÓN DEL DERECHO Y EL DEBER DE INFORMAR. No creo que sea una cuestión ni superada, ni baladí sobre todo en esta época histórica que nos ha tocado vivir, en la cual la preponderancia de los derechos hace olvidar en muchas ocasiones la obligación emanada de los deberes, causa, una de ellas, del relativismo imperante. Vaya por delante que en estas páginas los conceptos de derecho y deber se emplean preferentemente desde un prisma subjetivo. No se debe confundir el derecho con otros giros “posibilidad de hacer”, “facultad de realizar”, ni por supuesto como conjunto de normas o sea lo que entendemos por Derecho objetivo, u otras acepciones semejantes, porque el derecho, en la concepción de estas líneas, es función emanada de un derecho humano, subjetivo y fundamental, que posteriormente se traducirá en el ejercicio de las tres facultades propias del derecho de la información: recibir, difundir e investigar. Por su parte tampoco conviene confundir el deber con la mera obligación porque como señala DESANTES, “esta supone un vinculum iuris”, (1) cuestión que no es propia del deber, aunque como señala este autor en ocasiones se puedan “coincidir en su denominación y en su objeto” (2).

No es cosa nueva esta “obsesión” por el tema. Me he educado, informativamente hablando, en el campo de la exigencia de los deberes informativos, más que en el derecho a la información. Aún recuerdo, con un cierto “horror”, cuando a los 27 años recién nombrado director de un periódico de Valladolid, realice las oportunas visitas, entonces tan en boga y más en “provincias” a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares. Cuando visitaba a esta última en la persona del Capitán General de la región, persona destacada entre los “halcones” de Franco, fui recibido en un inmenso despacho sobrio y frío en todos sus aspectos. El Capitán General después del taconazo del gerente del periódico, antiguo alférez provisional, que me acompañaba, y que aún resuena en mis oídos, solo me dijo dos cosas sin levantar la vista: “a ver lo que publica” y “cumpla con su deber informativo”.

Salí, como se puede deducir un poco asustado. Meses más tarde, se ve que no había entendido sus palabras, era encausado en el Tribunal de Orden Público por el grave delito de informar que la policía había entrado violentamente en la F. de Medicina de esa ciudad. Cabe entender que esta clase de noticias no entraba en el concepto del “deber informativo” del Capitán General.

Este hecho, pequeño y personal, demuestra que la ecuación derecho y deber no ha sido fácil, ni es sencilla de entender aun hoy en día en muchas ocasiones. Entonces era por razones políticas, de las cuales emanan las de carácter informativo, ya que la confusión Estado/Información era un hecho palpable. Hoy desgraciadamente y una vez alcanzado los más altos niveles en cuanto a declaraciones de derecho e incluso del ejercicio de las libertades públicas, entre ellas la informativa, sigue siendo un claro problema por razones puramente mercantilistas y de conveniencia empresarial. En esta nueva dirección donde se plantea el problema, igualmente recuerdo cuando se creó el IME, (Institute for media and Entertainment) en el IESE y que durante cuatro años he dirigido junto al Prof. Juan Manuel

de Toro, me dirigí a un gran amigo periodista, entonces director del periódico más importante en economía del país, para preguntarle que debíamos investigar, a su juicio, en el Instituto. Su respuesta, clara y rápida, fue: “los principios en los que nos educaron en la F. de Periodismo de Pamplona. Desgraciadamente en estos momentos esto están en olvido y la preocupación, desde el punto de vista de la empresa, solo son los resultados económicos”. Entre estos principios, a los que aludía mi amigo, estaban el deber y el derecho de informar.

Por ello me ha parecido oportuno razonar en esta comunicación, realizada en forma de casi ensayo, sobre este tema, que entiendo siempre será de interés permanente y sobre la cual conviene insistir de forma periódica.

1. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

El análisis de la correlación del derecho /deber ha sido de siempre una de las coordenadas del pensamiento humano. Establecer la prioridad de uno sobre otro, saber quién es primero, fijar una relación entre ambos conceptos, etc, ha sido y sigue siendo una prioridad a la hora de enunciar y desarrollar los derechos fundamentales de los ciudadanos que en muchas ocasiones, sean profesionales o no de la información, los ejercen, sin detenerse demasiado en esta dualidad propia de cada derecho establecido.

Sin entrar en procesos históricos de esta cuestión, que no es el objetivo de estas líneas, sí que podemos afirmar que la historia humana ha sido la lucha por la consecución de unos derechos en forma de normas, que, si bien podía pensarse que se poseían como derechos naturales por el mero hecho de ser persona, carecían del reconocimiento legal, normativo por parte de la forma de gobierno que en cada momento detectaba el poder. De tal manera que la dificultad estribaba en como pasar la barrera del derecho natural al derecho positivo. Esto lo han puesto de manifiesto muchos autores (entre ellos DESANTES), cuando analizan el paso

de la libertad expresión al Derecho de la información y nos presentan el sucesivo nacimiento de edictos, leyes, declaraciones, etc que poco a poco han facilitado esa transición.

Es cierto (AYLLON) que la esencia de los derechos humanos está en la propia dignidad humana, pero no es menos cierto que en tanto en cuanto no son reconocidos por el positivismo jurídico, no tienen ninguna fuerza legal operativa y esa dignidad humana se rechaza, se desprecia o en el mejor de los casos se ignora. No hace falta reseñar como aún hoy en abundantes capas de la sociedad en el mundo, este desprecio a la dignidad humana, y por lo tanto el no reconocimiento de los derechos humanos es tristemente una realidad.

Y por eso, también en el campo de la información, el deber/obligación/prohibición, ha ido siempre por delante del derecho, siendo la lucha por los derechos una larga, difícil y en muchas ocasiones trágica realidad. Baste comprobar nuestro derecho positivo de parte del siglo pasado para ver la dificultad para abrirse camino el derecho a la información. Como buenos españoles pasamos de un extremo al otro, de tal manera que (DESANTES) en el momento actual tan solo se mencionan los derechos obviando los deberes. O sea que se ha dado la vuelta a la tortilla. Si antes era un error la omnipresencia de la idea del deber, igualmente podemos afirmar que en nuestros días esa sobreabundancia de apagamiento a los derechos, es nuevamente otro error. E incluso como dice el autor antes citado “el simple enunciado de un tema que incluya la palabra “deber, resulta al menos, llamativo y puede despertar una cierta reacción de resistencia en el lector o en el oyente” (3)

Es norma usual contemplar los contenidos de las facultades del Derecho a la Información, más desde la óptica del derecho que desde el prisma del deber. Y ello, sin ser un gran error, nos puede llevar a equivocaciones en el planteamiento del Derecho a informar, que pueden acarrear decisiones graves y sobre todo perjudiciales para el fin último de este derecho, como es el de mantener informada a la sociedad.

El razonamiento de fondo que se hace para destacar ese enfoque desde el prisma del derecho, es afirmar que al fin y al cabo el derecho a informar como su misma expresión expresa es un derecho, que tiene como fin el desarrollar el derecho fundamental a la información por parte de los ciudadanos. Y no hay nada que alegar a esta aseveración, más o menos rotunda. El problema es dejarla ahí, en fijarse solo en esa óptica del derecho sin dar un paso más, complementario, y fundamentarlo en el principio del deber.

Si definiésemos la información, desde la óptica de la actividad informativa, como un mero derecho, podríamos llegar a la conclusión, fácil y errónea, de que siendo un derecho cada uno de los ciudadanos, en este caso los profesionales de la información, lo podrían desarrollar en base a sus necesidades, posibilidades, en definitiva, a su querer ejercitarlo en cada momento en la forma que estimasen más conveniente. De ahí se deducen posibilidades muy peligrosas para la información.

Pongamos solo un ejemplo. Un periodista que ejerciese la información como su derecho, a informar al público, sin fijarse en la óptica del deber y se encontrase ante una noticia informativa incómoda o incluso peligrosa para él, en cualquier sentido que queramos dar a la palabra peligrosa, podría argumentar que siendo su derecho o sea su posibilidad de actuación subjetiva, se le posibilita para dar o no esa información, independientemente de que sea de justicia que llegase al público o no, por su importancia. Colocaría al periodista en dueño y señor de la información y por lo tanto en una capacidad de decisión de hacerla llegar a la sociedad, en base a su exclusivo criterio.

Y ello a nuestro entender es un craso error, por muchas razones, entre otras porque colocaría al profesional de la información como dueño y señor de la información, cuando es sabido que el dueño moral de la información es la sociedad, todas y cada una de las personas que componen la sociedad, y que el periodista no es más que un mero intermediario en el

proceso informativo. Clave, importante, decisivo en ocasiones, pero intermediario al fin y al cabo. Esta idea de propiedad de la información por parte de la sociedad, es otro de los principios básicos frecuentemente ignorado en los momentos actuales. Aunque merecería un trabajo en exclusiva, digamos tan solo que es una idea, un principio básico para entender adecuadamente el concepto de deber/derecho respecto a la información. Hoy, más que nunca, el periodista y sobre todo la empresa informativa se considera dueña y señora de los contenidos informativos, poniéndolos en muchas ocasiones a su servicio, sea individualmente si hablamos desde la óptica del periodista, o colectivo si lo hacemos en relación con la empresa.

Esta idea de la actividad del informador como intermediario, examinándolo desde la óptica del deber, ha sido puesto de manifiesto por muchos autores (DESANTES, AGUIRRE, CORREDOIRA) cuando han destacado que el cumplimiento de la función informativa se realiza fundamentalmente cuando el informador sirve a la difusión de la información debida a la sociedad, convirtiendo ese ejercicio en un acto de transcendencia, que se basa en el deber de información que tiene todo profesional de la información.

2. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO A INFORMAR

Hemos resaltado desde el inicio de estas líneas la importancia del deber en relación con la información, superando incluso el concepto del derecho. No quiere decir esto que el derecho a informar sea secundario u ocupe un lugar subsidiario en el proceso informativo. No. Precisamente para la realización de ese deber, la sociedad, tácitamente, le concede al informador una serie de derechos, que no tienen el resto de los ciudadanos, encaminados al cumplimiento del deber.

Por ello estos derechos tienen su razón de ser, su raíz, en el deber troncal de informar. De ahí surge, por ejemplo, el secreto profesional que hemos citado anteriormente. Este

importante mecanismo que la Constitución crea en el ejercicio profesional de la libertad de información, y que da lugar al derecho a la información, no tendría su razón de ser, si no es encaminado a ejercer de la mejor manera posible el deber de informar. Y así podríamos seguir con otros ejemplos (la cláusula de conciencia, la inmersión en la vida privada y el honor de las personas, etc).

La gran diferencia, a mi modo de ver, entre el deber y el derecho a informar, es que la primera realidad, el deber, es un atributo/obligación personal del informador, que empieza y acaba en el ejercicio de informar, teniendo su razón de ser en su propia actividad profesional que le lleva a informar a la sociedad. No es un atributo voluntario, sino una obligación real, exigible y exigente.

Por el contrario, el derecho es una posibilidad, igualmente personal, que le viene concedida por el conjunto de la sociedad, que como dueña moral de la información, delega en el profesional de la información la facultad de informar, lo que le lleva a ejercer el derecho a informar en servicio a la sociedad a la que debe servir.

No se puede separar los dos conceptos, no tan solo porque sean parte de una misma moneda o un mismo hacer, sino porque ambos están unidos por características éticas, jurídicas e informativas que son inseparables. Efectivamente si analizamos cualquier principio de la información, veremos que es aplicable, y exigible, tanto las facetas del deber como las del de derecho.

Un ejemplo claro lo tenemos en el atributo de verdad que debe llevar toda información. Dicha exigencia es exigible tanto al deber como al derecho de informar, en el sentido que ambos conceptos se traducen en una realidad: la información, que si carece de verdad no es tal información. Con palabras rotundas lo afirmó en su momento DESANTES al identificar verdad con información. Y SINOVA une esta realidad en los dos conceptos

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

estudiados cuando afirma “la exigencia de verdad viene establecida por un derecho fundamental (informar), el derecho a la información y se traduce en una obligación (deber) de responsabilidad sobre los comunicadores, en este caso concreto, los periodistas” (4). El deber de informar exige la verdad, el derecho a informar no se puede cumplir sin servir a la verdad. Y así podríamos seguir con todos los atributos propios de la información.

3. LA DIFÍCIL DICOTOMÍA DEBER/DERECHO

Hace ya muchos años que se expuso con claridad, y me atrevería a decir que con brillantez (DESANTES) la dificultad de entender adecuadamente esta dicotomía entre derecho y deber. Afirmaba en una obra dedicada precisamente a examinar a la información como deber: “en efecto en el mundo actual casi exclusivamente se habla de derechos, apenas de deberes..... No se tienen en cuenta que si un derecho no está respaldado por un deber queda reducido a una mera declaración teórica, sin que exista garantía alguna de que sea eficaz El derecho a la información, que es subjetivamente universal, no sería más que un solemne rotulo si alguien no tuviera el deber de satisfacerlo, que es lo que aquí llamamos deber de informar” (5)

Sirva este extenso párrafo, escrito en 1994, para afirmar que los años no han hecho más que acentuar lo denunciado por su autor en estas palabras, ya que nos seguimos moviendo en una sociedad absolutamente identificada con sus derechos, en donde el yo impera de una manera acervada, olvidando la afirmación desantiana de que todo derecho lleva aparejado un deber, que en principio es más importante y que si se desconoce esta realidad, tenemos el peligro de llegar a graves problemas de relativismo, como el que estamos viviendo en los momentos actuales, en donde todo es relativo, todo es según me conviene en base a una hipérbole del ejercicio de los derechos y una hipertrofia de la obligación de los deberes.

Si olvidamos este criterio en el campo de la información y dejamos de proclamar que la base del fundamento de la información es la conjunción de derechos y deberes, estamos olvidando uno de los principios básicos del derecho a/de la información. Desgraciadamente esta es una de los factores que actualmente están distorsionando el papel de la información, y por extensión, de los medios, en el contexto de servicio a la sociedad. La sociedad se está impregnando cada vez más que la información pertenece a los medios, a los profesionales, y que la sociedad es un mero espectador de esa realidad. De ahí a la mercantilización o incluso y quizá el termino parezca exagerado, a la prostitución, como elemento de venta de la información, solamente hay un paso. Y no difícil de dar.

No es solo este peligro. La falta de un reconocimiento del deber/derecho a informar, está llevando a uno de los peligros y errores más graves, a mi entender, en el campo informativo. Y es pensar que como prevalece el derecho al deber y por lo tanto como hemos señalado anteriormente hago mía la información, la uso, utilizo, tergiverso como quiero y mezclo opinión personal e información. Este es otro de los problemas, que como las cerezas que se juntan, y que merece un tratamiento en exclusiva. Hoy, sobre todo en el campo de la información audiovisual, pero también en la escrita, es difícil separar en muchas ocasiones lo que es información de lo que es opinión. El problema de base está en que una u otra tienen obligaciones distintas, tanto desde la óptica del deber como del derecho y sin embargo se entremezclan en su ejercicio, dando lugar a un enfoque personalista de la información ajeno a su verdadera esencia.

Esta realidad en el campo del derecho a informar se da, por desgracia en instituciones nacidas de la proclamación, y el desarrollo del derecho a la información, como es por ejemplo el secreto profesional. Tenemos la tendencia, porque así nos lo explicita la propia constitución española en su artículo 20, que el secreto profesional es un derecho de los

informadores a ocultar o no desvelar sus fuentes informativas. Y ello es cierto, pero fundamentalmente es un deber, una obligación ética de primer orden. Básico a la hora de comprender esta institución. Si nos fijamos o lo definimos tan solo como un derecho, el periodista podría ejercerlo si o no, según las circunstancias, las presiones, las amenazas que pudiera sufrir, porque al fin y al cabo sería su “derecho” el decidir la forma de ejercitarlo. Y ello no es así. El secreto profesional, como el tema del derecho a informar, es fundamentalmente un deber, una obligación.

Por ello el Consejo de Europa en una antigua pero aun válida definición del secreto profesional, afirma que es necesario contemplarlo desde la óptica del derecho y de deber, siendo por ello dos caras de una misma moneda, que no se pueden separar, a no ser que se desvirtúe su fundamento profesional, tanto desde la óptica de la ética, como del propio derecho positivo.

Es más, podríamos afirmar que en caso de tener que elegir entre las dos facetas, derecho y deber, deberíamos poner el acento en mayor medida en la óptica del deber, más que en la del derecho, porque sabemos que ejercitando la actividad informativa o el secreto profesional, como un deber, estamos respaldando de manera firme un derecho, el de la información, mientras que si lo enfocamos al revés, quizás el carácter subjetivo del derecho contemplado como posibilidad de actuar de una manera u otra, nos llevaría a la negación del deber, o sea a no hacer llegar al público la información, que se merece, que es suya.

Por ello el derecho a informar no puede separarse del deber de informar. Son dos caras de una misma realidad que tiene como fundamento el hacer llegar a la sociedad la información más verdadera, objetiva, instantánea, útil, etc., que se merece. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el periodista está obligado a realizar todos los esfuerzos posibles y necesarios para ejercitar ese deber, que tiene su fundamento en su derecho personal a informar.

Son esclarecedoras en este sentido unas palabras de DESANTES, recogidas en una de sus obras dedicadas precisamente a este tema, en las que afirma: “El informador es el núcleo personal en el que coinciden derecho a la información y deber de informar. Un derecho al que el informador se debe, porque lo debe, porque ha de vivificarlo, incorporarlo a la vida: es el encargado por la sociedad, de una manera más o menos expresa, de satisfacer una necesidad existencial para las personas y para la comunidad. El derecho a la información es un derecho natural y, en consecuencia, el deber de informar participa de esa misma naturalidad”. (6)

4. EL ANCLAJE ÉTICO DEL DEBER Y EL DERECHO A INFORMAR

Podríamos preguntarnos, a la hora de fundamentar la afirmación rotunda hecha en líneas anteriores y respaldada en las palabras de DESANTES, en que campo nos debemos de mover para anclar esta dualidad de derecho y deber. Una primera tentación es mirar al derecho objetivo, a la norma legal, para examinar si estamos ante una obligación positiva que nos facilita una adecuada respuesta o por el contrario el derecho como norma, solo se fija en la óptica del derecho subjetivo personal, olvidándose del deber.

La Constitución española a través de su art. 20 más parece adentrarse en el terreno del derecho que del deber. En sí misma la constitución es principalmente, en su parte dogmática, una completa relación de derechos, sin que se exprese en ninguno de sus artículos (10 al 29) nunca la idea del deber, pese a que el título primero lleve el epígrafe de “derechos y deberes fundamentales”. Tan solo a partir del art.30, parte ya no considerada dogmática, se enumeran en tres ocasiones el concepto de deber (defender a España, deber de contribuir a los gastos públicos – aunque no se emplea el término deber-, y el deber de trabajar).

Es una tentación lógica, y máxime en estos momentos en que como señala BLAZQUEZ, el razonamiento ético está siendo sustituido, por desgracia, por el positivismo

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

jurídico, ya que “existe una fuerte tendencia a confundir la ética de la información con las normas legales emanadas de los organismos legislativos. La ética queda sí absorbida el derecho, la razón por la voluntad y la responsabilidad de la conducta por la arbitrariedad de los consensos democráticos” (7).

Cuando esto ocurre las consecuencias son nefastas, tanto en el terreno del deber como del derecho, porque entonces solo se mira lo que la norma dice, y si esta no establece el deber o acrecienta subjetiva y erróneamente la noción del derecho, estamos conducidos a una visión positivista de los dos conceptos, que se alejan de la razón ética que es quien realmente configura su verdadera razón de ser. Es lo que llama POLO considerar “a la ética reductivamente, atendiendo solo a las normas. Esta ética es más bien moderna, se condensa cuando el hombre descubre leyes con su razón, admite que esas normas o leyes racionales son lo único verdadero y el hombre debe seguirlas...” (8).

Quizás uno de los motivos para no saber encontrar el verdadero sentido al concepto del deber, es que le hemos querido dar siempre una connotación negativa, incluso peyorativa, que nos llevaba a pensar más en el campo de la coacción, de la falta de libertad, que a su verdadero sentido que lo encuentra en la complementariedad del derecho. No debemos ver al deber como algo negativo, algo que significa constricción (AYLLON), que viene como “aguar la fiesta”. No, el deber es, en el sentido que se quiere dar a estas páginas, una afirmación positiva porque está encaminado a conseguir un recto ejercicio del derecho a informar.

Si queremos encontrar un anclaje firme y sólido a esta relación de la que venimos hablando debemos ir al campo ético y no solo al jurídico. Como señala BLAZQUEZ “la última palabra sobre lo que es derecho y obligación (deber) en materia de información corresponde a la ética y no al derecho positivo”.(9). Lo que ocurre es que estamos en un

momento histórico, en el sentido del tiempo, en que el menosprecio a la ética es palpable. No es un desprecio querido, no es una búsqueda activa del desconocimiento ético, simplemente se ignora, no se valora, no se tiene en cuenta y ello hace que las consecuencias informativas sean muy negativas.

La ética debía ser una de esas rayas rojas que nunca se deben de olvidar. Recientemente asistía, como moderador a un dialogo entre el Rector de la Universidad de Navarra SANCHEZ TABERNERO y el periodista Iñaki GABILONDO. Se hablaba del futuro de los medios de comunicación y ante mi pregunta sobre el necesario rearme ético de la profesión, GABILONDO manifestó dos ideas que me parecieron fundamentales. La primera, decía, es la falta de reflexión que los periodistas hemos hecho en estos temas a lo largo de nuestra historia y la segunda la concretaba en que los periodistas, como conjunto profesional, no hemos sabido fijar límites, rayas, rojas que nunca se deben de traspasar, entre ellas la falta de los aspectos ético-informativos a la hora de desarrollar nuestras funciones. Estoy totalmente de acuerdo con él.

Si olvidamos esa necesaria referencia ética, si no establecemos el fundamento en el razonamiento ético, tendremos obviamente sobradas razones reales, para llegar a la conclusión que es el derecho positivo el que nos marca el camino en esta u otras cuestiones (por ejemplo en el tema del secreto profesional antes citado). Y ello porque una lectura fría, adeptica, por ejemplo del artículo 20 de la Constitución, nos lleva, sin duda, a fijarnos exclusivamente en la base jurídica y por lo tanto a establecer que es el razonamiento normativo, la existencia de la pura norma jurídica, el fundamento del derecho a informar.

Si hacemos esto estaríamos en un craso error. El fundamento del derecho a informar, y su correlativo del deber a hacer llegar esa información a la sociedad, esta fundamentalmente en la ética, que a su vez tiene, entre nosotros, el respaldo del derecho objetivo, del derecho

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

como norma. Efectivamente es la ética la que nos marca el camino a seguir en este punto dado que el derecho objetivo, y máxime en las cuestiones que estamos analizando. O nos basamos en la ética o perdemos la verdadera razón de ser.

Esto nos lo demuestra con plena claridad la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece la información como derecho. ¿Y que es esta Declaración?. Pues sencilla y llanamente una relación de derechos y deberes desde la óptica exclusivamente de la ética. Es cierto que luego en base a ella se han ido incorporando estos derechos y deberes al campo jurídico, como es en nuestro caso a través de la Constitución de 1978, pero no se puede olvidar que nacieron, y persisten, fundamentalmente, como garantías éticas, en nuestro caso del orden informativo.

Por ello no conviene olvidar que el derecho a informar, con su correlativo de deber a ser informado, son parte indisolubles de un derecho fundamentalmente ético como es el derecho a la información, que cuando se refuerza en las normas jurídicas que desarrollan su contenido, se convierte en derecho de la información, como conjunto de normas relativas al proceso informativo. Pero que su ejercicio es individual y por tanto también su responsabilidad, como nos indica BAUMAN, al afirmar que “podemos legislar deberes a partir de reglas universales, pero la responsabilidad moral (ética) solo existe y puede realizarse a título individual” (10).

Esta idea del deber ético la ha puesto recientemente de manifiesto GUTIERREZ al afirmar que: “el deber debe ser considerado una categoría ética, estudiada y fundamentada por la teología moral, que da ciertos seguimientos acerca del planteamiento deontológico de los deberes del hombre y en particular de los deberes profesionales” (11).

Este mismo autor afirma, a la hora de destacar el deber de informar como base del derecho a la información el carácter “troncal”, o sea básico que este concepto tiene en el

campo informativo, resaltando su importancia y recogiendo palabras de AGUIRRE que asegura que “todos los deberes imaginables del profesional de la información, en cuanto tal profesional y los derechos necesarios para cumplirlos, son reducibles en ultimo termino a este deber global que los profesionales asumen cuando deciden dedicar su vida a la información”(12).

Esa misma fundamentación ética tiene el derecho a informar. Aunque como hemos señalado en este campo el positivismo jurídico cumplimenta claramente al ético, ya que la norma básica en la que descansa el derecho a la información en España, el artículo 20 constitucional, enfoca su contenido claramente desde el punto de vista del derecho ““se reconocen y protegen los derechos...” para continuar con el contenido de las dos facultades en las que lo concreta, el recibir y el difundir.

El que tenga esa plasmación jurídica no nos debe hacer olvidar que por encima ella, se sitúa la fundamentación ética, ya que el derecho a informar es un derecho humano, reconocido en la DUDH, que como hemos señalado es un texto no jurídico, ético, que proclama los derechos humanos, en este caso la información, propios de la dignidad humana. Es en esa dignidad humana donde autores (DESANTES, SORIA, etc) han sabido ver el verdadero sentir del derecho a informar al afirmar en relación con el art. 20: “.es decir que los derechos fundamentales son anteriores a la Constitución. Y, al decir anteriores, y no dependientes de que la Constitución los haya o no reconocido, está subrayando que son anteriores a la propia enunciación constitucional...” (13).

Por otra parte, hay que trasladar al campo individual, al de cada profesional, el ejercicio del derecho que estamos analizando. Los derechos son universales, pero se ejercen de forma individual. No es aceptable en este campo, ni en otros muchos, que las normas, el fundamentar un erróneo ejercicio del derecho se base, en palabras de BAUMAN, en que Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

“todos lo hacen”, “así es como se hacen las cosas”, porque ello, en palabras de este autor “es la medicina preventiva más eficaz para una conciencia culpable” (14).

5. EL PRINCIPIO CONSTITUTIVO DEL DEBER INFORMATIVO

A la hora de analizar el contenido del deber informativo, conviene que nos preguntemos en un primer momento cuál es su principio constitutivo o sea en que se fundamenta este concepto en el ámbito informativo. La respuesta nos la ofrece DESANTES, al cual han seguido otros autores, al concretarlo en el principio de justicia que el informador debe ejercitar respecto al público. Si por justicia podemos entender, siguiendo la clásica definición de ULPiano, dar a cada uno lo que es suyo, ese suyo propone DESANTES, es dar a cada ciudadano la información que se merece, que espera y que necesita. Ello supone para el profesional de la información un mandato concreto, que exige que realice todos los esfuerzos necesarios, personales y profesionales, para desarrollar ese “acto justo” en denominación desantiana, que le permitirá hacer llegar al público la información debida.

Para realizar esto el periodista necesita la libertad más absoluta, tanto en el ámbito personal como social, político y fundamentalmente empresarial. Es en este punto donde se sitúan, una vez alcanzado los niveles de libertad política adecuados, las mayores dificultades para cumplir el deber informativo, concretados en los intereses de todo tipo, sobre todo económicos y políticos, de las empresas informativas.

Para llevar a cabo ese deber de informar no solo hay que fijarse en factores externos como puede ser, según acabamos de decir, el adecuado nivel de libertad propio de todo proceso informativo. Son necesarios también factores internos, cualidades personales del informador, fundamentalmente la voluntad del informador de ejercer ese deber informativo, que se traduce en opinión de SINOVA, en otros muchos “deberes deontológicos a cultivar en el momento de elaborar, presentar y difundir información” (15) y que este autor los

concreta en “desinterés personal, ecuanimidad, equidad, honestidad, honradez, imparcialidad, independencia, integridad, neutralidad, ponderación, rectitud de intención...”

(16)

Todos los deberes deontológicos citados son de gran importancia, porque en su unión perfecta, conducen a la realización de es deber de informar con objetividad, prontitud y rectitud. Sin embargo, todo ellos podríamos decir que son deberes previos a la acción informativa o sea que son necesarios a la hora de proceder a investigar, seleccionar, elaborar y difundir la información. Pero no acaba ahí, para el informador, la exigencia del deber de informar. Dadas las múltiples y a veces justificables razones para que el informador no alcance la justa verdad en sus informaciones, el deber de informar tiene una relación directa con el deber de rectificar, la obligación, y aquí sí que empleamos el termino de manera adecuada porque si se ha establecido una especie de vinculo jurídico que citábamos anteriormente, con el destinatario de la información. Y por lo tanto al informador, se le debe exigir la necesaria rectificación respecto a la información errónea, equivocada, parcial, etc

La razón última de este deber de rectificar lo debemos anclar en el citado principio de justicia. El destinatario tiene derecho a la información justa y rectificar en terminología desantiana es hacer las cosas rectas, en el sentido de justas. Este deber regulado por la norma jurídica en el llamado derecho de rectificación exige tres condiciones para su ejercicio legal: la alusión cierta, que el destinatario las considere inexactas y que le puedan causar perjuicio. Dejando al margen las discusiones doctrinales que estas exigencias han ocasionado, sobre todo en su segundo apunte, el informador (y el medio) tiene la obligación inmediata y sin necesidad de que el destinatario ejercite las acciones legales establecidas, de rectificar si el mismo ha visto inexactitudes en su información. No porque haya causado un perjuicio a la

persona destinataria de la información, sino porque la información sea inexacta o en peor caso falsa.

BIBLIOGRAFÍA

F. ANGÉLICO. *Lei de Acesso à Informação Pública e seus possíveis desdobramento à accountability democrática no Brasil*.

DESANTES GUANTER, J.M., El deber de informar, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Valencia 1988, pág. 13,10, 19.

SINOVA GARRIDO, J, Comunicación y verdad, Ediciones CEU, Madrid 2013, pág. 7.

DESANTES GUANTER, J.M., El deber de informar, Fundación Universitaria San Pablo CEU, Valencia 1988, pág. 10

DESANTES GUANTER, J.M., La información como deber, Editorial ABACO, Universidad Austral

BLAZQUEZ, Niceto, La nueva ética en los medios de comunicación, BAC, Madrid 2012, pág. 130/131

POLO, Leonardo, Ética: hacia una versión moderna de los temas clásicos, Universidad Panamericana, pág., 152

BLAZQUEZ, Niceto, La nueva ética en los medios de comunicación, BAC, Madrid 2012, pag.131

BAUMAN, Zygmunt, Ética postmoderna, Siglo XXI, Madrid 2009, pág. 99

GUTIERREZ ATALA, F, Derecho de la Información. El ejercicio del Derecho a la Información y su jurisprudencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid 2015, pág., 541

AGUIRRE, M, El deber de formación en el informador, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1988, pág. 48-49

DESANTES GUANTER, J.M. y SORIA SAIZ, C, Los límites de la información, Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid, 1991, pág. 18

BAUMAN, Zygmunt, Ética postmoderna, Siglo XXI, pág. 75

SINOVA, J, Comunicación y verdad, Ediciones CEU, Madrid 2013, pág. 17

REPENSANDO EL DERECHO A LA INFORMACIÓN: ENTRE LAS BASES DOCTRINALES Y EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL ¹

Wilma Arellano Toledo².

Centro de Investigación INFOTEC-CONACYT

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN HA TENIDO UNA NOTABLE EVOLUCIÓN DESDE QUE FUERA PERFILADO EN TEXTOS DOCTRINALES PENSADOS Y ANALIZADOS POR DON JOSÉ MARÍA DESANTES (COMO AQUELLOS DE FRANCISCO DE VITORIA) Y POR LA TEORÍA DE ESTE DERECHO DESARROLLADA POR ÉL MISMO. A veces de manera paralela y en otros casos no, también desde que fuera reconocido en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

En este capítulo se analizará la evolución del derecho a la información desde el punto de vista doctrinal y legal, poniendo énfasis en la teoría de los derechos fundamentales y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como en la realidad constitucional de este derecho.

¹ Comunicación realizada en el marco del proyecto “El avance del Gobierno Abierto. Régimen jurídico constitucional de la implantación de la transparencia, datos abiertos y participación especialmente a través de TIC y E-Gov”, cuyo Investigador Principal es Lorenzo Cotino Hueso. Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad mediante el Subprograma Estatal de Generación del Conocimiento para el periodo 2016-2018. Referencia: DER2015-65810-P.

² Dra en Derecho de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Investigadora adscrita a Infotec. Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel I, para el periodo 2015-2018. Coordinadora de Protección de Datos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.

INTRODUCCIÓN

La llegada e impacto masivo que han tenido las Tecnologías de la Información y la Comunicación en todos los derechos, ha implicado una nueva reflexión sobre los alcances teóricos y conceptuales que debe tener el derecho a la información, así como de su contenido legal. En este sentido, se ha pensado en la libertad de expresión como centro o núcleo de ese derecho (asociado a la facultad de difundir información), luego se ha vislumbrado la necesidad de que ese derecho tuviese una amplitud reflejada en las facultades de recibir e investigar información. También se ha considerado, como sucede en el caso mexicano, en un derecho a la información orientado al acceso a la información pública gubernamental como un reclamo para garantizar la transparencia y, finalmente, en un derecho de última generación que ve potenciado su ejercicio con las mencionadas TIC, ya que las tres facultades se ejercen con mayores alcances.

Surge también aquí el siguiente esquema: el derecho a la información, la libertad de expresión y el sistema democrático aparecen unidos y como un todo indisoluble, ya que sin uno de ellos no son posibles en la realidad todos los demás (concepción integrativa de los derechos fundamentales). De este modo, tiene lugar la disquisición que hacen los constitucionalistas Juan Silva Meza y Fernando Silva García, en cuanto a que si el Estado debe garantizar el derecho a la información, se infiere de ello una garantía de un elemento esencial de la democracia. Pero con la interpretación de que las tecnologías potencian ese derecho se va mucho más allá: si el Estado conecta a las personas y reduce la brecha digital, se refuerzan las posibilidades de ejercicio del derecho a la información por cualquier medio y de forma mucho más integral, como he sostenido en algunos artículos.

Asimismo, precisamente lo anterior ha llevado a la discusión de si ese derecho a la información implica también un derecho de acceso a las tecnologías, a Internet, a la banda

ancha y a la inclusión a la Sociedad de la Información. Todo ello, para dar lugar a un derecho en todas sus dimensiones, con las herramientas necesarias para el multicitado ejercicio.

El objetivo de la comunicación es analizar los antecedentes doctrinales expresados por Desantes y su escuela de pensamiento, los elementos de Derecho constitucional pertinentes, así como algunos aspectos de la legislación existente en España y México.

1. EL CONSTITUCIONALISMO DEL SIGLO XX PARADIGMA COMO PARADIGMA Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Cuando nos encontramos ante el análisis de los derechos individuales reconocidos y garantizados en los textos constitucionales alrededor del mundo, quizá pensemos que siempre fue así o que en Constituciones del anterior o dos siglos anteriores, primaban los derechos de las personas antes que el definir cómo debía organizarse el Estado. Lo cierto es que la estructura y contenido de las normas fundamentales –y en el caso de España y México compartimos tradición jurídica y, sobre todo, sistema jurídico, el *Civil Law*--, ha ido sufriendo notables variaciones con el tiempo y como resultado de los hechos históricos.

Tras la etapa de las dos guerras y el fin de los totalitarismos, las Constituciones y las Declaraciones de Derechos, además de los Pactos y Convenciones; vienen a jugar un importante papel en la definición y reconocimiento de muchos derechos, en cuyo contexto se encuentra el derecho a la información, que sin embargo tiene una historia mucho más larga. Sin embargo, cuando comienza a positivarse, es que el camino a su realización y ejercicio se vuelven más palpables.

De acuerdo con Fioravanti, la moderna y progresiva afirmación de una “familia de Constituciones” que se caracteriza por ser democrática y diferenciarse de aquellas revolucionarias de finales del siglo XVIII; hallándose situada en la segunda mitad del siglo

XX. Dicho tipo de Constituciones se “expresa a través del concepto de *límite* y *garantía*”. Aparece sin tintes de absolutistas y de un enemigo radical, para pasar a poner en el centro de su conformación a los derechos fundamentales de la persona, declarados inviolables y protegidos firmemente. “En otras palabras, las Constituciones democráticas del siglo XX se sitúan históricamente en una fase de plena recuperación, aunque a través de nuevos instrumentos, del valor y del significado de la constitución como norma fundamental de garantía, que ahora asume la forma del lugar en el que están custodiados, y declarados inviolables, los derechos fundamentales de la persona” (Fioravanti, 2016: 121).

Pero la caracterización de las Constituciones de la segunda parte del siglo XX aporta mucho más de lo pensado a nuestro tema de análisis, pues dichos ordenamientos aparecen con la premisa de su *supremacía* y como límite, además de como agente inspirador de la acción de los poderes públicos, de acuerdo con el mismo autor. Esto es especialmente importante para el estudio de cuál ha sido el reconocimiento del derecho a la información que, en el caso mexicano, fue plasmado constitucionalmente más por una cierta limitación al poder del Estado y su Gobierno, cuanto que son entes que poseen información a la cual debe acceder el ciudadano. Más adelante insistiremos en ello.

Ese límite no se refiere únicamente a la actuación estatal, que al fin y al cabo había sido reconocido como una fuerza coercitiva válida para mantener la armonía y la organización social. Ese límite aparece en una dimensión mucho más amplia cuanto que la Constitución tutela los derechos fundamentales y confina el “desarrollo de la potestad normativa, incluida la del legislador” (Ibídem: 122-3), integrando principios de justicia que la misma norma fundamental hace o habrá de hacer posibles. Así, siguiendo con Fioravanti, las Constituciones aparecen como la “gran norma directiva” y como ordenamientos

contrapuestos al “estatismo liberal del siglo XIX”³. Es decir, el Estado se constituye en torno a ser garante de los derechos y como un instrumento que pretende la realización de valores.

De este modo:

El primer itinerario de transformación constitucional es el que va “de la mera garantía legislativa a la inviolabilidad, que marca profundamente el paso histórico del Estado liberal de derecho al Estado constitucional. Consiste, en una palabra, en la emancipación de la garantía de los derechos del mero dato formal de la ley: el derecho ya no puede decirse garantizado por el hecho mismo de estar configurado y previsto por vía legislativa, como si la ley de por sí produjese el efecto positivo de la garantía, al ser necesariamente justa y racional en sí, como expresión de la voluntad general, o del principio democrático, o de la historia de la nación; este derecho está ahora garantizado ante todo porque es elevado, mediante la previsión constitucional, al rango de principio fundamental, expresado en la propia Constitución, que a su vez alcanza el vértice de la escala jerárquica de las fuentes del derecho, y de esta manera se coloca al fin en la posición, que el precedente ordenamiento no conocía, el de la inviolabilidad”(Ibídem: 133).

³“En efecto, en la lógica liberal- estatalista la unidad política de un pueblo, o de una nación, en cuanto representada por el Estado soberano, es concebida por eso mismo como un dato objetivo y pacífico (...). En realidad, tras toda esta problemática está de nuevo la aversión del estatismo liberal hacia el contractualismo, es decir, hacia la idea de lo que llamamos “Estado” y que tradicionalmente representa el bien fundamental de la unidad política, no sea el presupuesto de todo, sino más bien el resultado de una acción consciente y conocida, de los individuos, de las fuerzas sociales y políticas, y también de los mismos poderes públicos” (Ibídem: 125).

Los derechos individuales aparecen aquí como centro y la organización estatal será la encargada de garantizar que sean inviolables y que la base de todo ello sea conforme al criterio de “igual dignidad social”. Por tanto, la dignidad es establecida como referente o punto de partida de toda la concepción de los derechos fundamentales en las Constituciones que aparecen en la segunda mitad del siglo XX y posteriormente, o de aquellas que pertenecen a la primera mitad, pero que precisamente han sido reformadas para encapsular este espíritu de primacía de los derechos de la persona. Es la persona y su concepto, el que está “en el centro de las transformaciones constitucionales” del multicitado siglo (Ibídem: 141).

Pero este acento en la persona y su dignidad, José María Desantes lo ubica mucho antes (y no sólo con respecto al derecho a la información, sino a todos los derechos del catálogo de derechos humanos que se reconocen en la actualidad) y es, de acuerdo con él, en las escuelas teológico- jurídicas que gozaban de “independencia especulativa” y que, sobre todo, entendieron que el hombre “participa en un orden ético natural cuyos principios de base son la unidad del género humano, la dignidad de la persona humana y la igualdad esencial de los hombres”. En torno a esos tres elementos gira la conceptualización que hace Francisco de Vitoria del *ius communicationis*, que Desantes ubica como el “moderno derecho a la información (Desantes, 1977: 48).

Estos principios se entienden si se piensa que el fundamento religioso de la escuela citada, “no puede prescindir de la idea de que los derechos humanos y el derecho a la información tengan un origen cristiano”. No obstante, en la teorización y doctrina posteriores (sobre todo liberales) pero quizá previas a las configuradoras de los derechos fundamentales como los conocemos hoy en día, comete una inconsistencia en cuanto al derecho a la información se refiere y es precisamente que, centrándolo en la idea de los derechos

individuales con la dignidad humana como vértice, parece indicar que esa libertad inicia y termina en el individuo mismo, “sin darle trascendencia social alguna” (Ibídem: 49-50). Más adelante veremos cómo esto se corrige gracias, precisamente y en cuanto a estudio, a la escuela desantiana –aunque menciona en su obra a diversas teorías previas que inspiran sus análisis-- y, en cuanto a reconocimiento vía convenciones y en el ámbito constitucional, a los posteriores instrumentos internacionales de derechos humanos y las Constituciones que integran sus principios.

De lo anterior se desprende una suerte de entendimiento que consiste en que el poder de informar, al ser una libertad únicamente individual como se estima en ese momento, está en manos de aquellos que tienen “el poder de informar en los siglos XVII, XIX y XX”. Se diluye así la visión posterior, o aquello que no supieron ver esas doctrinas liberales, que es un “destino comunitario” del derecho a la información. Conforme a Desantes, el error fue mucho más grave con respecto a la comunicación, pues ésta es el centro mismo de la idea de comunidad. Así, se fueron tomando en consideración nuevamente los “criterios iusnaturalistas, que fueran constituyendo la idea de libertad por la de derecho” (Loc. Cit), de lo cual se desprende que su ejercicio es precisamente el que están llamadas a garantizar las Constituciones de las que venimos hablando con Fioravanti.

El Estado se convierte así en un Estado constitucional y los derechos que tutela a través de la Constitución, mismos que son inviolables, pues esta característica es la que “expresa mejor aspecto de la indisponibilidad de los derechos fundamentales” (Fioravanti, 2016: 141), en donde el derecho a la información tiene un papel estelar, puesto que hablamos de la época en donde se hace patente la necesidad de crear regímenes democráticos. Y como bien sostienen Corredoira y Sánchez Ferriz (2016), no hay democracia sin derecho a la

información: “el derecho a la información es axial, es presupuesto insoslayable de toda democracia”. Además de este papel central, aparece ligado a ello que los derechos fundamentales así garantizados pertenecen “a una dimensión sustraída al libre ejercicio discrecional de la voluntad política” (Fioravanti, 2016: 141).

Pero aún hay más. Los doctrinarios hasta aquí citados destacan también el rasgo del constitucionalismo de la segunda mitad del siglo XX, en donde la persona que tiene garantizados esos derechos fundamentales no requiere ser “ciudadano” de una Nación dada, aquella cuya Constitución haya garantizado esos derechos. Con la sola condición de persona humana le viene dada la posibilidad de ejercicio de esos derechos, de lo cual se deriva una especie de “ciudadanía —entendida como concreta titularidad de derechos reconocidos— que prescinde de la nacionalidad, es decir, ya no necesariamente estatal- nacional: una ciudadanía puramente constitucional” (Ibídem: 148).

En este sentido, Peter Häberle sostiene que no existe aún una “comunidad constitucional”, pero sí se puede hablar de una “*society of communities in formation*” (Häberle, 2005: 8). Lo cual suela especialmente esperanzador en materia de derechos fundamentales. De hecho, dice, los “fundamentos del Derecho internacional constituyen ya en la actualidad, una Constitución parcial de la humanidad” (Ibídem: 9). Piénsese, por ejemplo, en la Carta de las Naciones Unidas, que junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), “constituyen el embrión del constitucionalismo global” (Carbonell, 2004: 18).

Este último aspecto reviste esencial importancia, dada la situación actual en donde las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aparecen como estelares. Si con las tecnologías e Internet no hay fronteras, el ejercicio de los derechos como “ciudadano constitucional” se potencia y se magnifica. El derecho a la información aparece como aquel

con las facultades de recibir, investigar y difundir información –detalladas en la DUDH-- de manera sumamente ampliada y fortalecida. El artículo 19 de la Declaración especifica que “el derecho a la información debe ser llevado a cabo ¿por cualquier medio y sin límite de fronteras’. Las telecomunicaciones e Internet son un vehículo ideal para la consecución de ese mandato” (Arellano, 2011: 212). En ello coinciden Boix y Vidal, cuando sostienen que la “relación entre los derechos fundamentales, las libertades públicas y los medios de comunicación [considerando todos ellos y todos los existentes] es, en definitiva, un elemento esencial y básico en el actual Estado social y democrático de Derecho”⁴.

2. DEL SUJETO A LA PERSONA EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Ahora bien, como se ha insistido aquí, los derechos fundamentales y, por tanto, el derecho a la información, se reconocen a la persona, pero antes de ello, el individuo que aparecía dotado de derechos y obligaciones en los textos constitucionales, era el sujeto. Si bien coincidimos en lo citado de Desantes líneas arriba, en que a la concepción liberal se le escapa el carácter comunitario del derecho a la información, conviene estudiar brevemente el por qué es igualmente importante el concepto de persona en el ámbito de los derechos fundamentales.

Stefano Rodotà explica que hubo una transición del concepto de “sujeto” al de “persona”, mismo que tiene un gran significado. Aun cuando las legislaciones y sobre todo

⁴ En efecto, en ese Estado es en el que “estos derechos y libertades deben ser el soporte para el desarrollo de la comunicación de masas, pero en cuyo ejercicio y actuaciones deben tener cabida y garantizarse todos y cada uno de los derechos y libertades fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Sin este supuesto y sin esa interrelación no hay un verdadero sistema democrático y tampoco puede darse ningún proceso constituyente democrático” (Boix y Vidal, 2014: 28).

las codificaciones civiles muchas veces se referían a ambos conceptos como sinónimos, poco a poco ese principio fue mutando para ver a la persona como “hombre considerado desde el punto de vista del derecho” y, como sostuvo Kelsen, no es precisamente o no solamente un hombre en sentido primario del término, sino “la unidad personificada de las normas jurídicas que atribuyen derechos y deberes al hombre mismo”, por lo que, dice Rodotà (2012: 144), es “un puro centro de imputaciones de situaciones jurídicas”. Y esto interesa especialmente en cuanto pensamos en derecho a la información, como se explicará más abajo.

Sin embargo, la noción kelseniana fue, también, transformándose o fue contrargumentada o completada (según se vea) por otras tendencias de pensamiento y de esta forma, se piensa “a la persona como vía para la recuperación integral de la individualidad y para la identificación de los valores fundadores del sistema, esto es, de una noción que predicaba indiferencia y neutralidad a otra que exige atención por la manera con el que el derecho entra en la vida y lo hace mediante un diferenciado conjunto de criterios de referencia” (Ibídem: 167). Si tenemos en consideración que el centro de los derechos fundamentales es la dignidad, que el Estado debe asegurar el goce de esos derechos; aparece aquí el último elemento y no es otro que la persona como facultada y con atribuciones plenas para el ejercicio de derechos y libertades que le son conferidos pero que, cuando realmente tienen una realización, el individuo contribuye y sella la visión de Estado y de sistema, al hacer posible el goce pleno de un derecho reconocido y garantizado.

En otras palabras: si un Estado o Nación ---no vamos a entrar aquí en definiciones teóricas de lo que cada uno es—tiene la convicción, señalada y a la vez custodiada por su Constitución de unos ciertos principios y valores, cuando una persona hace uso de sus derechos, los ejerce, los exige y pide le sean garantizados, está formando parte de un todo sistémico en donde la propia organización estatal cumple con su objetivo y su razón de ser.

Y si, como dijimos antes, el derecho a la información es esencial para que exista una democracia, está claro el papel que este derecho humano tiene en los regímenes de esta característica, pero también —y aún más atendiendo a la lógica de la constitucionalización global— a los de otra envergadura.

Fortaleciendo lo anterior, volvemos a Rodotà para entender que la persona “es un punto de convergencia de valores reconocidos”, mismos que no son cualesquiera valores, sino aquellos que son columna vertebral de la Constitución a la que dotan de significado, y que, se admiten en un “contexto constitucional que va más allá de las fronteras nacionales”, en donde la persona expande “las tutelas ofrecidas”, porque las mismas no son “atributo del ciudadano solo: descienden, más bien, del “ajuar” de derechos y deberes reconocido⁵ justamente al ser persona” (Loc.cit).

Finalmente, y como hemos reiterado, si en el núcleo de los derechos fundamentales está la persona y su dignidad, queda claro que ésta es el potenciador de todo el conjunto. De este modo, la dignidad aparece como principio y no es un derecho en sí, más bien los inspira. Tampoco es una “supernorma” dice el mismo autor, sino una especie de aglutinador de otros principios con los que “forma cuerpo” y se funde, cuales son la libertad, la igualdad y la solidaridad. Tras esa fusión o unión, se hace evidente que debe imponerse “una reinterpretación en una lógica de indivisibilidad” (Ibídem: 186). Más aún: “El *homo dignus*

⁵ Es así que una “vez más, podemos concluir que la referencia a la persona, y no ya a un sujeto abstracto, es lo que confiere a los principios constitucionales un fundamento teórico más sólido y una más intensa operatividad. Un asunto este que confirma cuanto se ha observado a propósito de la libre construcción de la personalidad, que en el ordenamiento italiano, a diferencia de lo que prevé la Constitución alemana, viene enriquecido justamente por su inserción en un sistema de relaciones que escapa a la abstracción, que no aísla a la persona, que delimita las responsabilidades públicas, para la construcción de un contexto que permita pasar de la proclamación de un derecho a la efectividad de su puesta en práctica” (Rodotà, 2012: 179).

no se entrega a ningún principio que esté por encima de la libertad y de la fraternidad, y de esta manera, en cierta forma, las redimensiona.

Encaje más claro y más perfecto no puede tener nuestro tan estudiado derecho a la información, puesto que los principios mencionados, con la dignidad como punta del *iceberg*, tienen una relación de reciprocidad con el *ius communicationis*. La dignidad de la persona sólo puede ser defendida teniendo Información, en una relación esencial e irrefutable del individuo con ésta y, a su vez, al ser defendida, se potencia y sus principios integradores se refuerzan y consolidan.

3. DESANTES Y EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN

El Doctor José María Desantes Guanter es el precursor de una amplia corriente de pensamiento en torno a los términos o conceptos Derecho e Información. Teniendo como marco contextual todo lo hasta ahora explicado, podremos entender mejor el momento en que reflexiona sobre esos derechos fundamentales de los que hemos venido hablando y en especial de uno. Así, de su pluma contamos con el invaluable *Fundamentos de Derecho de la Información*, libro pionero en el análisis de los elementos doctrinales que en los años setenta se podían revisar y que, además, hace una exploración filosófica, histórica y jurídica de lo que hasta ese momento podría significar el derecho a la información. Todo ello, para proponer la justificación teórica y práctica de una nueva rama del Derecho, precisamente “al servicio” del derecho a la información: el Derecho de la Información.

Pero el Profesor Desantes no considera que se trate de una rama simplemente, sino de una Ciencia, de una nueva Ciencia Jurídica especializada, como veremos ahora. De este modo, entiende que “el objeto del Derecho de la Información [el derecho a la información] está conociendo una fase verdaderamente eruptiva de su desarrollo científico” (Desantes,

1977: 10). Concretamente hablamos del verano de 1975 (año en el que según consta en la obra, terminó de escribirla, para ser publicada en 1977).

Las causas que supusieron dicha erupción, nos explica, son de dos tipos. Y una de ellas es la propia movilidad en los temas de estudio que tiene el Derecho, que en ese entonces se desprendía “de adherencias formales” y evolucionaba “al ritmo de la sustancial aspiración humana de Justicia” (Ibídem: 11). Sin embargo, en España por ejemplo, aún existían ciertos recelos a considerar esta nueva “consideración científica de la Información”⁶, que sólo podían entenderse desde el desconocimiento de la importancia y del cariz que iba tomando. Se expone claramente aquí:

Cuando todas las ciencias humanas se están queriendo ver a sí mismas como escrutadoras de procesos de comunicación en el tiempo, en el espacio o haciendo abstracción del tiempo y del espacio, **no puede someterse seriamente a discusión la cualidad científica del estudio de la comunicación misma desde sus distintas vertientes, una de ellas la jurídica**. El beneficio marginal de la evolución de las Ciencias informativas es tan axiomático como su misma consideración científica” (Loc.cit) (las negritas son mías).

Fue entonces el Profesor Desantes uno de los primeros en ver el llamado que el Derecho tenía para estudiar los procesos en torno a la Información y la Comunicación, para

⁶ No obstante, de la voz del propio Profesor Desantes, es necesario aclarar que “El Derecho no crea nada. Se extiende a los hechos naturales y los actos individuales y sociales cuando la persona humana o la sociedad requieren una regulación. Como realización de la justicia —porque si no, no es Derecho— es uno. Pero tal unidad no es uniformidad sino, por el contrario, una de sus características esenciales es la variedad funcional de sus normas —legales o no— que se adaptan o deben adaptarse— a cualquier realidad que surge a lo largo de la historia» (Desantes, 2015: 3).

proponer, estructurar y dar contenido filosófico a un ámbito de análisis nuevo, una “nueva rama del viejo tronco jurídico” (Ibídem: 12): el Derecho de la Información.

En aquel 1975 tenía claro que posteriormente vendrían otros trabajos –propios y de otros doctrinarios—que completarían, discutirían, revisarían y quizá corregirían las hipótesis planteadas en aquella obra⁷, misma que consideraba que podría ser de utilidad para aquellos que quisieran seguir “meditando en temas –fundamentales o arquitectónicos, centrales o periféricos” (Ibídem: 13) en torno a esta nueva área de estudio y nueva disciplina, a cuyo nacimiento asistían los teóricos de aquella época. Y todo ese pensamiento se acotaba y se acota en torno al “fenómeno informativo” que se encuentra en el núcleo de observación y razonamiento de la nueva rama. Es decir: “todo lo que afecte a la información como contenido o la comunicación como vehículo de la información es una realidad evaluable que puede y debe ser objeto de un planteamiento científico- jurídico” (Ibídem: 23).

Aquellos que nos formamos con la Escuela de pensamiento del Dr. Desantes, luego desarrollada, estudiada y reafirmada por Profesores como la Dra. Corredoira, el Dr. Bel, el Dr. Sánchez de Diego y otros, hemos sentido el llamado a reflexionar sobre esos fenómenos informativos y todo aquello que afecte a la Información y a la Comunicación, para estudiarlos desde el punto de vista jurídico y desde la óptica del Derecho de la Información. Con ese enfoque y lo introducido anteriormente sobre el constitucionalismo y el papel de la dignidad

⁷ Es por todo ello que estimaba que “El fluir del pensamiento científico, en la medida en que quede objetivado en lo escrito, se corta con su publicación. Pero en su encarnación personal, el pensamiento sigue fluyendo como la vida misma, hasta que vuelve a objetivarse en una nueva publicación. Tanto más cuanto que no le faltan estímulos exteriores para su evolución que, en parte, coinciden en las que he señalado como causas del galopante progreso del Derecho de la Información. Y, en parte, no son otra cosa que el ejemplo de mis colegas en la investigación y en la docencia: y en la de aquellos de mis alumnos que se sobreponen a todos los obstáculos externos que les dificulta el estudio” (Desantes, 1977:13).

y la persona, queremos hacer ahora un brevísimo análisis de la evolución del derecho a la información como concepto tomando como referencia los marcos mexicano y español, pues el espacio y el tiempo en este, nuestro Foro de Ética y Derecho de la Información, que celebramos en la University of Leicester, Inglaterra; está determinado y es mucho más interesante escuchar las demás voces y participar de las reflexiones que seguro tendrán lugar.

4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN: SU EVOLUCIÓN CONCEPTUAL Y NORMATIVA (ESPECIAL REFERENCIA A LOS CASOS MEXICANO Y ESPAÑOL)

Los derechos fundamentales, como hemos visto, se colocaron en el núcleo básico de las Constituciones de la segunda mitad del siglo XX, pero desde mucho antes, tras los duros y trágicos sucesos históricos acaecidos en diversas latitudes y teniendo en consideración que la libertad de expresión (libertad asociada y esencial, como ahora veremos, con el derecho a la información) es vital para el individuo mismo; su reconocimiento y el de los derechos y libertades asociados, tiene una larga historia.

Sin afán de hacer un recuento exhaustivo de los instrumentos nacionales e internacionales que han reconocido la libertad de expresión y/o el derecho a la información (lo que tampoco es objeto de este trabajo), podemos mencionar algunos de ellos. El propio Desantes menciona que en el campo del Derecho positivo y constitucional, “el papel de vanguardia corresponde a Inglaterra” a través de la *Petition of Rights* de 1628, documento que tuvo la influencia indirecta del *Habeas Corpus Act* de 1679. Y, más tarde, aparecía la *Declaration of Rights* de 1689, cuya forma legal fue adoptada a través de la *Bill of Rights*.

Ésta, que fue adoptada por el Parlamento británico el 13 de febrero de 1689, contiene un artículo que declaran los Lores y Comunes y se trata del 9, que reza que “la libertad de expresión y debate o actuación en el Parlamento no debe ser denunciada o cuestionada en

ningún tribunal o lugar fuera del Parlamento”. Aunque acota esa libertad a los miembros del ente legislativo, aparece como un antecedente europeo serio en la materia.

Con influencia de este documento, pero del otro lado del mundo, aparece la Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776, que fue realizada “por los representantes del buen pueblo de Virginia, reunidos en convención plena y libre, como derechos que pertenecen a ellos y a su posteridad como base y fundamento de su Gobierno”, puesto que la Declaración tiene un espíritu independentista. En el apartado XII se reconoce no la libertad de expresión como tal, pero sí la que le antecede, es decir, la de prensa, que es considerada en el documento como “uno de grandes baluartes de la libertad, y que jamás puede restringirla un gobierno despótico”.

Además de esa libertad, aparece un apartado que finalmente tendrá relación con uno de los polos que toca el moderno derecho a la información y que es el derecho de acceso a la información pública –muy cerca, pero diferenciado del proceso de rendición de cuentas--, como veremos que fue entendido primariamente en México en el terreno constitucional. En la Declaración de Virginia –artículo III-- se estipula que “el gobierno es, o debiera ser, instituido para el bien común (...) de todos los modos y formas de gobierno, el mejor es el capaz de producir el máximo grado de felicidad y seguridad, y es el más eficazmente protegido contra el peligro de la mala administración; y que cuando cualquier gobierno sea considerado inadecuado...una mayoría de la comunidad tiene el derecho indudable, inalienable e irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo”.

Como puede observarse, se establecen bases que tienen estrecha relación con los derechos de los ciudadanos a no permitir una mala administración y con la posibilidad de actuar en consecuencia, ámbito en donde el derecho a la información tendrá un papel nodal.

Aunque la Declaración de Virginia es considerada, como decimos, la primera en su tipo y antecedente en materia de derechos humanos, quizá es más conocida y tiene marcada influencia en el contexto europeo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789. Entre los derechos del hombre y del ciudadano⁸ se enlistan los siguientes: en el artículo 10 se reconoce que “nadie puede ser incomodado en sus opiniones”⁹ siempre que no se perturbe el orden público¹⁰, y, en el artículo 11, se dispone que la “libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre”, por lo cual todo “ciudadano” tiene la libertad de palabra, escritura e imprenta, “a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley”. Es aquí donde aparece la figura de “ciudadano” que, en los tiempos modernos, limita el ejercicio de un derecho que, como ya vimos, es fundamental y universal.

Del mismo modo que en la Declaración de Virginia, en la de Francia aparece un artículo que es antecedente claro del derecho a la información entendido en su dimensión del individuo frente al poder, al Estado o al Gobierno de que se trate. En el artículo 15 se establece que “la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público”,

⁸ Como puede observarse se habla de “hombre” y de “ciudadano”, lo que posteriormente (vid. supra.) se corrige para entender que la ciudadanía no es la que dota al individuo de esos derechos, deberes y libertades, sino su condición de “persona”, en donde el principio esencial es la dignidad humana.

⁹ Aunque no se habla claramente de “garantizar” esa libertad, sino de que no se incomodará a la persona, lo cual podría interpretarse como que no se prohíbe tajantemente la censura a la expresión. Esto se aclara, mucho mejor, en el artículo 11.

¹⁰ Límite que, por otra parte, siempre ha formado parte del régimen de excepción a estas libertades y derechos.

configurando así un derecho a la rendición de cuentas que, posteriormente se relacionaría con el derecho al acceso a la información de las Administraciones.

Esa Declaración de 1789 vendría a encontrar el mejor reflejo de Derecho positivo en la Constitución Francesa aprobada apenas dos años después, en 1791, pues dicha Norma Fundamental, en su Título I garantiza ---y es importante destacar la palabra, pues ya no sólo hay un reconocimiento, sino que el Estado asume una función de garante--, que existe la libertad de “todo hombre de hablar, escribir, imprimir y publicar sus pensamientos, sin que sus escritos puedan ser sometidos a censura ni inspección antes de su publicación,”. Se observa entonces una marcada tendencia a superar de algún modo el término ciudadano por el de “todo hombre”, mucho más cercano al concepto de persona dotado de capacidades y atribuciones jurídicas, como vimos antes con Rodotà. También puede observarse un precedente claro de las Constituciones de la segunda mitad del siglo XX que estudiamos con Fioravanti y Desantes en apartados previos.

En periodos posteriores de la historia y entre esa Declaración de 1789 y su reflejo en la Constitución del país galo, hasta los modernos desarrollos constitucionales¹¹, se pueden observar muchos de ellos que reconocen la libertad de expresión, si bien desde dos tipos de regímenes de acuerdo con Terrou y Solal, citados por Desantes, y son “los que excluyen la subordinación de la información al poder público, y los que, conforme al texto fundamental o a su desarrollo, subordinan al poder público la libertad de informar” (Ibídem: 51). Claramente dos sentidos de interpretación para esta libertad.

¹¹ En medio de cuyos periodos se vivieron las dos grandes guerras, asunto que llevó a considerar el papel primario de la Información en la vida del hombre, de la persona. Los dos enormes conflictos, dice el Profesor Desantes, condujeron a que existiera entre los pueblos “una toma de conciencia de su situación como hombres y un deseo de promoción social y política imposible sin la Información. Jurídicamente hablando, sin el derecho a la información” (Ibídem: 52).

En este contexto aparece una idea que será importantísima para lo que viene después en cuanto al análisis de cómo ha evolucionado el derecho a la información desde el punto de vista constitucional mexicano y es la idea de la persona asociada a la Información y a la Comunicación, pero lo que, a su vez, da paso a otro derecho, el de participación. Como sostiene el Profesor Desantes, “la comunidad política, a cualquier nivel, es comunicación” por lo que la realización de los esquemas participativos de los individuos para incidir en sus Gobiernos y en su propia sociedad, es imposible sin la Información y “jurídicamente hablando, sin el derecho a la información” (Ibídem: 52).

Además de las Constituciones que reconocieron y/o garantizaron el derecho a la información y en algunos casos, como precedente de ellas, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quizá el instrumento internacional más valioso en la materia y que como indicamos antes, es el embrión del constitucionalismo global. Su tan citado artículo 19¹² referente precisamente al derecho a la información, integrando los tres elementos clave: derecho a recibir, a divulgar y a investigar información, supone un parteaguas para su evolución y reflejo en las normas internas de los Estados y en sus Constituciones.

Sin embargo, una de las cuestiones más complejas ha sido la definición de cuán vinculante es su alcance. Aun cuando los Estados que lo firmaron y ratificaron, se comprometen a transponerlo a su Derecho interno, lo cierto es que muchos de esos países lo hicieron mucho más tarde. Ni del artículo 19, ni de la Declaración en su conjunto se:

¹² La redacción completa reza así: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

discute su obligatoriedad moral, lo que, no es elemento suficiente, sí que es necesario para su eficacia jurídica. La Declaración tiene *auctoritas* y *ratio*. El problema de su vigencia como norma se centra en su problemático *effectus* (...). La Declaración es indudablemente, la expresión de la conciencia jurídica de la humanidad, representada en la O.N.U. y, como tal, fuente de un “derecho superior”, un *higher law*, cuyos principios no pueden desconocer sus miembros”. Este valor de eficacia indirecta o secundaria no excluye otro de eficacia primaria jurídico- positiva directa” (Ibídem: 53).

Son los Pactos y Convenios los que traen consigo la ansiada fuerza vinculante. Uno de los más destacados es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 que tiene dos Protocolos Facultativos¹³ en donde los Estados se comprometen a legislar o modificar su legislación para hacer posibles los compromisos de protección de los derechos humanos signados en el Pacto. No obstante, con una aplicación tardía en los casos que nos ocupan: España y México.

El Pacto fue firmado por España el 28 de septiembre de 1976, es decir, diez años después de haberse aprobado. Fue ratificado el 27 de abril de 1977. Un año después, este país vería aparecer la Constitución vigente hasta nuestros días, que incluye una clara y amplia mención al derecho a la información. España se adhiere al Primer Protocolo el 25 de enero de 1985. Sin embargo, las cosas fueron mucho más veloces con respecto a la firma del Segundo Protocolo, pues España lo hace el 23 de febrero de 1990 —sólo dos meses después de haber sido aprobado—y lo ratifica el 11 de abril de 1991.

¹³ El Primer Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del mismo día de firma del Pacto, el 16 de diciembre de 1966 y el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 15 de diciembre de 1989.

En el caso de México, éste no firmó el Pacto en su origen, pero se adhirió el 23 de marzo de 1981, esto es, quince años después de su firma original, sin tener muchas de las disposiciones ahí establecidas, reflejadas en el Derecho interno hasta años después y con un reconocimiento pleno al derecho a la información, hasta la reforma constitucional de 2013, como veremos más abajo. México no firma el Primer Protocolo Facultativo en su origen y no se adhiere a él, sino hasta el 15 de marzo de 2002. Ese mismo año vería la luz la primera Ley de Transparencia mexicana, sólo tres meses después de la adhesión al Protocolo. Y no es hasta el 26 de septiembre de 2007, que México se adhiere al Segundo Protocolo Facultativo del Pacto.

En el ámbito europeo y con aplicación para España, se firma en Roma la Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos humanos y las Libertades Fundamentales, con cuyo artículo 10 se reafirma el derecho a la información. Esta Convención tiene el enorme mérito “de conferir a los individuos derechos como sujetos directos en el orden jurídico-internacional, como han comentado P. Solal y Bourquin, confiriéndoles acciones incluso contra sus propios Estados”. Pero algo muy importante para no olvidar las líneas teórico-doctrinales que nos inspiran, es que esta Convención ha venido a converger con la línea teológica vitoriana de respeto a la dignidad de la persona, que se fundaba precisamente en el *ius communicationis*” (Ibídem: 54).

Siguiendo con el recorrido normativo del derecho a la información, vemos que, como mencionamos en un epígrafe reciente, se ve reflejado en la Constitución Española de 1978, en su artículo 20¹⁴, con un amplísimo reconocimiento a la libertad de expresión y al derecho

¹⁴ El texto completo del literal 20 de la Constitución Española expresa: “Artículo 20. 1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

a la información. Debido a la alta especialización del Foro de Ética y Derecho a la Información (del que se deriva este libro), en donde hay Profesores y participantes que conocen ampliamente este artículo, su contenido y sus desarrollos legales y jurisprudenciales, me permitiré pasar al caso mexicano, del que quizá puedo decir alguna cosa más.

La Constitución mexicana vigente, cuyo texto original es de 1917 fue producto de la guerra intestina que conocemos como Revolución, en donde se logró derrocar a un régimen dictatorial de varias décadas. En atención a que el país salía de una etapa en donde se pudo constatar que era necesario hacer valer el derecho de los hombres con respecto a la Información: tanto para investigarla como para difundirla. O al menos, esos son los rasgos primarios que pueden vislumbrarse en la primera redacción que tuvieron los artículos 6º y 7º de la también conocida como Carta Magna: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público”, decía el sexto constitucional.

Por su parte, el artículo séptimo se orientaba más bien a defender un derecho a la libertad de expresión, vinculado a la imprenta, pues sostenía que “es **inviolable la libertad de escribir y publicar** escritos sobre cualquiera materia. **Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura**, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad

técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito”. Estaríamos, claramente, ante un derecho a investigar y difundir información, que aunado al artículo 6º nos permite entender la dimensión que juntos alcanzan en el camino a garantizar el derecho a la información. Sin embargo, la facultad de “recibir información” según lo estipulado en la DUDH y conforme a la Escuela Desantiana de pensamiento, aún no aparece reflejado aquí.

Ninguno de los dos artículos tuvo modificación en muchos años y permanecieron inalterados en su filosofía y alcance, hasta 1977¹⁵, momento en el cual llega la primera reforma al artículo 6º para integrar la frase: “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Como he dicho en otros estudios, la frase puede suponer muchas cosas y ser reflejo de una auténtica garantía por parte del Estado, o bien, puede implicar justo lo contrario, una ambigüedad mayor y sin vías para su auténtica realización ni para su tutela real (Arellano y Cetina, 2015: 148).

No fue sino hasta 2002 que los aspectos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información sufren un nuevo giro normativo. En ese año se publica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que sentaba las bases para que en México se defendiera la transparencia y la rendición de cuentas, pero todo ello sin realizar ningún cambio a la Constitución. Es hasta el año 2007, que viene una nueva reforma al artículo sexto¹⁶. La frase de 1977 permanece sin cambios, pero se añaden dos

¹⁵ Mediante Decreto por el que se reforma y adiciona los artículos 6, 41. 51. 52 53. 54. 55, 60, 73. 74, 76. 93, 97 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 6 de diciembre de 1977.

¹⁶ Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 20 de julio de 2007.

nuevos apartados, pero esta vez, claramente orientados a establecer una serie de reglas para el “ejercicio del derecho de acceso a la información”.

Este es el momento en el que *irrumpe en México una nueva faceta del derecho a la información (bajo el principio de máxima publicidad), en la parte que está relacionada con la facultad de recibir información*, aunque aún, acotada a aquella que esté en posesión de los entes públicos, lo que resta universalidad a ese derecho y a su concepción como derecho humano.

Sin embargo, en el año 2011 que se reforma el artículo 1º¹⁷ de la Constitución mexicana para dar rango superior a los Tratados de Derechos Humanos de los que el país sea parte, así que serán de observancia obligatoria la Declaración y los Pactos que mencionamos más arriba, por lo que **todos los derechos humanos, incluido el de la información, son de pleno goce en México** a partir de ese momento, no obstante que aún vendrían dos reformas sumamente importantes en la materia y que citaremos a continuación.

La primera de esas reformas constitucionales es la de 2013¹⁸, que “modifica diversos artículos de nuestra Ley Fundamental para incluir nuevos derechos que están a la vanguardia a nivel mundial y en donde por fin se hace alusión a las tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), a Internet, a la Sociedad de la Información, a la banda ancha y a la libertad de expresión por cualquier medio” (Ibídem: 152). Así se establece el derecho de acceso a las TIC de la siguiente manera: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las

¹⁷ Vía el Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de junio de 2011.

¹⁸ Por el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de junio de 2013.

tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet”.

Al no hacer una alusión específica ni a los “ciudadanos”, se interpreta el artículo en el sentido más universalista del término, como aplicable a todos en su condición de “persona” y bajo el principio de dignidad, aunado y fortalecido como vimos, al de libertad. Sin embargo, no sólo se compromete el Estado a garantizar un derecho de acceso a las tecnologías que, sin duda, potencia ampliamente el ejercicio del derecho a la información, sino que también se obliga a garantizar la “integración a la sociedad de la información y el conocimiento”.

Pero, y esto es muy relevante para el tema que nos ocupa, también se redacta el artículo 6 para reconocer un derecho a la información en los términos de la DUDH, lo que, por fin, integra las tres facultades. De esta forma: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. El término “información plural y oportuna” por fin da el salto de referirse a Información en general y no únicamente a la que se encuentra en poder de la Administración y consta en sus ficheros.

Pero, y esto es muy relevante para el tema que nos ocupa, también se redacta el artículo 6 para reconocer un derecho a la información en los términos de la DUDH, lo que, por fin, integra las tres facultades. De esta forma: “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. El término “información plural y oportuna” por fin da el salto de referirse a Información en general y no únicamente a la que se encuentra en poder de la Administración y consta en sus ficheros.

De este modo, se establecen las condiciones en que deberá nacer el nuevo INAI, como un “organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley”.

La caracterización de información pública¹⁹ en este modificado artículo 6º pasa de ser aquella que está en poder de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, a aquella que esté en posesión de “cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal”.

En resumidas cuentas, México ha llegado tarde a la corriente internacional del constitucionalismo del siglo XX en algunos elementos y en cuanto a clarificar el contenido y alcance del derecho a la información. Sin embargo, al hacerlo, ha dado un amplio paso para poner al día la legislación en la materia y el texto constitucional y, en algunos momentos, incluso de forma extraordinaria, en el sentido de “fuera de lo común” del término (por ejemplo, estableciendo un derecho de acceso a las TIC e Internet. Como dice el Profesor

¹⁹ En efecto, las características de esa información que se determina que es pública son, además, la de que sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad, pero la interpretación de su reserva se hará siempre bajo el principio de máxima publicidad, esto es, es el que deberá prevalecer en todo momento cuando sea necesario clasificarla. Además de ello, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Desantes, el complejo derecho a la información implica poner en juego a otras muchas libertades²⁰.

Es por esto que el Derecho de la Información como Ciencia Jurídica tiene un gran e interesante recorrido en España, en donde y, poco a poco, en otras regiones del mundo, especialmente Latinoamérica, de donde procede quien esto escribe (queriendo aplicar algunos principios a la descripción del recorrido constitucional que ha tenido el derecho a la información). En conjunto, se trata de contribuir, aunque muy someramente, a las reflexiones en cuanto a esta gran disciplina, pues:

“Derecho de la Información es la Ciencia jurídica universal y general que, acotando los fenómenos informativos, les confiere una específica perspectiva jurídica capaz de ordenar la actividad informativa, las situaciones y las relaciones jurídico- informativas y sus diversos elementos, al servicio del derecho a la información (Desantes, 1977: 244).

BIBLIOGRAFÍA

ARELLANO, W. (2011). “Los derechos fundamentales en la Sociedad de la Información” en *Derecho a Comunicar. Revista Científica de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información*, número 1, enero- abril, págs. 202-219.

ARELLANO, W y CETINA, R. (2015). “El Derecho a la información en México y EEUU. Desarrollo normativo y jurisprudencial”, en Bel Mallén y Corredoira (coords).

²⁰ Es por ello que “La definición del derecho a la información es universal en su sujeto y en su contenido y en general en su objeto. Solamente dentro de la idea de justicia, que la vertebral, en cuanto se inspira en la visión del hombre como ser espiritual y trascendente, pueden encontrar su realización las diferentes libertades que hay que poner en juego para su ejercicio” (Desantes, 1977: 54).

Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, págs. 143-165.

BOIX, A. y VIDAL, J.M. (2014). “El marco constitucional y regulatorio de los medios de comunicación en España” en Boix y Vidal (coords). *La nueva regulación del audiovisual: medios, derechos y libertades*. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, págs. 27-42.

CARBONELL, M. (2004). *Los derechos fundamentales en México*, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 1110 pp.

CORREDOIRA, L. y SÁNCHEZ FERRIZ, R. (2016). “La compleja configuración de un derecho- libertad poliédrico, el derecho a la información. referencias históricas”. Ponencia presentada en el FIÉDI, Universidad de Leicester, 53 pp.

DESANTES, J. M. (1977). *Fundamentos del Derecho de la Información*. Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 719 pp.

DESANTES, J.M. (2015). “Información y Derecho”, en Bel Mallén y Corredoira (coords). *Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 859 pp.

FIORAVANTI, M. (2016). *Los derechos fundamentales. Apuntes de una historia de las Constituciones*. Editorial Trotta, Madrid, 212 pp.

HÄBERLE, P. (2005). “Derecho constitucional nacional, “uniones de Estados” regionales y el Derecho internacional como derecho universal de la humanidad: convergencia y divergencias”, en Márquez Romero (coord). *Metodología del Derecho comparado. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados*. Universidad Nacional Autónoma de México, México, págs. 3-21.

RODOTÀ, S. (2012). *El derecho a tener derechos*, Editorial Trotta, Madrid, 390 pp.

LEGISLACIÓN

Bill of Rights, adoptada por el Parlamento británico el 13 de febrero de 1689.

Constitución Española de 1978, publicada en el *Boletín Oficial del Estado* el 27 de diciembre.

Constitución Francesa, de 3 de septiembre de 1791.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 5 de febrero de 1917.

Declaración de Derechos de Virginia de 12 de junio de 1776.

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada por la Asamblea Nacional constituyente el 26 de agosto de 1789.

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 24 de junio de 1793 (segunda versión ampliada de la primera).

QUÉ ES Y QUÉ NO ES DERECHO A LA INFORMACIÓN. DIFICULTAD METODOLÓGICA DE LA CONSIDERACIÓN HISTÓRICA DE LA INFORMACIÓN POR LA DIVERSIDAD DE SUS PARÁMETROS DE OBSERVACIÓN¹

Loreto Corredoira

Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información

Remedio Sánchez Ferriz

Universitat de València, Facultat de Dret

1. PLANTEAMIENTO

COMO TODOS LOS DERECHOS HUMANOS, Y ADEMÁS FUNDAMENTALES, EL DERECHO A LA INFORMACIÓN ES INHERENTE A LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO. AHORA BIEN, CREEMOS QUE LA OBSERVACIÓN DE SU PROCESO DE CONFIGURACIÓN HISTÓRICA NOS APORTA MUCHOS MOTIVOS DE CONSIDERACIÓN SOBRE SUS peculiaridades pues la evolución de este derecho ha discurrido en un modo muy especial que se aparta de otros derechos tan naturales y fundamentales como el que ahora nos ha de ocupar.

Tal vez por ello Desantes Guanter² recurría con frecuencia al Derecho natural y muchas veces, aun sin mencionarlo, el iusnaturalismo impregnaba todas sus consideraciones sobre este derecho especial en el que llegó a ser el citado profesor especialista indiscutido.

¹ Versión de trabajo en elaboración, presentado en el FIEDI 2016, como Pre-conference de la IAMCR, Leicester University, 26 julio 2016. Realizado en el marco del Proyecto MINECO de Excelencia “El avance del Gobierno Abierto. Régimen jurídico constitucional de la implantación de políticas de transparencia, acceso a la información, datos abiertos, colaboración y participación especialmente a través de las TIC y del gobierno electrónico” DER2015-65810-P (2016-2018), cuyo IP es Lorenzo Cotino Hueso.

² José M^a DESANTES GUANTER (1924-2004), fue el primer Catedrático de Derecho de la Información en la Universidad española. Cfr. Memoria cátedra publicada en el libro *Fundamentos del Derecho de la Información*, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977. Su primera obra, prácticamente coetánea a la de la coautora de este trabajo Remedio Sánchez Ferriz (*El Derecho a la Información*, Valencia 1974) fue *El autocontrol de la actividad informativa* (Madrid, 1973). Desantes Guanter tiene perfil en Wikipedia Y sus obras están disponibles en bibliotecas españolas y americanas. En años próximos se irán traduciendo las lecciones y tratados de mayor referencia.

Visto hoy desde el extraordinario desarrollo legal que la información ha adquirido (hasta el punto, a nuestro juicio, de desfigurarse a veces su propia naturaleza y caracteres en obtusa confusión de conceptos derivada de la sobre inflación legislativa), sin duda aquellas consideraciones de los años 70 pueden parecernos simplistas y, desde luego, porque también lo son, preconstitucionales.

Probablemente la esencial función de la información en las democracias es la que puede justificar el exceso con que ahora se toma en consideración lo que en los años 70 era entre nosotros ocupación de unos pocos, no siempre bien entendida. Y digo exceso en la medida en que la actual posición a que se ha llegado por medidas legislativas y jurisprudenciales puede haber desplazado aspectos igualmente importantes que palidecen ante la dimensión política de la información³. Nos explicaremos:

Hasta que se produzcan las revoluciones burguesas los derechos en general no son sino simples aspiraciones que, si se hacen realidad, lo es solo para grupos concretos que se hallan en posición y capacidad de exigirlos frente al poder o, también, eso sí desde siempre, objetos de consideración y reflexión filosófica, a lo sumo consejos de príncipes que no llegan a saltar a la práctica real en las relaciones humanas. Solo a partir de las modernas Declaraciones de derechos se proclaman estos con pretensión de juridicidad.

Por suerte hoy todo derecho fundamental se halla garantizado y, por consiguiente, también el de información. Solo que este goza, además, de una presunción de preferencia o prioridad sobre otros que, unida a la lentitud de la justicia española y a la lógica comercial de los medios de comunicación social, acaban conformando una especie de patente de corso

³ Por todos, DEVIRIEUX, Claude Jean, *Manifeste Pour le Droit à L'Information: De la Manipulation à la Législation*, Presses de l'Université du Quebec, 2009.

o, al menos, un riesgo desproporcionado para otros derechos no menos decisivos en el orden democrático (presunción de inocencia, intimidad, honor, etc.).

La fuerza con que se ha visto acompañada la progresiva configuración del derecho a la información debe sin duda trocarse en cautela y prudencia cuando es el propio ordenamiento el que dota de protección y de singular reconocimiento, teniendo como tienen las libertades informativas una naturaleza expansiva que colisiona con otros derechos fundamentales ya aludidos.

2. DIFICULTAD METODOLÓGICA DE LA CONSIDERACIÓN HISTÓRICA DE LA INFORMACIÓN COMO ASPIRACIÓN Y COMO DERECHO

a. POR LA DIVERSIDAD DE SUS PARÁMETROS DE OBSERVACIÓN

Decíamos que el derecho a la información es inherente a la dignidad humana pero ello no impide que tenga muy diversas facetas según se invoque (y se reconozca) en multitud de situaciones de carácter privado o en la manifestación social y política del ser humano. Sus distintas manifestaciones se han invocado (y reconocido) a lo largo de la historia pero la de carácter político (propia de la condición de ciudadano en un régimen democrático) ha sido la más tardía. Sin duda el ejemplo de la vida como derecho con el que poder contrastar el de la información es bien paradigmático: no por ser indiscutiblemente predicable de todo ser humano (más que un derecho en sí, la vida es el presupuesto ontológico de todos ellos), se ha visto reconocido siempre. Y lo mismo cabría decir de la información como paralelo presupuesto ontológico de toda vida social (aun cuando se trate de la vida en común de la célula social básica que es la familia o de cualquier otra sea primitiva o desarrollada).

Pero a diferencia de aquella (la vida) que hoy, como siempre, sigue vinculada a cada ser humano, y a la que, tras su reconocimiento jurídico, a lo sumo, se le ha añadido la calificación de digna en las constituciones democráticas (por lo demás ya predicada en las

doctrinas estoica y cristiana), la información como condición *sine qua non* de vida social inherente a la condición humana (que no en vano ha ido evolucionando con el lenguaje y sus manifestaciones) presenta una evolución histórica tan sumamente compleja que no podría comprenderse sin recurrir a diversos referentes del mismo fenómeno jurídico y social.

Ello es así en tanto que su desarrollo no solo ha comportado el reconocimiento y la superposición de nuevas facultades o derechos (cabría decir en este sentido que el derecho a la información es un derecho poliédrico o, en sentido histórico, de aluvión), sino también la modificación de la naturaleza y características de cada una de tales manifestaciones que, sin desaparecer, han ido quedado atrás, o dejando de ser el foco de atención, a medida que el desarrollo tecnológico ha desplegado sus efectos sobre este concreto objeto de derecho que ahora nos ocupa.

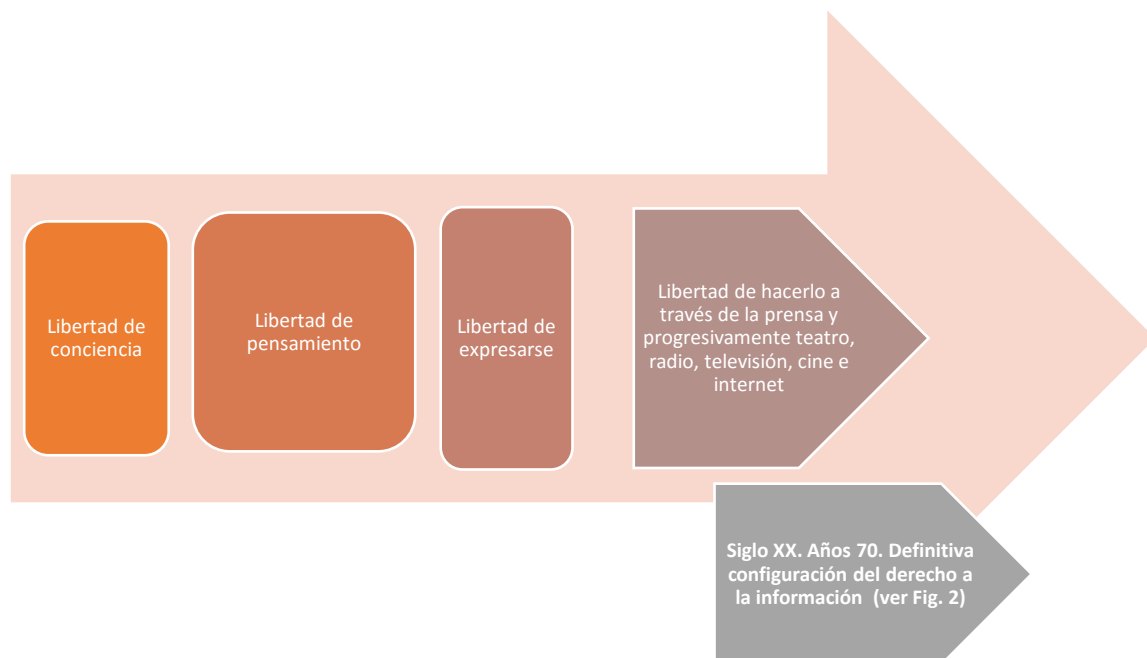
Precisamente la configuración que hoy observamos del derecho a la información tras años de crecimiento de las tecnologías relacionadas con Internet (web semántica, redes sociales, almacenamiento en nube, movilidad, internet de las cosas, etc) plantea a los académicos retos de análisis y clarificación terminológica, lo que también se requiere en instancias judiciales.

El derecho es poliédrico en su origen como explicaremos y también en su contenido porque abarca facultades tan antiguas como la de “acartelar” (*droit d’afficher*) hoy ejercida en la publicidad o por los grafiteros que adornan los muchos de vías del tren y ciudades; el derecho de manifestación, también con connotaciones políticas y democráticas; la facultad o actitud participativa de usuarios de sitios sociales que bloguean, tuitean o..., en definitiva, publican y difunden: de la publicidad directa hemos pasado a la difusión mediante mensajería instantánea; hoy son los “whatsapps” como en los 90 los correos electrónicos”.

Difundir, recibir o investigar son las tres facultades que se alumbraban en las declaraciones de libertades del siglo XVIII. Hoy el derecho a imprimir o el derecho de antena se ha complementado –sin ser distinto en su esencia- con otras facultades del derecho que estudiamos. Recientemente la facultad de investigar también ha visto una gran expansión en su ejercicio, no sólo en el ámbito público –mediante las primeras acciones de transparencia o acceso a documentos oficiales- sino también en lo privado. De ahí nuestro trabajo también cercano al Gobierno Abierto y a la participación. Investigar puede ser una acción sencilla (visitar un museo o acceder a una videoteca online) pero sigue siendo una facultad compleja, clave en el Periodismo y que requiere formación académica específica, como se ve también en las enseñanzas en las Facultades de Comunicación y Documentación, Derecho, Sistemas de Información o Informática.

b. POR LAS MÚLTIPLES CARAS DE ESTE DERECHO-LIBERTAD

A grandes rasgos podríamos representar una sucesión de facultades (que derivan unas de otras), sin que respondan solamente a un orden estrictamente cronológico, y que representamos en las siguientes imágenes:

*Fig. 1 Libertad de expresión*

Libertad de conciencia (inicialmente vinculada a la religiosa)--- Libertad de pensamiento --- Libertad de expresarse --- Libertad de hacerlo a través de la imprenta y, en especial, a través de la Prensa y, progresivamente también a través del Libro, de la Radio, de la Televisión, del Video, del Teatro y cine y, naturalmente navegando en Internet o comunicando a través de las Redes sociales. Pero, hasta aquí, no parece discutible que nos hallamos en el ámbito amplísimo de la Libertad de Expresión (Fig. 1). Y cabría precisar que ni su naturaleza ni su contenido cambian a lo largo de tan dilatado proceso en el que lo que ha ido cambiando es el medio o soporte auxiliar.

Por su parte el Derecho a la Información (Fig. 2) asoma a su formulación, y acaba conformándose en toda su extensión pero en el ámbito doctrinal; mientras que su consagración constitucional (a diferencia de la libertad de expresión que ya se manifiesta en

los primeros documentos de la etapa constitucional) **se produce tardía y lentamente a partir de la segunda postguerra y, además, aparece en las grandes declaraciones contemporáneas (de 1948 y 1950) como una facultad de la vieja libertad de expresión**⁴.

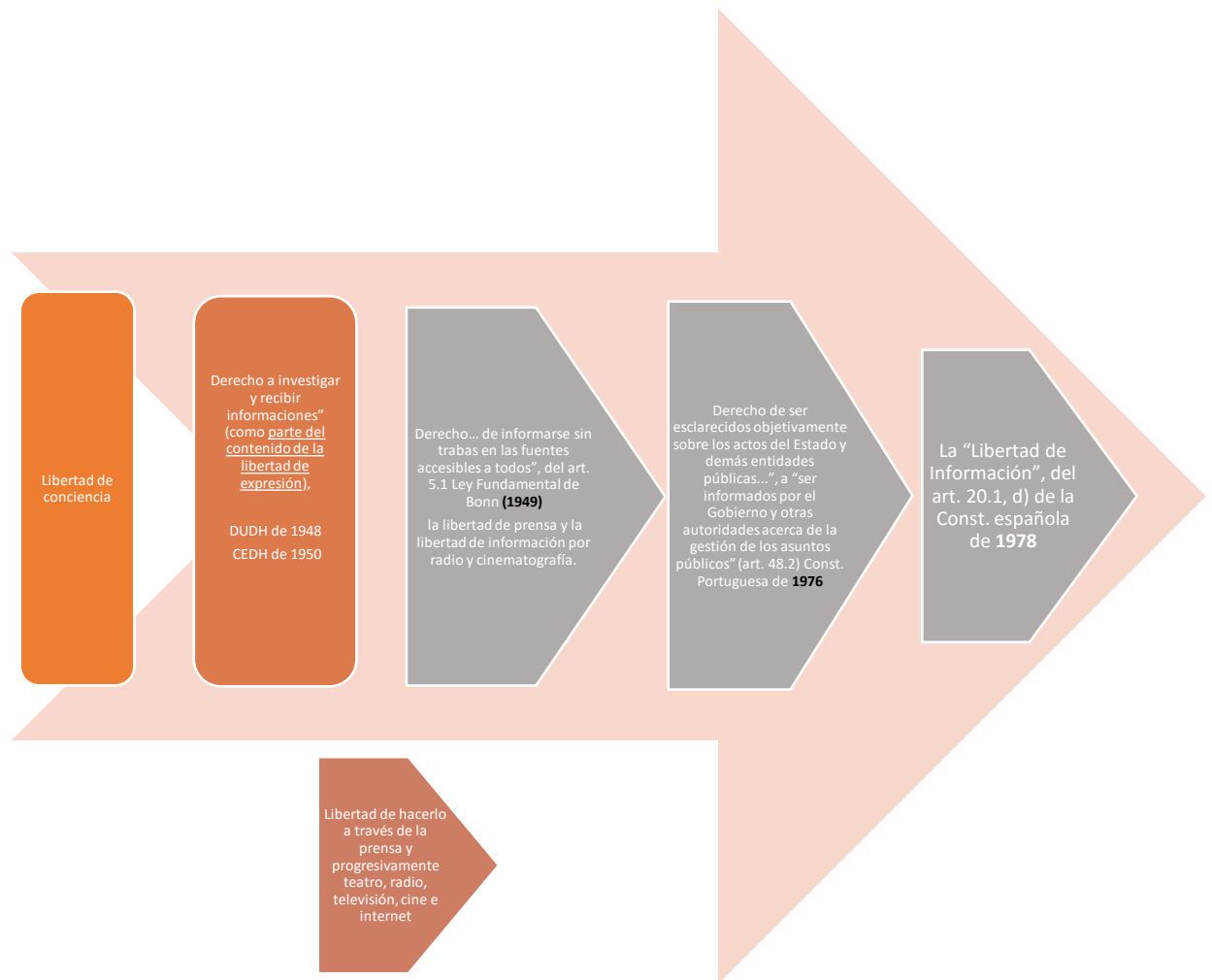


Fig. 2. Configuración del derecho a la información

Así, cabe observar la progresión en la construcción conceptual del *derecho a la información* en la siguiente enumeración en la que observaremos más aproximaciones que definitivas formulaciones pese a lo avanzado del período a partir de la II Guerra Mundial:

⁴ Dando así apoyo a la llamada doctrina monista en cuya virtud el derecho a la información derivaría de la libertad de expresión, siendo una de sus manifestaciones.

--- el “Derecho a investigar y recibir informaciones” (como parte del contenido de la libertad de expresión), según la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950 y, en forma semejante, la “Libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PDCO) de la Asamblea de Naciones Unidas⁵ 1966.

--- el “Derecho... de informarse sin trabas en las fuentes accesibles a todos”, del art. 5.1 Ley Fundamental de Bonn⁶ (1949) y en el mismo texto la garantía de dos libertades que se enuncian por separado: la libertad de prensa y la libertad de información por radio y cinematografía.

--- el “Derecho a informar, a informarse y a ser informados”, del art. 37 de la Constitución Portuguesa⁷ de 1976 que distingue la libertad de expresión y la de información.

--- el “Derecho de ser esclarecidos objetivamente sobre los actos del Estado y demás entidades públicas...”, a “ser informados por el Gobierno y otras autoridades acerca de la gestión de los asuntos públicos” (art. 48.2 de la Constitución Portuguesa de 1976 que proclama tal derecho como fundamento de la participación política).

--- la “Libertad de Información”, del art. 20.1, d) de la Constitución española de 1978 que, por interpretación del Tribunal Constitucional (TC) se ha configurado como libertad distinta a la de expresión del mismo artículo y párrafo, reconocida en la letra a) y, por consiguiente, conformando dos derechos-libertades distintos⁸.

⁵ URL <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

⁶ En español en la URL <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf>

⁷ En español en http://www.redipd.org/legislacion/common/legislacion/portugal/Constitucion_Portugal.pdf

⁸ SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *Delimitación de las libertades informativas*. Valencia, Tirant, 2004, *passim*.

c. ADEMÁS, POR EL EFECTO DIRECTO DE LAS TECNOLOGÍAS

Por continuar con ejemplos simples y evidentes, baste recordar ahora el efecto de la invención de la imprenta en el siglo XV, o el desarrollo de la radio y la televisión en el siglo XX, o de la expansión del uso de internet en el presente. La reciente reflexión de Abad sobre el derecho a la información en el ámbito europeo⁹ constituye un buen ejemplo, entre tantos, de la inseguridad o ambigüedad conceptual con que los más Altos Tribunales de la Europa democrática resuelven los conflictos cada vez más complejos que los adelantos tecnológicos plantean¹⁰.

También Cotino y Corredoira¹¹ han abundado en la dificultad conceptual para la defensa de los derechos personales ante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). Afirman¹² que “en las TICs los interrogantes se abren con mucha más rapidez y profundidad que las respuestas que el Derecho brinda al fenómeno de Internet. Los juristas no hemos resuelto las dificultades que implica desde su inicio la web 1.0 como puede ser la licitud y responsabilidad jurídica por poner un enlace en Internet o el anonimato en la red.

⁹ ABAD ALCALA, Leopoldo, “El derecho a la información y las libertades informativas en el ámbito europeo”, en BEL MALLÉN, Ignacio y CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto (dirs.) *Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia*. Madrid, CEPS, 2015, págs. 69-95.

¹⁰ Aunque a nuestro juicio cabría una mayor claridad de posiciones si se partiera de un concepto claro de lo que conforma las libertades informativas; si bien las tecnologías y las eventuales situaciones de conflicto sí pueden variar ostensiblemente, los puntos de partida conceptuales deberían hallarse más consolidados y creo que no es así. Es cierto que la técnica avanza extraordinariamente y en consecuencia la imposibilidad de fijar fronteras pero igual que existen pautas comunes que nos permiten reconocer lo que exactamente sean intereses de orden económico que defienden las empresas o las personas e intereses humanos vinculados a la intimidad y/o personalidad de cada cual, debe tenerse por aceptado un ámbito protegido para las libertades informativas que bien podría estar vinculado al interés público o general, pues no es la invocación de la información lo que la legitima sino el uso legítimo de la misma lo que fortalece su protección (Cfr. SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *Delimitación de las libertades informativas*. Valencia, Tirant, 2004).

¹¹ CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO HUESO Lorenzo (eds.) *Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013.

¹² Ibid, p. XVIII.

Tan siquiera hemos vislumbrado todos los problemas que surgen en la web 2.0, que ya no es tan novedosa. Mientras tanto, y como una ola gigante de la “Tormenta perfecta”, se vienen encima de las cuestiones planteadas la web 3.0 o internet de las cosas, los problemas que suscita la nube, el “big data” y la gestión ingente de datos con su tratamiento automatizado y profundo, inaccesible conocimiento para los usuarios”.

Por ello, hoy más que nunca se deberían recordar los elementos esenciales de la información como derecho que, sin perjuicio de su transmisión a través de tan novedosos medios como ofrece la tecnología, deben seguir constituyendo referentes de aplicación a cada conflicto que la propia información puede generar¹³. Pues si la aparición de nuevas tecnologías ha dado lugar a nuevas (y sucesivas) formas de manifestación del pensamiento ideas y opiniones, pero siempre conformando (y nutriendo) la misma libertad de expresión, en el caso del derecho a la información las últimas tecnologías, fundamentalmente el uso de las redes sociales, comportan cambios en la concepción de este derecho que nos obligan a hacer un esfuerzo de deslinde o precisión conceptual.

Piénsese que la libertad de expresión es patrimonio de todo ser humano (no solo en el sentido de su titularidad, sino también de los contenidos con que la dotemos en cada caso) y, por consiguiente, cualquiera que sea el medio por el que se ejerza, no va a cambiar su función que se halla vinculada al emisor o sujeto único. Pero en el caso del derecho a la información, junto a sus titulares-destinatarios, hay unos sujetos obligados a facilitarla y los

¹³ Justamente en esta reivindicación de claridad conceptual en torno a las recientes manifestaciones del derecho a la información constituye una aportación decisiva, en la que se trata de extraer todas las consecuencias del art. 19 de la DUDH, la de CORREDOIRA ALFONSO, Loreto. Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el paradigma de la nueva Sociedad de la Información. Estudio específico del artículo 19, en COTINO HUESO Lorenzo Libertad en Internet. La Red y las libertades de expresión e información. Valencia Tirant Lo Blanch, 2006, págs. 57 y ss.

intermediarios (en formas y soportes diversos y con tratamiento jurídico también diverso) y existe, sobre todo, un contenido constitucionalmente delimitado (e incluso ontológicamente, vinculado a la misma idea de información¹⁴) que sí puede verse afectado por las “novísimas” tecnologías. Baste pensar, a modo de ejemplo, en la necesidad de identificar al informador por la responsabilidad¹⁵ que de sus supuestas imputaciones pudiera derivar y el anonimato que las redes sociales proporcionan... O en la incompatibilidad “natural” de la información con la privacidad personal que no concurre del mismo modo en el caso de la libertad de expresión¹⁶...

3. VARIAS CARACTERÍSTICAS O CONSTANTES QUE NI LAS MÁS AVANZADAS TECNOLOGÍAS PUEDEN MODIFICAR

a. LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL COMO CONDICIÓN DE HUMANIDAD Y DE LA CONSTITUCIÓN DE TODA COMUNIDAD¹⁷

Naturalmente, cualquiera que sea su ámbito y naturaleza toda convivencia presupone la comunicación desde las primeras manifestaciones sociales humanas; cuestión distinta es si dicha comunicación se lleva a cabo en términos de igualdad entre los miembros de la

¹⁴ DESANTES GUANTER, José M^a, ver el desarrollo de la teoría de los sujetos del derecho a la información en los volúmenes *Derecho de la información. Vol. 2, Los mensajes informativos*/ José María DESANTES GUANTER,...[et al.], Madrid, Colex, 1994, continuación de la obra en colaboración con BEL, Ignacio, CORREDOIRA, Loreto, COUSIDO, Pilar, *Derecho de la Información Vol.1. Los sujetos y los medios*, Madrid, Colex, 1992. También prólogo de José M^a DESANTES GUANTER a la obra *Derecho de la información*, Ignacio Bel Mallén y Loreto Corredoira y Alfonso (coords.). Ariel, 2003.

¹⁵ BEL MALLÉN, Ignacio, “La responsabilidad jurídico-informativa del sujeto profesional”, “La responsabilidad informativa en el campo penal”, Lecciones 9 y 10 del volumen *Derecho de la Información (I), sujetos y medios*, o.c., págs. 199 a 220.

¹⁶ SANCHEZ FERRIZ, Remedio. “Las libertades de expresión y de información y los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en *Información y Libertades Públicas en España*. Madrid-El Escorial, Universidad Complutense, 1989.

¹⁷ Más aún, precisa Joan ROBINSON que ni la sociabilidad ni la capacidad de comunicación constituyen la característica específica del individuo, “la característica distintiva de la humanidad es la invención de un lenguaje que transmite información de cosas que no están presentes y permite especular sobre cosas no conocidas. Los monos superiores tienen modales, es el lenguaje el que hace hombre al hombre”.

comunidad o de *supra* e *infra* posición. Y ello ya nos permite sentar la primera de las afirmaciones de las que queremos partir como no puede ser de otro modo para quienes reflexionamos desde el derecho constitucional:

A. La comunicación, como la información, cuando más allá de lo filosófico traspasan el mundo de lo jurídico, son fenómenos íntimamente unidos al del poder¹⁸. Así se comprende que puedan ser muy diferentes las ideas de comunicación en tribus primitivas o incluso en las familias sin estructura respecto la familia clásica romana en la que el *pater familias* llega a disponer de la vida de sus miembros (figura que, no en vano inspiraría a Bodino en la búsqueda de la conformación de una comunidad política con poder soberano). En última instancia, el tratamiento de la información depende de la conformación política concreta.

Ello permite entender perfectamente las respuestas históricas del Derecho ante el fenómeno, pero también explica las reacciones negativas del poder no democrático frente a toda difusión de ideas que la información comporta. No en vano, como ya hemos dicho, será imposible hablar de derechos reconocidos hasta las primeras declaraciones de derechos modernas. Y, en el caso de la información aún habrá de esperar siglo y medio más para que pase a constitucionalizarse el flujo informativo como un derecho fundamental.

De hecho, desde esta perspectiva de la relación de los derechos con el poder, y refiriéndome a la época constitucional, Sánchez Ferriz¹⁹ ha sostenido en varias ocasiones una interpretación de las generaciones de derechos divergente de la mayoritaria (compartida, entre tantos por Pérez Luño en España y Barile en la doctrina italiana) en cuya virtud se

¹⁸ Es un referente doctrinal inexcusable GONZALEZ CASANOVA, J. A. , *Comunicación humana y Comunidad política*, Madrid, Tecnos, 1968, que establece toda su concepción del derecho político a partir de tales consideraciones.

¹⁹ SANCHEZ FERRIZ, Remedio Estudio sobre las libertades. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995 o.c.

entiende que existen tres generaciones de derechos incluyendo a las libertades públicas en la primera de ellas. Por el contrario, la posición minoritaria a que se alude entiende que las libertades públicas, como grupo especial de derechos entre las que ocupan una posición nuclear las libertades informativas, constituyen una generación distinta de la de los derechos individuales que ya se constitucionalizan en el primer constitucionalismo debiendo esperar las libertades públicas (para ser constitucionalizadas) al posterior proceso de democratización del Estado Liberal y a los efectos sociales y políticos derivados del movimiento obrero y de la transformación de los Parlamentos a través de la consolidación de los fenómenos de masas y su reflejo en los nuevos partidos de masas²⁰.

B. La segunda característica de la evolución del fenómeno es, en efecto, su vinculación a cierto grado de desarrollo social y político. Las libertades públicas son derechos que solo se practican con garantías en sociedades desarrolladas y muy en particular lo es la matriz de todas ellas, la libertad de expresión en todas sus manifestaciones²¹.

Quiere decirse que solo habrá garantía para las libertades informativas donde haya régimen democrático o, dicho de otro modo y con mayor precisión, las libertades informativas (como en general todas las libertades públicas), son parámetro de democraticidad²². Por ello, no cabe hablar en rigor de derecho a la información donde con

²⁰ Los ejemplos de ese paso de un marco político a otro (generalmente ignorado por la posición mayoritaria sobre las generaciones) podrían multiplicarse pero considero muy gráfica la intuición con que Tocqueville advierte el cambio social que se avecina al escuchar en un mitin de próceres, por vez primera, a un obrero: "Rara vez en mi vida me he visto subyugado por la palabra como lo fui aquella tarde oyendo hablar a ese hombre del pueblo... veía en él al precursor de esos revolucionarios que un día, sin duda, tratarán de cambiar la faz de Inglaterra. La vieja y la nueva sociedad inglesa parecían estar aquí presentes y querer luchar cuerpo a cuerpo..." (TOCQUEVILLE, Alexis, Igualdad social y libertad política, Madrid, Aldaba, 1978, págs. 47-48.

²¹ Por todos BRAUD, Philippe, La Notion de Liberté Publique en Droit Français, Paris, 1968.

²² SANCHEZ FERRIZ, Remedio Estudio sobre las libertades... ya cit., págs. Y ss.

carácter general no se hayan desarrollado y practiquen las libertades públicas de las que, de algún modo, nuestro derecho constituye su fundamento y síntesis como refiere Carlos Soria:

“...es, por decirlo de alguna manera, el derecho-síntesis de los derechos de contextura social. Sobre esa base, el derecho a la información es a su vez catalizador y fermento del conjunto de los derechos políticos y sociales en el sentido primordial de que informar es poner en común, hacer posible la comunidad...”²³.

Y debemos también precisar que antes de que adquiriera relevancia política y constitucional la información fue reconociéndose progresivamente en sus facetas privadas a las que el derecho dio cobertura, no siendo por tanto este derecho una excepción en la regla general que permite afirmar que el Derecho público se ha ido nutriendo a lo largo de la historia de las categorías que ya desde Roma fue conformando el derecho privado. Pero ello no obstante la peculiaridad del derecho a la información desde la perspectiva del Derecho Constitucional reside en la función esencial que el mismo cumple en todo sistema democrático hasta el punto que, como afirma Jorge de Esteban²⁴,

“los medios de comunicación y, en especial, la prensa diaria, la radio y la televisión aparecen teóricamente, en nuestras sociedades democráticas modernas, como el último reducto de libertad de los ciudadanos y, por tanto, como un instrumento decisivo para controlar el poder político. La razón de tal axioma es muy simple: una sociedad sólo es auténticamente democrática en

²³ SORIA SAIZ, Carlos. *Derecho de la información. Análisis de su concepto*. San José de Costa Rica, ECAM, 1987, pág. 66.

²⁴ DE ESTEBAN, Jorge, “Medios de comunicación y Estado de Derecho”, p. 466 en [Ciudadanos e instituciones en el constitucionalismo actual](#) / coord. por ASENSI SABATER, José, 1996, págs. 465-488

la medida en que todos sus miembros puedan acceder al conocimiento de todo lo que sucede en ella. De este modo, cabría afirmar, de forma consecuente, que todo gobernante totalitario se caracteriza especialmente por una cosa: por privarles a sus súbditos del conocimiento”.

De ahí que no quepa confundir los derechos individuales con los que tienen un claro componente social como son las libertades públicas y, en especial, esta faceta publica del derecho a la información.

C. Todo lo cual no empece para que antes de su constitucionalización haya habido una percepción doctrinal relevante en concretos autores a que nos referiremos y que la previa formulación filosófica y doctrinal de las mismas pueda remontarse al pensamiento clásico del que bastará con citar algún ejemplo:

Así, no podemos olvidar el reproche que Hemon, hijo del rey Creonte, dirige a este en defensa de Antígona poniendo de relieve el sentir del pueblo; ante la obcecación del rey que desoye tal sentir popular y se obceca en sus propias decisiones, el hijo le espeta: “tú has nacido, padre, para gobernar tú solo una ciudad de muertos”²⁵.

En Las Suplicantes Eurípides contrapone las virtudes de la democracia (en boca de Teseo) y la tiranía que Tebas representa (en boca del heraldo) afirmando aquél: “Esta ciudad no la manda un solo hombre, es libre. El pueblo es soberano mediante magistraturas anuales alternas y no concede el poder a la riqueza, sino que también el pobre tiene igualdad de derechos...”²⁶

²⁵ SOFOCLES, Antígona, en http://agonzalez.web.wesleyan.edu/span253/texts/sofocles_antigona.pdf

²⁶ Eurípides, Las Suplicantes, disponible en la URL <http://ebiblioteca.org/?/ver/64422>

Las citas serían inacabables. Solo por seguir centrados en nuestras raíces grecorromanas, baste recordar las consideraciones de Marco Aurelio: “Mientras que los demás seres son mantenidos en unión por diversas fuerzas, la Inteligencia (*dianoia*), por un privilegio singular, tiende a establecer vínculos entre los hombres y a satisfacer así la necesidad de comunicación, más allá de todos los obstáculos...” (Soliloquios, X, 30)²⁷.

D. Y ello es una constante histórica. No es de extrañar, pues, que antes que la libertad de expresión primero y el derecho a la información después alcancen su reconocimiento constitucional, podamos hallar multitud de manifestaciones de orden filosófico y/o político que recorren toda la historia de nuestra civilización.

En efecto, toda reflexión que pueda considerarse precedente del pensamiento liberal en el que el individuo será considerado digno de ser tenido en cuenta a la hora de organizar la vida social, hallaremos explícita o implícitamente contenida la idea de la información; y en algunos casos en que el pensamiento se halla madurado también encontraremos la información en un importante aspecto que fue destacado por Desantes, como un deber de dar a cada uno lo suyo²⁸ por cuanto forma parte de la idea de justicia hasta el punto que Santo Tomás identificara una y otra: *Iustitia consistit in communicatione*.

²⁷ Entre sus meditaciones, tan influidas por la Estoa (e indirectamente también por Sócrates), las citas pueden multiplicarse y en ellas la influencia socrática es obvia: —Mientras que todas las cosas en el universo, desde las inferiores a las superiores, siguen espontáneamente el impulso que las lleva a buscar a sus semejantes y a fundirse con ellos, el hombre es el único ser que, olvidando su condición razonable y social, puede marginarse de la sociedad y aislarse, rompiendo los lazos que le unen a los demás hombres. Pero es un intento vano, puesto que la naturaleza «es siempre la más fuerte» (Soliloquios, IX, 9). Cfr. DAZA MARTINEZ, J. Ideología y Política en el Emperador Marco Aurelio. Disponible en http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4493/1/Lucentum_03_13.pdf 6.

²⁸ DESANTES GUANTER, José María, *La función de informar*, Pamplona, Universidad de Navarra, 1976. págs. 151 a 164.

Si justicia en la definición de Ulpiano es dar a cada uno lo suyo, el deber de informar consiste en dar a cada uno la información que le corresponde como propia. Retoma esa idea clave en el pensamiento de Desantes²⁹ cuando afirma que

“el acto informativo es, fundamentalmente, un acto de justicia. Al referirnos al mensaje en cuanto objeto del derecho a la información, transitamos por el campo propio del elemento objetivo de la justicia que consiste en el “suum” de su definición, lo que pertenece al sujeto universal, es decir, a cada persona, a ese colectivo que llamamos público”.

Y ello nos permite recordar aspectos que, como ya se ha aludido, hoy parecen quedar olvidados ante el peso extraordinario que la información ha adquirido en los sistemas democráticos. Se tiene a veces la impresión que hoy se protege el mayor flujo posible de información (o de lo que aparentemente es información) sin entrar a valorar su naturaleza, su lógica o sus fines. Y por supuesto no puede ni debe hacerse valoración alguna con carácter previo, pero sí se echa de menos en las sentencias de tribunales nacionales e internacionales cierta claridad conceptual que aporte pautas de comportamiento a un sujeto potencialmente activo que hoy (a través de las tecnologías) es tan dilatado como el pasivo.

Claro que el derecho a la información es axial, es presupuesto insoslayable de toda democracia. Pero también lo es del progreso jurídico tal como aquí se está razonando pues también la información ha ido acompañando tal progreso en todas sus manifestaciones por más que fueran de naturaleza privada³⁰. Así, pues, su extraordinaria democraticidad no basta para un uso que desconozca otros elementos no menos importantes del ordenamiento jurídico.

²⁹ Y véase por todos DESANTES GUANTER, José M^a, et al) en *Derecho de la Información* Vol. 2, 1994, p. 14

³⁰ Un ejemplo con el que ilustrar la idea sería el derecho de toda persona adoptada a conocer sus orígenes biológicos.

Volviendo a las reflexiones doctrinales, la enumeración de las mismas sería inacabable si indagamos en la idea originaria de la expresión libre como natural manifestación de la sociabilidad humana. Basten, pues, los ejemplos recordados. Como bastará una general alusión a las permanentes cortapisas con que históricamente el poder ha interpretado o simplemente ignorado tal naturaleza sociable del hombre.

b. PROGRESIÓN HISTÓRICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO ESTUDIADO

Centrándonos ahora en las consideraciones históricas de naturaleza jurídico política, haremos alguna referencia a las “libertades-privilegio” medievales, a las primeras declaraciones liberales de derechos y a la posterior formalización o constitucionalización de las libertades informativas. Esta es pues (Fig. 3) a secuencia de hechos que –de acuerdo con lo ya indicado anteriormente en Fig.1 seguiremos completando–.

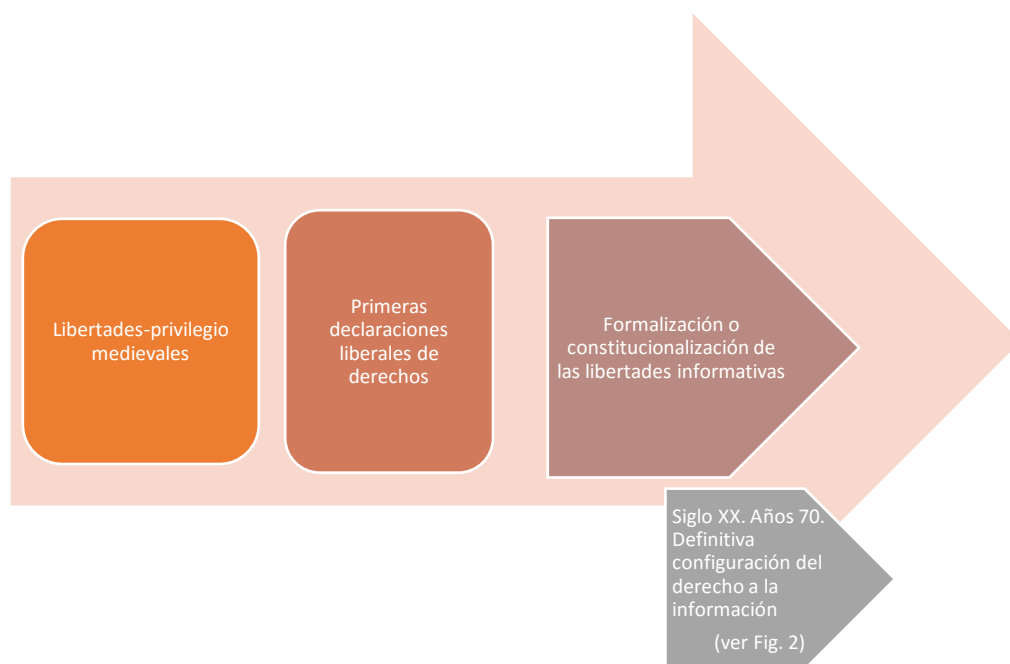


Fig. 3 Consideraciones históricas de naturaleza jurídico-político

4. ¿HAY DERECHOS Y LIBERTADES EN EL MEDIOEVO?

Los hay, pero no cabe confundirlos con los que hoy conocemos, pues “la conciencia clara y universal de los derechos es propia de los tiempos modernos”³¹ y ello, siendo así, no ha podido llegar a cuajar hasta que la relación del poder soberano pueda ejercerse directamente sobre todos los súbditos sin interposición de tantos poderes, jurisdicciones e inmunidades presentes en el mundo medieval que impiden la configuración de un ordenamiento jurídico general.

Tal es el logro del constitucionalismo desde la perspectiva jurídica puesto que la conciencia ética, aunque no totalmente extendida, sí fue cuajando antes en un orden ético natural que hunde sus raíces en el estoicismo y después en el cristianismo para ser desarrollada por la teología española de los siglos XVI y XVII (Vitoria, Las Casas, Suarez, etc.), que no en vano representan precedentes ideológicos de la posterior manifestación liberal³².

Solo que el salto al ámbito jurídico y político no solo requerirá de las formulaciones liberales, sino también de las técnicas racionalizadoras (de las que la división de poderes constituye el paradigma). Pues bien, las Declaraciones de fines del XVIII son, también, técnicas imbuidas de la importancia de la escritura y la solemnidad de los documentos propios del racionalismo que las inspira; pero ellas solo se alcanzan a partir de las revoluciones burguesas cuando las ideas hayan ido cuajando lentamente hasta hallar las condiciones que con tales revoluciones eclosionan.

a. Derechos y/o libertades “privilegio”, propios de la sociedad feudal

³¹ TRUYOL Y SERRA, Antonio, *Estudio preliminar a Los derechos humanos*, Madrid, Tecnos, 1975, pág 12.

³² SANCHEZ FERRIZ, R. “El Estado constitucional...” ya cit., pág. 97 y ss. Véanse las referencias a la Escuela de Salamanca en FERNÁNDEZ DE MARCOS MORALES, Ramón J., “A propósito de algunas relecciones de Francisco de Vitoria”, *Revista de Derecho UNED*, núm. 4, 2009.

El interés del movimiento constitucional de fines del XVIII, fruto de las aludidas revoluciones burguesas, justamente se pone de relieve por contraposición con los documentos medievales en que se reconocen derechos, libertades e inmunidades. Dicha comparación permite decidir lo que realmente es propio de cada uno de tales sistemas y su significación en el marco histórico en que se desarrollan. Los documentos medievales son múltiples y merecen destacarse entre ellos los ingleses³³ sin que, desde luego, tampoco quepa ignorar la importancia de los documentos españoles³⁴. Son en conjunto muchos más que las modernas Declaraciones que abren la historia contemporánea lo que resulta lógico si observamos las diferencias entre unos y otros que son bien notables:

- Aquellos, los medievales, se dan a grupos sociales concretos y estas, las declaraciones modernas, se proclaman para todos los hombres,
- Aquellos tratan de resolver concretas situaciones de conflicto entre el Rey y los nobles, o de relaciones entre el Rey y concretas ciudades en las que este suele hallar apoyo, mientras que las Declaraciones modernas se formulan con pretensión de universalidad, partiendo de una nueva concepción del ser humano.

³³ Entre los documentos medievales, suelen citarse como más destacados los documentos ingleses: a) *Writ of Habeas Corpus* (de origen inmemorial), b) *Charta Magna Libertarum* (1215), c) *Petition of Rights* (1628) y *Bill of Rights* (1689), las dos últimas fuera del periodo medieval pero respondiendo al mismo planteamiento que aquí queremos subrayar.

³⁴ En efecto, no menos significativos son los documentos e instituciones desarrolladas en el territorio hispano conocidas como Cartas de población, Fueros locales y generales, Leyes dadas en Cortes o Juramentos de Príncipes, etc. El Prof. Castán Tobeñas, buscando los antecedentes de lo que en el siglo XX entendíamos como derechos del hombre, citaba los siguientes: Entre los pactos e instituciones de los reinos de León y Castilla : 1) como primero y merecedor de una especial consideración, el Pacto de 1188 celebrado ante las Cortes de León entre el Rey Alfonso IX y el Reino; 2) el acuerdo adoptado en las Cortes de Burgos de 1301, y 3) el acuerdo de las Cortes de Valladolid de 1322. Y entre los pactos e instituciones del reino de Aragón : 1) el Privilegio General, otorgado por Pedro III y considerado como la “Carta Magna de las libertades aragonesas” ; 2) los Privilegios o Fueros de la Unión (Alfonso III, 1287), y 3) la confirmación del Privilegio General llevada a cabo en las Cortes de Zaragoza por Pedro IV en 1348 en la que se consolida el principio fundamental de la inviolabilidad de las personas y propiedades bajo la garantía de la función judicial.

Estas simples referencias nos permiten advertir la aparente existencia ya en la Edad Media de derechos y libertades. Pero la cuestión no es sólo si existieron o no derechos reconocidos sino la de determinar su significación política, su método de adopción y su significado cara a la pervivencia en un prolongado futuro que llega hasta hoy. Pues, de una parte, en estos documentos de impronta medieval es cierto que se otorgan derechos a grupos y/o territorios que van generando una nueva mentalidad y arraigándose como tradición, pero, de otra, no son sino un signo más de profundas desigualdades entre grupos humanos, no solo naturales sino, también, jurídicas.

El ejemplo de la primera y más conocida de las declaraciones medievales citadas puede ser clarificador para responder a la cuestión propuesta: La *Carta Magna Libertarum*³⁵, que firma Juan sin Tierra en 1215, es referente del origen de la idea de los derechos que nada sin embargo tienen que ver con los que se redacten a fines del XVIII pero sí nos permiten, justamente, valorar la especial significación con que las declaraciones dieciochescas se formulan. El incipiente derecho a ser informado del detenido (otra cara más del poliédrico derecho a la información), las libertades civiles básicas de propietarios, herederos, la protección a las viudas, son una “regla” jurídica de convivencia que sigue siendo la base del Derecho privado y del público constitucional de Gran Bretaña y Estados Unidos de América³⁶.

b. Transversalidad del derecho a la información; imposible configuración de su faceta pública hasta que existan sociedades democráticas

³⁵ Versión online en inglés, incluyendo facsímil disponible en British Library <https://www.bl.uk/magna-carta/articles/magna-carta-and-human-rights>

³⁶ Véase FISHER, Justin, “Why Magna Carta still matters today”, 2015, publicado con motivo de los 800 años de su promulgación, <https://www.bl.uk/magna-carta/articles/why-magna-carta-still-matters-today>

Ahora bien, siendo ciertas estas afirmaciones de carácter general, aun debemos precisar más en lo que se refiere a la especial configuración del derecho a la información. Su especial significación impedirá que nazca con las declaraciones de fines del siglo XVIII pero, sin embargo, en diversos aspectos sí ha estado presente en las formas políticas precedentes y en las instituciones propias de cada una de ellas.

Y ello, tanto en el ámbito del Derecho Privado (buenos ejemplos podemos hallar en las propias instituciones privadas del derecho romano y su posterior aplicación en la etapa medieval, incluidas las previsiones de la Carta Magna de Juan Sin Tierra³⁷) como en el Derecho Público que entonces se va forjando en el que, sin duda alguna, la configuración de los Parlamentos, de su forma de deliberar y su progresiva ampliación de la representación, constituyen el ejemplo paradigmático de los precedentes de la configuración de la información como pilar maestro de toda sociedad democrática. Ello se advierte en forma implícita en reflexiones y aportaciones doctrinales entre las que Desantes destacaba la formulación del “*ius communicationis*” de Francisco de Vitoria³⁸; la especial aportación de

³⁷ En el establecimiento de bases jurídicas que en la misma se contiene y trasciende la implícita necesidad de información en cuantos preceptos comportan adopción de decisiones de carácter general: así, “...Para obtener el consentimiento general al establecimiento de un “auxilio” --salvo en los tres casos arriba indicados--o de una “fonsadera” haremos convocar individualmente y por carta a los arzobispos, obispos, abades, duques y barones principales... A quienes posean tierras directamente de Nos haremos dirigir una convocatoria general, a través de los corregidores y otros agentes, para que se reúnan un día determinado (que se anunciará con cuarenta días, por lo menos, de antelación) y en un lugar señalado... Se hará constar la causa de la convocatoria en todas las cartas de convocación. Cuando se haya enviado una convocatoria, el negocio señalado para el día de la misma se tratará con arreglo a lo que acuerden los presentes, aun cuando no hayan comparecido todos los que hubieren sido convocados...”.

³⁸ Véase cómo DESANTES GUANTER, José M^a, en *Francisco de Vitoria, precursor del Derecho de la Información*, Fundación de la Comunicación Social, Madrid, 1999, afirma en pág. 41. “Si es cierto que la comunidad universal encuadra el fenómeno de la comunicación, y permite hacerlo efectivo jurídicamente, la comunicación social es por otra parte, tan natural como la sociedad misma. En este punto el dominico de Salamanca carga las tintas. La justicia sólo puede ejercitarse entre los hombres que conviven y perece en la soledad; la misma felicidad que el hombre anhela de nada sirve si no puede ser comunicada; todos somos arrastrados por nuestra propia esencia a la comunicación; si algo se aparta de ella ha de ser considerado como de inhumana y brutal naturaleza. Véase fragmento Lección *De potestate civile*, 4, de Vitoria en nota 120. Cfr. otra traducción de las lecciones de Vitoria, en CRUZ CRUZ, Juan, [*Intelecto y razón. Las coordenadas del pensamiento clásico*](#). Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista 1, Euns, Pamplona, 1998.

la formulación de Vitoria consiste en romper el particularismo de la Edad Media (también en el campo de los derechos) para concebirlos con la universalidad que solo después en el XVIII hallará el terreno abonado para ser aceptada.

En efecto, con tal concepción de igualdad en la titularidad de los derechos, Vitoria se los reconocía igualmente a los españoles que a los indios (con una doble concepción de derecho-deber), entre los que mencionaba la “natural comunicación, la asociación libre, comercio, emigración...”³⁹. La idea, sin duda entronca con la concepción de Aristóteles sin aportar mucho más que el recordatorio de la naturalidad con que la comunicación ha de hacer posible la comunidad y viceversa, no siendo posible una sin la otra⁴⁰.

Naturalmente que Vitoria no pudo conocer el desarrollo técnico actual; en el mejor de los casos preverlo porque él mismo vivió el desarrollo creciente de la imprenta. Mutatis mutandi, como afirma Desantes⁴¹, Vitoria pudo formular principios que hoy son plenamente aplicables, por ejemplo, el “*ius peregrinandi*” o el “*ius commercii*” desconociendo entonces la complejidad del mercado global. El tema ha sido tratado también por Sánchez de la Torre en lo que se refiere a la utilización de medios técnicos⁴².

Pero tal derecho, pese al extraordinario interés de las aportaciones doctrinales cabe afirmar que solo llega a sus primeras aproximaciones conceptuales (que no propiamente

³⁹ Por todos, GETI ORDEÑANA, Juan, *Del Tratado de Tordesillas a la doctrina de los Derechos Fundamentales en Francisco de Vitoria*. Universidad de Valladolid, 1999, pág. 333: “Empieza Vitoria la serie de títulos legítimos con uno que, como él dice, “puede llamarse de sociedad y comunicación natural...”.

⁴⁰ DESANTES GUANTER, José M^a, *El deber profesional de informar*, Valencia, Fundación Universitaria San Pablo CEU, 1988, pág. 12.

⁴¹ DESANTES GUANTER, José M^a, *Francisco de Vitoria...* ya citado, págs. 43 y 44.

⁴² SÁNCHEZ DE LA TORRE, Antonio, Lo “*ius communicationis*” valore giuridico formamentale, Congreso (VI) Nazionale di Filosofia del Diritto, Pisa, 1963, *Dommatica, Teoria Generale e Filosofia del Diritto*, O 'JUS, págs. 230 a 307.

formulación) en varias formas (en especial, la de la invocación de la opinión pública) cuando el siglo de las luces vaya configurando tales “luces” como la esencia de las nuevas sociedades y sus correspondientes gobiernos.

Hasta entonces el poder no ha desarrollado sino técnicas de “silencio” o de miedo a la información⁴³. Las formas inquisitoriales bien conocidas en la España de los siglos XVI-XIX son el mejor ejemplo, pero no el único; pues es inherente a todo poder absoluto el control de la información en todas sus formas; e incluso en la etapa constitucional la invocación de la opinión pública no impide que se tema la expansión de las ideas nuevas incluso a través de la Cátedra; García Trobat⁴⁴ refiere las limitaciones de la Universidades en la transmisión del conocimiento cuya enumeración de ejemplos seria inacabable. Y no se olvide que la liberalidad de las Cortes de Cádiz al aprobar la primera Ley de imprenta⁴⁵ queda también extraordinariamente limitada en su objeto. Véase en ese sentido el estudio comparado de la libertad de expresión por Bel Mallén⁴⁶.

Todo lo cual viene a confirmar una de las características ya formuladas supra: libertades informativas y sociedades democráticas constituyen un binomio insoluble cuya

⁴³ Una síntesis histórica de lo que Terrou llama el régimen preventivo, siempre presente en la prensa desde sus formas más incipientes hasta la regulación propia del constitucionalismo democrático de la segunda postguerra, en TERROU, Fernand. *La información*. Barcelona, oikos-tau, 1970, págs. 13 a 84.

⁴⁴ Siguiendo en este aspecto la amplísima línea de investigación encabezada por PESET REIG, bastara citar ahora solamente el más reciente de los trabajos (GARCIA TROBAT, Pilar, *El manual mata la cátedra*; en ROMANO, Andrea (cur.) *Dalla lectura all'e-learning*. Bologna, CLUEB, 2015, págs. 227 y ss.) en el que se resalta la función de control que desempeñan los manuales en lo que se refiere a los contenidos que se enseñan en el aula pero, también, la extraordinaria dificultad de controlar la expansión de las ideas: “...la expresión “textos vivos” sería acuñada por el Obispo Costas y Borrás. Pero no dejaba de ser una referencia a las explicaciones de los catedráticos por contraposición a los “textos muertos” o libros de texto. A partir de ese momento los neo católicos querrán que se controle la letra impresa en los libros de texto pero también y sobre todo lo que se difunde oralmente en las aulas...” (pás. 236-237).

⁴⁵ Por todos, GARCIA TROBAT, Pilar, *La libertad de imprenta, aliada de la revolución*, en GARCÍA TROBAT, Pilar, y SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio (coords.), *El legado de las Cortes de Cádiz*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, págs. 285-334.

⁴⁶ BEL MALLÉN, Ignacio, “La libertad de expresión en los textos constitucionales españoles”, en *Revista de Documentación de las Ciencias de la Información*, nº 13, 1990, págs. 23 a 52.

interrelación opera en los dos sentidos: ni caben libertades informativas sin compromiso democrático, ni podría perdurar una democracia en la que no se practicara la libertad informativa y su correspondiente derecho a conocer todo cuanto incumbe a la comunidad.

c. La libertad de expresión como primer pilar de la nueva sociedad liberal

Tal convicción ya se percibe antes que se formalice la libertad de expresión como en forma paradigmática podemos observar en Milton⁴⁷: la libertad de expresión es la cima de todas las libertades según la presenta Milton ante el Parlamento inglés en 1644 en una defensa que aun hoy se considera el nacimiento de tal libertad esencial. Su aportación, más que en tal defensa, reside en haber concebido la libertad de expresión en todas sus dimensiones y potencialidad social y política⁴⁸; matar un buen libro, dirá, es casi matar un hombre:

“Quien a un hombre mata quita la vida a una criatura racional, imagen de Dios; pero quien destruye un buen libro mata la razón misma, mata la imagen de Dios, como si dijéramos por el ojo”⁴⁹.

Y no menor es la influencia en la caracterización de todo un Estado:

⁴⁷ MILTON, John, *Areopagítica* (Discurso acerca de la libertad de expresión, sin licencias, al Parlamento de Inglaterra), México, FCE, 2000. Disponible en URL <https://ldeuba.files.wordpress.com/2013/02/libro-areopagc3adtica-john-milton.pdf>

⁴⁸ No es el único ni mucho menos pero sí logró una resonancia especial por el foro donde desarrolló su discurso y sus inmediatos efectos. Sobre otros autores que destacan en la defensa de la libertad de prensa, cfr. SALDAÑA DÍAZ, María Nieves “Libertad de prensa y energía política” En MILTON, John, *La Areopagítica*, (disponible en <http://pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP03213238.PDF>); en pág. 279: “Existe una literatura extensa en el ámbito de la libertad de expresión, aunque como enumera Willmoore Kendall, los hitos más importantes de esta literatura obligan a mencionar la Apología y el Critón de Platón, las Cartas sobre la Tolerancia de John Locke, las reflexiones de Spinoza contenidas en el Tratado Teológico-Político y el ensayo Sobre la Libertad de John Stuart Mill. Enumeración que amplía Thomas I. Emerson, incluyendo entre las fuentes más importantes en el proceso de teorización de la libertad de expresión los escritos de Thomas Jefferson y James Madison, el ensayo sobre la tolerancia de Walter Bagehot, los pronunciamientos judiciales de Oliver Wendell Holmes y Louis Brandéis, y las aportaciones doctrinales de Harold Joseph Laski, Zechariah Chafee, Jr., Alexander Meiklejohn y Leonard W. Levy.

⁴⁹ cfr. SALDAÑA DÍAZ, María Nieves, op. cit., pág. 12.

“Lores y Comunes de Inglaterra, considerad de qué nación sois, qué nación gobernáis; no es ella opaca y obtusa sino de espíritu vivo, ingenioso y penetrante para la invención aguda, en el discurso recio a la vez que sutil...”⁵⁰.

Su convicción ante la inutilidad de la censura se transmite por la fuerza de un discurso que no omite argumento posible con el que demostrar la impertinencia y banalidad de todo intento de control de ideas y su difusión. Así,

“si son los doctos los primeros afectados por los libros y esparcidos tanto del vicio como del error, ¿cómo podremos confiar en quienes licenciaren, salvo si les conferimos, o asumen ellos por cima de todos los habitantes del país la gracia de permanecer infalibles o incorruptibles?... si es cierto que un varón prudente como experto refinador, puede extraer oro de la obra más llena de escoria, y un necio recio ha de ser con el mejor nimbo o sin él, no habrá pues razón de que privemos al prudente de nada que a su prudencia aproveche para evitar que llegue a un necio lo que no por serle negado estorbará su sandez”.

...si pensamos en regular las prensas para con ello enderezar los modales, deberemos regular toda casta de solaces y pasatiempos, todo aquello en que los hombres hallaren su deleite. No habría que oír música... también nuestros atuendos deberían verse sometidos a licencia”⁵¹.

d. La opinión pública, fuente de legitimidad y límite del poder⁵²

⁵⁰ cfr. SALDAÑA DÍAZ, María Nieves, ya citada Pág. 80.

⁵¹ Ibid Págs. 44-45.

⁵² Sobre las contrapuestas reacciones frente al nuevo fenómeno cfr. SEVILLA ANDRES, Diego. Los orígenes de la crítica social en España (1800-1856), Valencia, Catedra Fadrique Furio Ceriol, 1975.

Los siglos XVIII-XIX representan el tiempo de asentar la idea de libertad sin que quepa aún concebir siquiera la información en el aludido sentido poliédrico en el que hay, también, deberes públicos; es el tiempo de la libertad en todos los ámbitos como eje de las nuevas luces como Stuart Mill acierta a valorar siendo su obra un fenomenal alegato en defensa del pluralismo político fundamentando la importancia de la libertad de expresión en razones diversas:

“Así, en primer lugar, —si se acalla una opinión puede que sea cierta, si negáramos que pueda ser cierta estaríamos afirmando nuestra propia infalibilidad. En segundo lugar, aunque una opinión sea errónea podría contener una porción de verdad: —...es muy raro que la opinión general o mayoritaria comprenda toda la verdad, es posible que una opinión minoritaria tenga algo de verdad. Tercera: si la opinión que se acepta no solo es cierta sino que contiene toda la verdad, si no se permite que sea atacada vigorosamente aunque contenga toda la verdad, la mayoría de los que la reciben lo harán como un prejuicio, sin comprender o sentir su fundamento racional. Y por último, si se acepta como un dogma se convertirá en una forma incapaz de cualquier bien, que estorbara e impedirá el desarrollo de cualquier convicción verdadera. En definitiva, —nunca podemos estar seguros de que la opinión que tratamos de ahogar sea falsa, y si lo estuviéramos, el ahogarla sería también un mal... Negarse a oír una opinión, porque se está seguro de que es falsa, equivale a afirmar que la verdad que se posee es la verdad absoluta. Toda negativa a una discusión implica una presunción de infalibilidad”.

Cosa distinta, sin embargo, es el “fruto político” que el concreto ejercicio de la libertad (aún solo “de prensa”) irá madurando: la opinión pública. No en vano, entre las

nuevas ideas que se irán asentando para dar vida al nuevo orden liberal, la opinión pública será invocada como fuente de legitimidad secular en oposición a la de carácter religioso que había presidido toda la política precedente. Mesonero Romanos, que lleva a cabo un detallado análisis de la prensa (del “monstruo de cien lenguas apellidado la prensa periódica”) la describe así:

“... que no hay suceso que no registre en todos sus detalles, hecho que no comente, reputación que no eleve, analice o destruya, ya con el escalpelo de la crítica severa, ya con el cascabel de la sátira, con más primor y talento que el que pudiera prestarle mi vetusto y descolorido pincel»

Y explicaba el nuevo fenómeno como especie de “sacerdocio” que desempeñaban los periodistas, “nueva potencia que quita y pone leyes...”:

“...El actual no presenta para su recomendación títulos añejos, glorias históricas, timbres ni blasones... sus armas no son otras que una resma de papel y una pluma bien cortada. Y, sin embargo, ... con armas de tan dudoso temple, el periodista es una potencia que quita y pone leyes, que levanta a los pueblos a su antojo, que varía en un punto la organización social...⁵³”.

Desde la perspectiva de la experiencia democrática que tanto observó en América, y comentó Tocqueville, cabe también considerar la opinión pública como un límite del poder:

"Es menester haber leído muy poca historia de los pueblos libres para no saber que la virtud política apenas se encuentra en quienes los conducen, y

⁵³ MESONERO ROMANOS, Ramón de, *Escenas matritenses*. Madrid, Aguilar, 1955, pág. 769.

que la ambición de los mismos, su versatilidad y su egoísmo casi nunca tuvieron más límite que el impuesto por la opinión"⁵⁴.

Y con mayor claridad si cabe, por su directa referencia al medio al que Burke bautizaba en el parlamento inglés en 1787 como el “Cuarto poder”, *the Four estate*, que atribuía el político a la prensa ⁵⁵:

“En nuestros días, un ciudadano a quien se oprime no tiene más que un medio para defenderse y es dirigirse a la nación entera y, si se mantiene sorda, al género humano; no tiene más que un medio para hacerlo y es el que le ofrece la prensa... La prensa es por excelencia el instrumento democrático de la libertad”⁵⁶.

Naturalmente. ¿Qué son sino diferentes formas de limitación del poder cuantas declaraciones hemos mencionado hasta aquí? La diferencia entre las limitaciones “parciales” y puntuales del Medievo y la posterior proclamación de las grandes declaraciones también es notable desde esta perspectiva pues en estas, como primera expresión del Estado de Derecho es el poder el que todo él se somete a la ley.

⁵⁴ Cartas sobre la situación interior de Francia (en TOCQUEVILLE, Alexis de Discursos y escritos políticos. CEPC 2005 pags 97 y ss).

⁵⁵ No está documentada la atribución al político inglés Burke aunque es compartida la idea por muchos; el propio Oscar Wilde en magnífica cita (*Wilde, Oscar (February 1891). "The Soul of Man under Socialism". [Fortnightly Review](#) 49 (290): 292–319 afirma que* “In old days men had the rack. Now they have the Press. That is an improvement certainly. But still it is very bad, and wrong, and demoralizing. Somebody — was it Burke? — called journalism the fourth estate. That was true at the time no doubt. But at the present moment it is the only estate. It has eaten up the other three. The Lords Temporal say nothing, the Lords Spiritual have nothing to say, and the House of Commons has nothing to say and says it. We are dominated by Journalism”.

⁵⁶ Citado por TOCQUEVILLE, Alexis de, *La democracia en América*, vol I, Cap. IV.

Hay, pues, en las modernas Declaraciones de derechos un punto de inflexión decisivo que comporta el cambio de fundamentación jurídica y, por consiguiente, de legitimidad política.

5. DECLARACIONES DE DERECHOS DE FINAL DEL XVIII, EL UMBRAL DEL NUEVO ORDEN POLÍTICO

Tras lo dicho es obvio que el reconocimiento de derechos, en sí mismo, no es lo determinante; lo decisivo es la significación política que se va consolidando y que lleva a poder contraponer los documentos medievales mencionados a los que aparezcan, ahora sí, como Declaraciones de derechos (en mayúscula), en el último tercio del siglo XVIII.

Pues si aquellos *otorgan*, las declaraciones liberales burguesas, por el contrario, *reconocen* derechos con pretensión de universalidad coherente con la formulación de la idea de nación una, y con la idea que preside tales declaraciones modernas: *todos los hombres nacen libres e iguales...* Y, de otra parte, frente a la concesión por el rey (a grupos con capacidad de pactar con él), son los nuevos poderes constituyentes quienes redactan las nuevas declaraciones reconociendo (y no concediendo) la natural igualdad y libertad de todo hombre y dictan las nuevas constituciones que, no en vano, son *impuestas* al monarca.

Pero a la hora de enjuiciar el constitucionalismo como fenómeno en el que el documento fundamental escrito adquiere una relevante significación política lo importante es que en el mismo se contienen los derechos y deberes de los ciudadanos porque está asentándose un nuevo orden político derivado de la filosofía liberal que llevará hasta la afirmación de que todos los hombres nacen libres e iguales. Sobre la novedad precisa Dippel: "Los delegados de Virginia de 1776... deliberadamente introdujeron un lenguaje nuevo: "Una declaración de derechos hecha por los representantes del buen pueblo de Virginia,

congregados en convención general y libre; cuyos derechos pertenecen a ellos y a su posteridad, como la base y fundamento de gobierno”. Este es un documento completamente nuevo, que emplea un nuevo y audaz lenguaje. Fue una “declaración de derechos”, no un documento subjetivo declarando derechos, y fue establecido por “los representantes del [...] pueblo”, quienes fueron “congregados en convención general y libre”, y no en una asamblea cualquiera, con una equívoca legitimización- realidad, la Declaración de Derechos de Virginia no fue el primer documento constitucional de la Revolución Americana. Fue precedida por la Constitución de New Hampshire del 5 de enero de 1776, y por la Constitución de Carolina del Sur de 26 de marzo de 1776. Pero el lenguaje de estos dos documentos se parece mucho más al *Bill of Rights* inglés, el lenguaje de los derechos antiguos y de las libertades violentadas, pero rescatadas para ser restauradas”⁵⁷.

a. La libertad de expresión en el primer constitucionalismo

Y es justamente en el nuevo orden político en el que los derechos y libertades son un elemento axial⁵⁸, donde la libertad de expresión (entonces solo de prensa) cobra todo su sentido político aunque aún falten nuevas dimensiones que deban ir asentándose. Así, rezaba la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, de 12 de junio de 1776 (e independencia 4 julio 1776), n. 12.

“Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás a no ser por gobiernos despóticos”.

Con carácter mucho más amplio se expresa en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 26 de agosto de 1789, cuyo art. 11 disponía:

⁵⁷ DIPPEL, Horst, Constitucionalismo moderno. Introducción a una historia que necesita ser escrita Núm. 6-2005, Septiembre 2005, pp. 181-199 disponible en <http://app.vlex.com/#vid/41835727>

⁵⁸ No se olvide el contenido del art. 16 de la Declaración francesa de 1789: “Toda sociedad que no tiene sus poderes divididos y los derechos de sus ciudadanos reconocidos y garantizados, no tiene Constitución”.

“La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciados del hombre, todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los casos determinados por la ley”.

Sin embargo, atendiendo a la filosofía individualista que la inspira, alejada de la significación social que adquirirá con el tiempo, afirma Desantes que el reconocimiento de la libertad de prensa en el art. 11 de la Declaración francesa, con suponer y ser un extraordinario avance, acabará lastrando su posterior evolución en la medida en que tal acepción vinculada a la idea de libertad, al ir prolongándose en el tiempo y dejándose imitar en posteriores documentos y constituciones, limita extraordinariamente todas las posibilidades⁵⁹ que de haber dado el salto a la consideración de la misma como derecho y no solo como libertad, se hubieran desplegado⁶⁰.

Naturalmente, la sociedad aún no ha evolucionado tanto como para que se lleve a cabo el gran cambio; y no es poco el que la invocación de la opinión pública refleja y la proclamación de la libertad de imprenta puede comportar aunque en sus inicios, como Larra denunciaba, los efectos hubieran de tardar:

“... de cierto tiempo a esta parte no ha habido ministro que no se haya proclamado abogado de la libertad de imprenta, aunque por el estilo del

⁵⁹ Pero tampoco cabe ignorar que, como subraya SORIA SAIZ, Carlos (Derecho de la información... ya cit., pág. 58) si tuvo importantes efectos para liberar la información de su dependencia del Estado: “Al defender la máxima inhibición estatal, se intentaba anclar la libertad en los núcleos individuales y se intentaba soslayar la presión o coacción estatal del pensamiento y la opinión...”.

⁶⁰ Nuestra Constitución de Cádiz, 1812 se mantuvo en términos semejantes a los reseñados. Así su art. 371 establecía: “Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establecen las leyes”.

marido que delante de gentes animaba a su mujer a comer de los pichones, y en quedando solos le decía enseñándole un garrote: ¡Ay si los catas!”

Llegando Larra a considerar su invocación como un engaño colectivo:

“A mi me da qué hacer la libertad de imprenta; yo soy el único a quien da qué hacer, pero, en fin, me da. Habla la Reina, y se hace lenguas de la libertad de imprenta; hablan los ministros, y para ellos no hay altar donde ponerla; hablan también (esto no es pulla) los próceres, y convienen en que es la base; abren la boca los procuradores y procuran por ella como por las niñas de sus ojos; hablan los periódicos, y hártanla de piropos. Y hablo yo y digo, como don Basilio en la ópera de mi tocayo: "¿A quién engañamos, pues, aquí? ¿Quién diantres impide que la establezcan?"⁶¹.

b. El derecho a la información madura extramuros del Derecho, que solo lo asumirá en el siglo XX

Con el tiempo se irán desplegando, desde luego, todas las virtualidades del cambio de perspectiva (de la idea de libertad a la de derecho), pero como ya hemos apuntado *supra*, habrá que esperar a la segunda postguerra mundial, al periodo en que se consolide la corriente constitucional democrática en algunas de cuyas Constituciones el derecho a la información adquiere ya todo su sentido como legitimador del sistema democrático que instauran en términos que previamente han ido cuajando en aportaciones doctrinales entre las que hemos apuntado algún ejemplo; pero donde cuaja de modo especial es en la doctrina social de la

⁶¹ Las citas originales en Larra: «Dios nos asista», U, pp. 191 y 192, respectivamente. Disponible en la Biblioteca virtual Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com/portales/academia_mexicana_de_la_lengua/obra-visor-din/dios-nos-asista-tercera-carta-de-figaro-a-su-corresponsal-en-paris--0/html/ff811892-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

Iglesia⁶². En España como ha señalado acertadamente Bel Mallén⁶³ hasta la Constitución de 1978 el derecho no llega a su “eslabón legal”.

El derecho a la información no solo esperará a la última corriente constitucional democrática en lo que se refiere a su formalización en textos fundamentales. Incluso su cabal comprensión por parte de la doctrina se hace esperar a la maduración de una idea democrática que solo se alcanza en la segunda mitad del siglo XX, tras las penosas experiencias de su primera mitad vividas en el mundo europeo, supuestamente el más civilizado, desarrollado y culto de los conocidos⁶⁴. Porque no basta que se haya instalado la filosofía liberal en los nuevos Estados a caballo del siglo XVIII y el XIX; ni que, cuando hayan evolucionado en democracias parlamentarias, se doten de contenido social en el primer tercio del XX.

Habrá que esperar también a que se haya extendido el sufragio universal como expresión de igualdad política y a que la democracia pueda ser calificada (como lo hace Burdeau⁶⁵) de “gobernante”. Ello exige una concepción de la ciudadanía participativa y activa, interesada en las cuestiones públicas que ya no se reducen al interés de las elites; solo así podemos hablar del derecho a la información propio de un sujeto universal, como todos los fundamentales, y más allá, por consiguiente, del que los profesionales de la información podían invocar.

⁶² Cfr. SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *El derecho a la información*, Valencia, Cosmos, 1974, págs. 115 y ss.

⁶³ Bel Mallén, Ignacio, “La libertad de expresión en los textos constitucionales españoles”, en Documentación de las Ciencias de la Información, nº 13, 1990, 23-52. También en capítulo Bel Mallén, Ignacio, *Derecho de la Información*, Ariel, 2003, y en los capítulos 8 a 11 de la Segunda Parte de la monografía co-dirigida con CORREDOIRA, L. *Derecho de la Información*, op ya citada, Editorial CEPC, 2015, págs. 169 a 242.

⁶⁴ DEVIRIEUX, Claude Jean, *Manifeste Pour le Droit à L'Information...*, op. ya cit., pág. 25) sostiene que en Nuremberg se juzgó y condenó a dirigentes nazis, no porque fueran culpables de atrocidades sino porque durante 15 años incitaron a individuos y grupos a cometerlas en nombre del sistema condicionando a todo el pueblo alemán.

⁶⁵ BURDEAU. George, *La Democracia*, Barcelona, Ediciones Ariel. Una síntesis (publicada como texto de conferencia) en Revista del Derecho de la Universidad de Concepción, núm. 109, 1959; disponible en red: <http://www.revistadederecho.com/main.php>

Por ello diría Voyenne que “es sorprendente constatar que la noción del derecho a la información, aunque coextensiva al conocimiento y, por tanto, a la Humanidad desde sus orígenes, no haya emergido más que con una sorprendente lentitud en la conciencia social”⁶⁶.

6. EL TARDÍO RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Es en 1946 cuando el director de la Agencia *France Presse* (Paul-Louis Bret) menciona⁶⁷ (sin llegar a explicarse sobre tal formulación), por vez primera, “el derecho al hecho” con ocasión de exigir del Estado ayudas que faciliten la accesibilidad de las agencias y profesionales a la información⁶⁸.

a. Textos constitucionales⁶⁹

El salto a los documentos constitucionales, se produce en Alemania, precisamente bajo la ocupación americana, cuando en 1949 encontramos la formulación del derecho a la información en dos Lander y en la Ley Fundamental de Bonn⁷⁰. Así, en Baviera se reconoció a la prensa “un derecho a las informaciones dimanantes del Estado”. Y en Hesse quedaba formulado “el deber de las autoridades de transmitir a la prensa las informaciones solicitadas”. Desde luego era una primera aproximación, pero no se llegaba a formular de tal modo el derecho a la información como derecho universal⁷¹. Mayor aproximación se llevaría a cabo en el art. 5 de la Ley Fundamental de Bonn al decir en su art. 5, párrafo 1:

⁶⁶ VOYENNE, Bernard, *Le Droit à l'Information*, Paris, Aubier-Montaigne, 1970, pág. 109.

⁶⁷ Citado por DEVIRIEUX, Claude Jean, *Manifeste pour ...* ya cit. Pág. 45. “I faudra attendre 1946 pour que Paul-Louis Bret, directeur de l'Agence France-Presse, dans un article sur l'accessibilité de l'information, mentionne pour la première fois **le droit au fait**. Encore se bornait-il à affirmer ce principe sans chercher à le définir ni à en analyser la portée si ce n'est qu'il revenait à l'État de rendre l'information accessible en subventionnant les journaux et les agences de presse”; disponible en <http://197.14.51.10:81/pmb/DROIT/Manifeste%20pour%20le%20droit%20a%20l%20information%20-%20De%20la%20manipulation%20a%20la%20legislation.pdf>

⁶⁸ Ibid., Pág. 31.

⁶⁹ Cfr. Todos los textos constitucionales que condagan la libertad de expresión se enumeran en MORANGE, Jean, *La liberté d'expression*, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, págs. 114 y ss. Pueden consultarse los textos completos en DARANAS PELAEZ, Mariano, *Las Constituciones europeas Tomo 1 y 2*, Editora Nacional, Madrid, 1979.

⁷⁰ En español disponible en <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf>

⁷¹ SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *El derecho a la información...* ya cit. pág. 110.

“Todos tienen el derecho a expresar y difundir libremente su opinión por medio de la palabra, por escrito y por la imagen, y de informarse sin trabas en las fuentes accesibles a todos. La libertad de prensa y la libertad de información por radio y cinematografía están garantizadas. No se ejercerá censura...”⁷².

También se consideró como una de las primeras Constituciones que llegaron a formular tal derecho la yugoslava⁷³. En un amplísimo art. 40 de la Constitución de la República Socialista Federal de Yugoslavia se manifestaba también, como en el caso que acabamos de ver, cierta aproximación no exenta aun de alguna confusión (propia de las primeras formulaciones) entre las ideas axiales que basculan en este derecho: la de libertad y la de derecho. Pero ya se apuntan elementos (que destacaremos en el texto siguiente) que pronto alcanzarán su más cabal aceptación:

“Estarán garantizadas...la libertad de prensa y otros medios de información...

Los ciudadanos tendrán derecho a expresarse y publicar sus opiniones a través de los medios de información e informar a través de

⁷² Sobre la significación de este precepto como punto de inflexión de todo lo anterior cfr. DESANTES, José M^a, *La función...* ya cit., pág. 80. Un reciente estudio, puede verse en TENORIO, P. J. y ELIAS MENDEZ, C. La libertad de expresión en la Ley Fundamental de Bonn y el la jurisprudencia del Tribunal constitucional federal alemán, en TENORIO SANCHEZ (dir.) *La libertad de expresión. Su posición preferente en un entorno multicultural*. Madrid, Wolters Kluwer, 2014, págs. 193 y ss. Debe no obstante subrayarse la predominante situación en el art. Constitucional de referencia de la libertad de opinión sobre la de información.

⁷³ SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *El derecho a la información...* ya cit. pág. 110. Sin embargo, la Constitución italiana no llegó a introducir la más mínima referencia a la información quedando en una formulación liberal reconducida a la libertad de manifestación del pensamiento. Por todos, MEZZETTI, L. La libertad de manifestación del pensamiento y sus límites en el ordenamiento constitucional italiano, en TENORIO SANCHEZ (dir.) *La libertad de expresión. Su posición preferente en un entorno multicultural*. Madrid, Wolters Kluwer, 2014, págs. 269 y ss.

ellos, a publicar periódicos y otras publicaciones y a propagar información por los demás medios de información...

La prensa, la radio y la televisión informarán al público veraz y objetivamente, y publicarán y emitirán las opiniones e informaciones de órganos, organizaciones y ciudadanos que sean de interés para la información pública.

Está garantizado el derecho a rectificar la información que haya violado los derechos e intereses de una persona o una organización.

Para asegurar la información más amplia posible del público, la comunidad social promoverá las condiciones conducentes al desarrollo de las actividades apropiadas”.

Ciertamente, existen aproximaciones a la idea de la información como derecho en estos textos pero no llega a formularse como en el artículo 5 de la Constitución alemana que hemos transcrito⁷⁴. Solo en él se apunta al sujeto universal no solo activo sino también pasivo: “todos tienen derecho... de informarse sin trabas...”, aunque tampoco en este texto se halla una comprensión cabal del derecho a ser informado que sí veremos *infra* en la Constitución portuguesa, más de dos décadas después. Un estudio de Wilma Arellano observa el mismo fenómeno en países latinoamericanos⁷⁵.

b. Textos internacionales

⁷⁴ Al Tribunal federal se debe la construcción dogmática del art. 5 en el que, según ya hemos dicho, predomina la protección de la libertad de opinión pero ello no obstante es clara la segunda afirmación del precepto, el derecho de informarse, sobre el que el Tribunal ha exigido el deber de la verdad. Cfr. TENORIO, P. J. y ELIAS MENDEZ, C. La libertad de expresión en la Ley Fundamental de Bonn y el la jurisprudencia..., ya cit., pág. 200.

⁷⁵ ARELLANO TOLEDO, Wilma, Repensando el derecho a la información: entre las bases doctrinales y el renoncimiento constitucional y legal, Ponencia presentada en el FIEDI, Univ. Leicester, Julio 2016.

Sin embargo, en el mismo período de la postguerra sí se llevan a cabo nuevas aproximaciones en documentos internacionales de primer nivel. En particular, es una constante doctrinal destacar la Declaración Universal de 1948 y en particular su art. 19, en el que se lee:

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Aunque, a decir verdad, en esta gran Declaración se sigue con los intentos de aproximación al concepto, más por la vía de la enumeración de las diversas facultades que se van reconociendo a partir de la libertad de expresión, que por la cabal comprensión de lo que realmente sea el derecho a la información⁷⁶.

Pues, como recordaba Desantes, es cierto que en la Declaración del 48 existen elementos suficientes para construir el derecho a la información (vinculando e interpretando sistemáticamente el art. 19 con el 28 y el 21)⁷⁷, pero no lo es menos que adolece jurídicamente de los problemas de eficacia jurídica de todo documento internacional⁷⁸; ello sin perjuicio de su extraordinaria fuerza moral y del importante paso que representa (solo superado por el Tratado de Roma por lo que en términos de eficacia supone el establecimiento del Tribunal

⁷⁶ En este sentido, sobre las insuficiencias del art. 19 de la Declaración Universal Sánchez Ferriz. El derecho a... ya cit., pág 112 y ss. No obstante, el paso dado es importante y parte de la doctrina considera que ya se contiene en tal precepto el derecho a la información. Así, CORREDOIRA Y ALFONSO, Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el paradigma de la nueva Sociedad de la Información. Estudio específico del artículo 19, en COTINO HUESO Lorenzo Libertad en Internet. La Red y las libertades de expresión e información. Valencia Tirant Lo Blanch, 2006, págs. kkk

⁷⁷ DESANTES, José M^a, *La función...* ya cit., págs. 97.

⁷⁸ DESANTES José M^a, *La función...* ya cit., págs. 95 y ss. y sobre todo, en *Fundamentos del Derecho a la información*, 1977, capítulo 2, Esbozo jurídico págs.. 45 a 52.

Europeo de Derechos Humanos). Es cierto; no cabe negar que existen los elementos como recientemente ha recordado Corredoira extrayendo del art. 19 todas las posibilidades de ser aplicado, incluso en la presente sociedad de la información⁷⁹, pero no puede negarse que sigue faltando la formulación expresa del derecho a la información. Tal vez por ello Voyenne advertía el equívoco del texto:

“L’equivoque subsiste toutefois sur le fait de savoir s’il s’agit seulement de ne pas entraver cette liberté ou, ce qui est très différent, de la promouvoir”⁸⁰.

Y lo mismo cabe decir de la Convención Europea para la Protección de los derechos humanos (CEDH) y de las Libertades públicas de 4 de noviembre de 1950⁸¹ cuyo art. 10 sigue de cerca la técnica de la Declaración Universal (DUDH) aunque según se acaba de decir, es decisivo el paso dado por tal Convención en la búsqueda de la eficacia; lo que, en un documento internacional, resulta extraordinario. Ha de subrayarse también que este art. 10 añade un segundo párrafo cuyo interés ya se ha destacado en otras ocasiones precisamente para poner de relieve las peculiaridades de las libertades públicas en tanto que son derechos que pueden causar daños en otros derechos fundamentales⁸².

Cabe deducir de los dos preceptos de carácter internacional ahora mencionados una amplia libertad para informar e informarse pero falta aún explicitar lo esencial del derecho a la información, su condición de democraticidad que implica a toda la ciudadanía no solo como sujeto activo del derecho a informar sino también como sujeto pasivo o acreedor a una

⁷⁹ CORREDOIRA ALFONSO, Loreto, *Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos...* ya cit.

⁸⁰ Op. cit. Sin embargo, creo que la idea de promover (más apropiada para los derechos sociales) contiene también sus riesgos. Creemos más acertada la idea de deber de proporcionar información o la consideración de la información como una función, ideas ambas, defendidas por Desantes. Así, DESANTES GUANTER, José M^a, *El deber profesional de informar*, Valencia, Fundación Universitaria San Pablo CEU, 1988.

⁸¹ Texto en la web en español http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf

⁸² SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *Estudio...* ya cit., págs.

información veraz de naturaleza pública que justamente le pertenece por su papel activo en la aludida democracia gobernante. Y lo curioso es que casi dos décadas después, en el Pacto internacional de los derechos civiles y políticos (de 16 de diciembre de 1966) sigue sin avanzarse en la conceptualización formal del derecho por cuanto el mismo se mantiene en términos similares a los de la Declaración Universal de 1948 y de la Convención europea de 1950. Con todas sus deficiencias, pero son estos documentos los que cierran el período liberal que nos aportó, sí, la libertad de informar... pero no la libertad de todos sino la de los más fuertes: “La libertad de informar proclamada por el liberalismo es la libertad para el fuerte, que poco aprovecha para el ciudadano en general”⁸³.

c. Maduración de la idea en la doctrina social de la Iglesia

Aun habrá que esperar una década más para que podamos encontrar totalmente constitucionalizado el derecho a la información; aunque hasta que ello ocurra no podemos decir que se desconozca su cabal comprensión pues en diversas ocasiones y en términos distintos que se han ido complementando, la encontramos en muchos documentos de doctrina social de la Iglesia Católica en la que se fue formulando este derecho. En ellos hallamos desde lo que podríamos llamar “despenalización” de la prensa, a partir de León XIII, hasta las expresas declaraciones del Concilio Vaticano II en defensa del derecho estudiado⁸⁴; y en tal proceso ha de destacarse la utilización del término información, por vez primera, por Pío XII y en términos que realmente sí aportan elementos decisivos en la comprensión de lo que la misma deba ser y de lo que no debería confundirse; así,

- “...dar crédito a una información sin comprobar bastante su fuente...”

⁸³ DESANTES, José M^a, *La función...* ya cit., pág. 81.

⁸⁴ Los textos que se va a citar se toman de IRIBARREN, Jesús, y GUTIERREZ GARCIA, José Luis Cinco grandes mensajes. Madrid, B.A.C. 1968.

- "...el progreso de la técnica ha reducido al mínimo la distancia entre el hecho y su publicación y en este mínimo de tiempo debéis transmitir una información fiel...".

- "...la conspiración del silencio puede también ofender gravemente a la verdad y a la justicia"...

Pero sin duda las expresiones de mayor interés las encontramos en la encíclica *Pacem in Terris* (de 11 de abril de 1963) hasta el punto de poder afirmar, tal como ya defendimos en otra ocasión⁸⁵, que el derecho a la información, como derecho "a ser informado" es en dicho documento donde recibe por vez primera su formulación expresa⁸⁶ pues en su párrafo 12 se lee:

"El hombre exige, además, por derecho natural el debido respeto a su persona... y, finalmente, disponer de una información objetiva de los sucesos públicos".

Son otros muchos los textos que nos permiten afirmar la existencia de un cuerpo de doctrina previo al que después se conformará de modo definitivo en los documentos constitucionales y, por supuesto en la interpretación jurisprudencial de los Tribunales Constitucionales. Así, en la *Gaudium et spes* podemos ver enumerado, entre todo aquello que le es necesario al hombre "para llevar una vida verdaderamente humana..., el derecho a una adecuada información". También, en el mismo documento (núm. 59) se halla la mejor acepción de las que se formularon doctrinalmente en aquellos primeros años y que valoramos especialmente por ubicar el derecho humano en el ámbito de lo público

"todo esto exige también que el hombre, con tal que respete el orden moral y la utilidad común, pueda libremente buscar la verdad y

⁸⁵ SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *El derecho a la información...* ya cit. pág. 118.

⁸⁶ Así lo sostiene sin ningún género de duda TERROU, Fernand, *La información*, Barcelona, oikos-tau, 1970, pág. 8.

exponer y divulgar su opinión, y cultivar cualquier forma de arte y ser,
finalmente informado de los acontecimientos públicos”⁸⁷.

7. FORMULACIÓN CONSTITUCIONAL DEFINITIVA EN LOS AÑOS 70

Volviendo de nuevo a los documentos constitucionales y retomando la afirmación de la lentitud con que se llega a formular definitivamente, hay que decir que solo en la década de los 70 se alcanza una conceptualización definitiva y a nivel constitucional. Siendo escasos los textos fundamentales que han llegado a la formulación expresa (de forma completa el portugués y en una primera aproximación el texto alemán que se acaba de citar) debe observarse que la labor de los Tribunales Constitucionales ha venido a completar y desarrollar los contenidos implícitos como veremos que ha ocurrido en España y antes ya sucedió en Italia⁸⁸.

Incorporamos un Anexo cronológico (Anexo 1) con las principales textos que hemos manejado en los sistemas constitucionales de referencia en Europa y América del norte⁸⁹.

a. La aportación de la constitución portuguesa de 1976

El logro obtenido en esta década de los 70 se debe fundamentalmente a la Constitución portuguesa que en sus arts. 37 a 40 formaliza el reconocimiento más completo del derecho a la información en el máximo nivel normativo. Sus sucesivas reformas han sabido ir incorporando al propio texto constitucional todas las innovaciones que del desarrollo tecnológico se han ido derivando no solo para las múltiples facetas de las libertades

⁸⁷ Otros documentos igualmente interesantes cabe ver en SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *El derecho a la información...* ya cit. pág. 119-120.

⁸⁸ Entre tantos, recientemente, MEZZETTI, L. La libertad de manifestación del pensamiento y sus límites en el ordenamiento constitucional italiano, en TENORIO SANCHEZ (dir.)..., pág. 284: sobre el “derecho general a la información, a comienzo de los años 70, el TCi (STCi 105 de 1972) reconoció la existencia de un interés general a la información, indirectamente protegido por el art. 21 de la Constitución...”.

⁸⁹ Otros colegas presentes en esta edición de IAMCR y del FIEDI en Leicester 2016 (ARELLANO, W., GUTIÉRREZ, F.,) han aportado su visión del desarrollo del derecho en Chile, México, Argentina y Uruguay.

informativas sino incluso para la creación de nuevas instituciones de control y de garantía de las mismas⁹⁰. Con todo, ya su regulación inicial en 1976, al publicarse la constitución portuguesa, aportaba la que, a nuestro juicio, fue la más completa y ajustada concepción del derecho a ser informado sobre la que, hasta entonces no existían sino formulaciones

⁹⁰ El interés de esta Constitución invita a la transcripción de, al menos, parte de sus preceptos aunque en esta sede no sea posible entrar en su consideración particular:

Art. 37: (De la libertad de expresión y de información)

1. Todos tienen derecho a expresar y divulgar libremente su pensamiento mediante la palabra, la imagen o cualquier otro medio, así como el derecho a informar, a informarse y a ser informados, sin impedimentos ni discriminaciones...

...4. Se garantiza a todas las personas, singulares o colectivas, en condiciones de igualdad y eficacia, el derecho de réplica y de rectificación, así como el derecho a indemnización por los perjuicios sufridos.

Artículo 38 (De la libertad de prensa y de los medios de comunicación social)

1. Se garantiza la libertad de prensa.

2. La libertad de prensa implica:

La libertad de expresión y de creación de los periodistas y colaboradores, así como la intervención de los primeros en la orientación editorial de los respectivos órganos de comunicación social, salvo cuando tuvieren naturaleza doctrinaria o confesional;

El derecho de los periodistas, en los términos que establezca la ley, al acceso a las fuentes de información y a la protección de la independencia y del secreto profesionales, así como el derecho a elegir consejos de redacción;...

El derecho a fundar periódicos y cualesquiera otras publicaciones sin autorización administrativa...

3. La ley asegura, con carácter general, la divulgación de la titularidad y de los medios de financiación de los órganos de comunicación social.

4. El Estado asegura la libertad y la independencia de los órganos de comunicación social...

5. El Estado asegura la existencia y el funcionamiento de un servicio público de radio y de televisión.

6. La estructura y el funcionamiento de los medios de comunicación social del sector público deben salvaguardar su independencia....

Artículo 39 (De la Alta Autoridad para la Comunicación Social)

1. El derecho a la información, a la libertad de prensa y a la independencia de los medios de comunicación social frente al poder político y el poder económico, así como la posibilidad de expresión y confrontación de las diversas corrientes de opinión y el ejercicio de los derechos de antena, de respuesta y de réplica política son asegurados por una Alta Autoridad para la Comunicación Social.

2. La ley define las demás funciones y competencias de la Alta Autoridad....

3. La Alta Autoridad... es un órgano independiente, compuesto por once miembros....

Artículo 40 (De los derechos de antena, de respuesta y de réplica política)

1. Los partidos políticos y las organizaciones sindicales, profesionales y representativas de las actividades económicas, así como otras organizaciones sociales de ámbito nacional, tienen derecho, de acuerdo con su relevancia y representatividad y según criterios objetivos que deben ser definidos por ley, a tiempos de antena en el servicio público de radio y de televisión.

2. Los partidos políticos representados en la Asamblea de la República, y que no formen parte del Gobierno, tienen derecho, en los términos que establezca la ley, a tiempos de antena en el servicio público de radio y televisión..., así como el derecho de respuesta o de réplica política a las declaraciones políticas del Gobierno, de duración y relieve iguales a los de los tiempos de antena y los de las declaraciones del Gobierno, gozando de iguales derechos, en el ámbito de la región respectiva, los partidos representados en las asambleas legislativas regionales.

3. En los periodos electorales, los candidatos tienen derecho a tiempos de antena, regulares y equitativos, en las emisoras de radio y de televisión de ámbito nacional y regional, en los términos que establezca la ley.

doctrinales (como las ya mencionadas de la Iglesia Católica) y no de nivel constitucional como la que se acaba de transcribir.

Pero lo más importante no es tanto la formulación del derecho con ser tan clara en la Constitución portuguesa, sino la significación política y constitucional, la condición de eje del sistema que cabe advertir en una interpretación sistemática que este precepto se pudo hacer ya entonces; lo que le vale a dicha Constitución el mérito de haber aclarado definitivamente no solo el concepto de lo que sea derecho a la información sino su significación social y política en sí mismo y, sobre todo, en relación con todos los demás derechos de participación política y social para los que constituye no solo un soporte inexcusable sino su presupuesto, la condición *sine qua non* ha de concurrir para que se produzca la participación ciudadana en los asuntos públicos de forma consciente y responsable.

Aquí sí se manifiesta el más completo entendimiento de la democracia a la que *supra*, en términos de Burdeau, hemos denominado “gobernante”:

Artículo 48.2 de la Constitución portuguesa:

"todos los ciudadanos tienen el derecho de ser esclarecidos objetivamente sobre los actos del Estado y demás entidades públicas... a ser informados por el Gobierno y otras autoridades acerca de la gestión de los asuntos públicos".

b. El Derecho a la Información junto a (pero también al margen de) la libertad de expresión⁹¹

⁹¹ Debe subrayarse esta afirmación que podríamos llamar “dualista” a diferencia de la interpretación monista que se contiene en el art. 19 de la Declaración universal de 1948 o la del art. 14 del Convenio europeo de derechos humanos de 1950, así como de la interpretación realizada por el TCi derivada del art. 21 de la Constitución italiana (1947) que, según hemos visto *supra*, solo reconoce abiertamente la libertad de manifestación del pensamiento. Así, en STCi 112 de 1993 se lee: “la Constitución en el art. 21 reconoce y garantiza a todos la libertad de manifestar el propio pensamiento con cualquier medio de difusión y tal libertad

Tal como se acaba de advertir, con ser el art. 48 de la Constitución portuguesa el caso más claro y más logrado de reconocimiento del derecho a la información, no es esto lo más importante sino lo que de tal reconocimiento cabe deducir a través de su interpretación sistemática. Pues en una amplísima nota hemos destacado aquí la completitud y extensión de los preceptos que tal constitución dedica al reconocimiento y diversos aspectos de las libertades informativas, que se contienen en los arts. 37 a 40. Sin embargo, este precepto que con tan decisiva redacción acabamos de transcribir, no se halla entre tales preceptos dedicados a las libertades informativas, sino en el art. 48. Es importante por tanto que expliquemos cuál es la posición de este art. 48 en el completo sistema que sobre las libertades informativas regula dicha constitución.

Ciertamente, el Título II de la Constitución portuguesa lleva por epígrafe “De los derechos, libertades y garantías” y en él se distingue perfectamente el Capítulo I (“De los derechos, libertades y garantías personales” que comprende los arts. 24 a 47) del Capítulo II (“De los derechos, libertades y garantías de participación política”, arts. 48 a 52) y este, justamente se inicia con el art. 48 que lleva por epígrafe “De la participación en la vida pública” y su párrafo 2 que acabamos de transcribir contiene el que consideramos mejor reconocimiento constitucional del derecho a la información que nos atreveríamos a apostillar de “bien entendido” puesto que proliferan hoy interpretaciones y variantes⁹² que no deberían ser confundidas con el genuino derecho a la información que acabamos de referir.

comprende tanto el derecho de informar como el derecho a ser informados, los cuales, por razón de su contenido, se traduce directamente en derechos subjetivos del individuo de carácter absoluto...” (cit por MEZZETTI, L. La libertad de manifestación del pensamiento y sus límites en el ordenamiento constitucional italiano, en TENORIO SANCHEZ (dir.)..., pág. 285.

⁹² Un ejemplo tal vez lo pueda constituir lo que se está llamando derecho de acceso a la información que, si bien puede tener elementos de intersección no es exactamente el derecho a la información en los términos en que se contiene en la Constitución portuguesa y en la española según vamos a ver, sino que más bien se correspondería con el derecho reconocido por nuestra constitución en el art. 105, b), esto es, el derecho a conocer la documentación que, en manos de la Administración pública, nos afecta.

Por lo tanto, el párrafo 2 del art. 48 se sitúa en la Constitución que comentamos en un marco estrictamente democrático y dinámico, al margen de la detallada regulación que, según hemos dicho ya, también se contiene en la misma Constitución para las libertades informativas y sus múltiples medios de manifestación y difusión (art. 37 sobre libertad de expresión y de información, art. 38 sobre libertad de prensa y medios de comunicación social, art. 39 sobre la Alta Autoridad para la comunicación social y art. 40 sobre los derechos de antena, de respuesta y de réplica política). Sin duda la especificidad del art. 48.2, más allá de las consecuencias de su ubicación sistemática, se pone de relieve cuando se le compara con el art. 37.1 en el que se reconoce tanto la libertad de expresión como la de información en los siguientes términos que no dejan de ser, también estos, claros y acertados:

“Todos tienen derecho a expresar y divulgar libremente su pensamiento mediante la palabra, la imagen o cualquier otro medio, así como el derecho a informar, a informarse y a ser informados, sin impedimentos ni discriminaciones”.

Evidentemente este precepto describe un ámbito bastante más amplio que el del art.48.2 que se circunscribe a la situación jurídica de ciudadano, supuestamente activo y sujeto de participación política al que toda autoridad ha de tener informado de cuanto afecte a la gestión de los asuntos públicos. La reciente formulación del deber de transparencia en el ámbito europeo sin duda se sitúa en esta misma línea de pensamiento aunque de la interpretación y aplicación que se le dé en cada país dependerá su determinación final y su inserción en el cuadro general de los derechos.

En el caso español creemos que aún habrá que esperar algún tiempo a que, además de aplicarse la reciente normativa se decante en algún sentido la interpretación de la misma

que hoy difícilmente puede dar lugar a formulación objetiva alguna en la medida en que la profusión de los asuntos de corrupción está lastrando el entendimiento y la aplicación de la normativa de transparencia que por ahora parece centrarse en la delación y/o persecución de supuestos delitos generalmente económicos, y en la exigencia de cuentas con claros matices partidistas, en un caldo de cultivo verdaderamente espeso como para que quepa deducir una correcta comprensión de los derechos que se ejercitan y de los deberes a que se dirigen.

c. La Constitución Española de 1978 y su interpretación por el TC

Nos queda aún alguna referencia a la Constitución española cuya significación cronológica no es desdeñable por ser la última (junto a la portuguesa) que se incorpora a la corriente constitucional democrática de la segunda gran postguerra en el ámbito de la Europa occidental. Desde luego no siguió el ejemplo portugués en lo que se refiere a la claridad conceptual y a las distinciones terminológicas a que nos acabamos de referir, ni tampoco en lo que se refiere a la completitud del texto portugués que no ha dejado ningún elemento importante a desarrollo posterior. Pero tampoco se sumó a la opción monista del art. 19 de la DUDH (de cuya capacidad para dar cobertura a las nuevas necesidades informativas no cabe dudar, como recientemente ha recordado Corredoira⁹³). En todo caso, por más que no quepa negar el reconocimiento formal de dos libertades distintas, la de expresión (en art. 20.1, a) y la de información (en art. 20.1, d), no cabe encontrar en el texto constitucional claridad alguna sobre la relación entre las dos libertades mencionadas que solo se fue determinando a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto en el caso español ha sido la interpretación del Tribunal Constitucional la que ha aportado claridad al ambiguo y complejo art. 20 de suerte que hoy ya no existen las

⁹³ CORREDOIRA Y ALFONSO, Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948..., ya cit., *passim*.

múltiples dudas que se plantearon en los primeros años del régimen constitucional de las que bastará recordar aquí solo dos: en primer lugar, sobre si nos adscribíamos al monismo (o interpretación de una sola libertad informativa, de la que nacería la otra) o al dualismo según el cual la libertad de expresión y la de información son dos derechos independientes; en segundo lugar, sobre las consecuencias que sobre la concreta posición de los profesionales de la información en el sistema informativo habría de tener el párrafo 1,d) del art. 20.

Ambas cuestiones fueron resueltas sin grandes discrepancias y, además, en una interpretación que las resuelve en forma complementaria. La doctrina del Derecho de la información (Soria-Desantes⁹⁴), actualizada por Ignacio Bel⁹⁵ se han mostrado siempre contrarios a la interpretación dual del artículo 20; frente a la dualidad de dos libertades como indica la obra de González Ballesteros⁹⁶. Bel⁹⁷ considera “más idóneo calificarla como derecho a la información, reconociendo que, como ha ocurrido en todos los países, el proceso de consolidación de la llamada libertad de expresión, (..) ha sido doloroso, difícil y no exento de grandes injusticias en las que personas y empresas han pagado un alto tributo para su consolidación”.

Por lo que se refiere a la primera cuestión y dejando de lado interpretaciones próximas a la declaración universal de 1948 (que, según hemos dicho ya, tampoco es un dechado de claridad en lo que se refiere al reconocimiento del derecho a la información), nuestro

⁹⁴ DESANTES, José M^a, y SORIA SÁIZ, Carlos, *Los límites de la información: la información en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Asociación de la Prensa de Madrid, 1991.

⁹⁵ BEL, Ignacio, “El derecho...” ya cit. Pág. 169.

⁹⁶ GONZÁLEZ BALLESTEROS, Teodoro, en “Doctrina del Tribunal Constitucional en materia de Libertad de Expresión y de Información”, en Quinta parte de la obra colectiva CORREDOIRA, L. BEL, Ignacio, *Derecho de la Información* ya cit. CEPC, 2015, págs.783-859.

⁹⁷ BEL MALLÉN, I., “El derecho de la información en la Constitución española, artículo 20”, en la obra co-dirigida con CORREDOIRA, L., *El derecho de la Información*, 2015, ya cit. págs.. 169 a 187.

ordenamiento se ha decantado abiertamente por una interpretación dualista en cuya virtud la libertad de expresión y la de información no son susceptibles de ser confundidas en la medida en que difieren por su objeto.

Y en cuanto a la segunda cuestión su respuesta complementa la anterior en la medida en que, según se acaba de decir, la diferencia entre ambas libertades reside en su diferente objeto pero no en su diferente sujeto. Dicho de otro modo, los profesionales de la información no gozan de un derecho a la información específico y diferente del que gozan todas las personas pese a las referencias que la citada letra “d” del primer párrafo del art. 20 contiene a tales profesionales pudieron hacer pensar que dicha libertad se circunscribía al ejercicio profesional:

Artículo 20:

“1. Se reconocen y protegen los derechos:

...d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”.

Es obvio que en el momento constituyente no hemos querido aprovechar la novedosa redacción del vecino Portugal, en la que, indiscutiblemente, se contiene una buena dosis de ideología democrática que en nuestra transición pudo parecer excesiva para el marco de consenso en que la misma se desenvolvía. Además, no cabe ignorar que los pronunciamientos portugueses eran una excepción en la general ambigüedad en que se mantenían los demás países de nuestro entorno de mayor tradición y experiencia democrática, en especial Alemania y la doctrina de su Tribunal Federal.

Así, en definitiva, cabe resumir la construcción española del derecho a la información en forma no muy diversa de la ya consolidada en el mundo “democrático occidental”. Esto

es, el derecho a la información es el derecho a la noticia, en realidad, a los hechos noticiables de interés público (y por consiguiente, con exclusión de los de naturaleza privada); y, ello es así, a diferencia de lo que se reconoce y garantiza a través de la libertad de expresión que no es otra cosa que la libertad de manifestar las propias opiniones, ideas y pensamientos sin más limitación que el insulto o la ofensa gratuita⁹⁸.

Sin embargo, no podemos acabar estas referencias a la consagración del derecho a la información en el máximo nivel normativo sin mencionar la Carta europea de los derechos fundamentales firmada en Niza el año 2000⁹⁹ y cuyo art. Artículo 11, bajo el epígrafe de “Libertad de expresión y de información” no solo consagra la importancia de esta sino que se adhiere a la concepción monista del art. 19 de la Declaración universal de 1948 al expresarlo así abiertamente en su párrafo 1:

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.

2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”.

Evidentemente, pese a lo avanzado en el tiempo de la Carta, cuando ya definitivamente se ha conformado el derecho a la información tanto en lo doctrinal y en los textos constitucionales como, sobre todo, a través de las decisiones jurisprudenciales de los

⁹⁸ SANCHEZ FERRIZ, Remedio, Delimitación de las libertades... ya cit., *passim*. Una síntesis en SANCHEZ FERRIZ, Remedio, *Los límites de las Libertades Informativas*, en Revista Aragonesa de la Administración Pública, 2009, Núm. 34, págs. 227 y ss. La recopilación de toda la jurisprudencia al respecto hasta 2014, en GONZALEZ BALLESTEROS, Teodoro, en “Doctrina...” ya cit.

⁹⁹ Disponible en http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Tribunales Constitucionales de nuestro ámbito político y social, la Carta es extraordinariamente conservadora al sumarse a una concepción que fue novedosa a mitad del XX pero que tal vez hoy resulta algo pobre. Ello sin ignorar que el segundo párrafo al proclamar la libertad de los medios de información parte del derecho a la información que constituye el fundamento de aquella aun cuando este no se mencione expresamente.

La naturaleza internacional del texto (por más que se halle en el deseado camino de la constitucionalización de la Unión Europea) puede explicar su pacata configuración, a modo de forzada bisonñez cuando se está usando un concepto si no caduco, sí superado en otras sedes. Pero sí hay alguna razón, o puede haberla, de mayor coherencia de dicho texto precisamente por su naturaleza internacional y que conecta con la naturaleza política del derecho a la información que hemos visto madurar en el Constitución portuguesa: justamente, en un texto dirigido a 28 Estados mucho más no se puede consagrar si consideramos la estrecha relación que el derecho a la información, en su faceta publica, supone entre sus destinatarios (la propia ciudadanía) y sus obligados (los poderes públicos).

8. A MODO DE RECAPITULACIÓN. EL SIGLO XXI: LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

a. Sociedad de la información ¿del derecho a informarse a la saturación informativa?

De la información-comunicación como elemento configurador de toda comunidad política (con planteamientos de orden antropológico y filosófico que ya encontramos en el pensamiento clásico al que se aludió *supra*) hemos pasado a su configuración como derecho fundamental, por obra de la democratización, y, en el momento presente, a una sobreabundancia informativa de la que, por obra de las tecnologías, se diría que casi hemos de defendernos en la medida en que se nos impone por el sistema de alertas de todo orden.

En efecto, la sociedad de la información que hace poquísimos años comportaba una invocación del acceso de todos al uso de internet, hoy se ve concluida por obra de los teléfonos móviles y del uso masivo de las redes sociales. Como se acaba de afirmar la sociedad de la información ya no es una aspiración sino una realidad cuyo desarrollo se impone por mor de los intereses económicos a los que obedece y por un cambio de época de tan grande dimensión como lo fue la imprenta a partir del siglo XV. Y respecto de la ciudadanía cabría decir que la nueva situación se impone creando cierta desigualdad entre quienes hacen uso de las tecnologías y quienes renuncian a ellas o simplemente se sienten incapaces...

Desde la perspectiva doctrinal se observa la culminación del fenómeno informativo cuando se invoca como deber del Estado –afirma Corredoira– el “garantizar que los ciudadanos tengan el máximo de oportunidades para formar parte de esa Sociedad de la Información. Esta es, entiendo, desde el punto de vista del derecho humano a la información, la clave”¹⁰⁰. Visto así, estamos ante una enorme expansión de la comunicación pues el fenómeno internet ha sido capaz de subsumir todo tipo de soportes informativos previos y, al llegar a identificarse él mismo como “vía pública”, se llega a asimilar la libertad de acceso a internet con la misma libertad personal de todo ser humano¹⁰¹.

Afirmaba entonces Corredoira que el postulado del art. 19 de ONU era –y pensamos que así sigue siendo– suficiente declaración en el que caben todas las innovaciones tecnológicas y los derivados de su relación con el poder. Trascurrido 20 años desde la explosión de Internet en el ámbito comercial y privado (calendado en el año 1996) no parece

¹⁰⁰ CORREDOIRA Y ALFONSO, *Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948...*, ya cit., pág. 71.

¹⁰¹ Ibidem.

que, a priori, sigue manteniendo la autora en obra reciente¹⁰² “haya necesidad de otros requisitos más, pero sí que se ejerzan los derechos a investigar, recibir y difundir información de modo más completo, más inclusivo, eliminando barreras (tecnológicas, normativas, etc..) y, sobre todo, que el poder ejecutivo, legislativo y judicial se crea que el público, sus ciudadanos y administrados son los titulares del derecho a saber, a conocer, y que tan sólo razones de gravedad (muy extraordinarias) como la seguridad o la intimidad de las personas puedan justificar la opacidad o publicidad parcial de información relevante”.

b. Sociedad de la información ¿del derecho a informarse a la saturación informativa?

El problema hoy no se plantea ya en términos de reconocimiento formal ni de construcción jurídica como hemos visto que sucedió a lo largo del siglo XX¹⁰³, sino que todos los elementos conceptuales que en ese proceso se han ido configurando, siguen vigentes aun cuando el marco de actuación social ha variado ostensiblemente y, obviamente, la estructura general del fenómeno informativo se ha visto afectada por la nueva realidad. Ciertamente, siendo importante, e inexcusable como punto de partida en toda aproximación a dicho fenómeno, el conocimiento de la dogmática y del papel que en cada momento histórico han ido jugando los elementos conceptuales¹⁰⁴ que hemos ido recordando, la nueva realidad de

¹⁰² CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto, “Evolución del derecho de acceso: de la disponibilidad técnica y asequible a la Red, al acceso como forma de participación” en COTINO HUESO, L., SAHUQUILLO OROZCO, José Luis, y CORREDOIRA, Loreto (Eds.) *El paradigma del Gobierno Abierto, Retos y oportunidades de la participación, transparencia y colaboración*, Universidad Complutense de Madrid, 2015. Ebook disponible en <http://eprints.ucm.es/35859>

¹⁰³ Véase también ABAD ALCALÁ, Leopoldo, “El derecho a la información en la red”, págs. 371-414 y CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto, “Internet: entre la anarquía y la hiperregulación”, pp. 414 a 440, ambos en obra colectiva NUÑEZ LADEVECE, Luis (Dir), *Periodismo en Red, Géneros, estilos y normas*, Editorial Universitat, Madrid, 2015.

¹⁰⁴ La idea puede encontrarse desarrollada en un sentido más amplio (y si cabe profundo por cuanto no se limita a los principios constitucionales del ordenamiento español) en —El valor permanente de lo clásico en las ciencias de la comunicación, en DESANTES GUANTER, José M^a, *Derecho a la información. Materiales para un sistema de la comunicación*, Valencia, COSO, 2004, págs. 51 y ss.

la sociedad de la información impone sin embargo algunos cambios de perspectiva que no afectarán tanto a los conceptos consolidados cuanto a la relación entre los distintos elementos que intervienen en el fenómeno informativo globalizado.

En este sentido, nos parecen oportunas **algunas consideraciones que nos permiten cerrar esta reflexión** y fijar las pautas para un próximo estudio del momento presente:

1.- Sin duda la libertad de expresión ha alcanzado su máxima expresión, y esta vez sí para todos, gracias a la disponibilidad de la red. Y cabría decir que también de ello se beneficia el derecho a la información en la medida en que también se universaliza y facilita la obtención de información de todo orden que hoy cómodamente podemos encontrar en la red. Pero esta segunda afirmación requiere de matices pues la posibilidad de hallar todo tipo de información no se corresponde exactamente con el derecho a la información sobre las cuestiones que nos afectan o de cuyo conocimiento puede depender nuestra actuación consecuente.

El período electoral podría constituir un buen ejemplo de lo que se quiere expresar: la sobreabundancia de información no impide que sigamos sin conocer aquello que realmente podría interesarnos más o que desearíamos conocer para determinar el sentido de nuestro voto. Lo que, directamente, nos conduce a uno de los elementos del derecho a la información que pudo ser importante en el proceso de conformación del mismo en el siglo XX pero que hoy no parece gozar de gran predicamento por dos razones: en primer lugar, por la lógica reticencia de todo régimen democrático a los dogmatismos y, en segundo lugar, porque la red pone en manos de la ciudadanía un poderoso instrumento que no nos exime de la influencia, desmedida, de los intereses políticos y económicos que la invaden.

Nos referimos al derecho a la verdad o, cuanto menos, al derecho a saber lo que nos interesa, más allá y por encima de lo que se nos quiera hacer saber, lo que impone, cuanto menos a los poderes públicos, un deber de objetividad. Se diría que el viejo derecho a la información requiere más que nunca de la capacidad de discernir, valorar y calificar un volumen ingente de información y, por consiguiente requiere de una ciudadanía bien formada viniendo a confirmar las notas características a que hemos aludido en el epígrafe III (*supra*).

2.- Pero también la máxima expansión del derecho y sus concretas facultades ha aportado otra modificación (una más) a este derecho que hemos bautizado de poliédrico y habría que añadir *mutante*. La información sigue siendo el libre flujo de noticias, ideas e opiniones, como en el siglo XX, pero además ahora se introduce un elemento técnico entonces inexistente: es la incorporación de todos al uso (y al consumo más o menos programado) de la técnica.

Baste un ejemplo: si el sujeto activo de la información, minoritario y básicamente conformado en torno a las empresas de la comunicación, se correspondía con un sujeto pasivo universal, hoy la universalización se extiende también a los sujetos activos que interactúan a través de internet sin necesidad de profesionalización alguna. Pues bien, la situación laboral y/o profesional cuenta con un status concreto que no concurre en todo ciudadano pero el concepto de cada una de las libertades informativas y de los derechos con los que pueden entrar en conflicto no quedan modificados por ello aun cuando las situaciones personales sí pueden constituir circunstancias apreciables por el juzgador a la hora de determinar supuestas responsabilidades.

3.- La realidad tecnológica presente que conocemos como sociedad de la información ha llevado a su máxima expansión al derecho a la información pero no ha sido capaz de hacerlo sin apartarse de su configuración sino que se han ido ideando e invocando otros

derechos supuestamente nuevos, aunque en realidad no son sino simples facultades, facetas o aspectos del derecho a la información que, en la medida en que se han desarrollado las vivencias democráticas ha podido ir demostrando toda su virtualidad en el ámbito político y en la consolidación democrática como también se expuso en el epígrafe III. No en vano, hoy se habla del derecho de acceso universal a internet y a cierta brecha de pobreza tecnológica que obliga a los Estados a extender los beneficios de la fibra a las zonas menos rentables, en ese sentido también ha hablado Corredoira del derecho de acceso a internet “como forma de inclusión”¹⁰⁵.

En definitiva, **el derecho a la información sigue siendo el eje de la participación democrática**, su papel y significación no cambia aunque parece olvidarse temporalmente en tanto se instalan en el lenguaje facultades nuevas impuestas por los avances tecnológicos. Nuevas formas respecto de otros “escalones” previos: libertad de imprenta, el derecho de antena, el derecho de acceso... fueron entonces, como ahora, nuevas exigencias de una técnica en permanente cambio.

BIBLIOGRAFÍA

ABAD ALCALA, Leopoldo, “El derecho a la información y las libertades informativas en el ámbito europeo”, en BEL MALLÉN, Ignacio y CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto (dirs.) *Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia*. Madrid, CEPS, 2015, págs. 69-95.

ABAD ALCALÁ, Leopoldo, “El derecho a la información en la red”, en NUÑEZ

¹⁰⁵ CORREDOIRA Y ALFONSO, *Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948...*, ya cit., págs.. 68 y ss.

ARELLANO TOLEDO, Wilma, Repensando el derecho a la información: entre las bases doctrinales y el renoncimiento constitucional y legal, Ponencia presentada en el FIEDI, Univ. Leicester, Julio 2016.

AZURMENDI, Ana El proceso de configuración del derecho a la información, en BEL MALLÉN, Ignacio y CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto (dirs.). Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, págs.. 31-47.

BRAUD, Philippe, La Notion de Liberté Publique en Droit Français, Paris, 1968.

CONSTANT, B. —La liberté de la presse (pag. 1178 y ss.) o De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux considéré sous le rapport de l'intérêt du Gouvernement (pags. 1220 y ss.), en OEUVRES. Editions Gallinard, 1957.

BEL MALLÉN, Ignacio, “La libertad de expresión en los textos constitucionales españoles”, en Revista de Documentación de las Ciencias de la Información, nº 13, 1990, págs. 23 a 52.

BEL MALLÉN, Ignacio; CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto (dirs.) Derecho de la información. Barcelona. Ariel, 2003.

BEL MALLÉN, Ignacio, CORREDOIRA, Loreto, COUSIDO, Pilar. Derecho de la Información Vol.1. Los sujetos y los medios, Madrid, Colex, 1992

BEL MALLÉN, Ignacio. El derecho a la información en la Constitución española, el artículo 20, en BEL MALLÉN, Ignacio y CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto (dirs.) Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, págs.. 169-187.

BEL MALLEN, Ignacio. El ejercicio del derecho a la información y sus excepciones, en BEL MALLEN, Ignacio y CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto (dirs.) Derecho de la información. El ejercicio del derecho a la información y su jurisprudencia. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2015, págs. 211-226.

BURDEAU. George, *La Democracia*, Barcelona, Ediciones Ariel. Una síntesis (publicada como texto de conferencia) en Revista del Derecho de la Universidad de Concepción, núm. 109, 1959; disponible en red: <http://www.revistadederecho.com/main.php>

CONSTANT, Benjamin. La liberté de la presse y De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux considéré sous le rapport de l'intérêt du Gouvernement (págs. 1178 y ss. y 1220 y ss. respectivamente), en OEUVRES. Editions Gallinard, 1957.

CORREDOIRA Y ALFONSO, Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el paradigma de la nueva Sociedad de la Información. Estudio específico del artículo 19, en COTINO HUESO Lorenzo Libertad en Internet. La Red y las libertades de expresión e información en Internet; amenazas y protección de los derechos personales. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013.

CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto. Capítulo sobre "Internet", en Derecho de la Información. Barcelona Ariel, 2003, págs.. 545-578.

CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto. La protección del talento. Valencia, Tirant lo Blanch, 2013.

CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO HUESO Lorenzo (dirs.) Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2013.

CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto, Internet: entre la anarquía y la hiperregulación, en NUÑEZ información. Valencia Tirant Lo Blanch, 2006.

CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto y COTINO HUESO, Lorenzo (dirs.) Libertad de

CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto, “Evolución del derecho de acceso: de la disponibilidad técnica y asequible a la Red, al acceso como forma de participación” en

COTINO HUESO Lorenzo Libertad en Internet. La Red y las libertades de expresión e información. Valencia Tirant Lo Blanch, 2006.

COTINO HUESO, L., SAHUQUILLO OROZCO, José Luis, y CORREDOIRA, Loreto (Eds.) *El paradigma del Gobierno Abierto, Retos y oportunidades de la participación, transparencia y colaboración*, Universidad Complutense de Madrid, 2015. Ebook disponible en <http://eprints.ucm.es/35859>

COTINO HUESO, L., SAHUQUILLO OROZCO, José Luis, y CORREDOIRA, Loreto (Eds.) *El paradigma del Gobierno Abierto, Retos y oportunidades de la participación, transparencia y colaboración*, Universidad Complutense de Madrid, 2015. Ebook disponible en <http://eprints.ucm.es/35859>

DAZA MARTINEZ, J. Ideología y Política en el Emperador Marco Aurelio. http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4493/1/Lucentum_03_13.pdf 6

DE ESTEBAN, Jorge, “Medios de comunicación y Estado de Derecho”, p. 466 en [*Ciudadanos e instituciones en el constitucionalismo actual*](#) / coord. por ASENSI SABATER, José, 1996, págs. 465-488

DE VITORIA, Francisco, Lección *De potestate civile*, 4, Salamanca, 1528. Traducción de las lecciones de Vitoria disponibles en Internet, o CRUZ CRUZ, Juan,

Intelecto y razón. Las coordenadas del pensamiento clásico. Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista 1, Eunsa, Pamplona, 1998.

DESANTES GUANTER, José María. Fundamentos del Derecho de la Información , Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977 (Memoria de Cátedra).

DESANTES GUANTER, José María. La función de informar. Pamplona, Universidad de Navarra, 1976.

DESANTES GUANTER, José María. El autocontrol de la actividad informativa, Edicusa, Madrid, 1976.

DESANTES GUANTER, José María. El deber profesional de informar. Valencia, Fundación Universitaria San Pablo CEU, 1988.

DESANTES GUANTER, José María. El derecho a la información en cuanto valor constitucional. Universidad de Piura, 1992

DESANTES GUANTER, José M^a, BEL MALLÉN, I., CORREDOIRA, L., COUSIDO, P. *Derecho de la información. Vol. 2, Los mensajes informativos*, Madrid, Colex, 1994

DESANTES GUANTER, José M^a, en *Francisco de Vitoria, precursor del Derecho de la Información*, Fundación de la Comunicación Social, Madrid, 1999

DESANTES GUANTER, José María. Derecho a la información. Materiales para un sistema de la comunicación. Valencia, COSO, 2004, págs. 51 y ss.

DESANTES GUANTER, José María. Los mensajes simples en el *ius communicationis* de Francisco de Vitoria, en *Persona y derecho: Revista de fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos*, N°. 20, 1989, págs. 191-209.

DESANTES, José M^a, y SORIA SÁIZ, Carlos, *Los límites de la información: la información en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional*, Asociación de la Prensa de Madrid, 1991.

DEVIRIEUX, Claude Jean *Manifeste Pour le Droit à L'Information: De la Manipulation à la Législation*, Presses de l'Université d u Quebec, 2009.

DIPPEL, Horst, *Constitucionalismo moderno. Introducción a una historia que necesita ser escrita* Núm. 6-2005, Septiembre 2005, pp. 181-199 disponible en <http://app.vlex.com/#vid/41835727>

ESCOBAR DE LA SERNA, Luis, *Derecho de la Información*, Dykinson, 3^a edición, 2004

EURIPIDES, *Las Suplicantes*, s. IV a.C.

FERNÁNDEZ DE MARCOS MORALES, Ramón J., “A propósito de algunas reelecciones de Francisco de Vitoria”, *Revista de Derecho UNED*, núm. 4, 2009.

FISHER, Justin, “Why Magna Carta still matters today”, 2015, publicado con motivo de los 800 años de su promulgación disponible en <https://www.bl.uk/magna-carta/articles/why-magna-carta-still-matters-today>

GARCIA TROBAT, Pilar, *El manual mata la cátedra*; en ROMANO, Andrea (cur.) *Dalla lectura all' e-learning*. Bologna, CLUEB, 2015, págs. 227 y ss.

GARCIA TROBAT, Pilar, *La libertad de imprenta, aliada de la revolución*, en GARCÍA TROBAT, Pilar, y SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio (coords.), *El legado de las Cortes de Cádiz*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011, págs. 285-334.

GETI ORDEÑANA, Juan, *Del Tratado de Tordesillas a la doctrina de los Derechos Fundamentales en Francisco de Vitoria*. Universidad de Valladolid, 1999,

GONZALEZ BALLESTEROS , Teodoro, en “Doctrina del Tribunal Constitucional en materia de Libertad de Expresión y de Información”, en Quinta parte de la obra colectiva CORREDOIRA, L. BEL, Ignacio, Derecho de la Información ya cit. CEPC, 2015, págs.783-859.

GONZALEZ CASANOVA, J. A. Comunicación humana y Comunidad política. Madrid, Tecnos, 1968.

IRIBARREN, Jesús, y GUTIERREZ GARCIA, José Luis. Cinco grandes mensajes. Madrid, B.A.C. 1968.

LADEVECE, Luis (Dir), Periodismo en Red, Géneros, estilos y normas, Editorial Universitas, Madrid, 2015, págs.. 414-440.

MENDEL, Toby, El Derecho a la Información en América Latina. Comparación Jurídica. UNESCO, 2009, DISPONIBLE EN RED: <http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183273s.pdf>

MESONERO ROMANOS, Ramón de, *Escenas matritenses*. Madrid, Aguilar, 1955, pág. 769.

MILTON, John, Areopagítica (Discurso acerca de la libertad de expresión, sin licencias, al Parlamento de Inglaterra). Mexico, FCE, 2000. PDF disponible en red.

MORANGE, Jean. La liberté d’expresion. Paris, Presses Universitaires de France, 1993.

ROBINSON, Joan. Libertad y necesidad. Introducción al estudio de la sociedad. 8ª edic. Madrid, Siglo XXI, 1979.

SALDAÑA DÍAZ, María Nieves Libertad De Prensa Y Energía Política En La Areopagítica De John Milton, disponible en <http://pensamientopolitico.org/Descargas/RIPP03213238.PDF>

SÁNCHEZ DE LA TORRE, Antonio, Lo “ius communicationis” valore giuridico formamentale, Congreso (VI) Nazionale di Filosofia del Diritto, Pisa, 1963, Dommatica, Teoria Generales e Filosofia del Diritto, O 'JUS, págs. 2030 a 307.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio, El derecho a la información. Valencia, Cosmos, 1974.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio, El derecho a la información y la Constitución de 1978, en Información y derecho de la información. Homenaje al Prof. José María Desantes Guanter. Madrid, Fragua, Madrid, págs. 455 y ss.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio. “Las libertades de expresión y de información y los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, en *Información y Libertades Públicas en España*. Madrid-El Escorial, Universidad Complutense, 1989.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio, Estudio sobre las libertades. Valencia, Tirant Lo Blanch, 1995.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio, El Derecho de la información como ordenación, en BEL MALLÉN, Ignacio y CORREDOIRA Y ALFONSO, Loreto (dirs.) Derecho de la información. Barcelona. Ariel, 2003.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio, Delimitación de las libertades informativas. Valencia, Tirant, 2004.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio, Treinta años de información constitucionalmente protegida. La labor del Tribunal Constitucional en la fijación de límites y garantías, en El derecho a la información judicial. Valencia, Fundación COSO, 2008, págs. 39-70.

SANCHEZ FERRIZ, Remedio, Los límites de las Libertades Informativas, en Revista Aragonesa de la Administración Pública, 2009, Núm. 34, págs. 227 y ss.

SÁNCHEZ FERRIZ, Remedio, “Conceptos clásicos de libertades informativas: redefinición e incidencia de las TICs” en COTINO HUESO, Lorenzo, *Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías*, Publicacions Universitat de València, 2010, disponible en: <http://www.derechotics.com/congresos/2010-libertades-y-20/e-libro-e-libertades-2010>, pág. 36 a 38.

SEVILLA ANDRES, Diego. Los orígenes de la crítica social en España (1800-1856). Valencia, Catedra Fadrique Furio Ceriol, 1975.

SOFOCLES, Antígona, s. IV a.C.

SORIA SAIZ, Carlos. Derecho de la información. Análisis de su concepto. San José de Costa Rica, ECAM, 1987.

TOCQUEVILLE, Alexis, Igualdad social y libertad política, Madrid, Aldaba, 1978, págs. 47-48.

TOCQUEVILLE, Alexis de, *La democracia en América*, vol I, Cap. IV., Francia, 1935.

TENORIO SANCHEZ, Pedro J. (Dir.) y otros. La libertad de expresión, Su posición preferente en un entorno multicultural, Fundación Wolters Kluwer España, Madrid, 2014.

TERROU, Fernand. La información. Barcelona, oikos-tau, 1970.

TRUYOL Y SERRA, Antonio, *Estudio preliminar a Los derechos humanos*, Madrid, Tecnos, 1975, pág 12.

VOYENNE, Bernard, *Le Droit à l'Information*. Paris, Aubier-Montaigne, 1970

ANEXO 1 –

Tabla 1 – Circunstancias históricas que han hecho posible el derecho a comunicar.

The Right to Communicate: From the *Carta Magna Libertarum* (1215) by King John of England to the 20th Constitutions

Dimension or characteristic of rights	Before 18th century	After 18th century	After UDHR (1948)
Source	Declarations by kings or absolute monarchies	Revolutionary times End of “absolutism”	Natural law Human dignity
Nature	Private – exceptional freedoms	Public	Universal
Universality	Not all men equal. Privileges awarded to a particular class and personal concessions granted by a ruler led to inequalities.	Theoretical equality and freedom for “all” men, though inequalities for women, blacks and others persist	Written by UN in 1948
Codification	Arbitrary	Rule of law (within national boundaries) <ul style="list-style-type: none"> - king and authorities are subordinated to law - king/ruler grants a right to individuals Not just a piece of power <ul style="list-style-type: none"> - applies equally regardless of sex, birth, status, rank 	International rule of law (across boundaries, takes precedence over national law)
Permanence and revocability	Royal concessions are limited by time and status of the user	Cannot be revoked or annulled (a person enjoys rights by virtue of being a person)	Inalienable and irrevocable
Enforcement	Not guaranteed	Partially guaranteed (judicial review, judicial systems)	Partially guaranteed (regional or national courts but no global court)

Anexo 2

Table 2 – The right to communicate in Western Constitutions / El derecho a la información en las Constituciones occidentales - Historical precedents and references to Constitutions and countries mentioned in the text – Precedentes y referencias históricas de las Constituciones y países citados en el texto. (Rojo en español, Black in English)

País / Country	Antes del siglo XVIII / Before 18th century		Siglo XX / 20th Century		
	Documentos de la Edad Media Medieval documents	Primeras declaraciones de libertades First declarations of freedoms	Tratados internacionales International treaties	Constituciones de posguerra Post WWII constitutions	Constituciones en vigor Current constitutions
Inglaterra England, later UK	1215 Carta Magna de Juan I 1628 Petición de Derechos 1689 Declaración de derechos 1215 Magna Carta Libertatum (John I) 1628 Petition of Rights 1689 Bill of Rights		Declaración universal de derechos humanos (UDHR) aprobada por la Asamblea General de la ONU, 10 de diciembre de 1948 Universal Declaration of Human Right (UDHR) approved by the UN General Assembly on 10 December 1948 Pacto de Derechos Civiles y Politicos (PDDC) aprobado por la Asamblea General de la ONU, 1966 Pact of Civil and Political Rights (PCR) approved by the UN General Assembly, 1966		1215 Carta Magna de Juan I 1628 Petición de Derechos 1689 Declaración de derechos 1215 Magna Carta Libertatum (John I) 1628 Petition of Rights 1689 Bill of Rights
Colonias Inglesas – ahora EEUU 13 English colonies, later USA	Precedentes en las 13 colonias inglesas Precedents in the 13 English colonies 1215 Carta Magna de Juan I 1628 Petición de Derechos 1689 Declaración de derechos 1215 Magna Carta Libertatum (John I) 1628 Petition of Rights 1689 Bill of Rights	1776 Declaración de Independencia Declaration of Independence 1787 Constitución de los EEUU US Constitution ("We the People") 1791 Declaración de derechos: con 10 enmiendas a la Constitución, siendo la primera la relacionada con el derecho a la información, libertad religiosa, de reunión y de expresión. Bill of Rights: 10 amendments to the Constitution, the first of which relates to the right to information, religious freedom, assembly and expression. First Amendment: "Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances."	EEUU fue uno de los 48 países firmantes de la UDHR el 10 de diciembre de 1948 US was one of the 48 signers of the UDHR on 10 December 1948 El PDDC aprobado por la Asamblea General de la ONU, 1966 PCR approved by the UN General Assembly, 1966	Otras enmiendas a la Constitución de 1787 se han sucedido desde 1804 a 1992; la última es la Enmienda 27. From 1804 to 1992 amendments were made to the Constitution of 1787. The most recent is Amendment 27. 1	1787 Constitución de los EEUU US Constitution ("We the People") 1791 Declaración de derechos en forma de 10 enmiendas Bill of Rights in the form of 10 amendments to the Constitution
Portugal Portugal	To be completed ¹		Portugal ratifica la UDHR, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el PDDC, 1978 Portugal ratifies the UDHR, European Convention on Human Rights (CEDH) and PCR, 1978		Constitución Portuguesa de 1976, Artículos 37 and 48.2 Portuguese Constitution of 1976, Articles 37 and 48.2
España Spain	Pacto de 1188 celebrado ante las Cortes de León entre el Rey Alfonso IX y el Reino Convention between King Alfonso IX and		España ratifica la UDHR en 1978 y la incorpora a la Constitución expresamente por su art. 10	Durante el régimen franquista destacan dos leyes: Ley de LAs Religiosas, 1965	En la Constitución española de 1978 ³ destaca el art. 10 que incluye y remite a la UDHR y su art. 20 del derecho a la

¹ <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

² This is a draft version to be completed for publication

³ English version available at constituteproject.org

País / Country	Antes del siglo XVIII / Before 18th century	Siglo XVIII / 18th century	Siglo XX / 20th Century		
	Documentos de la Edad Media Medieval documents		Tratados internacionales International treaties	Constituciones de posguerra Post-WWII constitutions	Constituciones en vigor Current constitutions
	the kingdom adopted at the León Parliament, 1118 Acuerdo adoptado en las Cortes de Burgos de 1301 Convention adopted at the Burgos Parliament, 1301 Acuerdo de las Cortes de Valladolid de 1322 (véase ref. Prof. Casán en el texto) Convention adopted by Valladolid Parliament, 1322 (see references by Prof. Casán in text)		Spain ratifies the UDHR in 1978 and refers to it explicitly in Article 10 of its Constitution España ratifica el CEDH en septiembre de 1979 Spain ratifies the ECHR in September 1979 España ratifica el PDCO en abril de 1977 Spain ratifies the PCPR in April 1977	Ley de Prensa e Imprenta de 1966 que abolí la censura previa Two laws were passed during the Franco regime: Freedom of Religion Act, 1965 Press and Printing Act, 1966 (abolishes censorship)	información Article 10 of the Spanish Constitution of 1978 refers to the UDHR, and Article 20 refers to the right to information ³
Alemania Germany	To be completed		Alemania ratifica el CEDH en 1952 y el PDCO en 1973 Germany ratifies the ECHR in 1952 and the PCPR in 1973	Se aprueba la Constitución alemana, conocida como Ley Fundamental de Bonn (Art. 5.1), 1949 Basic Law for the Federal Republic of Germany (Article 5.1) approved, 1949	Se aprueba la Constitución alemana, conocida como Ley Fundamental de Bonn (Art. 5.1), 1949 Basic Law for the Federal Republic of Germany (Article 5.1) approved, 1949
Italia Italy	To be completed		Italia ratifica la DUDH en 1978, el CEDH en 1953 y el PDCO en 1978 Italy ratifies the UDHR in 1978, ECHR in 1953 and PCPR in 1978	Constitución de la República de Italia (Artículo 21), 1947 Constitution of the Italian Republic (Article 21), 1947	Constitución de la República de Italia (Artículo 21), 1947 Constitution of the Italian Republic (Article 21), 1947

CRISIS, IGNORANCIA Y PRESIÓN SOCIAL: LA FORMACIÓN EN PERIODISMO Y EL MODELO DESANTIANO COMO PROPUESTA/RESPUESTA PARA UNA PROFESIÓN CONVULSIONADA

Fernando Gutiérrez Atala

Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile

A PARTIR DE LO SUCEDIDO EN EL CASO CHILENO, EL ARTÍCULO REFLEXIONA EN TORNO A LA COMPLEJA SITUACIÓN SOCIAL QUE ENFRENTA LA LABOR INFORMATIVA, SUMIDA EN UN HALO DE DESPRESTIGIO Y DESVALORIZACIÓN,

MOTIVADO POR UN ESCENARIO CRÍTICO Y DE FUERTE PRESIÓN DEL ENTORNO. Allí, una mirada ética a la función de los medios y de los periodistas aparece como una de las más plausibles soluciones, lo que exige revisar la propuesta formativa del Prof. José María Desantes y volver a mirarla con los ojos de las necesidades actuales.

INTRODUCCIÓN

“Ética” es un término recurrente en las conversaciones y discusiones que se generan actualmente en cualquier rincón de Chile. Los debates de origen ético se suceden unos a otros en las empresas, en los hospitales, en las aulas, en el mundo político...y en los medios.

Uno de los sucesos mediáticos más recordados en el país comenzó en el 2008 y se vinculó al caso de colusión de precios en farmacias. La investigación se inició en mayo de ese año, tras una denuncia de la Subsecretaría de Salud Pública que involucró a las tres principales cadenas farmacéuticas: Farmacias Ahumada (FASA), Cruz Verde y Salcobrand. La investigación detectó alzas en los precios de al menos 222 medicamentos, preferentemente para el tratamiento de enfermedades crónicas. La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento contra las tres cadenas, lo que decantó en que, en marzo de 2009, FASA

reconociera los cargos que se le imputaban, lo que le significó una multa que bordeaba el millón de dólares.

En años sucesivos, fueron denunciadas e investigadas colusiones similares en la industria del pollo, del papel higiénico en lo que sería una triste oleada de situaciones reprochables provenientes de las empresas, del Congreso Nacional debido al financiamiento irregular de campañas electorales con boletas ideológicamente falsas, entre otras. Esta situación salpicó al mismo Palacio de Gobierno, al comprobarse que la nuera de la Presidenta de la República utilizó sus influencias para recibir del Banco de Chile un millonario préstamo de 6 mil millones de pesos (unos 10 millones de dólares) para su empresa inmobiliaria. Este caso continúa en los Tribunales de Justicia y mantiene a Michelle Bachelet con la tasa de valoración más baja en sus dos periodos presidenciales, alcanzando apenas un 22% de aprobación y un 72% de rechazo según la encuesta Adimark. Asimismo, mantiene al país sumido en una profunda crisis de confianza en todas las instituciones e impera una sensación de desconcierto, de desazón y de indignación. De esta situación no se escapan los medios de comunicación.

Dentro del caso de colusión de farmacias, llama poderosamente la atención la resolución por parte de la justicia, que acogió la petición de fiscalía y declaró que los imputados deberían asistir a 10 sesiones de clases de ética, además de realizar un donativo de más de \$200 millones a ONG's del ámbito de la salud. Quizás esto se vea sólo como un detalle anecdótico, pero revela la creciente irrupción del tema ético/valórico en la agenda nacional, lo que demanda un amplio debate en todos los ámbitos sociales, también en los profesionales y específicamente en el periodismo.

1. EL PERIODISMO EN CHILE Y LA “DESCONEXIÓN PROFESIONAL”

La formación de periodistas en Chile se mantuvo relativamente estable desde los años '60 hasta las '80. El gran cambio comenzó en 1981, mediante el Decreto N°2 del 3 de enero de ese años, con el que el gobierno militar fragmentó las universidades estatales o públicas en sedes regionales y dictó una completa libertad de enseñanza superior para crear universidades privadas. En la década del '90 se fundaron otras 29 universidades, que hizo explotar el número de vacantes universitarias (Cruz-Coke, 2004).

En una revisión específica de los estudios de Periodismo, en Chile de acuerdo con la base de datos Índices, del Consejo Superior de Educación (2009), de un total de seis carreras y programas que existían en 1986, subieron a 50 los programas a cargo de 36 universidades en 2008. En términos de matrícula, esto significó que entre 1991 y el 2001, los casi 1.700 alumnos que estudiaban la carrera se incrementaran en más de un 450%, creciendo a más de 8 mil a nivel nacional (Corrales, 2006). En el periodo 1986-2005 se han titulado 7.709 periodistas desde las universidades chilenas (Délano; Niklander; Susacasa, 2007).

Esta lógica no sólo fue chilena, pues a comienzos de '50 existían 13 escuelas en América Latina, en los '60 ya había 44; en 1970 había 81 facultades; en 1980, esta cifra se elevaba a 163 y en 1995 superaban las 500 facultades. Datos de un estudio realizado en el año 2005 por la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacs), arrojaron que hasta ese año había 1.026 programas de Comunicación y Periodismo ofertándose en el sistema de educación superior en el entorno latinoamericano (Neuman, 2006).

Pero ¿por qué profundizar en estos asuntos, cuando se quiere hablar de ética periodística? La línea argumentativa de este texto apunta a que la desmedida oferta de profesionales disponibles en el mercado derivó (y lo sigue haciendo) en una preocupante y

creciente desvalorización de la profesión, tanto en el ámbito social como económico, especialmente en el terreno informativo. Esto no es de extrañar, pues los nuevos tiempos configuran una audiencia crítica en la que prevalece la idea general de que el periodismo carece de fuerza y no es más que un servidor del poder. De ahí que sea “casi inofensivo y aburrido para el ciudadano. Por más que se esfuerza en renovarse, se aleja de interrogantes sustanciales de sus contribuyentes” (Reig, 2007).

Desde hace unos 20 años, el profesional de las comunicaciones en Chile se encuentra en un entorno laboral saturado. A pesar de haber una muy amplia variedad de soportes en el rubro informativo, esto no se traduce en una alternativa real de trabajo. Este exceso de oferta reduce drásticamente el valor que se les atribuye a los periodistas en el mercado, lo que tiene como consecuencias salarios que no son muy superiores a la remuneración legal mínima, generando desazón y un proyecto personal y profesional truncado, además de la imposibilidad de proyectarse profesionalmente. Eso, sin tener en cuenta un conflicto vocacional latente, que significa renunciar a lo que se desea ante la necesidad de ejecutar alguna actividad lucrativa. En voz de los mismos periodistas, la vocación es más fuerte, pero los bajos sueldos tienen como consecuencia el estancamiento personal (Gutiérrez; Cea; Lobos, 2016). En palabras sencillas, y como señaló Robert Picard, los periodistas están retrasados en su capacidad de valorizar su función y dar valor agregado a los hechos que narran. Si ello no se corrige, si no se hace algo, se cumplirá el título de su polémico artículo “Por qué los periodistas merecen ganar poco”.¹

¹ Puede visitarse el artículo en http://www.soitu.es/soitu/2009/06/18/actualidad/1245340380_187306.html

La realidad que se acaba de describir, el exceso de oferta y la falta de trabajo, supera a lo económico-laboral. La desilusión de los nuevos periodistas y la necesidad de mantenerse laboralmente activos a cualquier precio, configuran un escenario de subsistencia donde el hacer las cosas bien, los deberes profesionales y el compromiso con la noticia y el público corren el riesgo de ser asuntos secundarios. Asimismo, impera una dinámica ética de la imagen, de parecer sobre ser y lo que podríamos llamar “falta de sintonía” o “desconexión profesional”, es decir, la instrumentalización de su función, entendida más como una mecanismo para sobrevivir que un compromiso social para la satisfacción de un derecho y la prestación de un servicio fundamental para la comunidad.

Entonces, en función de un modelo educacional que favorece la sobreoferta de periodistas y un ecosistema laboral que desvaloriza el oficio de las comunicaciones, enfrentamos una conclusión ineludible: existe un escenario complejo, con múltiples desventajas y muy poco a favor. A este panorama tampoco aporta el cuestionable pero real paradigma del trabajo periodístico, donde el profesional se ve subordinado a la voluntad de su empleador. Este contexto perjudicial no es algo aislado, por el contrario, repercute de manera integral en los periodistas, en sus rutinas laborales y en el producto final que publican y por lo tanto, tiene graves implicancias en la ética informativa.

2. UNA REALIDAD COMPLEJA Y DESCONOCIDA

El fuerte de la investigación relacionada a periodismo es mayoritariamente de tipo censo y por lo tanto, numérico. Existen actualmente más de 30 investigaciones en Chile relativas al perfil profesional del periodista, a las proyecciones de estudiantes de Periodismo, a la cantidad de profesionales de la comunicación a nivel nacional y regional y a la cantidad de plazas laborales expuestas de manera ordenada y diferenciada. Las últimas cifras

latinoamericanas sobre investigación en periodismo evidencian un creciente interés en la investigación cualitativa. Sin embargo, Venezuela, Argentina y Chile son la excepción y mantienen un predominio en cantidad de investigación cuantitativa (Mellado, 2010).

David Weaver, destacado investigador de la realidad periodística mundial a través de WOJ (*Worlds of Journalism*, de carácter cuantitativo, dirigido por Thomas Hanitzsch y que data de 2009), señaló en 2012 en Santiago de Chile, en el marco del Primer Congreso Internacional sobre Estudios de Periodismo, que la investigación cuantitativa ya alcanzó una madurez aceptable y que llegó el momento de complementar estos datos con investigaciones cualitativas.

Esa fue la principal motivación del Estudio Vicios Periodísticos, que nació fruto de una alianza académica entre la UCSC (Chile) y la UV (México). El análisis es el resultado de una investigación desarrollada durante el 2012 en ambos países, orientada a indagar la forma en que los periodistas trabajan con las tecnologías, en el entendido de que cuando éstas son bien utilizadas, benefician la profesión, pero cuando su uso es desmedido y acrítico, se convierte en una metodología viciosa que transforma y afecta negativamente las prácticas laborales. Los resultados globales demuestran que existe un uso desmedido de la tecnología, especialmente en las actividades relativas a la obtención de información. Partes del trabajo de reporteo que antes se consideraban esenciales, como el acceso directo a fuentes, la verificación de la información, la búsqueda de la verdad y el trabajo in situ, ahora son reemplazados por información obtenida de Google. El impacto de la tecnología en el quehacer periodístico se consolidó rápidamente, al punto en que, actualmente, no es raro el considerar tweets como noticia o entrevistar vía Whatsapp. También urge la revisión de los mecanismos de búsqueda, selección y difusión de contenidos en plataformas digitales, pues si éstas no se usan adecuadamente, afectan la calidad del producto periodístico y contribuyen

a la crisis de estimación y valoración de la profesión en Chile, Latinoamérica y el mundo (Gutiérrez; Ibarra, 2013).

Sin embargo, el estudio de los comportamientos viciosos de los periodistas derivó en nuevas preguntas. Prácticamente todos los consultados dijeron estar conscientes de su comportamiento inadecuado, pero manifestaron también que éste no surge por responsabilidad directa, sino más bien debido a una serie situaciones contextuales que los obligan a incurrir en tales faltas: extensos horarios de trabajo, precariedad laboral y salarial, carencias formativas y presiones exógenas que limitan su accionar. Eso llevó a este incipiente grupo de investigación a plantear un nuevo estudio que no sólo se centrara en la rutina propiamente tal, sino que en el contexto limitante que condiciona esa rutina.

Así, en el año 2014 se creó *ERP* (Estudio Rutinas Periodísticas) compuesto por investigadores de Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y México. Nació para estudiar las transformaciones que registran los mecanismos utilizados por los periodistas latinoamericanos en el proceso de recolección, selección y publicación de información, las influencias que podrían afectar a dicho proceso y los efectos deontológicos y técnicos que aquello tiene en el producto que se ofrece al público.

El primer informe ERP desarrollado entre 2014 y 2015, de tipo cualitativo con un enfoque descriptivo/exploratorio, estuvo orientado a la identificación de las condicionantes que los propios periodistas reconocen al autoevaluar sus rutinas de trabajo. Se elaboró sobre la base de 200 entrevistas en profundidad aplicadas a informadores de Concepción, Buenos Aires, Quito, Bucaramanga y Veracruz, representantes de cuatro soportes diferenciados: prensa escrita, radio, televisión y medios digitales. En términos globales, los periodistas consultados se sienten obligados a trabajar de manera condicionada para enfrentar

situaciones externas que no pueden manejar de otra forma y que terminan afectando su labor: sobrecarga laboral, extensas jornadas de trabajo, precariedad contractual y carencias formativas, sólo por nombrar algunas (Gutiérrez *et al*, 2015).

Los hallazgos demuestran dos vertientes específicas de efecto: en el ámbito externo al periodista, la inestabilidad laboral, la precariedad salarial y la falta de acceso a la tecnología adecuada aquejan la labor informativa y por consiguiente, la calidad del producto ofrecido y la injerencia social de la información que se produce. En tanto, en el ámbito interno, las dificultades propias del desfase formativo/tecnológico hacen que los profesionales no exploten todo el potencial que la tecnología ofrece y se adentren en una serie de vicios informativos que alejan su función de los parámetros de veracidad y utilidad pública. Además, la autocensura que nace de la inseguridad social y laboral configuran los aspectos más preocupantes. En cualquier caso, estas condicionantes ofrecen un contexto y son un llamado de atención para comenzar a generar cambios tanto desde el sistema mediático como de los órganos formadores de profesionales (Gutiérrez *et al*, 2016).

3. CHILE, CRISIS VALÓRICA Y EL RESURGIMIENTO DE LA ÉTICA

El 5 de febrero de 2015, con la publicación de la revista *Qué Pasa* estalló el Caso Caval, que hasta el día de hoy mantiene la atención de todo Chile. A partir del reportaje, surgió una investigación de carácter penal para aclarar el supuesto tráfico de influencias por parte de Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet; quien habría obtenido un crédito por más de 10 millones de dólares, en una reunión privada con Andrónico Luksic, dueño del Banco de Chile. El crédito habría sido aprobado 24 horas después de la elección de Michelle Bachelet y la sociedad exportadora y de gestión Caval Limitada, pudo efectuar la compra de terrenos de uso agrícola que luego cambiarían a uso urbano, lo que elevó drásticamente la plusvalía de los sitios. Se sospecha de tráfico de

influencias por la prolijidad y agilidad de las negociaciones y porque Natalia Compagnon, nuera de Michelle Bachelet -y esposa de Sebastián Dávalos Bachelet- es propietaria de Caval.

Desde Caval en adelante, una serie de sucesos fueron apareciendo a la luz pública. Todos estos casos tuvieron dos factores en común: la existencia de hechos ética y legalmente cuestionables y la participación de la prensa no sólo en su destape, sino que, en su prolífera difusión mediática, la que no ha estado exenta de críticas de sesgo y falta de profundidad. A partir de allí, cientos de páginas de periódicos y miles de minutos de televisión y radio han sido dedicados al análisis de estos casos, derivando siempre en un factor común: la sociedad chilena enfrenta una innegable crisis valórica que hace imperativo el más amplio debate social acerca del rol de la ética en el accionar de los individuos y particularmente en aquellos con algún grado de responsabilidad o representatividad pública.

La configuración de este escenario despertó un inusitado interés por la ética, en todos los ámbitos, desde el político al profesional. De hecho, la misma mandataria apreció en una cadena nacional televisada el 28 de abril de 2015 señalando la necesidad de erradicar las malas prácticas desde la función política, pues “la calidad de nuestra vida pública debe descansar en convencimientos éticos que cada uno valora y sigue (...) esa es la transformación más importante que debemos emprender...y actuaremos decididamente en este ámbito: daremos un lugar central a la educación cívica, en valores y actitudes, a lo largo de la formación escolar. Todas las escuelas, universidades y centros de formación deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica”.² El discurso duró 10 minutos. Aseguró que esta sería una “oportunidad histórica” para construir un mejor país.

² Puede verse el discurso completo en https://www.youtube.com/watch?v=uObDxw_S1g

Sin embargo, el debate no ha logrado permear a instancias más profundas, situándose siempre en un nivel superficial. Eso nos lleva a generar un par de consultas que no por sencillas y aparentemente nimias son menos importantes ¿Qué es ética? ¿Qué entendemos por ética? ¿Para qué sirve realmente la ética? Según Cortina, la ética se entiende como un tipo de conocimiento o de saber que pretende orientar la acción humana en un sentido racional; que pretende que obremos racionalmente. A diferencia del saber técnico (que se ocupa en circunstancias específicas), es un saber que se utiliza para actuar racionalmente en el conjunto de la vida. Por lo tanto, se puede entender la ética como un tipo de conocimiento que sirve para ordenar y encauzar las acciones a lo largo de la vida, en el entendido de que todos son sujetos irrenunciablemente morales, es decir, siempre deben decidir entre el bien y el mal (Cortina, 1994).

Pero ¿cómo definir lo bueno o lo malo en tiempos de liquidez? Resulta interesante la metáfora de Bauman para definir la actualidad. Las bases de la sociedad actual responden a las características de un líquido: son inestables, se modifican, se evaporan. No son firmes, por lo tanto, desencadenan una sensación permanente de encrucijada, de inmovilidad y de incapacidad de preparación para un futuro que nadie está en condiciones de predecir (Bauman, 2008).

El asunto se agudiza al comprobar que las dificultades actuales encuentran su raíz en un debate social inexistente respecto de las bases morales compartidas que tenemos (o deberíamos tener) como grupo o comunidad. Con esa discusión pendiente, será difícil responder los cuestionamientos y trazar soluciones.

En primer lugar, es fundamental diferenciar lo ético y lo jurídico. A pesar de ser el derecho la fuente de legitimidad de los actos en sociedad, el que una norma jurídica sea tal y haya pasado por los procesos pertinentes para ser exigible, no significa que esta sea justa. En ese sentido, es lamentable comprobar cómo hoy se impone el pensamiento jurídico por sobre el ético e incluso sobre eso, una conciencia que descansa sobre pilares legales y no necesariamente sobre bases éticas.

En palabras de Téllez podríamos decir que en los tiempos actuales la conciencia, más que devaluada, está sobrevalorada, en el sentido de que se espera mucho de ella sin que exista un respaldo formativo al respecto. Porque en su accionar, los profesionales podrían estar actuando en conciencia, o de acuerdo a lo que su conciencia les dicta, pero el problema no radica en el actuar consciente, sino en que dicha conciencia no está debidamente formada, es decir, que no siempre juzgamos con base en un criterio, sino tan solo en lo que se considera correcto. “El problema de nuestro tiempo no es la inconsciencia, sino que la conciencia no está debidamente respaldada en un canon o criterio objetivo para evaluar si las acciones son buenas o malas” (Téllez, 2009).

4. PLANES CURRICULARES, TUICIÓN ÉTICA Y EL EXTRAVÍO FORMATIVO

¿Cómo enseñar ética? Esa parece ser una gran pregunta para el mundo universitario. Existe coincidencia en considerar estos temas en los itinerarios formativos de los futuros profesionales, pero no siempre hay claridad sobre los métodos a utilizar ni los conocimientos, habilidades y actitudes que se deben potenciar. En resumen, no hay claridad respecto de cómo convertir la ética en una competencia transmisible y medible.

Por definición, se entiende competencia como: pericia, aptitud, o idoneidad para hacer algo, o la capacidad para el desarrollo de algo. O también, un conjunto identificable de

conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionadas entre sí, que permiten a las personas desempeñarse satisfactoriamente en situaciones reales de trabajo según estándares utilizados en el ámbito ocupacional” (Irigoin, 2003). Aterrizando al plano profesional, se puede entender como la capacidad para el desarrollo eficaz del trabajo periodístico y que presenta una dimensión deontológica: es un “saber hacer con conciencia; un saber en acción; un saber cuyo sentido inmediato no es describir la realidad sino modificarla; un saber el qué y también cómo” (Kaluf, 2003). Podemos inferir entonces que, en una profesión con tantas variables formas de ejecución, el término competencia no logra consolidarse de manera precisa. Sin embargo, hay aproximaciones, ya que el nuevo profesional de la información además de disponer de un conocimiento del funcionamiento de la sociedad, debe tener una polivalencia que facilite la adaptación a los cambios de las tecnologías, la especialización temática y el cultivo de la creatividad (López, 2002).

En la ardua competencia laboral, hay que especificar que el término trasciende la polivalencia técnica y abarca un abanico de conocimientos que abordan el manejo de herramientas tecnológicas, de reglas y teorías de comunicación en distintos soportes, entre otras pericias específicas. Sin embargo, en el contexto actual, el tipo de habilidades a las que se les atribuye mayor valor son las habilidades blandas, entre ellas la facilidad para aprender, más allá de aprender a utilizar una herramienta en concreto, las aptitudes para el diálogo y la conversación por sobre la memorización de protocolos, entre otros. Es notorio que el paradigma del profesional, no solo en el ámbito periodístico, está cambiando y se dirige hacia un perfil con una perspectiva humanitaria que armonice conocimiento técnico con sustentabilidad humana.

El nuevo paradigma del profesional no repercute únicamente en la configuración de sus rutinas o en su producto final. Al tener por meta el crecimiento individual, a la par del

profesional –y a veces, hasta espiritual-, se obtiene como resultado un profesional (sin importar su rubro) que complementa conocimientos técnicos con interpersonales, comunicacionales y dimensiones éticas. “El periodismo requiere cada día más destrezas técnicas, pero especialmente pide calidad humana, puesto que en definitiva el periodismo es sobre todo una cuestión de carácter” (Kovach; Rosenstiel, 2001).

En Chile, y a modo de respuesta a este nuevo estilo, el mercado reacciona – dependiendo del área- buscando nuevos perfiles profesionales. En palabras de *headhunters* nacionales, se evidencia la potente inmersión de las habilidades blandas como una característica fundamental en el nuevo trabajador (empleado o independiente). A tal punto en que se afirma que si no existe una combinación de habilidades blandas y duras, no existe un profesional completo. En ese sentido, los centros de formación de periodismo y comunicación tienen ante sí una clara responsabilidad prioritaria para adiestrar en el manejo de las nuevas tecnologías y aprovechar las diferentes vías de presentación de la información de actualidad. Pero también tienen que fomentar los valores profesionales y principios éticos de mayor solidez (Weaver, 1999).

Un punto importante a profundizar es el vinculado con la tuición ética o tutela ética. El caso de varios países europeos sugiere la existencia de un Código de Ética en el que se especifiquen mecanismos de control como pueden ser los códigos, manuales de estilo, y estatutos de redacción en el área escrita y en el terreno grupal, la instauración de consejos de prensa, tribunales de ética o de honor. Si se hace el ejercicio de contraste con otros profesionales a nivel latinoamericano, como por ejemplo de la salud o las leyes; existen en su caso, duras comisiones éticas que, en caso de cometer alguna falta deontológica, pueden llegar al caso de sancionar al infractor. Tal es el caso, por ejemplo, del Colegio Médico. En

el terreno periodístico, si bien existe el Colegio de Periodistas, este no cuenta con la tuición ética, o medios para sancionar las faltas deontológicas. En estricto rigor, cumple funciones más bien conmemorativas (González, 2009). En síntesis, en el terreno de la ética periodística no hay escritos ni mandatos. El riesgo asociado a esto es que cuando el periodismo se encuentra en circunstancias, la deontología corre el riesgo de tornarse meramente decorativa. (Reig, 2007).

En el caso chileno, tras el golpe militar de 1973, el Colegio de Periodistas, al igual que todos los movimientos sindicales, perdió fuerza. La asociatividad a este pasa de ser obligatoria a voluntaria y es entonces cuando comienza el declive de colegiados, al mismo tiempo que la institución pierde oficialmente la tuición ética con que contaban todos los colegios profesionales (Mellado et al, 2006).

En la realidad chilena no se han definido medios que regulen la ética periodística, más allá del Colegio de Periodistas, que solo puede pronunciarse sobre los profesionales colegiados (colegiatura que no es obligatoria). En consecuencia ante este vacío, la única herramienta para el encause de la ética que queda es la responsabilidad personal, la conciencia o autocontrol del periodista. Lo que convierte al propio periodista en su único juez efectivo ante su tribunal ético interno. ¿Realmente estamos preparando a los futuros profesionales para asumir esta trascendental tarea? ¿Sabemos cómo enfrentar esta crisis?

5. UNA PROPUESTA DE CAMBIO: MIRAR EL MODELO DESANTIANO

Más que ofrecer soluciones absolutas respecto del tema planteado, esta reflexión pretende generar debate sobre el tema, específicamente respecto de los contenidos y métodos que deben entregarse en el itinerario formativo ideal de los periodistas actuales y de cómo las propuestas y reflexiones del Prof. José María Desantes pueden resultar muy orientadoras. Es imperativo pensar cómo enfrentar esta realidad. En ningún caso la idea es exhibir una

realidad negativa e irremontable. Muy por el contrario. Por eso, y a modo de propuesta, se plantean las siguientes sugerencias.

En primer lugar, y como ya se dijo, es prioritario hacer que los futuros alumnos piensen, Y no sólo eso, que mediante ejercicios reflexivos simulen aquellas situaciones complejas que sin dudas les corresponderá enfrentar. O como dice Saint Exúpery en *El Principito*, aprender a conocerse, lo cual sólo es posible al enfrentarse con el obstáculo, aunque sea simulado. Si se sabe que el obstáculo existirá, será mejor que lo enfrenten preparados.

En tiempos de cambios permanentes, la sólo pregunta de ¿qué es ser competente? ya encierra aun enorme desafío. En ese contexto, resulta urgente considerar los aspectos filosófico-éticos como base fundamental del proceso formativo de un periodista, donde los asuntos tecnológicos hoy llevan la delantera. En palabras sencillas, sin renunciar al “cómo”, prestar más atención al “qué”. Nuestra sociedad requiere periodistas éticamente competentes y suficientemente apertrechados para enfrentar un escenario complejo y repleto de vicisitudes.

Una buena idea es pensar en la filosofía como la base para una comprensión aterrizada de lo que la sociedad espera de un periodista. Estas bases filosóficas constituyen el pilar para la comprensión de la función social que tiene la labor informativa. Sólo una vez que se ha planteado la pregunta filosófica (quién soy, que quiero), un periodista podrá trazar su plan de vida profesional mediante la pregunta ética (cómo lo voy a hacer).

Aparece acá otro tema: cómo se logra interesar a las nuevas generaciones con contenidos filosóficos, pero de manera amena y aplicada. Al hablar de ética no es solamente ética filosófica, sino también principalmente, contenidos prácticos que sirvan como

orientaciones para un mundo que no necesita recetas, pero sí orientaciones. ¿Por qué no potenciar la reflexión escuchando “Cambalache”, de Enrique Santos Discépolo en la voz de Gardel, de 1934? Cuando el texto nos dice “Todo es igual! Nada es mejor! Lo mismo un burro que un gran profesor! No hay aplazaos ni escalafón, los inmorales nos han igualado” o “Dale nomas! Dale que va! Que allá en el horno nos vamos a encontrar! No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa, si naciste honrado”... ¿acaso no es un reflejo de nuestra situación actual? O ¿por qué no analizar las complejas situaciones que debe enfrentar Will McAvoy (interpretado por Jeff Daniels) en “The Newsroom”? ³ O ¿por qué no entregar a un alumno un pliego de papel y lápices para que, sólo con su reflexión y creatividad, sea capaz de trazar la solución a un dilema profesional o bosquejar los mecanismos para lograr la competencia ética?

Otra idea fundamental es entregar a los futuros periodistas buenas dosis (contenidos, herramientas, pautas y métodos) de autocontrol en su accionar. Esta idea nace al considerar que toda actividad tiene una dimensión ética, que debe ser considerado un instrumento de gestión para la organización a través del sujeto, en este caso el profesional, como sujeto responsable activo. El autocontrol emana directamente del propio responsable, sin mediación de ningún organismo y obedece al convencimiento íntimo que le dicta su conciencia moral profesional, la que debe estar correctamente formada. Su puesta en marcha, funcionamiento y efectividad dependen, por lo tanto, de un compromiso voluntario con raíz filosófica como se planteó en párrafos anteriores.

³Serie de televisión creada por Aaron Sorkin, protagonizada por Jeff Daniels y emitida por la cadena HBO. La serie narra el trabajo previo a un informativo de una redacción de periodistas en una cadena norteamericana. Se estrenó el 2009. <http://www.hbo.com/the-newsroom>

Al menos en lo que se refiere a periodistas, la competencia ética es –o debiera ser– uno de los objetivos de la educación actual, acompañado de evidentes dosis de creatividad a la hora de concebir, diseñar y ejecutar proyectos de autogestión e innovación para informar a los públicos. No debe olvidarse que los continuos avances científicos y tecnológicos en todos los campos del saber, y la renovación continua y veloz del conocimiento, pujan a la acción imperiosa de estar aprendiendo continuamente por una necesidad de adaptación, pues los bienes intangibles como la información y el conocimiento, son valores en alza, indispensables para vivir y sobrevivir en comunidad. En ese contexto, la sociedad de la información demanda grandes cambios no sólo en lo técnico, sino que también en lo ético a lo largo de todo el proceso formativo, que debe mostrar señales de adaptación a esta realidad naciente.

Entonces surge la imperiosa necesidad de ofrecer soluciones concretas para el periodismo, que atraviesa una crisis multifactorial ya casi permanente, para proveer de una radiografía permanente a la forma en que se está haciendo periodismo y evaluar los mecanismos vigentes y asegurar que la información periodística sea un real aporte a la sociedad.

Entonces: “Quien a buen árbol se arrima, buena sobra la cobija. Volvamos a mirar el árbol de los deberes! Es urgente revalorizar el tema deontológico en los planes curriculares. No es que carezca de valor, pero la orientación actual se ha hipertecnologizado. Una de las preguntas más difíciles de contestar en el ambiente profesional y universitario actual se relaciona con la formación. Con un conocimiento brutalmente obsoleto y con paradigmas formativos cada vez más orientados a la práctica, no es tarea fácil determinar qué se entenderá por formación adecuada ni cuáles son las mejores condiciones para lograrla.

Cito las ideas del maestro Desantes: “Los médicos de prevenir y curar enfermedades, los profesores de educar a los miembros de la comunidad, los meteorólogos de anunciar y prever las condiciones del tiempo, y los periodistas de satisfacer el derecho a la información. Profesional, entonces, será aquel que posea vocación personal, aptitud profesional (condiciones naturales), preparación teórica (estudio universitario), capacitación práctica (adiestramiento en técnicas y destrezas) y sentido del deber (obligación de cumplir correctamente)”. Esto es el resultado de una formación científica que requiere paso por la universidad como ruta cierta para proporcionar un saber riguroso y metódico (Aguirre, 1998).

Entonces, la pregunta pertinente es ¿por qué debe formarse el futuro periodista? Nuevamente Desantes: “(Porque) la ignorancia es la peor desgracia que puede ocurrir a una persona, una deficiencia para la comunidad en que vive y un peligro si su actuación está llamada a trascender”. Puesto que la ignorancia es una desgracia y a la vez una deficiencia, sus efectos inevitablemente afectarán el servicio social que, por medio del cumplimiento de un deber, realiza el informador. Esta profesión, el periodismo, está llamada a satisfacer el derecho natural de toda persona humana a la verdad y de la sociedad, “a conocer sus propias verdades, sobre todo aquellas que sean más necesarias para llevar a cabo felizmente la humana convivencia”.

En este sentido, cabe concluir: “La comunicación social es algo demasiado serio para dejarlo al albur del diletantismo, la improvisación o la frivolidad. Para poder prestar el servicio social que la profesión informativa impone, es necesario capacitarse; hacerse capaz de prestar un servicio supone estar en condiciones de desempeñarlo. Nadie puede dar lo que no tiene” (Desantes, 1994). Entonces, es necesario formarse para ser un verdadero profesional de la información, con conciencia del derecho humano fundamental que se está

satisfaciendo. ¿Están teniendo esto en cuenta quienes crean y son responsables de administrar los planes curriculares?

Hay mucho por hacer, adaptarse para lograr los objetivos y metas. Se puede.

BIBLIOGRAFÍA

Cruz-Coke, Ricardo (2004). “Evolución de las universidades chilenas 1981-2004”. *Revista Médica de Chile*, v.132, n. 12, pp. 1543-1549.

Gutiérrez, Fernando; Odriozola, Javier; Ferreira, Javier; Anaya, Pilar; Pajoni, Hernán (2016) “El peso de la presión social y política: estudio de las limitaciones que condicionan el desempeño de los periodistas en cinco países latinoamericanos”. *Disertaciones*, v.9, n. 1, pp. 81- 102.

López, Xosé (2002). “Nuevos perfiles de los periodistas en la sociedad de la información”. *Ámbitos*, n.8, pp. 7-18.

Mellado, Claudia (2010). “Análisis estructural de la investigación empírica sobre el periodista latinoamericano”. *Comunicación y Sociedad*, n.13, pp. 125-148.

Mellado, Claudia; Barría, Sergio; Besoain, Felipe; Enríquez, Jorge (2006). “Gremio, democracia y asociatividad: el Colegio de Periodistas de Chile ante los comunicadores de hoy”. *Ámbitos*, n.15, pp. 325-331.

Ponencia presentada en un congreso:

Gutiérrez, Fernando; Lobos, Alejandro; Cea, Felipe (2015). “Periodismo condicionado: efectos de la presión y ciudadana en la función de periodistas de Chile, Argentina, Colombia y México”. En: *II Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación Social*. pp. 103-113

Gutiérrez, Fernando; Ibarra, Fernanda (2012). “Tecnología y vicios periodísticos: Análisis del impacto del nuevo entorno técnico en las prácticas de reporte y las rutinas profesionales de los periodistas chilenos”. En: *II Conference on Media Ethics*. pp. 390-391.

Irigoin, María (2003). En: *Seminario sobre competencias profesionales demandadas a la educación superior*.

Neuman, María (2006). “La enseñanza de la comunicación social y el periodismo en la época digital: herramientas y destrezas para navegar en la incertidumbre”. En: *XII Encuentro de la federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social (Felafacts)*

Téllez, David (2009). “La conciencia personal: su concepto, medida y libertad”. En: *7º Congreso Internacional de Ética y Derecho de la Información*. pp. 25-38.

Monografías e informes:

Aguirre, Marisa (1998). *El Deber de Formación en el Informador*. Pamplona: Eunsa.

Bauman, Zygmunt (2008). *Modernidad Líquida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Corrales, Osvaldo (2006). *Situación laboral de los periodistas egresados de la U. Chile (1993-2003)*. Santiago de Chile: Cuadernos de Trabajo (ICEI).

Cortina, Adela (1994). *Ética de la empresa. Claves para una nueva cultura empresarial*. Madrid: Trotta.

Délano, Manuel; Niklander, Karin; Susacasa Paula (2007). *La enseñanza del periodismo y el mercado laboral. Informe final de investigación para el Consejo Superior de Educación*. Santiago de Chile: Consejo Superior de Educación.

Desantes, José María (1994). *La Información como Deber*. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,

González, María (2009). *Libertad y responsabilidad de la prensa en el autocontrol y la enseñanza de la ética de cinco países andinos*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Gutiérrez, Fernando; Odriozola, Javier; Aguirre, Consuelo; Bernal, Juan-David; Ferreira, Javier; Anaya, Pilar; Aguirre, Patricia (2015) *Compromised Journalism: Self diagnosis of how Journalists perform their Role in Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Colombia and Mexico in the Age of Transparency*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Kovach, Bill; Rosenstiel, Tom (2001). *The elements of journalism. What people should know and the public should expect*. Nueva York: Crown Publishers.

Reig, Ramón (2007). *El periodista en la telaraña. Nueva economía, comunicación, periodismo, públicos*. Barcelona: Anthropos Editorial.

Weaver, David (1999). *Periodismo y nuevas tecnologías: Perfiles de los periodistas del siglo XXI*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Capítulo monografía

Kaluf, Cecilia (2004). “Reflexiones sobre competencias y educación”. En: Centro Interuniversitario de Desarrollo. Competencia de egresados universitarios. Santiago: Ediciones CINDA, pp. 57-70.

EL ALGORITMO SE CONVIERTE EN EDITOR: RESPONSABILIDADES ÉTICAS Y LEGALES DE LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMAS DE NOTICIAS.

Rodrigo Cetina Presuel
City University of New York, Estados Unidos

LAS REDES SOCIALES SE HAN CONVERTIDO EN PLATAFORMAS DE NOTICIAS. POR EJEMPLO, DE LOS 1.5 MIL MILLONES DE USUARIOS ACTIVOS DE FACEBOOK (CONSTINE, 2015), EL 63% LO UTILIZA COMO UNA FUENTE DE NOTICIAS (BARTHEL, ET AL., 2015). Google, Apple, Twitter, Snapchat o Instagram (cuyo dueño es Facebook) entre otras empresas tienen estrategias que aspiran a convertirles en el servicio de distribución de noticias online dominante en el mercado.

Existe además la cuestión de si las redes sociales están transformándose en editores *de facto*, sin querer ni reconocer ni asumir las responsabilidades que tan importante función conlleva. Facebook, cuyos directivos niegan tajantemente ser un medio de comunicación y afirman ser solamente una empresa de tecnología, han introducido un nuevo servicio llamado *Instant Articles*, capaz de alojar contenidos producidos por cualquier medio de comunicación en su mismo sitio y utilizan algoritmos para decidir qué contenidos, cuándo y en qué forma son vistos por los usuarios.

Si las redes sociales van camino de convertirse en los mayores distribuidores de información, o incluso en *súper* editores de noticias, será necesario determinar cuáles han de ser las responsabilidades éticas y legales a las que deben de sujetarse empresas tecnológicas como Facebook, que por voluntad propia han decidido pasar a formar parte del proceso informativo, de tal manera que se proteja el derecho a la información de los ciudadanos.

Parte de esa responsabilidad pasa por ser responsables a la hora de diseñar e implementar los algoritmos que intervienen en el proceso informativo para que el resultado de estos procesos automatizados no tenga consecuencias indeseadas en detrimento del derecho a la información y por extensión, de la vida democrática del ciudadano.

Como tanto el funcionamiento de los algoritmos como el modelo de negocio de la empresa pasan por recolectar y procesar la información personal de los usuarios, estos son afectados por las decisiones basadas en estos procesos en aspectos de la vida que trascienden incluso a su derecho a estar informados.

Por ello, este trabajo analiza si una empresa como Facebook entiende dichas responsabilidades y si está preparado para asumirlas y qué aspectos del uso de dichos algoritmos deben y pueden regularse sin coartar las libertades de expresión y prensa que la empresa ejerce colectivamente.

INTRODUCCIÓN

En el año 2015, Facebook decidió apostar por *Instant Articles* (en adelante IA), un servicio que forma parte de su plataforma accesible a través de teléfonos móviles (es decir mediante su *app*) y que es una manera eficiente y atractiva para que los periódicos y otros medios de comunicación puedan presentar y distribuir sus contenidos.

Desde su lanzamiento, que al principio fue solamente por invitación, IA fue recibida con entusiasmo por medios de comunicación de gran tradición en los Estados Unidos como El New York Times, el Wall Street Journal, y el Washington Post (cuyo dueño, por cierto, es Amazon). Estos medios hablan alto y claro sobre los beneficios de IA (Hazard Owen, 2015). Muchos de estos medios han adoptado la funcionalidad aún si sus contenidos condicionaban su acceso a la suscripción, o *paywalls* como suele decirse en inglés (Jewell,

2015). El Washington Post ha anunciado que tiene planeado poner a disposición del público la totalidad de sus contenidos utilizando IA (WashPostPR, 2015), a pesar de que en su web los contenidos son de pago.

Facebook ha persuadido a los medios de comunicación al ofrecer un diseño sumamente atractivo, flexible, fácil de utilizar y que ofrece tiempos de cargado muy rápidos en plataformas móviles, además de la promesa de una audiencia que se cuenta en millones de lectores potenciales y de compartir los datos de los usuarios y parte de los ingresos por publicidad.

Para los periódicos, que sufren para adaptarse y sobrevivir en el mundo en línea, IA parece una oferta irresistible. Como era de esperarse, cuando la funcionalidad fue abierta a todo tipo de medios alrededor del mundo en abril de 2016, muchos más acudieron al llamado de Facebook y comenzaron a hacer uso del servicio.

Incluso antes de IA, una gran parte de los medios de comunicación de todo el mundo ya publicaban links a por lo menos parte de sus contenidos tanto en Facebook como en otras redes sociales, pues estas ya eran vistas como una herramienta indispensable para llegar a las audiencias.

Pero con IA se da un cambio crucial. Los contenidos publicados utilizando esta prestación ahora viven en los servidores de Facebook y los usuarios ya no son redirigidos al sitio web de los medios de comunicación, sino que son los medios los que dejan sus contenidos a cargo del mismo Facebook. Ahora no sólo se va a buscar a las audiencias a la red social; ahora los contenidos se alojan ahí y desde ahí es Facebook quien los dirige a los lectores, utilizando para ello sus algoritmos que toman decisiones basadas en el análisis de los datos personales recabados de los usuarios.

Según es citado por Alejandro (2010, p. 36), Eric Schmidt, CEO de Google predecía que en unos 5 a 10 años la mayoría de las noticias se consumirían en dispositivos electrónicos y dichos dispositivos serían lo suficientemente inteligentes como para ser capaces de presentar al usuario noticias relacionadas con sus intereses y no solamente la misma información una y otra vez. Además, mediante lo que el dispositivo sabe de uno y sus amistades, lo que leen y lo que les gusta, y su localización, sería capaz de llevar al usuario publicidad mejor dirigida y personalizada. Esto es justamente lo que está haciendo esto, pero con su plataforma y sin depender de algún dispositivo en específico sino llevándolo a todos.

Empresas como Google, o Facebook, basan su modelo de negocio en recabar y explotar la información personal, pero, además tienden a la búsqueda de la dominación total del mercado (Mason, 2015, p. 118). No buscan, si hablamos de un motor de búsqueda, ser el mejor, buscan ser el único. Si hablamos de una plataforma de distribución de noticias es de esperarse lo mismo, Facebook pretende el control total del mercado de distribución de noticias. Busca ser el único. Esto nos lleva a preguntarnos cuáles pueden ser las consecuencias para la vida democrática de nuestra sociedad y para la habilidad de los ciudadanos a estar debidamente informados si Facebook, o cualquier empresa que termine por dominar el mercado, termina siendo el único, el hiper-distribuidor de noticias mundial.

Pero, problemas con la concentración de medios aparte, y a pesar de que Mark Zuckerberg insista en que, si acaso Facebook es una empresa tecnológica que en todo caso presta un servicio como una mera plataforma de distribución de noticias, pero nunca ejerce funciones de editor, (Segreti, 2016); lo cierto es que existen indicios que permitirían considerarle como tal.

Si Facebook efectivamente puede considerarse como un editor, ¿debe de atenerse a las obligaciones éticas y legales de una empresa de medios? De ser así ¿cuáles deben de ser las responsabilidades informativas y periodísticas de la empresa? ¿Cómo puede garantizar nuestro derecho a la información? Si como dijo Lessig, (1999), *el código es ley* ¿a qué responsabilidades éticas y legales debe de estar sujeto el creador y/o dueño de un algoritmo o una serie de ellas?? ¿El mismo está más allá de la manipulación? (Pariser, 2011).

Si como dice Bell (2016), Facebook se convierte en no solo en un hiper-distribuidor de noticias, sino también en el hiper-editor, ¿cómo pueden garantizarse efectivamente las libertades de expresión y de prensa? ¿Podemos los ciudadanos estar a salvo de la censura a petición de gobiernos u otras entidades que ostentan poder? Siguiendo lo que se preguntaba Desantes (1974) ¿cuáles serán las consecuencias globales del actuar de una empresa así? ¿cómo influye esta empresa en los flujos informativos? ¿Los mensajes serán distribuidos de manera justa?

En los siguientes apartados exploramos las implicaciones de las situaciones descritas anteriormente, en donde Facebook, o quizás Google, quizás otra empresa, se vuelve la fuerza dominante en la distribución de noticias al tiempo que pasa a tomar un rol parecido al de un editor de noticias o una entidad de radiodifusión.

Además, hemos de detenernos a pensar qué consecuencias puede tener el procesado de datos personales por los algoritmos y cómo los resultados de estos procesos automáticos pueden afectar a qué noticias están disponibles para el ciudadano.

Por un lado, la preocupación es la capacidad de los algoritmos para poder informar adecuadamente al ciudadano. Por el otro, lo es la manera en que los algoritmos y la información que utilizan afecta a la forma en que los medios de comunicación toman decisiones claves sobre qué noticias son de intereses para su audiencia y al mismo tiempo les

permiten obtener ingresos por lo que se vuelven las más valiosas y su producción se hace la más deseable, con el peligro de que ciertos mensajes importantes sean ignorados o que ciertos grupos sean marginalizados del proceso informativo.

Para ello analizaremos las tendencias en la adopción y el uso de redes sociales como plataformas de noticias por parte de los usuarios y sus hábitos de consumo en dichas plataformas. También analizaremos la adopción de IA por parte de los medios de comunicación.

Después se intentará determinar cuáles son las consecuencias de esta nueva realidad en donde esos medios de comunicación tradicionales ceden el control de sus contenidos a terceros y en que dichos terceros toman decisiones editoriales basadas en procesos automáticos, pero sin reconocer su rol como informadores. Esto nos permitirá hacer un bosquejo de qué obligaciones éticas deben de tener claras estas organizaciones y proponer qué medidas regulatorias podrían adoptarse para salvar el derecho a la información de los ciudadanos y al mismo tiempo permitan abordar otras cuestiones relativas como la privacidad en los datos personales, todo ello sin interferir en las libertades de expresión y prensa tanto del ciudadano como el ejercido colectivamente por las empresas, sean medios tradicionales o empresas de base tecnológica que hoy son parte del proceso informativo.

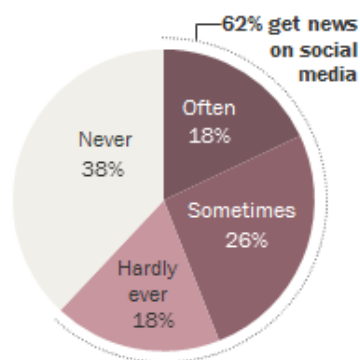
6. TENDENCIAS EN EL USO DE FACEBOOK COMO PLATAFORMA DE NOTICIAS POR PARTE DEL USUARIO

De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro Pew de Investigación en 2016, como podemos ver en la Gráfica 1, abajo, aproximadamente 6 de cada 10 ciudadanos de los Estados Unidos utilizan las redes sociales como una fuente de información. De ese 62% un 18% utiliza las redes sociales con este fin “a menudo” y un 26% lo hace “a veces”:

About 6-in-10 Americans get news from social media

About 6-in-10 Americans get news from social media

% of U.S. adults who get news on a social networking site ...



Source: Survey conducted Jan. 12-Feb. 8, 2016.
"News Use Across Social Media Platforms 2016"

PEW RESEARCH CENTER

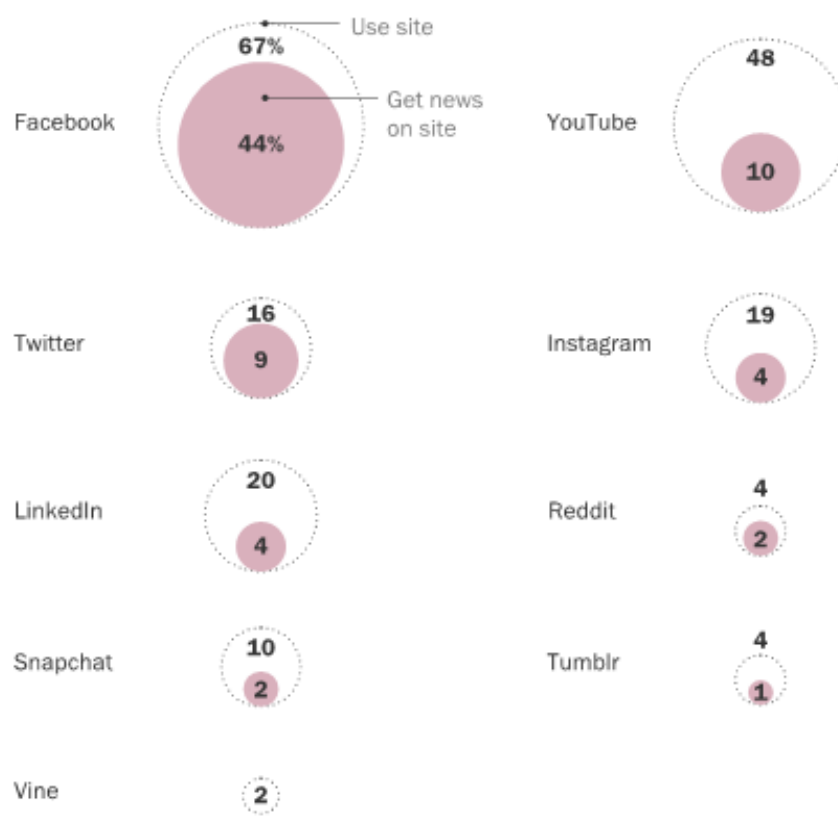
Gráfica 1. Fuente: Encuesta realizada entre Ene. 12-Feb. 8, 2016. "News Use Across Social Media Platforms. Pew Research Center.

Facebook es la red social más utilizada como fuente de noticias como puede verse en la siguiente gráfica, también del Centro Pew:

Social media news use: Facebook leads the pack

Social media news use: Facebook leads the pack

% of U.S. adults who ...



Source: Survey conducted Jan. 12-Feb. 8, 2016.
 "News Use Across Social Media Platforms 2016"

PEW RESEARCH CENTER

Gráfica 2. Fuente: Encuesta realizada entre Ene. 12-Feb. 8, 2016. "News Use Across Social Media Platforms. Pew Research Center.

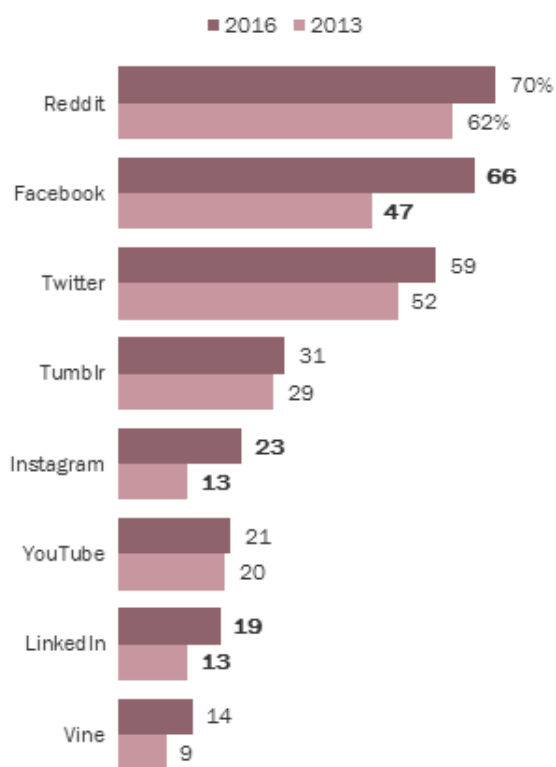
Además, como se puede ver abajo, el consumo de noticias a través de redes sociales va en aumento, siendo Facebook una de las que más ha crecido pasando de un 47% del total de usuarios de la red social que utilizaban la misma como una fuente de noticias, a un 66%

de usuarios. Es decir, en este 2016 la mayoría de los usuarios de Facebook utilizan la plataforma para leer y compartir noticias, no solamente fotografías, pensamientos y otros contenidos no necesariamente noticiosos que son compartidos entre usuarios o “amigos” como se les llama en esta red social.

Growth in use of social media for news

Growth in use of social media for news

% of users of each social networking site who get news there



Note: Statistically significant differences in **bold**.

Source: Survey conducted Jan. 12-Feb. 8, 2016.

"News Use Across Social Media Platforms 2016"

PEW RESEARCH CENTER

Gráfica 3. *Fuente:* Encuesta realizada entre Ene. 12-Feb. 8, 2016. "News Use Across Social Media Platforms. Pew Research Center.

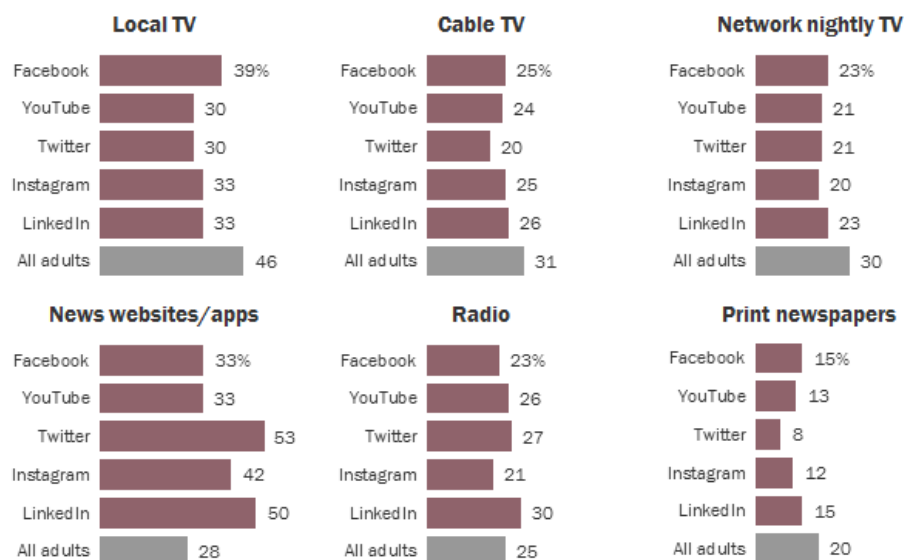
Desde hace unos años, además de dichos “amigos”, usuarios personas físicas que interactúan con otras personas físicas; Facebook permite que los usuarios den un “me gusta” y también seguimiento a las publicaciones de distintos tipos de empresas, entre ellas medios de comunicación de todo tipo.

Debemos apuntar también que, la siguiente gráfica, también del centro PEW muestra que, a pesar del crecimiento, la mayoría de quienes utilizan redes sociales como fuente de noticias también reciben noticias a través de otras plataformas. Esto muestra que por lo menos en EEUU, el grueso de los ciudadanos todavía consume noticias a través de varias plataformas y pese a sus ambiciones, Facebook todavía tiene camino por recorrer.

Social media news consumers access news on a number of other platforms

Social media news consumers access news on a number of other platforms

% of news users of each site who often get news from ...



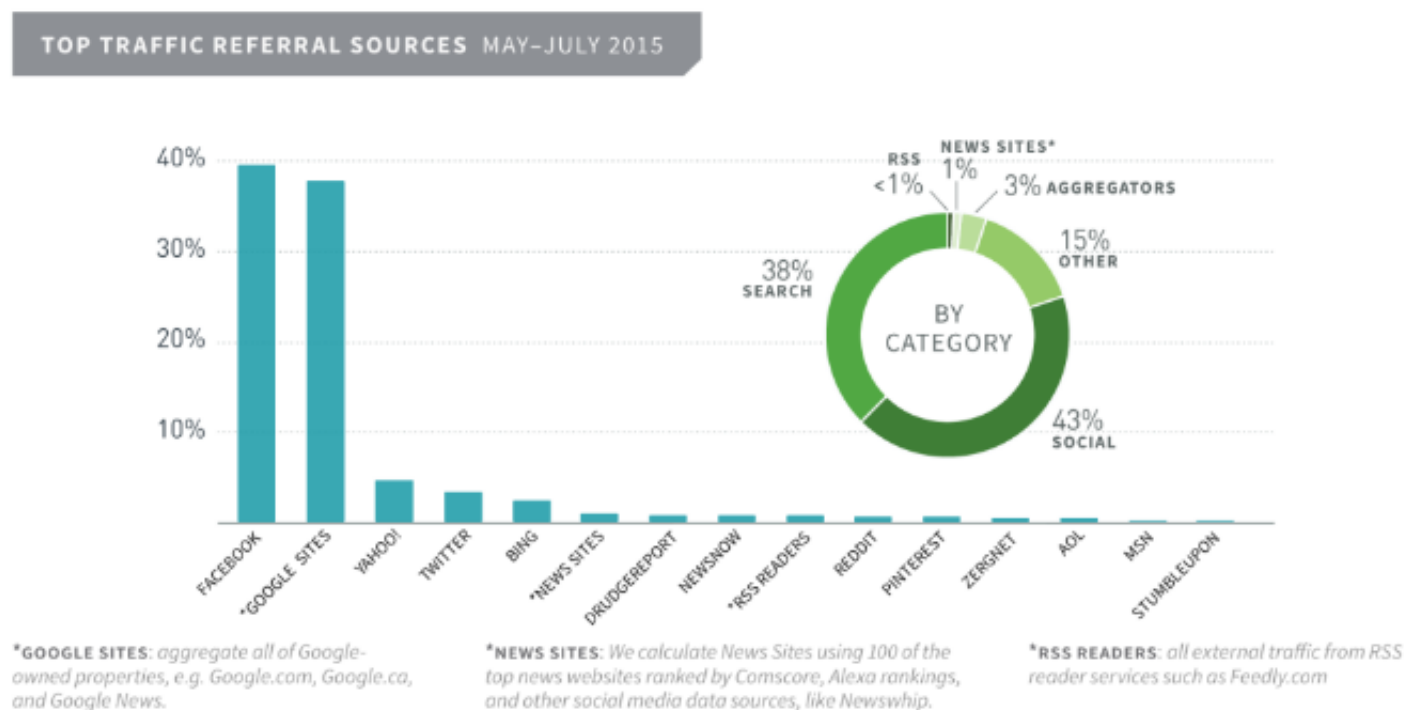
Source: Survey conducted Jan. 12-Feb. 8, 2016.

"News Use Across Social Media Platforms 2016"

PEW RESEARCH CENTER

Gráfica 4. *Fuente:* Encuesta realizada entre Ene. 12-Feb. 8, 2016. "News Use Across Social Media Platforms. Pew Research Center.

Facebook no es la fuente exclusiva de noticias, pero dado el número de usuarios que tiene y el ritmo al que estos comienzan a darle dicho uso, es de esperarse que sea una de las fuentes principales de noticias en un futuro cercano. En el mundo online, ya ha superado a Google como la principal fuente de noticias online, de acuerdo a datos de Parse.ly, según reporta Ingram (2016), como podemos ver en la siguiente gráfica:



Gráfica 5, con información de Parsely. Fuente: Revista Fortune (Ingram, 2016).

Parsely

7. TENDENCIAS EN LA ADOPCIÓN DE FACEBOOK COMO PLATAFORMA DE DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS POR PARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

El lector recordará que desde hace muchos años Google ha estado interesado en la distribución de noticias y mantiene la plataforma Google News. Hace más de una década dicha plataforma nació como un agregador de noticias que llevó a fricciones entre la empresa

y los medios de comunicación impresos por el control de los contenidos noticiosos producidos por estos últimos. Entre otras cosas esto llevo a que se modificar la legislación en materia de derechos de autor en algunos países para intentar regular la situación. Google llegó a cerrar su servicio de noticias en España en diciembre de 2014, enfrentándose a situaciones similares, pero no con el mismo resultado en países como Alemania, Bélgica o Austria (Europa Press, 2014). Un buen análisis de la pugna entre prensa, Google y otras empresas basadas en Internet, así como sus consecuencias, puede leerse en Marcos Recio, Sánchez Vigil, y Olivera Zaldúa (2015).

No entraremos a detalle en este trabajo, pero Google ahora ofrece a los medios de comunicación varias herramientas para hacer que sus contenidos lleguen al público de manera eficiente, entre ellas la plataforma *AMP*, que tiene similitudes con IA de Facebook.

Google y los medios de comunicación al parecer han hecho las paces y entienden plenamente que se necesitan mutuamente. De hecho, los medios de comunicación parecen saber que necesitan toda la ayuda que puedan obtener y las plataformas de redes sociales: Facebook, otras como Twitter, Instagram, etc., saben esto y no han dudado en ofrecer servicios que sean atractivos para empresas de medios, particularmente me refiero a medios impresos, que tienen la necesidad de crecer sus audiencias, o número de lectores, y de diversificar la manera en que pueden obtener ingresos mediante la puesta a disposición de sus contenidos noticiosos online por diversos factores, entre ellos, la bajada en ingresos por publicidad de sus versiones impresas y la dificultad para sustituir dichos ingresos con sus ediciones digitales.

El interés de Facebook por las noticias no es algo nuevo. De hecho, según Pariser (2011, pp. 36-37), desde muy temprano prácticamente desde el principio, la plataforma fue

concebida con un claro interés en relacionar a los usuarios con las noticias que captaban su atención.

Ahora bien, a Zuckerberg le gusta decir que en ningún caso Facebook es una empresa dedicada a las noticias, mucho menos un editor de noticias, sino una empresa de base tecnológica. Esta postura permite a la empresa desmarcarse de toda responsabilidad atribuible a un medio de comunicación.

Si uno tiene un perfil de Facebook como yo (y sí, lo utilizo constantemente para leer noticias) y lo abre mediante la *app* del servicio en el teléfono móvil, se pueden, además de los contenidos compartidos por nuestros contactos, publicaciones que provienen de medios de comunicación. Muchas de estas publicaciones aparecen con un aspecto algo diferente al de cualquier otra publicación por otra persona. Suelen verse de la siguiente forma:



Imagen 1. Captura de pantalla del teléfono del autor que muestra noticias publicadas con el servicio Instant Articles en el *Newsfeed* de Facebook

Nótese en la siguiente imagen, ampliación de la anterior, el pequeño logotipo de un relámpago en la esquina superior derecha:



Imagen 2. Captura de pantalla del teléfono del autor que muestra el logotipo del servicio *Instant Articles* en el *Newsfeed* de Facebook

Al hacer *click* en el artículo publicado usando *Instant Articles*, rápidamente se pasará a otra pantalla, siempre dentro de la app de Facebook del teléfono móvil, y se podrá ver un artículo de una forma similar a como se ve en la siguiente imagen:

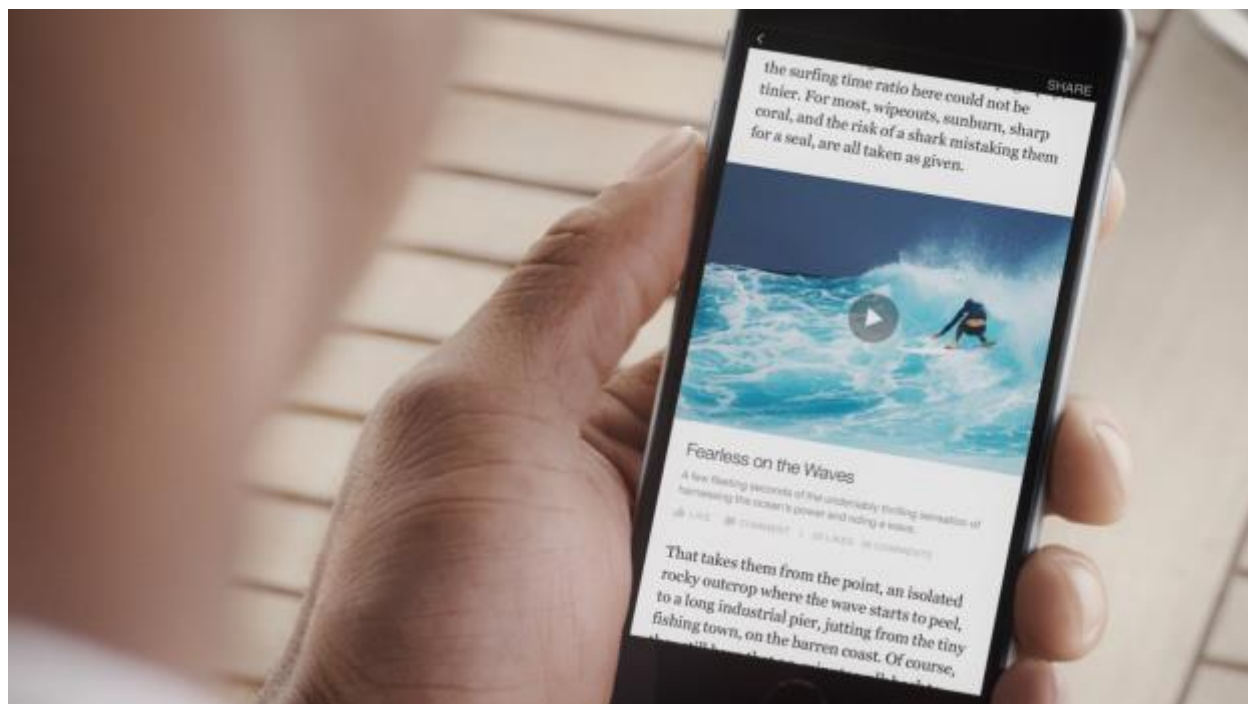


Imagen 3. Fuente: Facebook Instant Articles.

Para explicar en qué consiste precisamente esta tecnología recurrimos a la explicación que dan desde el mismo Facebook: “Un IA es un documento en HTML 5 que se carga muy rápido en Facebook. *Instant Articles* te da la habilidad de contar historias sofisticadas en un formato de artículo que se carga rápidamente en plataformas móviles y que contiene su marca y es personalizable.”¹ (Facebook)

La diferencia con otras tecnologías, y que le hace aún más relevante para nuestro estudio es el hecho de que los IA se cargan desde servidores de Facebook, son *nativos* a esta plataforma, *viven* en la misma. Esto quiere decir que un medio de comunicación entrega una

¹ Traducción del autor.

copia de su artículo a la red social que se encarga de distribuirlo, pero el mismo artículo permanece dentro de los servidores de Facebook.

Desde un teléfono móvil, los lectores de un determinado contenido creado por un tercero, un medio de comunicación, no navegan fuera de la app de la red social, se quedan en la misma y es el artículo el que se carga dentro de la app, a partir de la copia en sus servidores y no a partir del sitio web o los servidores del periódico o medio de comunicación.

Ya no se trata entonces de que una red social sirve para distribuir links a artículos. Ya no se trata de un método para llevar tráfico desde Facebook a los sitios web de los medios de comunicación. La situación ha cambiado.

Ahora son los medios de comunicación lo que entregan a Facebook sus contenidos para que sea la red social la que los ponga a disposición de los usuarios. Ahora los medios no buscan atraer al usuario de la red social, sino que salen a encontrar a su audiencia llevándoles sus contenidos haciendo uso de lo que en principio parecería un repartidor de periódicos virtual, al que le entregan las copias del ejemplar de un periódico y se encarga de distribuirlo entre los usuarios, utilizando para ello una serie de algoritmos cuyo funcionamiento no es revelado ni a los periódicos ni a las audiencias.

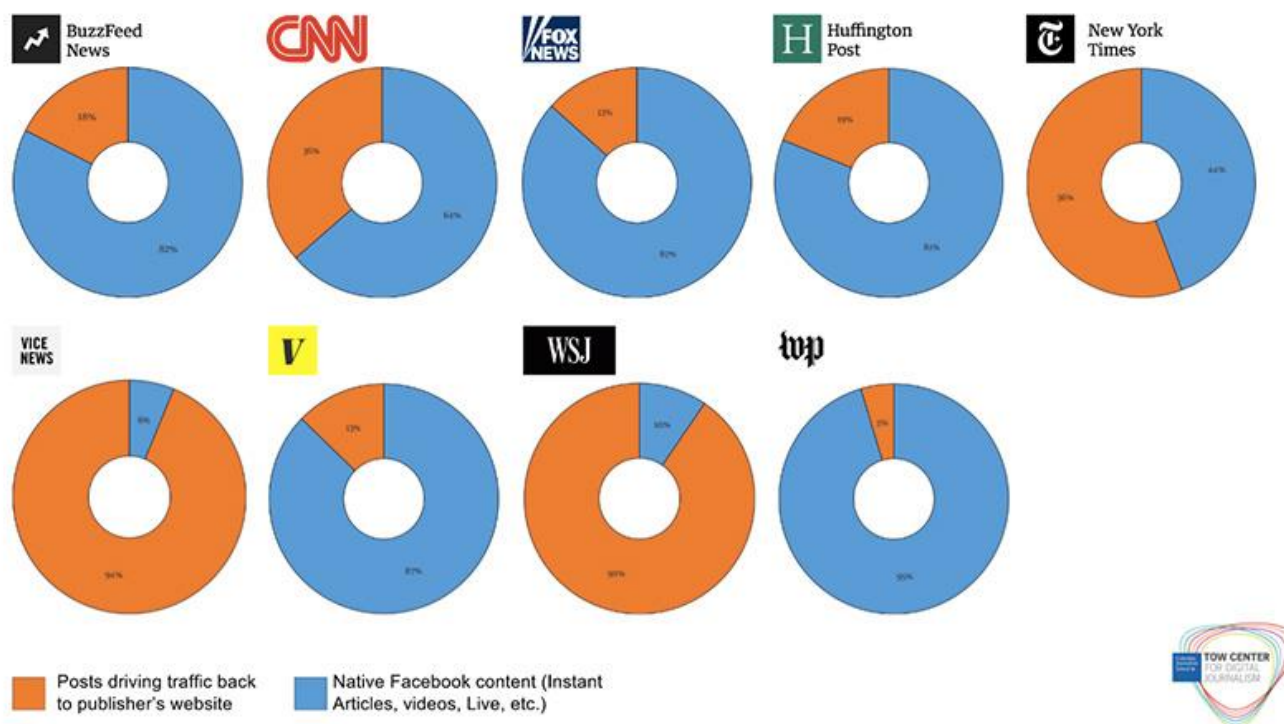
a. Quiénes han adoptado Instant Articles y cuánto uso hacen de la plataforma

¿Quién y por qué ha decidido publicar usando IA? Cuando hizo su aparición en 2015, IA solamente estaba disponible para un número concreto de medios de comunicación, que Facebook describía como *socios* en este nuevo servicio: El New York Times, NBC News, The Atlantic o BuzzFeed en Estados Unidos, The Guardian o BBC News en Reino Unido y Der Spiegel y Bild en Alemania, entre otros cuantos.

Hoy en día cualquier medio de comunicación puede elegir publicar (y qué cantidad de contenidos publicar) utilizando IA. Muchos medios en inglés (añádase a la lista otros como The Economist, The Sun o The Guardian en Inglaterra) lo hacen, como también lo hacen medios en español como ABC o el País en España, o el Clarín, La Tercera, Teletrece, TVN, TV Azteca, SDP o todas las marcas del grupo Caracol por citar ejemplos de países latinoamericanos (Gutiérrez, 2015). También por supuesto hay medios que publican en otros idiomas aparte de Bild y Der Spiegel. En este momento, este capítulo no puede ofrecer una lista definitiva de todos los medios que han decidido publicar a través de IA.

Pero no sólo es interesante saber cuántos medios usan IA, también lo es saber qué tanto lo utilizan.

Con los datos disponibles hasta ahora, podemos inferir que IA está teniendo éxito, no sólo porque más y más medios estén adoptándolo, sino por el comportamiento de medios de comunicación bien establecidos y respetados. En la siguiente gráfica del Tow Center de la Universidad de Columbia podemos ver, en azul, la proporción de artículos publicada usando Instant Articles por parte de medios como el New York Times, el Wall Street Journal o el Washington Post entre otros de gran tradición; o BuzzFeed, Vox o el Huffington Post, medios online de más reciente creación.



Gráfica 6. Fuente: The Tow Center for Digital Journalism

Nótese como el Washington Post publica el 95% de sus contenidos utilizando IA. De acuerdo a una entrevista con diversos medios hecha por NiemanLab (Hazard Owen, 2015), el Post planea publicar el 100% de sus contenidos en IA.

Medios que no aparecen en la tabla anterior, como la revista The Atlantic, fundada en 1857, han dicho que su estrategia para IA es publicar tanto contenido como sea posible, lo que significa entre un 60 a 70 por ciento del total. Otros como Slate, dicen que simplemente no publican más porque algunos de sus contenidos no son compatibles con la plataforma o porque son contenidos que provienen de terceros (Hazard Owen, 2015).

La tabla anterior sólo incluye medios de EE.UU. Medios británicos como The Economist, dicen que empezarán publicando cuatro o cinco piezas por día; The Guardian por su parte, dice que planea publicar más contenidos mediante esta plataforma paulatinamente

e incluir entre ellos piezas de opinión y otros contenidos según indiquen las tendencias de uso (Davies, 2015).

2.2 Motivos de los medios para adoptar Instant Articles.

Según la publicidad del mismo Facebook, un artículo publicado en IA recibe en promedio un 20% más de clicks; que será compartido un 30% más en promedio; y que una vez que se accede a un artículo, los usuarios tienen un 70% menos de probabilidades de cerrar el artículo debido a que carga más rápido (Facebook).

Siempre según Hazard Owen (2015), podemos ver algunos de los motivos que han llevado a los medios a adoptar IA con gusto. Desde The Washington Post nos dicen que con la plataforma buscan atraer a nuevas audiencias y mejorar la experiencia de los usuarios.

Para The Atlantic, aunque no están seguros de cuánto mérito corresponde en realidad a IA, uno de los motivos es que están atrayendo cada vez más lectores a través de Facebook y también que pueden ofrecer una mejor experiencia para sus usuarios. Slate dice que adoptar IA ha resultado en los mejores datos de audiencia que han podido registrar hasta ahora.

El periódico francés Libération reporta que desde que comenzó a usar IA ha visto crecer el tiempo que los lectores pasan leyendo sus contenidos en un 30% (Southern, 2016).

Sin duda, para cualquier medio los más de mil millones y medio de usuarios de Facebook como potencial audiencia son un gran atractivo.

Por supuesto, es una gran motivación poder llegar a una mayor audiencia y así poder mejorar los ingresos en publicidad. Vox o BuzzFeed, medios que nacieron en Internet, pero con valores de mercado que superan los mil millones de dólares dicen que IA ha contribuido a aumentar el número de visitantes únicos a sus contenidos (McAlone, 2016).

Mic.com, portal de noticias muy popular entre la generación millennial señala que IA les facilita monetizar completamente sus contenidos a la vez que rastrearlos, pues Facebook también comparte datos sobre la forma en que los usuarios usan IA (Moses, 2016).

Facebook permite a los medios quedarse con el 100% de los ingresos si los artículos incluyen publicidad que ellos mismos han vendido y Facebook se lleva un 30% de la publicidad si es la red social la que ha hecho la venta (McAlone, 2016). Varios medios reportan que IA por sí mismo les reporta tantos ingresos por publicidad como la versión para móviles de sus sitios web (Keenan, 2016).

Medios que no son líderes en lectores o en audiencia muestran su entusiasmo: el Trinity Mirror, medio de Reino Unido dice que IA significa decenas de millones de visitas a sus contenidos e ingresos que no son nada deleznable. Eso sí, otros medios dicen que los ingresos obtenidos a través de IA no son significativos, aunque si se ven con perspectiva, como ingresos adicionales, entonces valen la pena (Davies, 2015).

El que Facebook permita monetizar contenidos publicados en IA (y la audiencia que promete), lo hace sumamente atractivo para medios más pequeños y todos aquellos que están necesitados de nuevas fuentes de ingreso, siendo preocupante el que estos medios dependan entonces de la plataforma y que Facebook tenga cada vez mayor influencia sobre ellos y lo que publican, tema que abordamos con mayor detenimiento en el siguiente apartado.

Hay que preguntarse qué implica para el estado de la información en general, el que los medios, atraídos por los beneficios que IA parece aportarles, cedan cada vez más control sobre la distribución digital de las noticias a cambio de la información sobre audiencias y los ingresos que tanto desean.

Facebook comparte información relacionada con los artículos leídos a través de la plataforma con los medios y les permite además que instalen cookies y rastreen el comportamiento de los usuarios por ellos mismos, lo que permite a los medios entender mejor a su audiencia. Esto debe llevarnos a reflexionar si no existen aquí aún mayores amenazas para la privacidad de los usuarios y respecto de los efectos de las decisiones tomadas a través del proceso de esos datos puedan tener tanto en la información que se produce como en la que efectivamente llega a los usuarios.

3 FACEBOOK: DISTRIBUIDOR Y EDITOR DE NOTICIAS.

Visto todo lo anterior no cabe duda que Facebook va camino de ser el mayor distribuidor de noticias que jamás ha existido. Como ya dijimos, no debe sorprender que busque ser tan grande que termine por ser *de facto* el único distribuidor de noticias a través de Internet.

Si hablamos de que el grupo de empresas que están emergiendo como los nuevos distribuidores del periodismo digital, podemos decir que estamos volviendo a los tiempos de *America Online*, del viejo Internet en donde existe un portero que es el que filtra los contenidos a los que acceden los usuarios. Volvemos a los tiempos de un Internet fragmentado en donde el usuario ve una pequeña parte de Internet a través de un portal. Qué contenidos, cuándo y cómo son presentados al usuario se decide en base a perfiles creados a partir de la información recabada por el usuario o que él mismo provee y a través de la interpretación hecha a partir de los ya mencionados algoritmos.

Facebook tiene o por lo menos está camino de tener, un poder inmenso sobre qué noticias llegan a los usuarios. Si la tendencia continúa, y cada vez son más las personas que utilizan las redes sociales para recibir contenidos informativos; y a medida que dichos usuarios decidan utilizar el teléfono móvil y las aplicaciones relacionadas con estas redes

sociales como *la principal* (tal vez para algunos incluso la única) fuente de noticias, el poder de Facebook (o de la empresa que pueda tomar su lugar) se incrementará.

Como ya hemos citado, Facebook tiene más de mil millones y medio de usuarios, así que ni siquiera tiene que tener un control total y absoluto del mercado para tener una influencia desmedida sobre la distribución de noticias en Internet y para tener por tanto la atención de muchísima gente, más que ningún otro medio.

Una crítica que comúnmente se vierte sobre los medios de comunicación es de relevancia: la concentración en la propiedad de los medios y en las telecomunicaciones reduce la habilidad de los ciudadanos para buscar, recibir e impartir información (Bagdikian, 2004).

Los problemas que se han observado en la concentración de otros medios, vuelven a estar presentes, esta vez de una empresa de Internet: una visión híper comercial que no da importancia a la característica de servicio público relacionada con las actividades informativas (McChesney & Nichols, 2002), p. 52. El problema, continúan los mismos autores (p. 53) es que los medios en EE.UU. están diseñados para generar ingresos, no para avanzar el interés público. Tienen, dicen, un sistema diseñado para enriquecer a los inversores y no para servir a la democracia.

Las voces plurales que representan a todo tipo de personas e intereses a través de los medios de comunicación son deseables y un público bien informado y bien representado se considera como uno de los pilares de las sociedades democráticas modernas (Nerone, 1995). Si es una sola empresa, en este caso Facebook, la principal proveedora de noticias para una de cada cinco personas en el mundo, ¿qué pluralismo puede esperarse? (Halleck, 2015).

¿Qué hay del rol de Facebook como editor de contenidos noticiosos?

El NewsFeed de Facebook no presenta contenidos en orden cronológico. En cambio, una serie de algoritmos determinan lo que cree es del interés de cualquier usuario. Esto es determinado mediante el recabado y análisis de datos en relación con sus preferencias e intereses. Esto dicta no solamente qué publicaciones de los amigos del usuario aparecen primero o qué fotografías podemos ver, sino además qué noticias deben de aparecer, en qué orden y cuándo, según lo que el algoritmo supuestamente sabe de los intereses del usuario dueño de un perfil (Luckerson, 2015).

Los algoritmos de Facebook deciden (1) qué puede ser de interés para un usuario en particular; (2) en qué momento debe de mostrarles este o aquel contenido y (3) en qué orden. Los contenidos que los individuos consumen en Facebook no dependen solamente en aquello que sus amigos comparten, sino también en cómo el algoritmo del NewsFeed clasifica estos artículos y lo que los usuarios elijen leer. El orden en que los usuarios ven dichos contenidos depende de varios factores, incluyendo que tanto un usuario visita Facebook, qué tanto interactúan con ciertos amigos y qué tan a menudo los usuarios han hecho *click* en los links de ciertos sitios web que aparecen en su *feed* en el pasado (Bakshy, Messing, y Adamic, 2015, p. 2).

Basándose en los perfiles de los usuarios creados a partir de la información recabada de los mismos y de un seguimiento de sus actividades, Facebook decide entonces qué aparece en la *primera página* de su Newsfeed y qué es relegado a las páginas internas.

Los algoritmos ejercen varios tipos de control en lo que se refiere al contenido. Tienen un papel clave en “seleccionar qué información es considerada más relevante para nosotros, una característica crucial de nuestra participación en la vida pública” según nos dice (McKelvey, 2014, p. 599), citando a Gillespie (2014. P. 67). Los algoritmos incluso pueden

definir y controlar la circulación de información entre los mismos medios según el mismo McKelvey, (2014, p. 599).

Esto es muestra de que la red social efectivamente tiene las características de un editor de noticias pues realiza una actividad que presenta paralelismos a las de una persona que tiene el cargo de editor en un medio de comunicación.

El hecho de que las noticias lleguen al usuario mediante una labor de edición hecha totalmente por procesos automatizados no quiere decir que no haya personas detrás de estos procesos y por lo tanto, a las mismas se les pueden exigir responsabilidades.

Los algoritmos trabajarán por sí mismos e incluso llegan a tener la capacidad para aprender y evolucionar sin interferencia alguna, pero al ser creados por personas, están sujetos a errores o a prejuicios de quienes los han programado. Además, no están exentos de modificaciones que puedan responder a la intención de manipularlos para cualquier fin.

En algún momento Facebook dijo que utilizaba a seres humanos, en combinación con los mencionados algoritmos para ordenar el contenido presentado, (Thielman, 2016), pero no en el Newsfeed sino en otro producto, llamado Trending News, que aparece en el lado derecho de la app, de forma menos prominente que los IA.

Facebook fue acusado de que sus editores favorecían desmedidamente contenidos de un lado del espectro político (Herrman & Isaac, 2016), cosa que algunos exempleados de la empresa han llegado a confirmar (Nunez, 2016). Este año, la empresa tomó la decisión de dejar de utilizar a personas y dejarlo todo en manos del algoritmo, lo cual ha tenido consecuencias inesperadas e indeseables (Dewey, 2016), incluyendo la distribución de noticias manifiestamente falsas.

Lo anterior es evidencia de que los procesos automáticos son falibles y no se puede esperar que por sí solos cumplan adecuadamente con la labor y los estándares informativos requeridos. Además, los algoritmos no están exentos de ser manipulados sea por el mismo Facebook, sea por un tercero ¿Quién sino Facebook podrá garantizar que no manipularán los flujos de información sucumbiendo a presiones privadas o gubernamentales?

Tanto por sus habilidades como editor como por su función de distribución, Facebook tiene a día de hoy una enorme capacidad para influenciar el flujo de información y dar forma a la opinión pública. Por lo tanto, tiene un enorme poder para incidir sobre nuestra vida democrática.

Sería de esperarse que a la par de ese incremento en el control e influencia en la manera en que la sociedad se informa, empresas como Facebook vayan dándose cuenta de que tienen una gran responsabilidad sobre la correcta distribución de noticias y ejerzan con cautela su influencia en los flujos informativos, tan importantes para nuestra democracia. Pero no parece ser así.

Se diga lo que se diga sobre los medios, dentro de los mismos siempre ha habido voces críticas que han velado porque la profesión y el servicio que se presta no se aleje demasiado de ese servicio a la democracia. Siempre ha habido, en mayor o menor medida un sentido de la responsabilidad o por lo menos se dice que dicha responsabilidad existe. No todos los medios y empresas detrás de los mismos son igual de responsables, pero seguramente son pocos los que dirían que dichas responsabilidades no existen.

Lo primero que se escucha decir a Facebook es que no son un medio, ni aspiran a serlo. De esta forma buscan tener que compartir las preocupaciones o responsabilidades que debe de tener un medio dada su condición de servicio público a favor de la democracia, que bien puede convivir con la empresa privada, aunque la situación nunca llegue a ser perfecta.

Como señala Napoli (2015, p. 4), los medios de comunicación tradicionales han operado a partir de lo que manda la legislación en combinación de códigos de conducta profesionales fundamentados en principios específicos de interés público. Al comparar los modelos tradicionales de producción y distribución de noticias con las redes sociales, las representaciones institucionales del interés público están ausentes, más allá de su representación indirecta a través de los contenidos que los medios tradicionales comparten en dichas redes sociales. Si Facebook tiene más y más control, como es el caso de IA ¿incluso esa representación indirecta podría verse diluida?

Incluso si solo aceptan ser una empresa de base tecnológica y no un medio, nos dice Emily Bell (2016), Facebook debe de reconocer que toma decisiones que son críticas sobre el acceso a las plataformas, sobre qué forma tomarán el periodismo y la expresión de los ciudadanos, la inclusión o el bloqueo de ciertos contenidos y el derecho de ciertos operadores para ser considerados editores de noticias o no.

Si la compañía piensa que puede desarrollar estas funciones sin preocuparse de las consecuencias de ejercer este rol de manera responsable y de forma que no resulte nociva para nuestras libertades de prensa y expresión, nuestro derecho a la información y nuestra privacidad, se equivoca gravemente.

Lo quiera o no, las actividades de Facebook la han puesto en una posición en donde su actividad nunca puede resultar inocua para la misión informativa de los medios y por lo tanto debe de aceptar las responsabilidades que esto conlleva.

4 ¿CÓMO DEBE FACEBOOK DETERMINAR SUS RESPONSABILIDADES EDITORIALES Y DE DISTRIBUCIÓN DE NOTICIAS? EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN SEGÚN DESANTES COMO GUÍA.

Para determinar cuáles deben de ser sus responsabilidades, es decir para, en las palabras de José María Desantes poder hacer una ponderación de los temas jurídicos relativos al derecho a la información “sobre todo, a partir de la concienciación del hombre como titular real del derecho a la información” (Desantes, 1974, p. 164), una empresa como Facebook debería de considerar, entre otras, las siguientes cuestiones que el autor califica de angulares:

“... ¿a qué intereses sirven de una manera aparente o crítica? ¿Cuáles son sus fuentes de recursos? ... ¿A qué necesidades de los consumidores de información responden y a qué necesidades deberían responder? ¿Cuáles ignoran u omiten consciente o inconscientemente? ¿Qué consecuencias globales tiene su actuación? ¿Quién, en qué grado, y con qué garantías responde? ¿Cómo se distribuyen y utilizan de manera justa o injusta los mensajes? ... ¿Qué influencias ejercen sobre las corrientes de información y de opinión? (Desantes, 1974, p. 165).

Las primeras dos preguntas, a qué intereses sirven y cuáles son sus fuentes de recursos nos competen a nosotros como ciudadanos. Debemos de ser críticos con la empresa y entender que detrás de las noticias que la plataforma distribuye no están una serie de algoritmos que trabajan por sí solos sin injerencia humana alguna. De hecho, los algoritmos reflejan los valores de quienes los crean puesto que el diseño tecnológico simplemente oculta las ideologías y agendas políticas de sus creadores (Nathenson, 2013, p. 144; citando a Morozov, 2011).

Los algoritmos son creados por personas y por lo tanto están sujetos tanto a sus intereses y perjuicios como a errores humanos en el diseño de los mismos. Tampoco se puede descartar que modifiquen tanto los algoritmos como los resultados que los mismos arrojan, sea por el motivo que sea.

En el caso de Facebook, será natural pensar que entre los intereses a los que responden tanto la creación de uno o varios algoritmos y a su manipulación están los objetivos comerciales de la empresa. Es trabajo del usuario saber quiénes están detrás, y tener una visión crítica de su actividad en base a esta información. Será también una buena práctica de la empresa el ser transparente respecto de sus formas de financiación. Hay que tener en cuenta que el modelo de negocio de Facebook está principalmente basado en recolectar y analizar nuestros datos personales con el fin de obtener ingresos provenientes de la publicidad o bien presentando dichos datos a terceros que también los utilizan para fines publicitarios, u otros.

Que posiciones políticas, visión de la sociedad y valores promueven los algoritmos pueden estar dictados por una serie de factores, incluida la influencia de gobiernos y otros grupos de poder. Para el ciudadano no siempre será fácil poder descubrir quiénes ejercen esta influencia.

La transparencia es clave. Una empresa como Facebook debería explicar qué grupos, empresas y gobiernos pueden tener influencia en la manera en que deciden qué noticias publicar y cómo y a quién las distribuyen. También para explicar qué datos son recolectados de los usuarios, cuáles de estos y cómo son compartidos con terceros y qué influencia tienen en los contenidos que nos muestran.

Esta es una exigencia que ya se hace a Facebook en algunos países gracias a las leyes de protección de datos personales y siempre ha formado parte de sus términos de usuario.

Facebook hace esfuerzos para que el usuario sepa que puede controlar quién puede ver la información que publica y tiene un muy complicado sistema de configuración de la privacidad desde hace varios años, pero este es notoriamente complicado y oscuro (Cetina Presuel, 2010). Además, como alerta Silverman (2015, p. 281) además de que dichas

configuraciones son difíciles de navegar, afectan a lo que otros pueden ver acerca de nosotros, no a lo que Facebook mismo puede ver. Lo que Facebook recaba y cómo lo procesa a través de sus algoritmos permanece en la total oscuridad.

Según un estudio llevado a cabo por Kizilcec (2016, p. 4) en la interfaz de los algoritmos, la cantidad adecuada de transparencia puede fomentar actitudes positivas y alentar a la gente a disfrutar de los beneficios de estas tecnologías.

Respecto de la pregunta de quién y en qué grado y con qué garantías responderá, lo cierto es que la empresa, se quiera ver a sí misma o no como un distribuidor y un editor de noticias, ostenta un gran poder para influir en la manera en que consumimos noticias hoy en día y por lo tanto deberá asumir las responsabilidades y obligaciones que acompañan a ese rol, que la misma empresa ha elegido a través de las decisiones de quienes la dirigen, lo quieran admitir o no. Lo mismo aplicará para toda red social que distribuya noticias.

En el futuro cercano, Facebook, y empresas similares, deberán hacer esfuerzos específicos para explicar cómo tanto los datos recolectados como los contratos mercantiles, publicitarios o de otra índole, de los que sea parte, influyen tanto en el tipo de noticias que llegan a las personas como el tiempo y forma en que lo hacen.

Es trabajo de empresas como Facebook aceptar que lo quieran o no, son parte importante del proceso informativo actual y por lo tanto deben de reconocer sus propias responsabilidades y obligaciones, como si de cualquier otro informador se tratara.

Será vital exigir la máxima transparencia posible respecto del funcionamiento de los algoritmos dado el rol central que han adquirido.

Como advierte Silverman (2015, p. 205), las redes sociales ostentan un poder oculto y difuso, pero de gran influencia. Aunque dicho poder puede influenciar nuestras vidas pues el software toma decisiones por nosotros, sin embargo, está sujeto a muy poco escrutinio

(Silverman, 2015, p. 201). Y dichas decisiones están influenciadas por los deseos de los vendedores y programadores que han creado los algoritmos (Silverman, 2015, p. 202).

Las consecuencias del control de la distribución digital de las noticias por medio de algoritmos de los que nada sabemos y que son implementados por una, o un puñado de empresas, debe de ser motivo de reflexión.

Dicha reflexión debe hacerse tanto por las empresas, como Facebook, que los crean e implementan tanto como por los medios de comunicación y periódicos, sobre todo si otorgan el control de sus contenidos a cambio de nuevas oportunidades de negocio, que también pasan por recibir la información que dichos algoritmos procesan.

Para Pariser (2011, p. 231), la transparencia no solamente implica que las entrañas del sistema estén disponibles para el público sino también quiere decir que los usuarios deben de ser capaces de entender de manera intuitiva cómo funciona el sistema. Esto es necesario, dice, para que sean las personas las que controlen este tipo de herramientas y no al revés.

Es trabajo del usuario el ser consciente, conocer y entender lo mejor posible el papel de los algoritmos en la manera en que se consumen las noticias a través de una plataforma como Facebook, basándose en la información disponible, y como sociedad, se debe decidir si estamos conformes con lo que sabemos o si debemos exigir que se nos revele más en base a la exigencia de mejores prácticas de transparencia a este tipo de empresas, incluso si debe de ser por ley. Esto aplica también para cualquier otra implicación que tenga el proceso de nuestros datos en nuestras vidas.

Para que el usuario esté consciente que detrás de lo que ve sería una buena práctica que Facebook alerte en todo momento al usuario que los algoritmos están trabajando tras

bambalinas y que provea información sobre como la información que procesan incide en lo que un usuario puede ver.

A esto se le llama *seamful interfaces* que en español se traduciría como interfaz con costuras visibles, término opuesto al tan escuchado *seamless experience* o *seamless interface* (sin costuras) cuando se habla de tecnología, que viene a querer decir que el usuario no se da cuenta de la tecnología que hace posible una determinada experiencia a través de un dispositivo o plataforma digital.

Eslami, y otros (2016, p. 10) afirman que este diseño de costuras visibles, es decir, donde el usuario puede obtener información de cómo está trabajando un algoritmo en determinado momento, beneficiará no solo en cuanto a saber que el algoritmo está ahí, sino a toda la integración entre las personas y los algoritmos y toda acción humana en sistemas complejos. Este tipo de interfaces pueden ser una herramienta para que el usuario tenga control frente al sistema cuando los intereses de ambos sean opuestos.

La siguiente pregunta que se hace Desantes es ¿a qué necesidades de los consumidores de información responden y a cuáles deberían responder? La misma la responderemos en conjunción con la de qué mensajes son ignorados u omitidos, consciente e inconscientemente.

Sin duda, un aspecto positivo de Facebook como plataforma de distribución de noticias es la gran audiencia a la que puede llegar y la inmediatez con lo que lo hace. Instant Articles, permite al usuario leer noticias de manera, cómoda, rápida y atractiva.

Lo anterior es positivo, sobre todo para aquel usuario de menos recursos, que con un teléfono móvil de bajo coste y el plan de datos más barato, puede acceder a los contenidos de manera rápida y eficiente. No cabe duda que su misma tecnología, y esto es común a todas las redes sociales, hace posible que los ciudadanos recibamos información de manera rápida

y efectiva y tiene el potencial de que fomentar que haya más diversidad de voces y empresas realizando labores informativas.

Otra cuestión es si la información es siempre veraz, contrastada y adecuada y si podemos decir que en general, los usuarios reciben información relevante y de calidad, es decir, si podemos decir que están bien informados gracias a las redes sociales. ¿Son los algoritmos capaces de cubrir necesidades informativas adecuadamente?

El problema de los perfiles que las redes sociales crean de nosotros es que son imperfectos, y por lo tanto no necesariamente se corresponden con la realidad por lo que, como apunta Silverman (2015, p. 139), basar decisiones importantes en estos perfiles entraña riesgos. Existen indicios de que cuando se deja a las computadoras la tarea de tomar cualquier tipo de decisiones, se está a merced de las percepciones y prejuicios de quienes han creado el software.

Como ha reportado la organización ProPublica, al analizar los resultados obtenidos de utilizar software para determinar montos de fianzas fijadas a detenidos o incluso a la hora de imponer una sentencia, los afroamericanos siempre salieron peor parados, lo que sugiere que el uso de este software transmite los prejuicios de sus creadores a los resultados (Angwin, Larson, Mattu, & Kirchner, 2016). El trabajo de Bolukbasi, Chang, Zou, Saligrama y Kalai (2016) evidencia que una popular herramienta para presentar datos en formato de texto, conocida como *word embedding* y utilizada entre otros, por Google, perpetúa estereotipos de género.

Facebook comparte los datos que recaba de sus usuarios y luego permite a los anunciantes que compren espacio dentro de su plataforma dirigir dichos anuncios a categorías de usuarios específicas. Según Ballings y Van den Poel (2015, p. 28) Facebook busca que en

todo momento el anuncio publicitario adecuado llegue al usuario adecuado en el momento adecuado. Cada vez que un usuario visita Facebook, el mismo algoritmo escoge entre miles de anuncios y muestra los que considera más relevantes para cada persona determinada.

Las categorías que Facebook ha creado permiten excluir a determinados grupos para que no reciban determinados anuncios. Entre dichas categorías hay una llamada “afinidades étnicas”, lo que permite potencialmente excluir a ciertos grupos de información contenida en anuncios, como lo pueden ser ofertas de financiación de vivienda (Angwin y Parris Jr., 2016), o tal vez ofertas de empleo, lo cual podría considerarse como discriminación. Esto es muestra de que el factor humano, reflejado en quien ha creado estas categorías, puede llevar a resultados indeseados. Todo lo anterior a pesar de que las políticas de uso de Facebook digan prohibir cualquier forma de discriminación.

Otro problema que categorías de esta índole pueden traer es que, movidos por el dinero de anunciantes que prefieran dirigir publicidad a unos grupos y no a otros, los medios de comunicación prefieran crear contenidos informativos para publicar en Facebook que cubran ciertos temas y dejen de lado otros, proliferando entonces narrativas que no reflejan ni la vida ni los problemas de los distintos grupos que componen a la sociedad. Esto nos llevaría a una prensa menos plural y menos representativa; preocupación que no es nueva en el periodismo y que refleja las preocupaciones de Bagdikian (2004), McChesney y Nichols (2002) y Nerone (1995).

Para el tema que nos compete ahora mismo, entre las decisiones que se toman mediante algoritmos está cuáles noticias llegan a la ciudadanía y cuáles son presentadas como las más importantes y cuáles no, a qué fuentes se les da mayor importancia que a otras y cuáles son dignas de confianza y cuáles no.

Es el software el que toma decisiones por nosotros, pero dicho software está influenciado por los deseos de los entes comerciales y programadores que los han creado (Silverman, 2015, p. 202). Como ya dijimos antes, salvo que la empresa se comprometa a ser transparente, no tenemos forma de saber qué intereses comerciales o de otra índole podrían influenciar las noticias que efectivamente llegan a cada ciudadano.

El peligro está en que, mediante el uso de estos métodos, y a medida que los medios de comunicación se den cuenta que no tienen otra opción que utilizar servicios como Instant Articles para llegar a las audiencias y hacer dinero, el peligro será mayor.

Para Ananny (2016, p. 7) el flujo informativo contemporáneo se ve influenciado por cuatro dinámicas, las rutinas laborales (de los informadores), los ritmos de las plataformas, los algoritmos y la regulación.

Cada vez más, qué noticias son importantes y merecen ser reportadas dependerá de lo que es considerado importante por los algoritmos y no por quienes ejercen labores editoriales en los medios de comunicación ni por los mismos periodistas. Sería lamentable llegar a la situación en la que las empresas periodísticas decidan crear contenidos solamente basándose en su potencial para convertirse en virales (Silverman, 2015, p. 99) y tener máxima distribución en las redes sociales y no en base a su valor informativo.

Peor aún, si la confianza en el algoritmo es ciega, las mismas empresas periodísticas podrían decidir contratar a menos editores y valerse de procesos automáticos para decidir qué tipos de noticias son las que deben de producir para garantizar mayores utilidades; sin duda parecerá atractivo mantener software que es más barato que contratar personas y pagar sus salarios y beneficios (Pariser, 2011, p. 51).

La labor editorial por medio de algoritmos hecha por Facebook y la respectiva reacción de los medios informativos, que tomarán decisiones en base a datos supuestamente precisos es un serio peligro para la calidad del periodismo puesto que reduce la importancia del factor humano. Son las personas las que llevan a la profesión la conciencia de unos valores éticos y una vocación de servicio público que es una de sus características distintivas.

Así es que la respuesta debe de ser no. Las redes sociales y sus algoritmos no están *a priori* capacitados para garantizar que las necesidades informativas sean cubiertas adecuadamente pues, siguiendo a Desantes, no serán capaces de cubrir las necesidades informativas más importantes y terminarán ya sea de manera consciente o inconsciente, excluyendo mensajes de mayor valor informativo, para dar preferencia a los que den más rédito económico y gratificación inmediata.

Tanto Facebook como los medios de comunicación que producen los contenidos informativos lo harán de manera inconsciente si no se percatan de los defectos en los algoritmos o en los datos en los que se basan para tomar decisiones. Lo harán de manera consciente si las empresas periodísticas no se comportan de manera adecuada y buscan solamente producir contenidos que tengan asegurada su relevancia de acuerdo con los parámetros establecidos por los algoritmos.

La responsabilidad, pues, recae tanto en las empresas como en Facebook, quien debe aceptar su rol tanto como editor y como distribuidor y debe por lo tanto asegurarse de que sus algoritmos no lleven al periodismo a estas situaciones. Facebook debe de reconocer su responsabilidad para con el público.

Lo anterior también está relacionado con las consecuencias globales de su actuación y la influencia que ejercen sobre las corrientes de información y de opinión, que son las últimas dos preguntas que se hace Desantes. Bell (2016) se pregunta qué tipo de sociedad de

la información pretendemos crear y cómo podemos darle forma. Esta es una pregunta que no solamente Facebook debe hacerse, sino que nosotros como sociedad también debemos responder.

En base a eso debemos exigir responsabilidades tanto a estos nuevos tipos de editores y distribuidores de noticias, como a los tradicionales que están ante una nueva coyuntura en donde, como antes y a diferencia de lo que se decía de Internet, pasan a formar parte de un modelo en donde de nuevo es necesario un intermediario en los flujos informativos, un ente privado que se planta entre los creadores del contenido y los receptores del mismo.

Dicho intermediario, sea Facebook, sea otro, está obligado a sostener su actividad en sólidas bases éticas y deberá demostrar que pretende ser responsable con el público mediante una vocación por la transparencia que ha de adoptar por iniciativa propia y cuando sea necesario, como se acepta con los medios tradicionales, también deberá estar sujeto a regulación.

5 CONCLUSIONES ¿QUÉ RESPONSABILIDADES DEBEN EXIGIRSE A FACEBOOK?

Facebook debe de entender que lo quiera o no, juega un rol importantísimo en la manera en que los ciudadanos consumimos información a día de hoy. Como tal, debe de asumir los deberes y responsabilidades que esto conlleva.

La empresa, si bien tiene todo el derecho a utilizar sus algoritmos para los fines que crea necesarios, debe también entender que tiene responsabilidades para con el público si los va a utilizar para decidir que noticias merecen ser distribuidas entre el público y cuándo y cómo se les hacen llegar.

Facebook no debe desentenderse del factor humano. Debe de trabajar con periodistas dentro de su propia empresa y con los experimentados periodistas y comunicadores que

trabajan en los medios de comunicación que hoy son sus socios. Juntos deben de procurar estar a la altura y desempeñar una labor informativa adecuada y que, si bien es normal que esté influenciada por intereses comerciales, también debe de buscar servir al ciudadano y enriquecer la democracia. Ante todo, debe de tener claro que la labor informativa debe de tener una vocación de servicio público.

La empresa deberá procurar que sus programadores no sólo tengan grandes habilidades técnicas para crear e implementar algoritmos, también deberá procurar, si tratan con contenidos periodísticos, que los mismos se conduzcan con criterios éticos sólidos, quizás transmitidos por sus compañeros periodistas como sugieren Pariser (2011, p. 237) y Silverman (2015, p. 325).

La ética del programador es crucial, pues también debe de ser capaz de autoanalizarse y de ponderar las consecuencias de los algoritmos que crea e implementa para la vida de los ciudadanos en general, y tener en cuenta que su accionar puede tener consecuencias negativas para la sociedad.

Facebook debe hacer mayores esfuerzos de transparencia. Debe de procurar informar al usuario sobre qué información de los mismos posee y cómo la utiliza, ayudando también a que las personas puedan entender mejor qué consecuencias tiene el uso de esos datos en su vida, es decir qué consecuencias tienen las conclusiones sacadas a partir del proceso de esos datos para el ciudadano, qué ventajas le dan y a qué desventajas y peligros se enfrenta (Pariser, 2011, p. 327).

Una excelente propuesta, y que se ha probado con resultados empíricos, si bien pueden ser preliminares son las de Eslami, y otros (2016) y Kizilcec (2016) que abogan por una presencia manifiesta de los algoritmos en la experiencia digital que proporcione al usuario cierta información sobre su funcionamiento (lo que se conoce como *seamful design*),

incluyendo como la información que se recaba del mismo afecta lo que se puede ver en determinado momento. Es tiempo de hablar, dentro de la alfabetización digital, de una alfabetización en algoritmos, que nos permita ser conscientes y críticos de la influencia de estos procesos automáticos en nuestras vidas.

Pasando a posible regulación que puede ser adoptada, sería positivo que la legislación exija un mínimo de transparencia a toda empresa que maneje algoritmos, centrándose en la manera en que procesan los datos de las personas y en las consecuencias de dicho procesamiento, procurando que dicha legislación sirva para asegurarse que nadie actúe con dolo, irresponsabilidad o víctima del prejuicio en detrimento de grupos vulnerables.

En complemento con el requerimiento del programador de autoevaluarse, también puede ser valioso, como sugiere Christina Sandvig (Noyes, 2015), el imponer a las empresas tecnológicas un deber de auditarse: probar sus algoritmos y depurarlos de errores y prejuicios que lleven a dichas consecuencias indeseadas.

La legislación también debe de buscar que el usuario tenga el mayor grado de control posible sobre sus datos. En varios países existe legislación de protección de datos que busca asegurar la autodeterminación informativa de los ciudadanos, pensemos por ejemplo en la protección de datos personales establecida en el artículo 16 de la Constitución mexicana².

Otra alternativa es crear organismos dedicados a vigilar la adecuada implementación de algoritmos, aunque estos organismos no deben en ningún caso impedir la creación de los mismos. En Estados Unidos, la Comisión Federal del Comercio, FCC por sus siglas en inglés, ha creado un grupo que busca vigilar el uso de algoritmos para entender mejor cómo

² <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm>

funcionan y buscar formas para asegurar que no lleven a consecuencias indeseadas o nocivas para los ciudadanos (Noyes, 2015), es decir, organismos como estos deben ayudar a la mejora de los algoritmos, no a coartar su uso.

Antes mencionábamos el trabajo de ProPublica y de un grupo de investigadores de la Boston University junto con Microsoft Research New England. Estas investigaciones no tienen acceso directo a los algoritmos para ver cómo funcionan. Lo que hacen es una especie de ingeniería a la inversa para, como se suele decir, romper la caja negra (es decir, inferir cómo funciona un algoritmo sin tener acceso a su funcionamiento).

Sería positivo el proteger esta actividad a nivel legislativo y asegurar que desde la sociedad civil puedan realizarse libremente para someter a los algoritmos al escrutinio que se requiere, complementando así las mismas actividades de transparencia de las empresas que manejan datos, sean estas autoimpuestas o exigidas a través de legislación o cualquier otro escrutinio que pueda venir de entes gubernamentales.

Napoli (2015, p. 3) propone que, basándose en las sólidas bases que la obligación ética del periodista respecto del interés público ha creado, varios sectores de los medios se han autoimpuesto códigos de comportamiento que representan el concepto del interés público y que el cambio de plataformas no debería de ser la excepción. De la misma forma, el mismo autor sugiere (Napoli, 2015, p. 6) mirar a la Recomendación CM/Rec (2012) del Consejo de Europa pues deja claro que los mandatos regulatorios y códigos profesionales de conducta que son de aplicación a los medios tradicionales, deben de trasladarse a las redes sociales.

Las Naciones Unidas, en su marco para “proteger, respetar y remediar” en Empresas y Derechos humanos (United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2011; United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, 2012) establece que si bien son los gobiernos los que tienen el deber primario de proteger a los derechos humanos,

las empresas tienen el deber de respetarlos y ambas entidades deben de asegurar a los ciudadanos el acceso a las reparaciones adecuadas cuando estos se vean vulnerados.

Pero habrá que tener cuidado de que, respecto de la actividad informativa, la regulación no caiga directamente sobre la actividad de los medios de comunicación, incluso de Facebook cuando actúa como tal, pues invocaría el fantasma de la censura previa y puede desincentivar el uso de tecnología que tiene potencial para afectar positivamente la manera en que recibimos y distribuimos información. Ante todo, la legislación debe de respetar las libertades de expresión y de prensa.

La legislación debe de atender a la estructura de los algoritmos y los efectos de la forma en que distribuyen información, pero nunca debe de intentar regular el contenido de las noticias mismas.

La regulación debe de buscar proteger a la sociedad en su conjunto y a los datos de los usuarios, asegurando su buen uso. Debe asegurarse de que las empresas tomen las medidas necesarias para evitar que sus algoritmos puedan voluntaria o involuntariamente llevar a la censura de contenidos, o perpetuar la diseminación de información falsa o el discurso del odio y la incitación a la violencia contra grupos vulnerables, por ejemplo.

Pero para asegurar que los contenidos estén a la altura de lo que necesita una sociedad democrática bien informada, lo primero es exigir que el actuar de los periodistas también esté a la altura de las circunstancias, que los programadores basen su actuar en sólidas bases éticas y que empresas como Facebook reconozcan su rol en el proceso informativo y actúen adecuadamente, según lo que les dicte la conciencia y una vocación de servicio público que debe de ser el fundamento de sus actividades.

BIBLIOGRAFÍA

- Alejandro, J. (2010). Journalism in the Age of Social Media. *Reuters Institute Fellowship Paper*.
- Ananny, M. (2016). Networked News Time. *Digital Journalism*.
- Angwin, J., & Parris Jr., T. (28 de octubre de 2016). *Facebook Lets Advertisers Exclude Users by Race*. Recuperado el 28 de octubre de 2016, de ProPublica: <https://www.propublica.org/article/facebook-lets-advertisers-exclude-users-by-race>
- Angwin, J., Larson, J., Mattu, S., & Kirchner, L. (23 de mayo de 2016). *Machine Bias. There's software used across the country to predict future criminals. And it's biased against blacks*. Recuperado el 8 de junio de 2016, de ProPublica: <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>
- Bagdikian, B. (2004). *The New Media Monopoly: A Completely Revised and Updated Edition With Seven New Chapters* (20th ed.). Boston: Beacon Press.
- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Scienceexpress*.
- Ballings, M., & Van den Poel, D. (2015). CRM in Social Media: Predicting Increases in Facebook Usage Frequency. *European Journal of Operational Research*.
- Barthel, M., Elisa, S., Gottfried, J., & Mitchell, A. (14 de julio de 2015). *The Evolving Role of News on Twitter and Facebook*. Recuperado el 8 de febrero de 2016, de www.journalism.org: <http://www.journalism.org/2015/07/14/the-evolving-role-of-news-on-twitter-and-facebook/>
- Bell, E. (7 de marzo de 2016). *Facebook is eating the world*. Recuperado el 7 de marzo de 2016, de Columbia Journalism Review: http://www.cjr.org/analysis/facebook_and_media.php
- Bolukbasi, T., Chang, K.-W., Zou, J., Saligrama, V., & Kalai, A. (2016). Quantifying and Reducing Stereotypes in Word Embeddings. *2016 ICML Workshop on #Data4Good: Machine Learning in Social Good Applications*. arXiv:1606.06121[cs.CL], 41-45.
- Bucher, T. (2016). The algorithmic imaginary: exploring the ordinary affects of Facebook algorithms. *Communication & Society*.
- Burset Touron, M. (2003). *Deontología, Función Social y Responsabilidad de los Profesionales de la Comunicación*. Madrid: Editorial Complutense.
- Cetina Presuel, R. (2010). Privacidad en las redes sociales: Dos casos prácticos, las políticas de usuarios de Facebook y Google. En *Las Audiencias Activas, nuevas formas de participación pública. Consideraciones éticas y jurídicas*. (págs. 161-182). Guadalajara: Universidad Panamericana - Fundación Coso.
- Constine, J. (27 de enero de 2016). *Facebook Climbs to 1.59 Billion Users and Crushes Q4 Estimates with \$5.8B Revenue*. Recuperado el 8 de febrero de 2016, de Techcrunch: <http://techcrunch.com/2016/01/27/facebook-earnings-q4-2015/>
- Curran, J., & Seaton, J. (2009). *Power Without Responsibility: Press, Broadcasting and the Internet in Britain* (7th Edition ed.). London and New York: Routledge.

- Davies, J. (15 de diciembre de 2015). *How UK publishers are using Facebook Instant Articles*. Recuperado el 28 de abril de 2016, de DIGIDAY: <http://digiday.com/publishers/uk-publishers-using-facebook-instant-articles/>
- Desantes Guanter, J. M. (1974). *La Información como Derecho*. Madrid: Editorial Nacional.
- Dewey, C. (12 de octubre de 2016). *Facebook has repeatedly trended fake news since firing its human editors*. Recuperado el 12 de octubre de 2016, de The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/news/the-intersect/wp/2016/10/12/facebook-has-repeatedly-trended-fake-news-since-firing-its-human-editors/>
- Eslami, M., Karahalios, K., Sandvig, C., Vaccaro, K., Rickman, A., Hamilton, K., & Kirlik, A. (2016). First I "like" it, then I hide it: Folk Theories of Social Feeds. *ACM*.
- Europa Press. (16 de 12 de 2014). *Google News cierra desde hoy en España*. Recuperado el 17 de junio de 2016, de elmundo.es: <http://www.elmundo.es/tecnologia/2014/12/16/548f9448e2704eed688b458d.html>
- Europe, C. o. (2012). Recommendation CM/Rec(2012)4 of the Committee of Ministers to member states on the protection of human rights with regard to social networking services.
- Facebook. (s.f.). *Instant Articles*. Recuperado el 15 de mayo de 2016, de Facebook for developers: <https://developers.facebook.com/docs/instant-articles>
- Gutiérrez, Ó. (1 de diciembre de 2015). *Instant Articles de Facebook llega a America Latina*. Recuperado el 8 de marzo de 2016, de Cnet: `javascript:document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(document.createElement('script')).setAttribute('src','https://www.mendeley.com/minified/bookmarklet.js');`
- Halleck, T. (30 de enero de 2015). *Facebook: One Out of Every Five People On Earth Have An Active Account*. Recuperado el 8 de febrero de 2016, de ibtimes.com: <http://www.ibtimes.com/facebook-one-out-every-five-people-earth-have-active-account-1801240>
- Hazard Owen, L. (30 de noviembre de 2015). *"Why not be all the way in?" How publishers are using Facebook Instant Articles*. Recuperado el 28 de abril de 2016, de NiemanLab: <http://www.niemanlab.org/2015/11/why-not-be-all-the-way-in-how-publishers-are-using-facebook-instant-articles/>
- Herrman, J., & Isaac, M. (9 de mayo de 2016). *Conservatives Accuse Facebook of Political Bias*. Recuperado el 15 de septiembre de 2016, de The New York Times: http://www.nytimes.com/2016/05/10/technology/conservatives-accuse-facebook-of-political-bias.html?_r=0
- Ingram, M. (18 de agosto de 2016). *Facebook has taken over from Google as a traffic source for news*. Recuperado el 1 de septiembre de 2016, de Fortune: <http://fortune.com/2015/08/18/facebook-google/>
- Jackson, B. F. (2014). Censorship and Freedom of Expression in the Age of Facebook. *New Mexico Law Review*, 44, 121-167.
- Jewell, J. (21 de mayo de 2015). *Is Facebook's Instant Articles the end of the paywall?* Recuperado el 15 de febrero de 2016, de Fourth estate follies: Trawling through the dustbins of the UK media: <https://theconversation.com/is-facebooks-instant-articles-the-end-of-the-paywall-42205>

- Jomini Stroud, N., Scacco, J. M., Muddiman, A., & Curry, A. L. (2015). Changing Deliberative Norms on News Organizations' Facebook Sites. *Journal of Computer-mediated Communication*, 20, 188-203.
- Keenan, T. (6 de julio de 2016). *The Future of Mobile Content: Facebook Instant Articles vs. Google AMP*. Recuperado el 7 de julio de 2016, de Business 2 Community: <http://www.business2community.com/brandviews/upwork/future-mobile-content-facebook-instant-articles-vs-google-amp-01589166#LOxY48PiR84fDPzX.97>
- Kizilcec, R. F. (2016). Interface, How Much Information? Effects of Transparency on Trust in an Algorithm. *AMC*.
- Lessig, L. (1999). *Code: And Other Laws of Cyberspace*. New York: Basic Books.
- Luckerson, V. (9 de julio de 2015). *Here's How Facebook's News Feed Actually Works*. Recuperado el 8 de febrero de 2016, de Time: <http://time.com/3950525/facebook-news-feed-algorithm/>
- Marcos Recio, J. C., Sánchez Vigil, J. M., & Olivera Zaldúa, M. (2015). Google News y el impacto de la Ley de Propiedad Intelectual en la prensa: un nuevo amanecer para la información. *Documentación de las Ciencias de la Información*, 38, 67-81.
- Mason, P. (2015). *Postcapitalism: A Guide to our Future*. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- McAlone, N. (12 de marzo de 2016). *Publishers reveal what it's really like using Facebook's Instant Articles so far*. Recuperado el 30 de abril de 2016, de Business Insider: <http://www.businessinsider.com/initial-reactions-to-facebook-instant-articles-2016-3>
- McChesney, R. W., & Nichols, J. (2002). *Our Media, Not Theirs. The Democratic Struggle against Corporate Media*. New York: Seven Stories Press.
- McKelvey, F. (2014). Algorithmic Media Need Democratic Methods: Why Publics Matter. *Canadian Journal of Communication*, 39, 597-613.
- Meyer, P. (2004). *The Vanishing Newspaper: Saving Journalism in the Information Age*. Columbia, Missouri: University of Missouri.
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom*. New York: Public Affairs.
- Moses, L. (1 de marzo de 2016). *How the Washington Post, Slate and other publishers are using Facebook Instant Articles*. Recuperado el 30 de abril de 2016, de Digiday: <http://digiday.com/publishers/4-publishers-using-facebook-instant-articles/>
- Napoli, P. M. (2015). Social media and the public interest: Governance of news platforms in the realm of individual and algorithmic gatekeepers. *Telecommunications Policy*.
- Nathenson, I. S. (2013). Super-Intermediaries, Code, Human Rights. *Intercultural Human Rights Law Review*, 8, 19-175.
- Nerone, J. C. (Ed.). (1995). *Last Rights*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Noyes, K. (9 de abril de 2015). *The FTC is worried about algorithmic transparency, and you should be too*. Recuperado el 2 de junio de 2016, de Computerworld: <http://www.computerworld.com/article/2908157/the-ftc-is-worried-about-algorithmic-transparency-and-you-should-be-too.html>
- Nunez, M. (9 de mayo de 2016). *Former Facebook Workers: We Routinely Suppressed Conservative News*. Recuperado el 15 de septiembre de 2016, de Gizmodo.com: <http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-1775461006>

- Pariser, E. (2011). *The Filter Bubble. What the Internet is hiding from you*. New York: The Penguin Press.
- Segreti, G. (29 de agosto de 2016). *Facebook CEO says group will not become a media company*. Recuperado el 30 de agosto de 2016, de Reuters: <http://www.reuters.com/article/us-facebook-zuckerberg-idUSKCN1141WN>
- Silverman, J. (2015). *Terms of Service. Social MEdia and the Price of Constant Connection*. New York: Harper Perennial.
- Southern, L. (23 de marzo de 2016). *For France's Libération, Facebook Instant ARticles drives a 30 percent increase in time spent*. Recuperado el 30 de abril de 2016, de Digiday: <http://digiday.com/publishers/facebook-instant-articles-leads-30-percent-increase-time-spent-liberation/>
- Thielman, S. (12 de mayo de 2016). *Facebook news selection is in hands of editors not algorithms, documents show*. Recuperado el 10 de septiembre de 2016, de The Guardian: <https://www.theguardian.com/technology/2016/may/12/facebook-trending-news-leaked-documents-editor-guidelines>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2011). *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*. United Nations.
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2012). *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*. United Nations.
- WashPostPR. (22 de septiembre de 2015). *The Washington Post Launches Instant Articles on Facebook*. Recuperado el 8 de febrero de 2016, de The Washington Post: <https://www.washingtonpost.com/pr/wp/2015/09/22/the-washington-post-launches-instant-articles-on-facebook/>

Parte 2: Desafíos actuales e investigación en Derecho y Ética de la Información

TELEVISIONES PÚBLICAS ¿NUEVAS ORGANIZACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE TELEVISIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL? IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL, PLURALISMO, PARTICIPACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

Ana Azurmendi
Mercedes Muñoz Saldaña
Universidad de Navarra, España

INTRODUCCIÓN

LAS OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO CONSTITUYEN LA ESENCIA DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS TELEVISIONES PÚBLICAS. DIFUNDIR LA IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL, PROMOVER EL PLURALISMO, LA PARTICIPACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ES PARTE INTEGRANTE DE LA MISIÓN HISTÓRICA ATRIBUIDA AL *PUBLIC SERVICE BROADCASTING* (en adelante, *PSB*). Estas obligaciones permanecen vigentes en el curso de las transformaciones por el impacto de Internet. Sin embargo, no se puede negar que en este proceso, el *PSB* se enfrenta a importantes problemas, principalmente de carácter financiero, que amenazan su existencia (Tremblay, 2016) y minan su legitimidad (Carpentier, 2015).

En el caso de España, el *PSB* –representado por RTVE y las 11 televisiones públicas autonómicas existentes– también se enfrenta a importantes cambios estructurales para adecuarse al entorno digital. Todos estos operadores cuentan con servicios multiplataforma, emisiones en streaming, televisión a la carta y archivos de programas anteriores¹, además de estar presentes en redes sociales, tanto institucionalmente como a través de las cuentas de sus

¹ Destaca el caso de RTVE que opera como un archivo documental histórico.

programas. Aunque, hoy por hoy, como señala Doyle (2010), la televisión convencional sigue siendo la vía principal de acceso de la audiencia; es indudable, como advierte Ruano López (2013), que la forma de ver televisión sí está cambiando hasta el punto de que el concepto de “parrillas” de programación pierde sentido cuando lo que el telespectador demanda es ver televisión cuándo, dónde y cómo él quiera.

De hecho, el desarrollo de la televisión para smartphones, tablets y futuras plataformas móviles está revolucionando el mundo de la producción audiovisual, de su difusión, de la publicidad, del marketing y de la interacción con los usuarios. Algo especialmente relevante en España, donde en diciembre de 2014 el número de líneas móviles superó los 50,6 millones, siendo 17,6 millones entre 18 y 55 años quienes acceden a Internet mediante el Smartphone y de ellos, un 82% -14 millones- es activo en redes sociales².

Teniendo en cuenta este contexto la cuestión es: ¿en qué medida esas obligaciones atribuidas al *PSB* han adquirido nuevas formas atendiendo a los cambios de una televisión convencional a la “televisión conectada”? La doctrina, la legislación y la profesión han abordado esta cuestión cuya respuesta es, hoy más que nunca, necesaria. La importancia de determinar si existen o no cambios en la conceptualización de dichas obligaciones estriba en que la financiación pública de estos medios sólo se justifica en la medida en cumplan una serie de misiones definidas y atribuidas previamente capaces de legitimar su permanencia en un contexto de libre mercado (Muñoz Saldaña M. 2011, 2015).

Esta investigación pretende contribuir a dar respuesta a la cuestión de la continuidad de las misiones de servicio público en el contexto digital, en concreto, en lo que respecta al

² Datos del Informe “Ditrendia: mobile en España 2015”. Disponible en: <http://www.ditrendia.es/wp-content/uploads/2015/07/Ditrendia-Informe-Mobile-en-Espa%C3%B1a-y-en-el-Mundo-2015.pdf> [Consultado 8 de junio de 2016]

futuro de televisiones públicas autonómicas en España. Para ello, este estudio: en primer lugar, compendia las aportaciones de la legislación europea (y textos complementarios) y española, en particular, en los aspectos que se refieren a las obligaciones del *PSB* en la sociedad de la información; en segundo lugar, repasa las aportaciones de la investigación reciente sobre la evolución y contenido del *PSB* en el entorno digital; en tercer lugar, analiza cómo se han concretado las obligaciones de servicio público relacionadas con lo digital en el caso de las televisiones públicas autonómicas españolas (a través de los contratos-programa); para, finalmente, realizar una valoración y propuesta con los datos obtenidos.

1. MISIONES DEL *PSB* EN EL CONTEXTO DIGITAL: ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO Y TEXTOS ESPECÍFICOS

En el ámbito de la regulación audiovisual, aunque ésta es deudora de la política comunitaria, las autoridades nacionales tienen un papel primordial en la identificación y definición de las misiones de servicio público atribuibles a las televisiones públicas. Sin embargo, como punto de partida, las instituciones comunitarias han apuntado como obligaciones comunes de cualquier actividad que sea calificada como servicio público:

-La prestación de un servicio universal: se considera que “este concepto establece el derecho de toda persona a acceder a determinados servicios considerados esenciales e impone a los proveedores la obligación de prestar servicios concretos en condiciones precisas, con una cobertura territorial completa y a un precio asequible” (COM (2004) 374 final, p. 8).

-La calidad del servicio: la necesidad de alcanzar unos niveles de calidad socialmente aceptables puede justificar por sí sola la imposición de una serie de obligaciones de servicio público a través de una regulación específica. A pesar de que

no existe consenso acerca de una definición general de calidad, ésta se asocia a Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

cuestiones como una adecuada cobertura territorial, la continuidad de la prestación, la transparencia financiera, la asequibilidad del servicio y la salvaguarda de los derechos de consumidores o usuarios.

-Protección de consumidores y usuarios, en especial de colectivos como menores.

Las autoridades de cada Estado, teniendo en cuenta estos criterios generales, asumen la responsabilidad de concretar las misiones específicas que corresponden a cada sector y, de acuerdo con esta competencia, pueden tomar decisiones en el ámbito nacional, regional o local. En el contexto de esta investigación, la revisión de dicha legislación va destinada a identificar qué referencias hay sobre el cumplimiento de las misiones de servicio público audiovisual en el ámbito digital en Europa y en España.

En el caso de la televisión, la **Ley 17/2006, de 5 junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal** atribuye la calificación de servicio público a las actividades encomendadas a la corporación RTVE y, así, en su artículo 2 califica este servicio como: “esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas”; cuya función abarca:

-“la producción de contenidos y la edición y difusión de canales generalistas y temáticos, en abierto o codificados, en el ámbito nacional e internacional, así como la **oferta de servicios conexos o interactivos**”;

-con la finalidad de “satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española”; de “difundir su identidad y diversidad culturales”; de “**impulsar la sociedad de la información**”; y de “promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos a través de la prestación de un

servicio de cobertura universal, entendiendo por tal la mayor cobertura posible del territorio nacional”.

Esta definición se completa en el art. 3 de esta misma ley nacional con un amplio listado de funciones, entre las que se incluyen: promover el derecho de acceso a los medios; ofrecer acceso a los distintos géneros de programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos de interés general; apoyar la integración de las minorías; asegurar la máxima continuidad y cobertura geográfica y social con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética; y preservar los derechos de los menores.

Por su parte, la **Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española** añade, en su artículo 9 (capítulo V), otro extenso listado de “obligaciones adicionales de servicio público”, que también competen a RTVE, y que incluye, entre otras, la misión de: **“incorporar en sus programas “servicios interactivos en los que se dé acceso a los grupos políticos, sindicales y sociales”;**

La **Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual** tampoco renuncia a contribuir en la definición el servicio público de comunicación audiovisual y dispone en su artículo 40 que dichos servicios tienen como misión: difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales; contribuir a la formación de una opinión pública plural; dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España; difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento de una cultura audiovisual; y atender a aquellos ciudadanos y grupos sociales que no son destinatarios de la programación mayoritaria.

Además, la Ley General Audiovisual, condiciona el cumplimiento de estas misiones a “la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio, televisión y **servicios** Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2 205

de información en línea con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros, destinadas a satisfacer las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad y a preservar el pluralismo en los medios de comunicación” (art. 41).

Como se puede apreciar la legislación audiovisual española sí hace referencia, aunque sea de manera general y abierta, a la necesaria satisfacción de las misiones de servicio público audiovisual en el contexto digital.

Sin embargo, ha sido la Comisión Europea la institución que, de una forma más concreta, se ha *mojado* a la hora de contemplar la prestación de misiones en el ámbito digital como parte de las obligaciones de servicio público atribuibles a las televisiones europeas. De hecho, las consideraciones de la Comisión cobran especial relevancia ya que han sido integradas en el documento de referencia en el cual se justifica la financiación de dichas misiones con cargo a las arcas públicas: la **Comunicación sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a la financiación de los servicios públicos de radiodifusión**, publicada en 2001 (2001/C 320/04) y actualizada en 2009 (2009/C 257/01).

La Comisión Europea se refiere en diversas ocasiones en este documento a la obligación de extender e implementar las obligaciones de servicio público audiovisual en el nuevo contexto digital y de la sociedad de la información. En primer lugar, en el punto que aborda el *El papel de los servicios públicos de radiodifusión* (p. 2) advierte que “éstos **deben seguir «aprovechando el progreso tecnológico», poner «al alcance de los ciudadanos los beneficios de los nuevos servicios audiovisuales y de información y de las nuevas tecnologías» y emprender «el desarrollo y la diversificación de actividades en la era digital.**

En segundo lugar, cuando la Comisión aborda en este documento el espinoso asunto de la definición de las misiones de servicio público susceptibles de financiación estatal asume que, dada la naturaleza específica de radiodifusión, cabe considerar legítima una definición de misión de servicio público de carácter cualitativo “que encomiende a un operador determinado la obligación de suministrar una amplia gama de programas y una oferta de programación equilibrada y variada”. Incluso, dicha definición puede reflejar **“el desarrollo y la diversificación de las actividades en la era digital e incluir servicios audiovisuales en todas las plataformas de distribución”** (punto. 47). De hecho, aun asumiendo que la prerrogativa de definir las misiones de servicio público corresponde a las autoridades nacionales, recuerda que, *a priori*, sólo permanecen al margen de esta definición aquellas actividades: “de las que no pudiera razonablemente considerarse que satisfacen — en los términos del Protocolo — las «necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad»”. Este sería el caso, por ejemplo, de la comunicación comercial o del comercio electrónico. También entiende como error manifiesto el incluir en dicha definición/misión: “actividades que no suponen un valor añadido en términos de satisfacción de las necesidades sociales, democráticas y culturales de la sociedad” (p. 48).

Añadido a las consideraciones anteriores, las instituciones europeas, en ocasiones, han abordado de manera específica el futuro digital del *PSB* servicio público a través de documentos que, a pesar de no tener fuerza jurídica, resultan interesantes para esta investigación. Es el caso de la **Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la misión de los medios de comunicación de servicio público en la**

sociedad de la información (2010)³ o el Informe del Parlamento Europeo 2009-2014 sobre el servicio público de radiodifusión en la era digital: el futuro sistema dual⁴.

El punto neurálgico reside, por un lado, en la necesidad de garantizar, de una manera actualizada al contexto digital, la misión histórica atribuida al *PSM* (*Public Service Media*); y, por otro, en el convencimiento sobre la dificultad de conseguir dichos objetivos en un ámbito exclusivo de libre competencia. Con el objetivo de asegurar la legitimidad del *PSM* en la sociedad de la Información, estos textos proponen:

1. Disponer un mandato claro para dichos medios y dotarles de los medios técnicos adecuados para poder satisfacer su misión adaptándose a los cambios tecnológicos, a los nuevos consumos y las expectativas de la audiencia.
2. Incluir, donde no se haya realizado aún, disposiciones legales específicas sobre el papel de los *PSM* en el ámbito digital permitiendo así explotar su potencial y, especialmente promover la participación social, democrática y cultural gracias a la interactividad
3. Garantizar la sostenibilidad de *PSM* en términos financieros y organizacionales proporcionando las condiciones necesarias para llevar a cabo su misión en el entorno digital de manera transparente y responsable.
4. Capacitar a los *PSM* para responder de manera eficaz a los retos de la sociedad de la información respetando la convivencia pública-privada del mercado electrónico y respetando las leyes de la competencia

³ Recomendación CM/Rec(2007)3 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la misión de los medios de comunicación de servicio público en la sociedad de la información, adoptada el 31 de enero de 2007 en la 985ª reunión de los representantes de los Ministros.

⁴ 2010/2028 (INI)

5. Asegurar el acceso universal a todos los ciudadanos y grupos sociales a los *PSM*, incluyendo minorías y grupos desfavorecidos, a través de los diferentes soportes tecnológicos.

6. Difundir y llamar la atención sobre las consideraciones anteriores de las autoridades públicas, los medios implicados, los sectores profesionales y la ciudadanía para que se den las condiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las misiones de servicio público en el nuevo escenario mediático.

Con esta hoja de ruta, se propone, entre otras cuestiones, una **Guía de Principios de los medios de servicio público (PSM) en la sociedad de la información**. Esta Guía, que resulta especialmente ilustrativa para la investigación en curso, distingue: por un lado, las **misiones básicas** que perduran y son inmutables en el nuevo contexto; y, por otro, aquellas **obligaciones nuevas**, asociadas a misiones estables, pero derivadas de nuevas necesidades de la sociedad de la información.

En el primer grupo se integrarían aquéllos objetivos estables, presentes en los servicios públicos de radiodifusión tradicionales, como: 1) servir de punto de referencia a todos los ciudadanos ofreciendo un servicio de carácter universal; 2) ser un factor de cohesión social, de integración de individuos, grupos y comunidades; 3) constituir una fuente de información imparcial e independiente, capaz de innovar en sus contenidos y con unos estándares altos en calidad y en principios éticos; 4) ofrecer un foro de discusión pública plural y medios para promover la participación pública de la ciudadanía; 5) fomentar la creación y la producción audiovisual promoviendo la difusión del patrimonio cultural propio. Estas misiones deben permanecer en la oferta de contenidos y servicios disponibles en las distintas pantallas en la Sociedad de la Información.

En el segundo grupo, en el que se actualizan las obligaciones específicas relacionadas con cada una de las misiones “estables” anteriormente mencionadas cabe destacar a modo de ejemplo:

- 1) La actualización de la misión “servir como punto de referencia para el público y prestar un servicio universal” implicaría:
 - asegurar que la oferta de contenidos informativos, educativos, culturales deportivos y de entretenimiento prestados por los medios de servicio público está presente en las diferentes plataformas con los recursos necesarios para este fin.
 - Adaptarse a las nuevas formas de consumo ofreciendo contenidos interactivos y bajo demanda.
 - Promover formas activas de comunicación Integrando a la generación más joven, por ejemplo, ofreciéndole la posibilidad de participar con contenidos propios y estableciendo otros esquemas participativos.

- 2) La actualización de la misión “ser un factor de cohesión social, de integración de individuos, grupos y comunidades” exigiría:
 - Proporcionar herramientas a los diferentes grupos, individuos o comunidades que reunieran el requisito de la utilidad en esta tarea de integración o cohesión poniendo el acento en los más desfavorecidos
 - Contribuir a la superación de la brecha digital y al incremento de la alfabetización digital.

- Garantizar la acesibilidad de los programas y servicios en las nuevas plataformas
- 3) La actualización de la misión “constituir una fuente de información imparcial e independiente, capaz de innovar en sus contenidos y con unos estándares altos en calidad y en principios éticos” sugiere:
- La necesidad de que los medios de servicio público continúen siendo, dentro de la plataforma digital, un punto de referencia en la credibilidad y la confianza.
 - Un punto de encuentro entre diferentes sensibilidades e ideologías, de tal forma que se reduzca la fragmentación y se favorezca la participación y el desarrollo de la sociedad civil en los diferentes ámbitos.
- 4) La actualización de la misión “ofrecer un foro de discusión pública plural y medios para promover la participación pública de la ciudadanía” implica:
- Promover el debate público sobre asuntos públicos de interés general en la Sociedad de la Información
 - Fomentar la participación democrática (tanto en las elecciones como en otros procesos de toma de decisiones o debates sobre asuntos de trascendencia social) y difundir los valores propios de la democracia
 - Activar, en el ámbito digital, una cultura de la tolerancia y del entendimiento.
 - Desempeñar una labor protagonista en la misión de “hacer rendir cuentas” a los Gobiernos y a las Instituciones europeas, abogando por la transparencia y contribuyendo al desarrollo de una esfera pública europea abierta y en comunicación permanente.

- Promover el diálogo, a través de la interactividad, entre ciudadanos e instituciones, instituciones y grupos sociales, etc.
- 5) Por último, en relación con la misión de “fomentar la creación y la producción audiovisual promoviendo la difusión del patrimonio cultural propio” y su aplicación a la esfera digital cabe resaltar:
- En relación a la promoción de la identidad y la diversidad cultural, es importante la promoción de contenidos originales en nuevos formatos, así como la difusión de obras audiovisuales de contenidos locales con características propias.
 - Reflejar y apoyar la diversidad cultural en: música, arte, teatro, eventos culturales y espectáculos.
 - Digitalizar sus archivos, así como hacerlos accesibles al público
 - Promover el diálogo intercultural respetando la identidad y valores de cada territorio.

Como se puede apreciar hay ámbitos en los que, por las propias características de la comunicación digital, la actualización de las misiones de servicio público cobra especial importancia y se traduce en medidas más concretas, novedosas, que se diferencian de las aplicadas en los medios tradicionales. Es el caso de: fomentar la participación y el desarrollo democrático a través del diálogo y la ciudadanía activa gracias a la interactividad; promover la creación y producción de contenidos diversos, de ámbito local y regional, que no encuentran cabida en otros soportes; fomentar el intercambio cultural y la cohesión social a través de plataformas públicas abiertas a todos los ciudadanos; y, conservar y compartir un espacio con la ciudadanía destinado a “fiscalizar” la labor de gobiernos y autoridades

europeas promoviendo una sociedad más transparente y comprometidas con los asuntos públicos.

2. BREVE APUNTE SOBRE LAS APORTACIONES DE LAS INVESTIGACIONES RECIENTES

El marco jurídico sobre el futuro del *PSB/PSM* proporciona un esquema conceptual y práctico que resultaría suficiente para analizar el futuro de las televisiones autonómicas públicas españolas en el contexto digital. Sin embargo, el repaso de las investigaciones publicadas en los últimos años sobre este tema completa desde el punto de vista teórico las consideraciones expuestas con anterioridad y aporta pistas interesantes sobre lo que está ocurriendo en el ámbito práctico en otros países.

Como punto de partida, cabe destacar que todas las aportaciones asumen el inevitable proceso de cambio al que se están viendo sometidos los *PSB* que ahora pasan a ser *PSM*, es decir: medios de servicio público que se expanden a las nuevas plataformas y redes y experimentan en la oferta de nuevos contenidos interactivos. También coinciden las investigaciones en que este proceso no está exento de polémica, los *PSM* se enfrentan a poderosos enemigos, antiguos y nuevos, que cuestionan la presencia de estos servicios en un ámbito, el impulsado por la digitalización y la sociedad de la información, que parece nacido por y para la competencia.

Sin embargo, como apunta Debrett (2015), animados por un instinto natural de supervivencia y guiados por su obligación de innovar los *PSM* se empeñan en superar los obstáculos existentes, también regulatorios, y aportar el valor necesario al público en el que fundamentar la legitimidad de su misión (p. 557). Desde una perspectiva crítica, algunas investigaciones pone el énfasis en la flexibilidad conceptual y oportunidad política de la aplicación del término servicio público a los medios e incluso algunos apuestan por renunciar

a este concepto y arriesgar renunciando en la sociedad de la información a los *PSM* y

apostando por otro tipos de servicios como pueden ser los “community services” (Carpentier (2015, p. 17). Estos servicios se definirían, principalmente, por la participación ciudadana y por estar centrados en ámbitos regionales o locales donde dicha participación es posible.

No obstante sigue habiendo defensores a ultranza de los *PSM* que, como Hendy (2013) o Trambley (2016), apuestan por un futuro prometedor para los *PSM* en el contexto digital. Como primeras conclusiones de una investigación, iniciada en 2014 y aún en curso sobre la situación de los *PSM* en Canadá, Francia y Reino Unido⁵, Trambley sostiene que su futuro pasa por recuperar la legitimidad y la convicción de su utilidad por parte de los ciudadanos (p. 195). Esta corriente, defiende la actualidad y permanencia de las tradicionales misiones de informar, educar y entretener encomendadas a los *PSM* aplicadas al contexto digital.

Así, ante la misión de informar ciudadanos se argumenta que: el hecho de que la sociedad de la información proporcione una mayor accesibilidad a más contenidos no resta valor a la función de los medios de servicio público, sino al revés. Ya que ésta, la accesibilidad, no implica necesariamente calidad o pluralismo. Se necesita tiempo y preparación para buscar la información pertinente, capacidad para evaluarla y un conocimiento adecuado para entender su significado (Trambley, p. 197). En la lo que respecta a la función educativa, reivindican el papel histórico de los medios de servicio público como promotores y distribuidores de educación y cultura y la vigencia de esta misión en el espacio digital (Hendy, 2013). Teniendo en cuenta la misión realizada a este respecto por la BBC

⁵ Project “Renewal of public service media in the internet age in France, the UK, and Canada” funded from the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC) with research grant number 435-2014-1300.

(Reino Unido), France Television (Francia) o CBC/SRC (Canadá), destacando la labor de la primera, no parece que el mercado vaya de ofrecer, por sí solo, ya que no lo hace en la actualidad, dichos contenidos en la sociedad de la información. Por último, en lo que se refiere al entretenimiento, estos autores reconocen que es en este ámbito donde la lucha resulta más feroz entre medios públicos y comerciales y donde la defensa de los primeros parece más compleja. La pregunta, sin duda, resulta compleja: ¿merece la pena o resulta adecuado invertir recursos públicos en contenidos de entretenimiento a través de internet? Los medios privados argumentan que en este sector (eventos deportivos, espectáculos o ficción) de beneficios suculentos el mercado tiene capacidad, por sí solo, para satisfacer las necesidades del público. Ahora bien, estos autores sostienen que, si este argumento se admite como válido y, por tanto, el entretenimiento se considera una actividad exclusiva del ámbito privado, ¿por qué no extrapolarlo a otras actividades como la intervención pública en la construcción de infraestructuras que posibilitan dichos acontecimientos o la dotación de subvenciones a actividades deportivas y culturales? Con esta consideración se oponen, de raíz, al argumento dogmático que sostiene que el ámbito público deba quedar al margen de este sector.

Sin embargo, se admite que deben existir diferencias entre la aproximación que realicen los medios de servicios público y comerciales a este campo. Los medios de servicio público deben estar al servicio, por un lado, de la innovación y, por otro, de la atención a las necesidades de todos los ciudadanos, incluidas las minorías y los sectores más desfavorecidos o marginados. Obviamente, esta aproximación, menos centrada en los beneficios económicos o en la demanda inmediata, no será financiable con recursos publicitarios por lo que precisará de ingresos públicos que deben ser previstos por las autoridades respectivas. A este respecto

la crítica viene por la vía de la escasa inversión en la reconversión digital, la cual, aunque se

ha incrementado en los últimos ejercicios, sigue siendo escasa. Sirva como ejemplo en caso de France Télévision en el que, aunque el presupuesto se incrementó en el 2014 un 78%; sin embargo, en referencia con el total, no llega al 3% de la inversión. Al margen de la necesidad de convencer a los operadores sobre la necesidad de repensar el cumplimiento de su misión en Internet⁶, resulta imposible, sostienen estos autores, exigir innovación, accesibilidad y liderazgo sin invertir los recursos adecuados.

Esta corriente defensora recuerda que los *PSM*, como la BBC, han liderado el sector, entre otros logros, por la riqueza de su programación, por su innovación y por la puesta en marcha de servicios de éxito como el *podcasting*. Apuestan por no olvidar el recorrido e impacto social del *PSB*, sus valores e identidad, los cuales, con un recorrido de más de 80 años, han situado a los *PSM* en una posición inigualable para apostar por los nuevos “bienes comunes” digitales asumiendo: el reto de ofrecer una **esfera pública digital**, para todos, abierta a la creatividad, a la conversación y al debate.

En esta misma línea, aunque poniendo un mayor énfasis en la necesidad de innovar en la búsqueda de métodos de financiación, en la re-conceptualización del cumplimiento de sus misiones de servicio público, así como en la misión de potenciar la creación de productos culturales diversos y accesibles al público se sitúan autores como Brevini (2013), De Moragas & Prado (2013) y Glowacki & Jackson (2013). Sin embargo, hay estudios que, identificando las principales amenazas de los *PSM*, advierten que la innovación, por sí sola, no es argumento suficiente para defender la continuidad de servicios financiados por fondos públicos y apuestan por un modelo híbrido (Bennett and Medrado, 2013). Por su parte,

⁶ Las entrevistas realizadas a los Directores de los medios públicos evidencian un cierto inmovilismo ante el reto de redefinir sus misiones tradicionales en el espacio digital.

otros autores ponen en tela de juicio el encaje de los PSM en un consumo que, por definición es personalizado, basado principalmente en el consumo y, en muchos casos, ajeno a objetivos de interés público o de servicios a la ciudadanía (Nightingale and Dwyer, 2006).

Dejando un lado este tipo de debate y siguiendo una línea más histórica y conservadora sobre el papel de la *PSB*, de Moragas & Prado insisten en la continuidad del papel de los *PSM* como motores del desarrollo democrático y del bienestar social y asumen que la justificación de su presencia en la sociedad de la información viene determinada, principalmente, por tres consideraciones: en primer lugar, “el libre mercado no garantiza, suficientemente, las funciones políticas, sociales y culturales que corresponden a la televisión en las democracias modernas”; en segundo lugar, “no existe garantía de una estricta correspondencia entre los espacios delimitados por el mercado audiovisual y las “comunidades” (lingüísticas, culturales, nacionales, etc.)”; y, en tercer lugar, “no queda garantizada la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso a los servicios y bienes culturales derivados de las innovaciones tecnológicas”. Teniendo en cuenta esta argumentación, estos autores apuestan por la importancia de “redefinir” el modelo actual en todas sus facetas: definición de políticas, de financiación y de control de servicio público. Distinguen entre misiones tradicionales y misiones específicas de la televisión en la sociedad de la información. En este último bloque incluyen: Función estratégica de desarrollo de las comunicaciones; función de garantía del acceso universal; función de producción de la información socialmente necesaria; función de guía y mediación ante la multiplicidad de la oferta de información; función de equilibrio y de freno a los nuevos oligopolios comunicación-telecomunicaciones; y función de motor de los procesos de convergencia entre el sector de la comunicación y otros sectores sociales (cultura, educación, salud, bienestar social, etc.).

Entre otras consideraciones, estos autores, al igual que en la investigación que se expone, dotan de especial importancia a los contratos programa como mecanismo a través del cual concretar las misiones específicas de servicio público que se encomiendan a las televisiones en la sociedad de la información. Los contratos programas, como herramientas específicas para delimitar los objetivos/misiones que se encomiendan a los medios de servicio público ofrecen pistas interesantes para valorar en qué medida las políticas de la comunicación, en este caso concreto en su aplicación a las televisiones públicas regionales en España, asumen lo enunciado en el marco jurídico y documentos anexos y expuesto, aún con matices y puntos contrapuestos, por la investigación sobre la materia.

3. MISIONES DE SERVICIO PÚBLICO ATRIBUIDAS A LAS TELEVISIONES PÚBLICAS AUTONÓMICAS ESPAÑOLAS EN EL CONTEXTO DIGITAL: ANÁLISIS DE LOS CONTRATOS PROGRAMA

Los contratos-programa se incluyeron por primera vez en España como herramienta de gobernanza en la Ley 17/2006 de Radio y Televisión de Titularidad Estatal. Son acuerdos entre las televisiones y los gobiernos que proporcionan un marco de estabilidad, tanto desde el punto de vista económico como de cara a la elaboración de una estrategia mínima para las corporaciones. Esta herramienta es, a día de hoy, un instrumento imprescindible para poder cumplir la misión de servicio público atribuida a los medios.

En el contexto audiovisual autonómico español, de las 11 televisiones públicas existentes en la actualidad, sólo 5 de ellas cuentan con un Contrato Programa vigente (objeto de análisis en esta investigación) y, de ellos, únicamente dos, el de EITB del País Vasco (2016-2019) y el de la Radiotelevisión de la Región de Murcia (2014-2016) son contratos elaborados *ad hoc* para el momento presente (y no prórrogas de contratos-programa previos).

Al examinar los compromisos pactados por los cinco operadores públicos –EiTB (País Vasco), CRTVA (Aragón), CCMA (Cataluña), RTRM (Murcia) y Canal Sur (Andalucía)- en sus Contratos Programa se comprueba que el contexto digital está presente en todos ellos, pero de muy diversa forma. En unos casos existe una visión estratégica concreta sobre cómo integrar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías e Internet en una visión renovada del *PSB* (como ocurre en el caso de EiTB y CRTVA; en otros, también queda de manifiesto el interés por aprovechar las ventajas de la interactividad, del servicio a la carta, o de la universalidad del entorno digital; sin embargo, en algunos casos como el CCMA, al tratarse de contratos elaborados antes de 2006 (firmado en 2005) no asumen el desarrollo de las redes sociales, de la conectividad, o la realidad diversificada de los servicios online que ha tenido lugar en los últimos diez años. Por este motivo son acuerdos excesivamente generales, en los que faltan temas esenciales de la realidad de la comunicación social a día de hoy. A continuación, se destacan las cuestiones esenciales de cada uno de contratos-programa analizados⁷.

a. Servicio público en el contexto digital: EiTB como instrumento y motor de gobierno y de ciudadanía digital

El modelo de Contrato Programa de EiTB 2016-2019 es el más completo en lo que se refiere a atribución de funciones de servicio público específicas para el contexto digital. La causa, en una valoración comparativa teniendo en cuenta el resto de acuerdos adoptados y analizados, no es exclusiva o principalmente que en este acuerdo se encuentren desarrolladas las acciones referentes a Internet o a los servicios a la carta. El Contrato

⁷ Lo expuesto es un breve resumen de una serie de tablas de análisis de contenido sobre cada uno de los acuerdos firmados.

Programa de EITB destaca porque toma como punto de partida para definir las misiones específicas de la corporación, también a través de internet y en la sociedad de la información, de un concepto político-público: la consideración del operador televisivo como decisivo para la formación de un espacio público de comunicación.

En esta construcción del espacio público el Contrato Programa de EITB se apoya en dos elementos: en el liderazgo de un gobierno autonómico que centre sus esfuerzos en una gobernanza digital, para la que EITB sería una pieza clave; y en la ciudadanía digital, cuyo protagonismo sólo será factible si se supera la brecha digital en la sociedad vasca. Así queda reflejado en las misiones 5 y 6 del Contrato Programa:

“EITB debe ser instrumento y motor de la estrategia pública del Gobierno Vasco para el desarrollo de las iniciativas sociales a través de telecomunicaciones y de la sociedad de la información que se vinculará necesariamente con sectores como cultura, normalización del euskera, turismo, educación, administración y sanidad, entre otros”

“Ofertar plataforma para la cohesión social (...) EITB contribuirá a reducir la denominada brecha digital entre la ciudadanía que accede a las plataformas y contenidos digitales y quienes todavía no pueden o no lo hacen”

Misiones públicas de EITB a las que se añade la de promover la sociedad de la información en un ámbito de proximidad (punto 7):

“[promover la Sociedad de la Información significa] conectar el medio de comunicación con las personas activas en la red, gestionar la participación a través de redes sociales y ofertar contenidos para su consumo por Internet. [EITB] ofrecerá una amplia oferta de contenidos a la carta que será accesible desde la generalidad de

dispositivos fijos o móviles, desde cualquier parte, en condiciones de inmediatez y calidad técnica satisfactorias”

No se trata de una descripción sólo tecnológica sino que se refiere sobre todo a la dimensión social y política –en el más amplio sentido de la palabra- de la sociedad de la información. En este sentido, es coherente lo que el Contrato Programa de EITB plantea sobre contenidos, dinamismo social y proyección externa del País Vasco:

“Requiere asumir un concepto de utilización o gestión del medio con propuestas de contenidos que están atentos al cuestionamiento social y a los temas que preocupan y se hacen regularmente presentes en la red. Asimismo, debe haber reflexión y capacidad para analizar el sentido y las consecuencias de los fenómenos emergentes, ya que todos los contenidos deben respetar los principios y bases de actuación del presente contrato”

“Estas tecnologías deben ser útiles para proyectar la imagen de Euskadi en el exterior, para interconectar los intereses de la ciudadanía y organizaciones vascas, para conectar el país con las colectividades vascas en el mundo”.

Con la misión claramente definida y bajo los criterios expuestos se entiende que las acciones que el Contrato Programa atribuye EITB en el contexto digital adquieren su sentido pleno, al mismo tiempo que se perciben como iniciativas dirigidas a un fin socio-cultural-político-público que van más allá de trasladar una oferta de radio/televisión o unos contenidos audiovisuales al ámbito digital. Este hecho, además, tiene su reflejo en los principios establecidos en el Contrato Programa, como el de la evaluación de los nuevos servicios digitales para certificar que responden a las necesidades sociales, culturales y democráticas de la sociedad (Principio, sobre modelo de servicio público de radiodifusión y su financiación

para el conjunto de la población y con contenidos dirigidos a la ciudadanía digital, con canales multigénero, de tipo tanto generalista como específicos, en euskera y castellano (Principio, sobre modelo de servicio público de radiodifusión y su financiación EITB, n.4.1).

b. Servicio público audiovisual mediante una Plataforma de medios digitales: CRTVA de Aragón

El Contrato Programa vigente de CRTVA se aprobó en 2013; por Orden de la Consejería de la Presidencia y Justicia de 11 de marzo de 2015, se ha prorrogado hasta 2017. Este acuerdo ofrece una propuesta de servicio público audiovisual centrada en la evolución del medio radio y televisión en el contexto digital. Por tanto, el centro del Contrato Programa es la Plataforma de Medios Digitales de CRTVA junto con las acciones que se describen para su consolidación, tales como integrar servicios interactivos, contenidos bajo demanda, contenidos en *streaming* y acceso a la televisión en movilidad. A la vez, se argumenta que la Plataforma debe facilitar una mayor participación de los ciudadanos. Así, el Contrato Programa destaca dos obligaciones específicas de servicio público en el entorno digital:

“Realizar un uso óptimo de la tecnología necesaria para facilitar al máximo el acceso a los contenidos que ofrecen los medios de CARTV a través de distintos soportes de difusión y participación, on line y off line” (Cláusula Tercera, Capítulo 2: Objetivos de CARTV: d))

“(Hacer posible) Una oferta de servicios conexos e interactivos para atender adecuadamente la necesidad de difundir contenidos en las nuevas modalidades audiovisuales de transmisión (...). “Un servicio de comunicación a petición (bajo demanda) al que los ciudadanos podrán conectarse mediante el uso de Internet, dispositivos móviles y/o nuevos canales futuros, para acceder a contenidos (...).

“Modalidades de televisión digital para dispositivos móviles o portátiles existentes en el mercado. (Cláusula Quinta, Capítulo 2: 7.6. 7.6. Servicios de Información en Línea, Contenidos interactivos y Dispositivos de Movilidad)

Además, el Contrato Programa de CRTVA, en su cláusula duodécima, incluye como objetivos de la plataforma digital:

“Reforzar el cometido de servicio público de CRTVA desde la proximidad, la calidad, la pluralidad y el interés general, ahondando en el liderazgo tecnológico y en la demanda existente en la sociedad aragonesa.

Converger, potenciar, complementar y alinear los actuales soportes convencionales de radio, televisión y web.

Participar en el progreso tecnológico, promoviendo activamente el desarrollo de la sociedad de la información y utilizando las nuevas técnicas de producción, distribución y difusión, de programas de radio y televisión y de servicios conexos o interactivos de comunicación audiovisual para ofrecer nuevos servicios, incluidos los digitales y en línea, susceptibles de enriquecer o completar su oferta de programación”.

Se trata de un proyecto de Servicio de Comunicación Audiovisual de servicio público cuya misión fundamental es proporcionar a los ciudadanos contenidos y servicios que cumplan las características de ser accesibles, plurales, permitir la interactividad e integrar los avances tecnológicos del momento. En ningún caso se mira a la CRTVA como articulador del espacio socio-político de Aragón, ni en consecuencia, el Contrato Programa recoge acciones en este sentido. Sino que se limita a una visión de la CRTVA como medio de comunicación.

c. Un Contrato Programa desfasado: CCMA de Cataluña

Madrid, 2016. ISI

En el caso de la corporación catalana resulta sorprendente la falta de adecuación de su Contrato Programa (2006-2009, prorrogado) a la realidad digital, incluso a su propia realidad digital como operador con una notable dimensión multiplataforma. En el análisis de su contenido, si se atiende al texto del Contrato Programa, sus objetivos, estrategias y acciones se limitan a la accesibilidad. De hecho, el Anexo al Contrato Programa catalán, donde se incluye la definición de servicio público audiovisual en el entorno digital, apunta como una de las misiones principales de la CCMA, ser “una televisión que lidere y sea motor del proceso catalán de transición a la digitalización”.

Es muy posible que este desfase entre una de las grandes radiotelevisión de proximidad y su falta de definición sobre las misiones de servicio público en el contexto digital se deba a que la fecha del acuerdo entre el Gobierno catalán y la corporación audiovisual fuera 2005, un momento en el que aún no se habían generalizado las redes sociales (2006 es, por ejemplo, la fecha de expansión de Facebook, ni Twitter, Instagram existían) ni otras muchas potencialidades tecnológicas.

d. Ausencia de compromisos para el servicio público audiovisual digital:

RTVA de Andalucía

El Contrato Programa de RTVA (2012-2015 y prorrogado hasta 2017) no incluye ningún compromiso concreto sobre las obligaciones de servicio público de la corporación en el contexto digital. El acuerdo entre el Gobierno andaluz y la RTVA, más que definir una estrategia o unos compromisos para cumplir, se limita a describir la evolución de la radio y la televisión públicas en su transición y necesaria adecuación al marco digital. Aunque es cierto que menciona algunos objetivos de manera genérica como superar la brecha digital, innovar, ser interactiva, o que se refiere a la “ciudadanía digital” y a la participación de la

audiencia, sin embargo, estas consideraciones no llegan a concretarse en obligaciones de servicio público digital atribuidas a la corporación pública andaluza.

e. Un caso particular: RTRM de Murcia

La Radiotelevisión de la Región de Murcia tiene vigente el Contrato Programa 2014-2016 (aprobado en 2013). Esta corporación pública difiere del resto de televisiones públicas autonómicas por haber subcontratado su programación, incluidos los informativos, a empresas audiovisuales privadas. La corporación, en cualquier caso, mantiene un poder de control para asegurar el cumplimiento de la misión y funciones públicas asignadas por ley. Teniendo en cuenta esta peculiaridad, en cuanto a la misión y funciones de servicio público en el contexto digital, el Contrato Programa se reduce a señalar –describir– la oferta en *streaming*, vídeo a la carta, y webs que permiten la interactividad con los ciudadanos. El Contrato Programa de RTRM no incluye ninguna misión de servicio público específica o estrategia que vaya más allá de la existencia de esa oferta en su plataforma digital.

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo establecido por el marco jurídico y documentos anexos en la última década; lo apuntado por las investigaciones académicas desde diferentes enfoques y perspectivas; y lo concretado en los contratos-programas de las televisiones autonómicas españolas se destacan las siguientes consideraciones:

- Como punto de partida, resultan obligaciones comunes a cualquier actividad calificada como de servicio público: la prestación de un servicio universal (cobertura territorial completa a precio asequible); la garantía de la calidad; y la adecuada protección de los consumidores y los usuarios. El servicio público audiovisual autonómico español, también en su extensión digital, debe responder,

como mínimo, a estos requisitos. Además, las autoridades nacionales puede

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2 225

establecer misiones específicas de servicio público adaptadas a cada sector en los ámbitos nacionales, regionales y locales.

- La legislación audiovisual española vigente en la actualidad se refiere, entre otras y como misiones específicas de servicio público relacionadas con el espacio digital, a: la oferta de servicios conexos o interactivos; el acceso a través de dichos servicios a grupos políticos, sindicales y sociales; y la puesta a disposición de servicios de información en línea con programaciones diversas y equilibradas destinadas a todos los tipos de público.

- La Comisión Europea ha reconocido, en el caso del ámbito audiovisual, la posibilidad de financiar obligaciones de servicio público generales aplicables al ámbito digital y al conjunto de plataformas de distribución.

- Los documentos europeos anexos a la legislación apuestan por la continuidad y el fortalecimiento de la satisfacción de las misiones de servicio público audiovisual en el contexto digital. Resulta destacable y práctica la distinción que realizan entre misiones básicas y otras nuevas, aunque relacionadas con las primeras, derivadas del contexto digital y de la sociedad de la información. Por tanto, la presencia de los *PSB/ PSM* en el ámbito digital y de la sociedad de la información conlleva obligaciones nuevas, específicas, propias del espacio digital, multiplataforma e interactivo.

- El análisis de algunas de las investigaciones académicas más recientes, tanto defensoras como detractoras del sistema público de radiodifusión tal y como ha sido concebido hasta el momento, coinciden en la necesidad de garantizar unos objetivos/misiones de servicio público presentes en los nuevos modelos de difusión, uso y consumo de medios.

- Además de la necesidad de preservar, en un formato adaptado al espacio digital, las misiones de servicio público tradicionales asociadas a la información, la educación o el entretenimiento; destacan en el nuevo contexto digital las obligaciones de: difundir la identidad/diversidad cultural, promover el pluralismo y posibilitar la participación ciudadana/ciudadanía digital en la sociedad de la información. Esta misión se sigue considerando como una misión a preservar en el contexto digital y multiplataforma por parte de los *PSM*.

- La atribución de las misiones de servicio público en el caso de las televisiones públicas autonómicas españolas se realiza a través de los contratos-programa. De los 11 entes autonómicos públicos, sólo 5 cuentan con esta herramienta. Del análisis de contenido de los cinco contratos-programa existentes cabe destacar en relación con la sociedad de la información:

- La corporación pública vasca EITB lidera, con su Contrato Programa, el cumplimiento de lo dispuesto por el marco legal/documentos anexos y advertido por el ámbito académico. EITB desarrolla sus misiones partiendo de su rol como eje vertebrador de un espacio cultural-social-político-público (esfera pública digital) con misiones específicas no atribuibles ni asumibles por el ámbito privado. Esta claridad de visión sobre el papel de la EITB da coherencia a las acciones que le encomienda el Contrato Programa, al mismo tiempo que sitúa el protagonismo de la corporación pública en el entorno digital más allá de un cambio de plataforma tecnológica.

- En el caso de Aragón, el Contrato Programa con el CARTV se caracteriza por su limitación de objetivos en torno a la Plataforma Digital de CARTV –contenidos, servicios, programas, vías de participación, etc- sin entrar al posible protagonismo de la corporación pública en la vida política de Aragón.
- Dos contratos-programa (Cataluña y Andalucía), al encontrarse en situación de prórroga desde hace años, ni se adecúan al contexto actual ni responden a las necesidades presentes en el ámbito digital y multiplataforma.
- Es imprescindible mejorar el enfoque de algunos de ellos que, como en el caso de Andalucía, no incluyen compromisos específicos aplicables al digital.
- Es urgente dotar de un Contrato Programa, aprendiendo de los dispuesto con anterioridad, a las seis corporaciones-públicas autonómicas que carecen de él.

BIBLIOGRAFÍA

Bennett J., Medrado A. (2013). “The Business of Multi-platform Public Service: Online and at a Profit.”, *Media International Australia*, n. 146, pp. 103-114.

Carpentier N. (2015), “Who to serve and how? A discourse-theoretical analysis of public service broadcasting as a floating signifier”, *Media and Communication / Mediji i komunikacije*, n. 2, pp. 7-23.

Debrett M. (2015). “Tools for Citizenship?” Public Service Media as a Site for Civic Engagement: An Australian Case Study”, *Television & New Media*, vol. 16 (6), pp. 557–575.

Doyle G. (2010). “From Television to multiplatform. Less for more or more for less?”, *Convergence: The International Journal of Research into New media Technologies*, vol 16, n. 4, pp. 1-19.

Tremblay G. (2016). “Public Service Media in the Age of Digital Networks”, *Canadian Journal of Communication*. January Vol 41 (1), pp. 191-206.

De Moragas M., Prado E. (2013), “Repensar la television publica en el contexto digital” *Portal de la Comunicación*. Disponible en: <http://www.portalcomunicacion.com/both/opc/tvp.pdf>

Glowacki M., Jackson, L. (2013). “Public media management for the twenty-first century: Creativity, innovation and interaction”. London, UK: Routledge.

Hendy D. (2013). “Key Concerns in Media Studies: Public Service Broadcasting”, Palgrave Macmillan, Basingstoke, ISBN 9 7802 3023 8954

Muñoz Saldaña M. (2011). “Key “issues to understand the controversy surrounding the economic support of Spanish public televisión” *Communication & Society* 24, pp. 119-139).

Muñoz Saldaña M. (2015), “RTVE Financiación. What Remains in a Changing Discussion”, *Estudios sobre el mensaje periodístico*, n. 21, pp. 455-470.

Nightingale V., Dwyer T. (2006), “The Audience Politics of ‘Enhanced’ Television Formats” *International Journal of Media & Cultural Politics* 2 (1), pp. 25–42.

Ruano López S. (2013) “Los contenidos audiovisuales en Internet y su impacto en la televisión”, *Razón y Palabra*, n. 83, pp. 1-10.

ANEXO

EiTB Contrato Programa 2016-2019 Compromisos derivados de las misiones públicas.

1. Compromisos de EiTB en la prestación del servicio público:

-Compromiso 2: Extender el servicio público a la era digital (Internet), objetivo que tiene el compromiso asociado de:

5.2.1. EITB.EUS: portal de contenidos de EiTB que ofrece en euskera y castellano contenidos informativos y de entretenimiento a partir de los contenidos generados en los distintos soportes del Grupo EiTB. Toda la oferta disponible a través de esta website tendrá accesibilidad para dispositivos fijos y móviles, en sus distintos sistemas operativos.

5.2.2. EiTB NAHIERAN es el repositorio de contenidos a la carta para el acceso a programas de televisión, radio y eventos especiales a los cuales se accede desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Cumple los estándares para acceso desde dispositivos móviles y fijos, entre ellos los receptores de televisión conectada.

5.2.3. El portal debe facilitar asimismo el streaming de canales de televisión (de CANAL VASCO/ETBSat, otros programas de televisión y eventos de distribución exclusiva por Internet) y canales de radio para su acceso desde cualquier parte del mundo, salvo aquellos contenidos de distribución geo-localizada por limitación de derechos de emisión.

5.2.4 Adicionalmente el portal de contenidos de EiTB dispone de GAZTEA, con una extensa oferta orientada al público joven que conecta con facilidad con el producto multimedia y que es convergente con la marca de radio; también de HIRU3 con contenidos dirigido al público infantil en una estrategia compartida con ETB3 y el club de fidelización infantil HIRU3.

5.2.5. EiTB tiene que mantener su propia planificación y modelo de Social Media para que el grupo de Comunicación, como tal, y sus profesionales puedan interactuar con sus contenidos, informaciones y generación de feed back. En la planificación hay que fijar apuestas principales y prioridades en relación a formas de interactividad, ejes comunicaciones de interés y recursos.

5.2.6. El Grupo EiTB tiene que lograr un sistema productivo multimedia en el que sus contenidos dispongan de distintas ventanas de distribución, de forma que los profesionales de contenidos sepan operar con diversos modelos narrativos, interactuar en redes sociales y ofertar un modelo comunicacional propio de un grupo multimedia avanzado

Indicadores relacionados con el Compromiso 2:

Indicador	Objetivo anual			
	2016	2017	2018	2019
Número de contenidos (de texto, audio y video) en EITB.EUS:				
• Total de contenidos		140.000 / 180.000		
• Contenidos en euskera		40.000 / 55.000		
• Contenidos en castellano		40.000 / 55.000		
• Contenidos gráficos		60.000 / 70.000		
Número de seguidores en redes sociales:				
• En Facebook (banda de crecimiento)		800.000 / 1.500.000		
• En Twitter (banda de crecimiento)		400.000 / 700.000		
Número de contenidos en EITB Nahieran:				
• Contenidos de Radio		7.500 / 9.000		
• Contenidos de Video		18.000 / 22.000		
• Contenidos target infantil y juvenil		5.500 / 6.500		
Contenidos ofrecidos por canales en streaming en EITB.EUS:				
• Canales 24x7 (banda de crecimiento)		1 / 3		
• Programas emitidos (banda decreciente)		8.000 / 2.500		
• Total eventos emitidos (banda de crecimiento)		150 / 230		
Número de contenidos (texto, audio, video) en EITB.EUS por tipo de público destinatario:				
• Infantil (Hiru3)		1.100 / 1.500		
• Joven (Gaztea)		5.500 / 6.500		
Contenidos de EITB en otras plataformas de Internet:				
• Youtube		2.000 / 2.500		

-5.4. Compromiso 4:

Acerca de promocionar el euskera y promover la normalidad de una sociedad vasca bilingüe (...)

5.4.6. Siendo Internet un medio imprescindible ya en la actualidad y suponiendo las redes sociales un medio fundamental para llegar a la población joven. EITB apostará por un uso avanzado y prioritario del euskera en dichas redes, habida cuenta del alto grado de conocimiento del euskera en las generaciones más jóvenes

-5.10 Compromiso 10:

Acerca de realizar inversiones para la renovación tecnológica que permita incrementar la calidad y capacidad productiva en los sistemas de producción, y dispones de estándares distribución avanzados. Realizar mantenimiento de las instalaciones.

(...)

5.10.2. Las nuevas formas de consumo audiovisual requerirán una completa renovación del hardware para los contenidos de la oferta de Internet, así como nuevos desarrollos del software de publicación de contenidos como aplicaciones personalizadas (APPs) y el rediseño de EiTB.EUS y EiTB Nahieran para su correcto consumo adaptado tanto a los distintos dispositivos fijos (ordenadores y televisiones conectadas, HBBTV, apps móviles y streaming

5.11.6. EiTB.EUS, además de los contenidos propios del Grupo EiTB, ofrecerá en zona destacada un portal de Transparencia facilitando información corporativa estructura en todos los aspectos que se consideran de interés para la ciudadanía vasca, conforme a los principios de open-data y cumpliendo los requerimientos de legalidad (contratación, transparencia, derecho de acceso, et.) que son de exigencia para el conjunto de las empresas públicas

-5.11. Compromiso 11:

Acerca de aplicar los principios de gestión avanzada y gobierno responsable.

5.11.6. EiTB.EUS, además de los contenidos propios del Grupo EiTB, ofrecerá en zona destacada un portal de Transparencia facilitando información corporativa estructura en todos los aspectos que se consideran de interés para la ciudadanía vasca, conforme a los principios de open-data y cumpliendo los requerimientos de legalidad (contratación, transparencia, derecho de acceso, et.) que son de exigencia para el conjunto de las empresas públicas

CARTV de Aragón. Contrato Programa 2013-2016

Sección tercera Plataforma de medios digitales de CARTV

(Cláusula del Contrata Programa) Duodécima

Para la consecución de los objetivos de servicio público en el contexto digital, CARTV asume una serie de compromisos:

a) Ofrecer contenidos audiovisuales, sonoros y gráficos en directo, a la carta y en interacción con los usuarios a través de multisorte, de acuerdo con la evolución de las herramientas tecnológicas.

b) Ofrecer contenidos informativos, educativos, divulgativos y de entretenimiento.

c) Potenciar el servicio público en cuanto a contenidos y accesibilidad.

d) Potenciar la audiencia de Aragón TV y Aragón Radio a través de otras vías de acceso y fidelización. Acceder al más amplio espectro posible de la ciudadanía aragonesa, a través de los medios y soportes tecnológicos disponibles, de manera coordinada y convergente.

CCMA de Cataluña, Contrato Programa 2006-2009 prorrogado

Cláusula 2. Compromisos de la CCRTV: Función y obligaciones de servicio público:

f) Facilitar el acceso de toda la ciudadanía a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente internet y la tecnología digital terrestre

Indicadores de audiencia

(...)

-“número de páginas vistas de todas las webs. Superior a 250 millones/año (sistema de medida OJD 2005, en base a tag).- Número total de registros de usuario en los servicios interactivos. Superior a los 750.000 a finales del 2009.

RTVA de Andalucía, Contrato Programa 2013-2015 prorrogado

VII. Para el desarrollo de la Sociedad de la Información, la RTVA y sus Sociedades se convierten en un activo para la ciudadanía, de manera que los servicios digitales nuevos, conexos, interactivos y de Internet se establecen con una prestación de 24 horas/día por 365 días/año al ser considerados relevantes y de utilidad pública, y siendo conscientes de la importancia de la acción empresarial pública para ofrecer servicios a las personas activas en las redes y con objeto de reducir hasta eliminar en lo posible la denominada ‘brecha digital’ en el acceso de la totalidad de la ciudadanía andaluza a los contenidos digitales. Para ello se aportarán, con afán de vanguardia, los recursos técnicos y humanos que se estimen necesarios y convenientes, conforme a la utilización de nuevas y avanzadas herramientas tecnológicas que resulten disponibles en cada momento, para el mantenimiento y prestación de servicios relativos a: portales web reconocidos por la audiencia y usuarios por su capacidad de liderazgo, contenidos textuales y audiovisuales web, acceso a estas prestaciones desde dispositivos fijos y móviles, servicios informativos web, contenidos de radio y de TV a la carta y en directo, servicios y contenidos para móviles, teletexto, EPG, contribución para portales web de educación, generación y mantenimiento de portales dirigidos al público infantil, mantenimiento de presencia en sitios web de acceso a canales audiovisuales y motores de búsqueda, servicios de blogs y de contribución a todo tipo de redes sociales.

(...) y se proveerán contenidos y aplicaciones sobre temáticas de salud, relaciones con la sociedad, acceso a servicios de las Administraciones Públicas y otras que pudieran ser de utilidad efectiva, con arreglo a la evolución real de la digitalización del mercado audiovisual andaluz, y en función del grado de desarrollo de la implantación de los servicios digitales nuevos e interactivos en Andalucía, y del nivel de implantación y utilización de dispositivos digitales por parte de la población andaluza considerando la demanda real y potencial de usuario en cada momento. Asimismo, se explorará la producción de aplicaciones

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2 235

y servicios de televisión interactiva bajo estándares de implantación masiva, como pueda ser el estándar HbbTV, para la prestación de servicios de entretenimiento, comercio electrónico, vídeo bajo demanda, juegos, recomendaciones, votaciones de los usuarios, acceso a redes sociales y otras funciones de enriquecimiento de los programas audiovisuales. Además, la RTVA y sus Sociedades se comprometen, en función de las circunstancias económicas y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, a establecer un Plan de digitalización de su archivo audiovisual que permita la óptima conservación y el uso público.

Como criterio general de actuación, la RTVA y sus Sociedades tendrán una permanente visión dinámica del tratamiento de su acción digital que supondrá una actualización constante a los nuevos accesos de participación de los usuarios, la apertura de servicios en todo tipo de redes sociales, y a la atención de los temas que preocupan a los usuarios digitales y se hacen presentes en las redes. Igualmente se incrementarán los encuentros digitales con los protagonistas de las programaciones de radio y de televisión, y con personajes y personalidades que sean de notorio interés para los usuarios digitales. Se establecerán los Acuerdos y Convenios con entidades y organizaciones públicas o privadas necesarios para la consecución de todos estos fines del servicio digital. La presencia de la RTVA y Sociedades en Internet será objeto de rendimientos comerciales y de publicidad en todos los soportes y contenidos digitales e interactivos susceptibles de ello.

VIII. La RTVA y sus Sociedades se comprometen, en función de las circunstancias económicas y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, a recuperar, cumpliendo las prescripciones establecidas en la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, la emisión diferenciada e independiente del segundo canal de televisión autonómico, Canal Sur 2, manteniendo en todo caso su vocación de servicio público. 21. En cuanto a los compromisos de carácter técnico, la RTVA y sus Sociedades emplearán tecnologías digitales de producción, edición,

distribución y difusión de máximas prestaciones de acuerdo con la función de agente tecnológico de primer nivel en el mercado audiovisual andaluz, conforme al artículo 23 de la ‘Carta de la RTVA’, y con el objetivo de optimizar la gestión de los recursos, tanto técnicos como humanos, con el empleo de las más avanzadas tecnologías de vanguardia digital.

Murcia: Contrato Programa 2014-2016 de la RTRM

Claúsula SEGUNDA.OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL TELEVISIVO

Oferta televisiva

Se compondrá de:

- 2 canales TDT en simulcast que emitirán la misma programación, denominada “7 Región de Murcia” (...)

- 1 canal en streaming en Internet, accesible a través de www.7rm.es, cuyo contenido será el mismo que el difundido a través de la TDT, salvo aquellos contenidos sobre los que sólo se posean derechos de emisión para el territorio de la Comunidad Autónoma, que se sustituirán por una pantalla fija informativa. Este canal está dirigido primordialmente a los murcianos fuera de nuestra geografía para su acceso por Internet. Deberá ser compatible con estándares que permitan su visualización correcta y con calidad adaptada la pantalla, a través de navegadores web de amplio uso y por aplicaciones ad hoc para las plataformas móviles más extendidas.

- 1 portal con contenidos a la carta en la dirección de Internet: www.7rm.es, basada en programas de producción propia, de tipo informativo y de entretenimiento, que permitan la búsqueda y acceso a programas en base a categorías basadas en el género de programa, nombre del mismo, municipio, público objetivo, etc. Este portal deberá ser

visualizable correctamente y en calidad adecuada a la pantalla, en navegadores web de amplio uso y por aplicaciones ad-hoc para las plataformas móviles más extendidas

- La presencia en Internet deberá completarse mediante la creación de páginas oficiales en las principales redes sociales, que permitan la interactividad con el televidente, en los programas de tipo divulgativo y de entretenimiento.

Los contenidos generados para el anterior portal, podrán reaprovecharse para la obtención de recursos económicos a través de su inserción en otras plataformas de visualización de contenidos en Internet como Youtube, Terra.com, etc, así como para la confección de un portal HbbTV, en función de la implantación de este estándar de televisión híbrida.

OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL RADIOFÓNICO

Oferta radiofónica

(...)

A través de www.orm.es se ofrecerá en streaming acceso a ambas programaciones, así como un repositorio de podcast para el acceso a la carta de diversos programas.

La presencia en Internet se completará mediante la creación de páginas oficiales en las principales redes sociales, que permitan la interactividad con el oyente.

UNA APROXIMACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DOCTRINAL DE LAS LIBERTADES INFORMATIVAS

Leopoldo Abad Alcalá
Universidad San Pablo CEU, Madrid

EL PRESENTE TRABAJO DE CARÁCTER ANALÍTICO-CONCEPTUAL REALIZA UNA APROXIMACIÓN A LA FUNDAMENTACIÓN DE LAS LIBERTADES INFORMATIVAS COMO DERECHOS FUNDAMENTALES ESTABLECIENDO LOS ELEMENTOS CONSUSTANCIALES QUE LOS VERTEBRAN PARA CARACTERIZARLOS POSTERIORMENTE EN EL SENO DE UNA DETERMINADA TIPOLOGÍA TERMINOLÓGICA. Así, los derechos comunicativos, como todos los derechos fundamentales, están asentados en dos caracteres ontológicos del ser humano: la dignidad y la libertad. Junto a ello, el necesario ejercicio de estas libertades en el ámbito social para que tengan trascendencia para el Derecho nos lleva a caracterizarlas como “libertades públicas” según reiterada doctrina francesa, matizada y ampliada por la doctrina española *iusinformativa*.

INTRODUCCIÓN

Para la elaboración de este artículo hemos aplicado técnicas de revisión documental a partir de bibliografía de carácter teórico y empírico publicada, especialmente por la doctrina española y francesa, realizando una tarea de organización, análisis e interpretación de las conclusiones alcanzadas por los juristas y académicos consultados con el objetivo de elaborar un trabajo de carácter analítico-conceptual que suponga la construcción de un marco referencial sobre el objeto de estudio y que permita obtener conclusiones sobre la fundamentación doctrinal de las libertades informativas.

El presente artículo tiene una finalidad exploratoria entendida como aquella que pretende profundizar en la definición, análisis y correlación de determinados conceptos que permitan establecer parámetros posteriores de estudio sobre el objeto de investigación. Nos encontramos ante una investigación teórica entendida como “la actividad sistemática de elaborar, construir, reconstruir, explorar y analizar críticamente los cuerpos conceptuales (esto es, teóricos) en que se enmarcan las distintas áreas del saber” (Barahona, 2013: 8)

Creemos, que como indica Solozabal (1991a: 77) una reflexión sobre los derechos fundamentales, para ser completa, ha de referirse a los criterios de la fundamentalidad de los mismos. Estos criterios necesariamente han de ser materiales o sustantivos — conformadoras de la relación de los ámbitos vitales o relaciones sociales correspondientes con la dignidad del hombre y las exigencias de su desarrollo como persona en una comunidad política construida a su medida (vinculado con el libre desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 10 de la Constitución española de 1978) y con su participación— y nunca meramente formales o procesales. En efecto, el criterio de la fundamentación de los derechos constitucionales no puede ser sino material. Así, en el presente trabajo se han obviado las referencias que sustentan los derechos fundamentales en función de su virtualidad o fuerza normativa, en definitiva, buscamos basarlos en los criterios materiales que los caracterizan. Los derechos constitucionales no deben su fundamentalidad al nivel de su eficacia o a su protección institucional o procedimental, pues estos aspectos de los derechos fundamentales no son el fundamento de su valor, sino sólo las consecuencias procesales de su aplicabilidad. Como dice Solozabal (1991a: 77), “los derechos fundamentales se protegen por su importancia, pero, obviamente, no deben su importancia a su protección”. De modo que,

creemos, que sólo desde el análisis de su contenido, de su *ratio esendi*, de la fundamentación de los derechos constitucionales vinculados con la dignidad y la libertad de la persona humana podemos realizar una adecuada categorización de éstos. Los derechos fundamentales sólo adquieren sentido si se vinculan indefectiblemente con la dignidad de la persona y el desarrollo en libertad de la persona.

Así, en el presente trabajo partimos de la hipótesis de trabajo de que las libertades informativas o los derechos comunicativos (según la terminología que empleemos) están vinculados, como derechos fundamentales, tanto a la dignidad como a la libertad del individuo y que su caracterización como libertades públicas les dota de una determinada especificidad conceptual. Las preguntas de investigación que nos planteamos son: ¿Existen diferencias conceptuales entre derechos fundamentales y libertades públicas? ¿Podemos englobar a los derechos y libertades comunicativos como derechos fundamentales o como libertades públicas? ¿Qué implicaciones jurídicas se derivan de su categorización en una u otra categoría?

1. LA DIGNIDAD HUMANA Y LA LIBERTAD COMO FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS COMUNICATIVOS

Debemos partir en este epígrafe de la necesaria reflexión sobre cual es la característica ontológica fundamental del hombre, que no puede ser otra que la dignidad como fundamento de cualquier derecho o libertad. Se pretende por tanto un acercamiento al concepto de dignidad humana, centrándonos en una perspectiva jurídico-filosófica, más que antropológica, filosófica o ética. La dignidad, como rasgo distintivo y distinto del hombre, requiere de un tratamiento específico por parte de la ciencia jurídica. Esta importancia es consustancial al ámbito del Derecho, e incluso el Tribunal Constitucional español ha

admitido una valoración de tal concepto en su Sentencia 53/1985 en la considera que la dignidad de la persona es “un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión de respeto por parte de los demás”.

La dignidad es por tanto elemento inseparable al ser humano, esta dignidad le permite el disfrute de los derechos esenciales que le son inherentes y el ejercicio de las libertades. La relación entre dignidad y libertad posee carácter simbiótico, pues una y otra coadyuvan en su mutuo fortalecimiento. Sin libertad el hombre carece de la dignidad que le otorga su condición humana. Por su parte, la libertad sin un referente de carácter moral y finalista como la dignidad queda reducida a mero voluntarismo. Así lo expresa Peces Barba quien considera que “la persona humana se concibe así como un ser de eminente dignidad caracterizado por su razón y por su libertad. Este reconocimiento exige un respeto y un tratamiento del hombre como sujeto cuya independencia y libertad hay que garantizar en la vida social” (Peces Barba, 1973: 72).

La trascendencia jurídica que adquiere la dignidad es especificada por Mirete, para quien partiendo de la noción de autonomía de la voluntad kantiana, asocia libertad y dignidad. La autonomía se convierte en el fundamento de la dignidad y de todo ser racional, implicando una auténtica libertad moral. Para este autor la autonomía de la voluntad lleva a la consideración del imperativo categórico kantiano que desemboca en la concepción de los derechos fundamentales, al considerar que “ningún pueblo puede decidir no seguir progresando en el conocimiento, en donde poder tiene un claro sentido de tener derecho, porque ello sería contrario a la humanidad inherente a la propia persona” (Mirete, 1988: 244).

Por su parte, Soria considera que “la dignidad ontológica o natural del hombre

proviene de su perfección constitutiva, de su composición esencial de cuerpo y alma, materia y espíritu, que, al dar origen a un todo esencialmente unitario e individual, es el fundamento primero de la excelencia de la persona humana” (Soria, 1981: 10).

Esta trascendencia de la dignidad de la persona ha tenido su reflejo en la Constitución española de 1978, en cuyo artículo 10¹ se establece esta dignidad de la persona como “fundamento del orden político y de la paz social”. Para Basile, este reconocimiento implica el rechazo de toda visión totalizadora de la vida social; rechazando la idea de organismos colectivos con fines o vida superiores a los de los individuos que los componen. Considera la sociedad como la cooperación de hombres de carne y hueso, en función de exigencias – individuales o comunes- advertidas y valoradas por ellos mismos. Condensa así la idea de “dignidad de la persona” (Basile, 1988: 273).

Desde la doctrina francesa también se ha abordado la importancia de la dignidad como parte integrante del concepto de derecho humano. Pavia considera el reconocimiento de la dignidad de la persona como una manifestación del lugar que ocupa el hombre en el contexto social, y dirá que:

“Bajo la perspectiva de la filosofía del derecho, la dignidad hunde sus raíces en la modernidad que, ella misma viniendo de lejos, impone el humanismo y pone al individuo en el centro del nuevo cosmos social, contra el orden anciano. Ello marca

¹ El artículo 10 de la Constitución establece: “1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España.”

entonces la aparición de un sistema jurídico que se dota de los medios de pensar el hombre, superando los presupuestos de la fe, de las costumbres y de las instituciones que son su historia concreta. En consecuencia y después de haber abstraído todo el peso de los hechos, se pasó de la naturaleza a la naturaleza humana y a la igual dignidad de los hombres entre ellos” (Pavía, 2003: 129).

Como considera Sánchez González, “la dignidad es el valor fundamental de referencia que debe tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar los conflictos en los que esté envuelto cualquier libertad o derecho individual”. Como ha recogido la jurisprudencia constitucional, la dignidad constituye “un minimum invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar, de modo que, sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que, en cuanto ser humano, merece la persona” (Sánchez González, 1988: 25). Para el citado profesor hubiese sido recomendable una referencia explícita a la dignidad en el propio artículo 1 como forma de sentar las bases de interpretativas sobre la jerarquía axiológica.

Por su parte, Ruiz-Giménez ha diferenciado cuatro dimensiones de la dignidad humana: a) la dimensión religiosa, esencial para los que poseemos una concepción del hombre a imagen y semejanza de Dios, y una visión trascendente de la vida humana b) la dimensión ontológica, como ser dotado de inteligencia, de libertad y conciencia de sí mismo, con dominio sobre su propia vida c) la dimensión ética, o conciencia valorativa ante normas y conductas; y d) la dimensión social, como estima o fama dimanante del comportamiento público o privado (Ruiz-Giménez, 1988: 113).

Para Sánchez Agesta, el artículo 10 que reconoce la dignidad humana, por su contenido e incluso por los términos de su formulación, tiene el valor de un principio

fundamental que es cimiento de los derechos y deberes fundamentales reconocidos en el Título I, pero que extiende su influencia a todo el texto constitucional y su interpretación. Considera asimismo el citado autor, que dicho artículo posee una enunciación compleja articulada en una serie de círculos concéntricos, y “la dignidad de la persona es el primer principio en que están contenidas, como en su simiente, las demás afirmaciones” (Sánchez Agesta, 1991: 93). La clave por tanto será la dignidad de la persona, pero hay que explicar qué entendemos por ella. Cree el citado profesor que siguiendo el reconocimiento de la dignidad en la Ley Fundamental de Bonn puede realizarse una exégesis de ese concepto tomando como base la doctrina alemana, en la que para algunos autores, la dignidad del hombre no es un concepto jurídico, y significa una apelación a la esencia de la naturaleza humana. Y en último término se traduciría en un derecho público subjetivo, en virtud del cual el hombre tiene derecho a la dignidad puesto que tiene derechos a la personalidad. Otros autores, según la opinión de Sánchez Agesta, en una posición parecida consideran la dignidad del hombre como una derivación de fines éticos y que es un concepto valor, que puede interpretarse en el sentido de rechazar negativamente todo lo que signifique un ataque a esa dignidad. Otro grupo de autores, plantean la existencia en la relación entre el individuo y el Estado de una presunción a favor del ser humano y su personalidad, y que esta personalidad se traduce en la posesión de un espíritu, de una capacidad de decisión propia, de una conciencia de su identidad y de su capacidad para determinarse a sí mismo y formar el mundo que le rodea.

La vinculación entre derechos fundamentales y dignidad para evidente, siendo esta el presupuesto ontológico de aquellos, como expresa Solozabal, los derechos fundamentales reconocen facultades referentes a ámbitos vitales del individuo en su propia libertad, relaciones sociales o participación política, imprescindibles para su desarrollo como persona

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

y derivados de su propia dignidad de tal. Desde una perspectiva individual, los derechos fundamentales están enlazados a la dignidad de la persona, son la proyección positiva, inmediata y vital de la misma. Suponen asimismo la condición de su libertad y autodeterminación. Su desconocimiento o conculcación vulnera la dignidad e impide el desarrollo del individuo como persona. Concluye que los derechos fundamentales constituyen el núcleo básico, ineludible e irrenunciable, del status jurídico del individuo. (Solozabal, 1991b: 87-88)

Junto a la dignidad, el otro elemento esencial inherente al ser humano es la libertad. A la hora de abordar jurídicamente el concepto de libertad, es cierto que debemos considerar la variedad terminológica que se emplea respecto al reconocimiento de la libertad humana en el contexto jurídico. Como desglosa la profesora Sánchez Ferriz en su obra “Estudio sobre las libertades” podemos hablar desde libertades públicas, hasta derechos naturales (con raíz isunaturalista asociada a la misma naturaleza humana), derechos del hombre (concepto que incide en la referencia al sujeto), derechos humanos (terminología con amplia repercusión en el ámbito del Derecho Internacional Público asociados a la existencia de una sociedad justa), derechos fundamentales (término que incide en su reconocimiento constitucional por afectar al elemento básico del ser humano), derechos del ciudadano (reservados a los nacionales como condición de participación en la expresión de la voluntad general), o derechos innatos, esenciales, básico, inalienables, etc. (que hacen referencia más a sus cualidades que a su concepto)(Sánchez Ferriz, 1995: 31-34). Sin embargo, como la propia profesora valenciana explica, estas concepciones en nada explican la diferencia entre el concepto derecho (con todas las adjetivaciones que deseemos añadir) y libertades desde una perspectiva jurídica.

Pero al margen de los planteamientos terminológicos, sobre los que posteriormente

se insistirá, podemos considerar que la libertad adquiere trascendencia como base de ejercicio de los derechos fundamentales, pues consideramos necesario precisar la existencia de una fundamentación racional iusnaturalista sobre la existencia de estos derechos. Como expresa Peces Barba en la obra anteriormente citada considera que:

“la libertad será el concepto clave, dentro de la filosofía de los derechos humanos, para explicar la necesidad de un ámbito de autonomía del hombre en la sociedad, y de un límite a los poderes externos a él, especialmente el poder del Estado. Este ámbito de autonomía, garantía de la personificación, dentro de la solidaridad necesaria en la vida social, exige un reflejo en el ámbito del Derecho. Esta exigencia explica el paso de la filosofía de los derechos humanos al marco de una Derecho positivo vigente. La libertad de la persona se convertirá en derecho subjetivo de la personalidad jurídica” (Peces Barba, 1973: 73).

Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional al considerar que respecto de la libertad que “es un valor espiritual y moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”².

Una aproximación a la idea de libertad es también realizada por Berlin, quien diferencia entre libertad en sentido negativo y libertad en sentido positivo. La primera de ellas es “el que está implicado en la respuesta que contesta a la pregunta cuál es el ámbito en que al sujeto –una persona o un grupo de personas- se le deja o se le debe dejar a hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas”. Por su parte, la libertad en sentido positivo implica la contestación a la pregunta de qué o quién es la causa

² STC 53/1985, FJ 8o

de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra. Continúa considerando el citado autor que “la libertad política es, simplemente, el ámbito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros” (Berlin, 1998: 220).

Por su parte, Sánchez Agesta define la libertad como “un poder eficaz y autónomo, con independencia de elección, que de una parte define una esfera de desenvolvimiento de la personalidad y de otra hace participar a los miembros de una comunidad en las decisiones comunes” (Sánchez Agesta, 1993: 461)

En definitiva, como indica Smend, son los derechos fundamentales quienes representan la “norma que rige a la Constitución, la legislación y la Administración”, pues “con independencia de cualquier consideración acerca de su validez jurídica, los derechos fundamentales son los representantes de un sistema de valores concreto, de un sistema cultural que resume el sentido de la vida estatal contenida en la Constitución” (Smend, 1985: 231).

La relación entre la dignidad de las persona y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información queda fuera de toda duda. En tal ejercicio, el individuo vuelca una parte fundamental de su personalidad, pues en dichas manifestaciones traslada una posición sobre los diferentes aspectos de la realidad social en que se desenvuelve. Cualquier intento de limitación, supone una cercenación de uno de los aspectos más fundamentales del ser humano, cual es la capacidad de comunicarse e interrelacionarse con sus congéneres. Como indica Dworkin (1984: 295):

“el derecho a la libertad de expresión deriva de la idea de la dignidad de la persona humana y de su derecho a un trato que no desmerezca de esa dignidad. Un hombre a quien se le impide o dificulta la comunicación libre con los demás es tratado

indignamente, vejado en su auténtica condición, pues el hombre es un ser comunicativo y locuaz, a quien no se le puede callar, contra su voluntad, condenándolo al aislamiento y al empobrecimiento espiritual”.

2. FUNDAMENTO DE LAS LIBERTADES INFORMATIVAS

Como bien indica Vallés, “la capacidad de la persona para expresar sus percepciones, ideas y sentimientos y para comunicarlos a los demás no sólo constituye una característica diferencial de la especie humana sino también una exigencia ineludible para su desarrollo como individuo y para el despliegue de sus capacidades y aptitudes”. Continúa el citado autor considerando que:

“Cuanto más rigurosa es una sociedad en el reconocimiento de los derechos que conlleva la comunicación humana más posibilidades de desarrollo personal tendrán los individuos que la integran, [...] que no se contentan con expresar sus ideas en el plano de sus relaciones individuales o privadas con los allegados sino que en muchas ocasiones se plantean hacerlas llegar al conjunto de sus conciudadanos o a un sector de los mismos con propósitos políticos, culturales, comerciales, informativos, o de cualquier otra naturaleza, dando lugar a la *comunicación social* o la *comunicación pública*, expresiones ambas con las que se pretende reflejar las diferentes formas de comunicación de ideas a un destinatario colectivo o masivo para lo que precisan la utilización de los medios de comunicación social existentes a su alcance”. La importancia de estas libertades-derecho la ha puesto de manifiesto el mismo autor, cuando englobando ambas en el concepto de “libre comunicación de ideas” las ha considerado como exigencias básicas para el desarrollo personal de los seres humanos, como presupuesto del reconocimiento de su dignidad, y como requisito de

la mejora de los niveles de bienestar social y político de las colectividades (Vallés, 2005: 21).

Sin duda alguna, se nos asemeja que una de las principales cuestiones a dilucidar es el de la terminología empleada a la hora de abordar las libertades y derechos citados. La utilización conjunta de ambos términos –libertad de expresión y derecho a la información– ha acarreado como primer obstáculo su denominación cuando se han de emplear conjuntamente. Si bien, como comprobaremos posteriormente, y a pesar de su necesaria interconexión, sus contenidos no son idénticos, su empleo conjunto es habitual cuando se habla de transmisión de ideas, pensamientos, opiniones, hechos, acontecimientos o noticias. En la obra de referencia en el ámbito de las libertades informativas del profesor Desantes “Fundamentos del Derecho de la Información”, nos especifica que el concepto de derecho subjetivo público no ha sido pacífico, pero que existen dentro de las diversas concepciones de las diferentes escuelas un identidad de base común, que supone su consideración como una esfera de poder, jurídicamente hablando y que su mayor o menor concreción dependerá del grado de positivización que alcance la norma que lo crea, que lo reconoce o lo protege. (Desantes, 1977: 149-150)

Ello nos conduce a una primera aproximación a su delimitación conceptual, pues esta ha variado desde la consideración de esta libertad y este derecho como derechos informativos, libertades informativas, derechos comunicativos, libertades comunicativas, derechos de la comunicación social, etc. Parece evidente, que el empleo de una u otra terminología no será indiferente, puesto que una u otra denominación conllevará una concepción sobre el contenido y finalidad de estos derechos.

Como libertades públicas, tal y como se deriva de una larga tradición que tiene su

origen en Francia y que en España ha sido asumida y desarrollada por diversos autores, aunque su empleo de forma específica a la libertad de expresión y al derecho a la información se debe principalmente a la profesora Sánchez Ferriz (1989, 1995, 2004).

Un primer paso en esta configuración requiere de su definición, que parte de la aceptación de que en el ámbito de los derechos, el Estado reconoce a los individuos el derecho a ejercer, al abrigo de presiones exteriores, un determinado número de actividades. Estas actividades autónomas pueden ser identificadas con las libertades, que sólo pueden concebirse en el marco de un determinado sistema jurídico. Estas libertades, son distinguidas por Morange de los derechos del hombre, expresión que presupone, desde un punto de vista filosófico, que hay un cierto número de derechos inherentes a la naturaleza del hombre (Morange, 1999:6). Para el citado autor, sin embargo, las libertades públicas sólo adquieren sentido cuando son reconocidas de hecho y de derecho, por lo que hay que preguntarse cuándo jurídicamente puede considerarse que una actividad humana es libre. Para ello establece el autor francés una gradación de los estadios de libertad por los que pasan las actividades humanas: 1) Aquellas que están totalmente prohibidas, tales como matar o robar. 2) Los individuos pueden disponer de una facultad de elegir, pero sólo después de una autorización administrativa que hayan solicitado 3) En el sistema de declaración previa, los individuos son libre de elegir, pero a reserva de una declaración previa hecha a una autoridad administrativa o judicial por la que ésta podrá controlar el uso que se hace de la libertad. 4) Una actividad, por último, puede ser totalmente libre. Ninguna condición previa le es impuesta. El individuo estará simplemente obligado a respetar la ley.

Este último modelo es aquel que puede considerarse como un régimen de libertades públicas. Es necesario, sin embargo, distinguir el régimen de libertades públicas del régimen de derechos públicos individuales, que este autor asocia a las clásica distinción entre derechos

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2 251

de primera generación y derechos de tercera generación, pues considera que “una de las razones por las que aparece más indispensable reconocer los derechos públicos individuales, es decir, facultades que permitan a los individuos exigir del Estado cierto número de prestaciones necesarias para asegurarles un disfrute real del conjunto de libertades. Ellos se diferencian de las libertades públicas, que son facultades reconocidas a los individuos de ejercitar, al abrigo de cualquier presión exterior, un determinado número de actividades establecidas”. Esta posición es defendida en la doctrina francesa por autores como Rivero (1997), Robert (1996), Heymann-Doat (1998) o Lebreton (1997).

Una posición peculiar sobre las libertades informativas respecto a las distintas generaciones de derechos es la del profesor Urías, que diferencia la libertad de expresión del derecho de la información caracterizando a la primera como un derecho de primera generación, como “manifestación directa de la libertad de conciencia individual que garantizará la posibilidad de defender las opiniones personales”, tratándose por tanto de una garantía individual frente a las injerencias estatales. Por su parte, el derecho a la información no sería tanto reflejo de la libertad de conciencia como de la necesidad de “concienciación” de la sociedad, caracterizado por ser su ejercicio básicamente colectivo, como garantía de la opinión pública. Lo considera del citado autor por tanto un derecho de carácter prestacional donde el Estado está obligado a intervenir activamente para garantizar un flujo de información libre (Urías, 2014: 53- 54).

También en el ámbito doctrinal francés se parte de que la distinción entre los derechos y las libertades no se puede negar, sobre todo porque bases filosóficas, religiosas o políticas lideran necesariamente todo debate o toda discusión sobre los derechos y libertades. Pero esta puede ser iluminada por dos elementos: el primer elemento es la intervención de las

autoridades públicas. La expresión "Libertades públicas" implica necesariamente la última, aunque sólo sea por permitir, en los textos, la definición y la enunciación de las condiciones de ejercicio de las libertades. Se puede hablar de derechos naturales del hombre dentro de la esfera filosófica, sin tener en cuenta su aplicación. El segundo elemento es la evolución de los derechos. A los *derechos de* ("poder hacer cualquier cosa que no perjudique a otro ", en palabras de 1789, incluyendo los derechos de opinión, expresión) se añadieron los *derecho a*, calificados de derechos de prestación debido a que requieren la intervención activa de las autoridades públicas, del Estado en particular, para lograrlos (el derecho a la salud, la cultura, etc.). Solamente los derechos tradicionales (derecho de) pueden ser considerados como libertades públicas. Los derechos "a" no pueden, en rigor, ser considerado libertades. (Pontier, 2014: 12-13)

En la doctrina francesa, el adjetivo público vinculado a las libertades implica un poder de autodeterminación del sujeto frente al poder. Así lo expresa Crouzatier-Durant (2009: 7-8), cuando considera que la libertad es la facultad reconocida al hombre de actuar de manera autónoma, es un poder de autodeterminación en virtud del cual el hombre elige su comportamiento personal. El calificativo "público" expresa la oponibilidad de esta libertad al poder público. La palabra público en derecho francés traduce en efecto la intervención del poder. Las libertades públicas son así libertades protegidas de manera específica. Una libertad pública puede ser definida como un poder de autodeterminación reconocido por normas de valor al menos legislativo y beneficiaria de una protección reforzada respecto a las autoridades públicas.

Las libertades públicas y los derechos humanos: estas dos expresiones están, sin duda, vinculadas. Las libertades públicas pueden definirse como los derechos humanos reconocidos por los textos y legalmente protegidos. En otras palabras, el término libertades

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

públicas significa una forma de reconocimiento legal de los derechos humanos, es precisamente la legalización de los derechos del hombre. Como ha declarado J. Rivero, los derechos humanos son una categoría general, permanente, casi ajurídica. Se trata entonces de atributos esenciales del ser humano, cuya existencia es independiente de su consagración por el derecho positivo. En otras palabras, las libertades públicas son la traducción jurídica, por un sistema político dado, de los derechos humanos. Corresponden a los derechos humanos que su reconocimiento y manejo por el Estado estén insertados en el derecho positivo. (Crouzatier-Durant, 2009: 13).

Sin embargo, la doctrina francesa no ha sido capaz de delimitar la diferencia conceptual entre libertades públicas y derechos fundamentales. Lo más ha sido considerar que todas las libertades públicas son derechos pero no todos los derechos son libertades públicas. Si se pretende fundamentar los derechos y libertades del artículo 20.1.a y d) como libertades públicas, de nada sirven los planteamientos de la doctrina francesa que apegados a su ordenamiento positivo, poseen unas premisas que no son trasladables al caso español. Lo curioso de todo esto es cómo la Constitución española de 1978 titula la Sección 1ª del Capítulo II del Título I con el epígrafe “De los derechos fundamentales y las libertades públicas”, sin que existan criterios interpretativos a lo largo del texto constitucional para delimitar los contenidos de uno u otro concepto. Una gran parte de la doctrina española asume la terminología “libertades públicas” para aplicarla a los derechos comunicativos contenidos en el artículo 20 CE. Es el caso de Alzaga (1988: 43), Sánchez Agesta (1991: 128-208), quien ha sistematizado los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución en cinco grupos principales: Libertades individuales, libertades públicas como libertades espirituales, libertades públicas con proyección social, los derechos políticos y los derechos sociales;

Torres del Moral (1992: 235) que a efectos académicos, cataloga los derechos y libertades reconocidos en la Constitución de otra manera, dividiéndolos en cuatro grupos: derechos civiles individuales, libertades públicas, derechos políticos y derechos de prestación; Pérez Tremps (1994: 130) divide los derechos entre derechos de libertad y derechos de prestación. Los primeros caracterizados porque suponen una delimitación negativa de actuación del individuo, lo que implica una actuación de abstención del poder público. Para el citado autor son los que se han considerado tradicionalmente “libertades públicas” e incluye en ellos el derecho de reunión, asociación, inviolabilidad del domicilio, libertad de expresión, etc. Pérez Luño quien, desde una perspectiva cercana a la doctrina francesa, ha abordado la sistematización de los derechos fundamentales de la Constitución agrupándolos en las categorías de libertades públicas y derechos sociales. Así, dentro de las libertades públicas incluye los derechos personales, los derechos civiles y los derechos políticos. Define a los primeros como aquellos que derechos que “se consideran inherentes a toda persona e inviolables, y explicitan y concretan los valores de la libertad y la dignidad humana en el Estado de Derecho” (Pérez Luño, 1988: 176). En un línea similar se encuentra Carreras, quien divide los derechos de la Constitución en libertades públicas y derechos sociales (Carreras , 1996: 33). Dentro de los primeros incluye los derechos de la personalidad, donde incluye como frontispicio la dignidad humana. Por su parte, Cruz Villalón identifica, siguiendo la jurisprudencia constitucional, como derechos fundamentales no sólo los contenidos de la sección primera del capítulo II del Título I, sino a todos los contenidos en dicho capítulo (Cruz Villalón, 1989).

Pérez Luño, como hemos visto, diferencia claramente entre derechos fundamentales y libertades públicas, con la que considera que en ocasiones se confunde.

“Al igual que los derechos fundamentales, las libertades públicas aluden a facultades
Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2 255

y situaciones subjetivas reconocidas por el ordenamiento jurídico; ambas categorías por tanto, se mueven en la esfera de la positividad” (recordemos la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales que realiza este autor, atribuyendo a los segundo un grado de positivización frente a los primeros). De lo que concluye que “mientras las libertades públicas se refieren a los derechos tradicionales de signo individual y tienen como finalidad prioritaria el garantizar las esferas de autonomía subjetiva, los derechos fundamentales, [...] tienen un significado más amplio y comprenden, junto a las libertades tradicionales, los nuevos derechos de carácter económico, social y cultural” (Pérez Luño, 1988: 51).

Una nueva aproximación a su diferencia puede provenir del distinto ámbito y contenido de ambos. Mientras los derechos implican un contenido inmanente a la naturaleza del hombre de carácter estático y cuyo reconocimiento debe producirse de forma igualitaria a todos los hombres tanto formal como materialmente. Los derechos se reconocen y deben protegerse aunque el propio sujeto no reclame su ejercicio o decida no ejercitarlo, su existencia está determinada al margen de la acción o vocación del sujeto hacia su ejercicio. Por su parte, las libertades adquieren virtualidad sólo en cuanto son ejercitadas, se caracterizan por su dinamismo, por su necesidad ejercitabilidad, y sólo adquieren virtualidad para el Derecho cuando deciden ejercitarse. Ello no impide que su reconocimiento sea anterior a su ejercicio, pero sólo el acto volitivo del individuo adquiere trascendencia jurídica.

Pero como hemos indicado anteriormente, es la profesora Sánchez Ferriz, quien mejor ha analizado el concepto de libertades públicas. Para la citada autora, “los derechos-libertades públicas serían los que se derivan directamente de la libertad humana en su lógica manifestación exterior; son derechos que se exteriorizan, que se ejercen con relación a los

demás aunque no necesariamente en forma colectiva pero que, en todo caso, pueden lograr, y aspiran a ello, una repercusión externa a su propio titular (incluso en el ámbito propiamente político) lo que, en cambio, no ocurre con los derechos o libertades individuales ni con los sociales” (Sánchez Ferriz ,1995: 223). De lo que deduce las siguientes notas características:

1o.- Que hayan sido siempre libertades “molestas” (o de incómodo reconocimiento) para el poder

2o.- Que, siendo expresión de la natural sociabilidad de la persona, se hallen a medio camino entre los derechos o libertades individuales y los políticos.

3o.- Que hayan sido, no obstante no ser políticos, los de más fácil politización.

4o.- Que su reconocimiento se vea acompañado de cautelas y condicionamientos o, en su caso, de remisiones hechas por los textos constitucionales a la ley.

Las libertades públicas son espacios de libertad oponibles y activables frente al poder político, frente al Estado, lo que permite a la citada autora distinguirlas de las libertades ejercidas en relación con particulares o frente al poder político pero sin adoptar posición activa alguna sino, simplemente, como resistencia pasiva; poniendo como ejemplo cualquiera de las facultades del propietario sobre la cosa, ejercitables frente a cualquier tercero, que no puede entenderse como libertad pública ni siquiera en el caso de posibles intromisiones del poder público. En ambos casos se trata de afirmar la libertad del individuo; el doble carácter de esta (personal o individual y social) dará lugar a su doble reivindicación con carácter negativo o de resistencia en un caso y con carácter positivo, de manifestación externa, en el otro. La importancia de la oponibilidad de dichos derechos los especifica Schmitt-Glaesser, pues se trata de derechos de libre configuración de su titular, que puede orientarlos al debate político, pero sólo si ésta es su voluntad. Son derechos negativos, en efecto, en la medida en que su núcleo básico de libre configuración está acompañado por una protección frente a injerencias o restricciones del Estado; por eso en ese sentido, y en cuanto no se haga injusticia

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

a su verdadero carácter, se trata de derechos de defensa. Derechos que se ejercen sin vinculación a fin alguno, como derechos indeterminados a concretar libremente por su titular. (Solozabal, 1991a: 103-104). El elemento diferencial de la libertades públicas es que son manifestación inmediata del aspecto social del hombre y, sin llegar a constituir derechos políticos (aunque el profesor Escobar de la Serna (2004: 85) incluye las libertades de expresión y el derecho a la información en dicha categoría), forman un grupo diferente de los derechos individuales o más vinculados a la personalidad aislada del hombre. “En este sentido, algo parece innegable y es la mayor carga política del término libertades y la mayor carga filosófica, iusnaturalista, e individualista, del término derechos” (Sánchez Ferriz, 1995: 225).

En una línea similar se expresa la doctrina francesa, que considera que “las libertades se ejercen en el marco de una sociedad. Se denominan públicas aquellas que afectan a la vez a nuestro poder y a los otros: la libertad de asociación, la libertad de religión, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, etc. No se puede hablar de libertades "privadas", lo que sería inexacto y falso. Las libertades públicas se oponen a los derechos subjetivos, la distinción entre los dos es a la vez necesaria y difícil (F. Terré). (Pontier, 2014: 13). El Consejo Constitucional francés ha seguido dicha doctrina al no definir el concepto de las libertades públicas, ni, tampoco, que sería "las garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas", pero en la lectura de las decisiones del Consejo Constitucional se incluyen entre las libertades públicas: libertad de comunicación o el derecho a la comunicación libre y sus variaciones (comunicación de ideas y información, la libre comunicación de pensamientos y opiniones, la libertad de

comunicación audiovisual, la libertad de hablar, escribir e imprimir)³ (Champeil-Desplats, 2012: 1-2)

Esa vinculación pública de las libertades informativas es defendida por Desantes al considerarla una libertad social, “destinada a ejercitarse de una manera publica” y toma la definición de Messner para quien la libertad social es la autodeterminación del hombre para alcanzar sus fines existenciales sin impedimentos por parte de otros hombres o de la sociedad (Desantes, 1977: 25). Y continúa considerando que “la estenosis de la libertad solamente se logra salvar cuando la libertad se considera lo que es: una emanación de un derecho o una de las formas de ejercitarse un derecho”. En una postura similar se sitúa Sánchez Ferriz (1993:226) diferenciando entre los derechos más inherentes al ser humano, difícilmente limitables y hasta “regulables” por ley, los ilegislables (en expresión tan polémica en el sexenio revolucionario español): la vida, la integridad física y moral, la intimidad. En cambio, derechos-libertades públicas serían los que tienen, según se ha dicho, una trascendencia o manifestación que busca hallar efectos (incluso, políticos) fuera del estricto ámbito personal de su titular.

Otra importante aportación doctrinal sobre las libertades públicas proviene del profesor Sánchez Agesta, para quien

³ Déc. n°82-141 DC, 27 juillet 1982, Loi sur la communication audiovisuelle ; n°96-378 DC, 23 juillet 1996, Loi de réglementation des télécommunications ; n°201-450 DC, 11 juillet 2001, Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. /Déc. n°64-27 L, 17 mars 1964, Nature juridique de certaines dispositions des articles 1er, 5, 6, 7 bis et 11 de l'ordonnance n°59-273 du 4 février 1959 relative à la Radiodiffusion-Télévision française. /Déc. n°84-173 DC, 26 juillet 1984, Loi relative à l'exploitation des services de radio-télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé. /Déc. n°91-304 DC, 15 janvier 1992, Loi modifiant les articles 27, 28, 31 et 70 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. /Déc. n°84-181 DC, 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse ; n°94-345 DC, 29 juillet 1994, Loi relative à l'emploi de la langue française.

Todas la decisiones citadas son accesibles en el sitio web del Consejo Constitucional francés:
<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/francais/les-decisions/les-decisions.95486.html>.

“los derechos fundados en la misma naturaleza humana pueden desbordar al individuo en la medida en que se proyectan en la vida del espíritu, en la vida social y en la opinión como patrimonio común, y en general en el orden de la sociedad, en cuanto son derechos a la innovación, a la crítica, o a la creación. Y en las condiciones del mundo actual varios de estos derechos tienden normalmente a rebasar ese carácter limitado de derechos que agotan su virtualidad en la persona. Tales son los derechos que recaen sobre las libertades públicas” (Sánchez Agesta, 1993: 477).

Continúa precisando que la trascendencia de estos derechos reside en que su ejercicio genera de manera inmediata y necesaria poder social por cuanto se proyectan sobre la opinión pública y son manifestación de la libertad de creación, por la que un individuo o muchos tratan efectivamente de provocar un efecto social. Al comparar el derecho de expresión del pensamiento con cualquier otro derecho cuya potencialidad inmediata se circunscribe a la personalidad del que lo ejerce, apreciamos claramente su naturaleza. La intimidad, la libertad de residencia o el derecho a la educación y la instrucción, resguardan la seguridad o el desenvolvimiento personal, y sólo de manera refleja y accesoria pueden actuar sobre el medio social. La libertad de expresión del pensamiento como facultad de innovación y creación o la libertad de enseñanza o la difusión de información, en cambio, no afectan sólo a quienes la ejercen, sino a todos aquellos que reciben el pensamiento o la enseñanza o la información. El derecho de expresión del pensamiento supera el angosto concepto de una facultad subjetiva para integrarse en la noción más amplia de una acción social. Respecto al valor jurídico de las libertades públicas como indica Sánchez Ferriz,

“es indudable que se trata de derechos de individuo que se ejercen en relación a los demás. Su vinculación a la libertad de la persona humana y al presupuesto de su

dignidad no admite discusión; sin embargo, no responden tanto a las mínimas exigencias humanitarias (como los derechos personalísimos) cuanto a su concreto propósito de establecer y defender la vida democrática. Es lógico, pues, que podamos añadir a la concepción de las libertades públicas como derechos del individuo en relación con los demás otra nota fundamental que nos permite completar su definición: “cuyo ejercicio libre, garantizado por la Constitución, es expresión del orden democrático”. De ello deduce “el carácter fundante, esencial, del reconocimiento, respeto y regulación de éstas; de ahí también el sentimiento garantista y la certeza o seguridad que debe presidir tal regulación y el carácter institucional que, de modo especial, concurre en las libertades públicas. Este es un aspecto que ya quedó apuntado al referirnos a la “doble faz” subjetiva y objetiva, de los derechos fundamentales y las libertades públicas” (Sánchez Ferriz , 1995: 244).

La dimensión pública del derecho a la información también es puesta de manifiesto por Ortega al considerar que se trata de un derecho de la persona que tiene una clara función social, que se concibe, en esencia, en la relación de l individuo con los otros (Ortega, 2008: 53). Incluso una concepción institucional de los derechos fundamentales (que como indicamos anteriormente no abordamos en este texto) no permite una comprensión de éstos exclusivamente normativa, ni aun cuando la misma se refiriese al plano constitucional, que ignore la suerte de las relaciones sociales o ámbitos vitales que dichos derechos fundamentales contemplan. De modo que el derecho fundamental como institución es inseparable de su vigencia efectiva, de la realidad de su observancia en la vida de la comunidad por un número significativo de sus titulares. «Los derechos fundamentales sólo son considerados como institutos si son realizados en la realidad de la vida social por medio de la actuación de muchos titulares de derechos fundamentales... Donde, en efecto, sólo unos

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2 261

pocos ejerciesen de verdad sus derechos fundamentales, éstos perderían su realidad viva, le faltaría su vigencia efectiva, se entumecería el ámbito vital de libertad» (Häberle, 1983: 110)

Esta concepción institucional (y por tanto de carácter público o si preferimos social) de los derechos se manifiesta con especial intensidad en algunos de ellos, como es el caso, por poner un ejemplo bien significativo, de las libertades informativas reconocidas por el artículo 20 de la Constitución, que presentan no sólo una dimensión individual, sino también una vertiente institucional. En efecto, el derecho a la libertad de expresión no sólo es un derecho fundamental de toda persona que se entrelaza con su dignidad, sino que se nos presenta asimismo como indispensable para que pueda existir un auténtico sistema democrático, por cuanto que las elecciones sólo pueden desempeñar con exactitud su función cuando el ciudadano se encuentra en condiciones de poderse formar un juicio sobre la vida política y la conducta de sus gobernantes, de modo tal que pueda aprobar o rechazar (Fernández Segado, 1993: 206).

3. DISCUSIÓN

De todo ello, no podemos sino deducir y asimilar que tanto la libertad de expresión constitucionalizada a través del punto a) del artículo 20.1 CE. como el derecho a la información recogido en el punto d) del mismo precepto, pueden ser consideradas como libertades públicas, en su conformación como derechos que se desarrollan en el ámbito público y que requieren de una esfera de libertad del individuo en su ejercicio, ejercicio que coadyuva al adecuado funcionamiento del régimen representativo, tal y como reconoce el Tribunal Constitucional en jurisprudencia reiterada.

Un punto de vista intermedio respecto a su configuración como derechos entroncado con la libertad, es la que realiza Desantes, para quien

“la idea trabajosa y definitivamente conquistada por el hombre para determinar el ámbito existencial de su actuación no es la de la libertad, sino la de derecho, incluido el derecho a la libertad. Así también, en el campo de la información. No se olvide que, en concreto, el *ius communicationis* fue ya enunciado, definido y perfilado en el siglo XVI por dos españoles, Francisco de Vitoria⁴ y Juan Luis Vives. Los derechos existenciales, derechos humanos o derechos fundamentales, como el derecho a la información dejarían de serlo si no pudiesen ejercitarse libremente. De esa manera, la libertad sigue la suerte del derecho fundamental en toda su ingravidez e ilimitabilidad. La libertad es el único modo de ejercitar el derecho. En otras palabras, tiene un significado adverbial con respecto al significado sustantivo del derecho. He aquí el acierto de nuestra Constitución al reconocer el derecho a la información y al reconocer, por dos veces, que ha de ejercitarse *libremente*. El sentido de las libertades públicas en España encuentra su servidumbre y su grandeza en esa forma adverbial” (Desantes, 2004: 105).

Considera Desantes que todo derecho subjetivo supone una atribución de poder concreto a un sujeto cuyo arbitrio se deja a su ejercicio y defensa. En dicha primera fase de atribución, la actitud del sujeto es pasiva, pues se le otorga un poder que él no tiene necesidad de aceptar, expresa o tácitamente. O en otras palabras, lo posee por el simple hecho de ser persona. De ahí que también pueda ser caracterizado como derecho personalísimo o de la personalidad.

⁴ Sobre la figura del Francisco de Vitoria como antecedente del Derecho de la Información vid. DESANTES GUANTER, J.M., *Francisco de Vitoria, precursor del Derecho de la Información*, Fundación de la Comunicación Social, Madrid, 1999.

Una vez otorgado puede ejercitarlo o no. Una vez conferido en una segunda fase el sujeto puede realizar un ejercicio efectivo y concreto de dicho poder con todas sus consecuencias. Es por tanto dicha vertiente dinámica del derecho lo trascendente y no su proclamación teórica que para el profesor valenciano es un *prius* que legitima la actuación o actuaciones. (Desantes, 1973: 169) Se justifica así la doble vertiente de la libertades informativas como derecho (reconocimiento previo de una capacidad de actuación) y como libertad pública (ejercicio en el ámbito público de las capacidades de actuación reconocidas).

Por tanto, la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos fundamentales vinculados con la dignidad de la persona como manifestación de la individualidad inmanente que caracteriza al ser humano. Dichos derechos adquieren virtualidad para el Derecho cuando se ejercitan en relación a los demás en el ámbito público, sino es así no pueden ser concebidos como derechos sino como simples formas de manifestación privada. Esa exigencia de ejercitarlos en público para que sean recocidos por el ordenamiento jurídico junto con la necesidad de su desenvolvimiento en libertad fuera de la intervención del poder público y con capacidad de autodeterminación frente a éste, nos llevan a conceptualizarlos como “libertades públicas”.

4. BIBLIOGRAFÍA

Álvarez Conde, E. (2003). *Curso de Derecho Constitucional. Vol. I (4a Ed.)*, Madrid: Tecnos.

Alzaga, O. (1988). *Derecho Político Español según la Constitución de 1978 II. Derechos fundamentales y órganos del Estado*, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

Artola, M. (1986). *Los derechos del hombre*, Madrid: Alianza/Ediciones del Prado.

Barahona Quesada, M. (2013) « El papel de la investigación teórica en la construcción

del conocimiento.” *Rev. Rupturas* 3(1). 2-16.

Basile, S., (1988). Los valores superiores, los principios fundamentales y los derechos y libertades públicas. En García de Enterría, E. y Predieri, A., *La Constitución Española de 1978. Estudios sistemático*, 5a Ed. (pp. 263-318) Madrid: Civitas.

Berlin, I. (1998). *Cuatro ensayos sobre la libertad*, Madrid: Alianza. Carreras Serra, Ll. de (1996). *Régimen jurídico de la Información*. Barcelona: Ariel.

Champeil-Desplats, V. (2012). Le Conseil constitutionnel a-t-il une conception des libertés publiques?. *Jus Politicum* - n° 7, 1-22.

Crouzatier-Durant, F. (2009). *Fiches de libertés publiques et droits fondamentaux*, París: Ellipses.

Cruz Villalón, P. (1989). Formación y evolución de los derechos fundamentales. *Revista española de Derecho Constitucional* año 9, Núm. 25, Enero-Abril 1989, 35-62.

Desantes Guanter, J.M. (2004). *Derecho a la información. Materiales para un sistema de la comunicación*. Valencia: Fundación Coso..

Desantes Guanter, J.M. (1999). *Francisco de Vitoria, precursor del Derecho de la Información*. Madrid: Fundación de la Comunicación Social.

Desantes Guanter, J.M. (1974). *La información como derecho*. Madrid: Editora Nacional.

Desantes Guanter, J.M. (1977). *Fundamentos del Derecho de la Información*. Madrid: Confederación Española de Cajas de Ahorro.

Dworkin R. (1984). *Los derechos en serio*, Barcelona: Ariel. Escobar de la Serna, L. (2004). *Derecho de la Información*, Madrid: Dykinson. 2004.

Fernández Segado, F. (1993). *La teoría jurídica de los derechos fundamentales*.

Revista española de Derecho Constitucional año 13, Núm. 39, Septiembre-Diciembre 1993, 195-247.

Häberle, P. (1983). *Die Wesensgehaltsgarantie des Artikel 19 Abs. 2 Grundgesetz*, (3a ed.). Heidelberg

Heymann-Doat, A. (1998). *Libertés publiques et droits de l'homme*. París: LGDJ.

Lebreton, G. (1997). *Libertés publiques et droits de l'homme*. París: Armand Colin.

Mirete Navarro, J.L. (1988). La fundamentación filosófico-jurídica de los derechos humanos en la Grundgesetz alemana y en la Constitución española de 1978, En VV.AA., *Jornadas de estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución. Volumen I* (pp. 243-251) Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia.

Morange, J (1996). *Les libertés publiques (7a Ed.)*. París: Presses Universitaires de France (PUF).

Ortega Gutierrez, D. (2008). *El Derecho a la comunicación. Un análisis jurídico-periodístico*. Madrid: Editorial Ramón Areces/Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos.

Pavia, M-L. (2003). La dignité de la personne humaine. En Cabrillac, R.; Frison-Roche, M-A. & Revet, T., (Dir), *Libertés et droit fondamentaux*, 9a edición (pp. 114- 142). Paris: Dalloz, , 2003.

Peces Barba, G. (1973). *Derechos Fundamentales I. Teoría General*. Madrid: Biblioteca Universitaria Guadiana.

Pérez Luño, A. E. (1999). *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución (6o ed.)*. Madrid: Tecnos.

Pérez Luño, A. E. (1988). *Los derechos fundamentales (3a Ed)*. Madrid: Tecnos.

Pérez Tremps, P. (1994). Los Derechos Fundamentales. En López Guerra, L. *et al.*, *Derecho Constitucional Vol. I* (pp. 125-143). Valencia: Tirant Lo Blanch.

Pontier, J-M. (2014). *Droits fondamentaux et libertés publiques* (5^e édition), París: Hachette.

Revet, T. (Dtor) (2003). *Libertés et droit fondamentaux*, (9a Ed.) Paris: Dalloz.

Rivero, J. (1997). *Libertés Publiques 2o Ed.* París PUF- Colección “Themis”.

Robert, J. (1996). *Droits del ´homme et libertés fondamentales*. Paris: Montchrestein.

Ruiz-Giménez Cortés, J. y Ruiz-Giménez Arrieta, I. (1988). Artículo 10. Derechos fundamentales de la persona. En Alzaga Villaamil, O. *Comentarios a la Constitución española de 1978*. (pp.37-113) Madrid: EDERSA y Cortes Generales.

Sánchez Agesta, L. (1991). *Sistema Político de la Constitución española de 1978*, (6a Ed.). Madrid: EDERSA.

Sánchez Agesta, L. (1993). *Principios de Teoría Política*. Madrid: Editora Nacional.

Sánchez Ferriz, R. (2004). *Delimitación de las libertades informativas*. Valencia: Tirant lo Blanch.

Sánchez Ferriz, R. (1995). *Estudio sobre las libertades* (2a Ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.

Sánchez Ferriz, R. (1989). Las libertades públicas como grupo de derechos con características propias no susceptible de ser confundido con los restantes derechos constitucionales. *Revista de Derecho Político*, núm. 30, 1989, 55-73.

Sánchez González S. (1988). Comentario introductorio al Título I. En Alzaga Villaamil, O. *Comentarios a la Constitución española de 1978*. (pp.17-36) Madrid: EDERSA y Cortes Generales.

Smend, R. (1985). *Constitución y Derecho Constitucional*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985.

Solozábal Echavarría, J. J. (1991b). Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales. *Revista de Estudios Políticos*, ISSN 0048-7694, No 71, 1991, 87-110

Solozábal Echavarría J. J. (1991a), La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales. *Revista española de derecho constitucional*, ISSN 0211-5743, Año no 11, No 32, 1991. 73-114

Soria, C. (1981). *Derecho a la información y derecho a la honra*, Barcelona: ATE.
Torres del Moral, A. (1988). *Principios de Derechos Constitucional español I*, Madrid: Átomo.

Urías, J. (2014). *Principios de Derecho de la Información (3a ed.)*. Madrid: Tecnos.

Vallés Copeiro del Villar, A. (2005). *Curso de Derecho de la Comunicación Social*, Valencia: Tirant Lo Blanch.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA ¿QUÉ HA CAMBIADO DESDE EL DECRETO *INTER MIRIFICA*?

Carmen Fuente Cobo

Centro Universitario Villanueva, España

EL DECRETO *INTER MIRIFICA* APROBADO POR EL CONCILIO VATICANO II Y LA INSTRUCCIÓN PASTORAL *COMMUNIO ET PROGRESSIO*, ELABORADA POR LA PONTIFICIA COMISIÓN PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO DESARROLLO DEL DECRETO, MARCAN EL INICIO DE UNA LÍNEA DE PENSAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA QUE HACE DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN UNO DE SUS EJES. Esta línea doctrinal se amplía, refuerza y profundiza con el paso del tiempo, al ritmo de la propia evolución social y tecnológica, e incorpora como uno de sus contenidos centrales la preocupación por las condiciones efectivas de ejercicio de este derecho (procesos de producción informativa, pluralismo y concentración mediática, infopobreza, etc.).

1. MARCO TEÓRICO

El interés de la Iglesia Católica por los medios de comunicación es muy anterior al Concilio Vaticano II. Baragli señala que pueden encontrarse no menos de 755 declaraciones sobre cuestiones relacionadas con la comunicación en documentos de la Iglesia desde los tiempos de la invención de la imprenta hasta 1973 (Baragli 1973, cit. por Soukup 1993, p. 99). Sin embargo, la doctrina de la Iglesia acerca de los medios de comunicación social tal como los entendemos en sentido moderno no arranca hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo con el desarrollo de la prensa.

Tabla 1

Principales documentos del magisterio de la Iglesia en los que se aborda el derecho a la información	
Pío XII	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discurso ante editores norteamericanos (11/07/1946) ▪ Discurso en el III Congreso Internacional de Prensa Católica (15/02/1950)
Juan XXIII	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encíclica <i>Pacem in terris</i> (11/04/1963)
Concilio Vaticano II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto <i>Inter mirifica</i> (4/12/1963) ▪ Constitución pastoral <i>Gaudium et spes</i> (7/12/1965)
Pablo VI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Discurso ante el seminario europeo de la ONU sobre libertad de información (17/04/1964) ▪ Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 1975
Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrucción pastoral <i>Communio et progressio</i> (18/05/1971)
Juan Pablo II	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mensajes para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 1985 y 1986
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instrucción pastoral <i>Aetatis novae</i> (22/02/1992) ▪ <i>Ética en la publicidad</i> (22/02/1997) ▪ <i>Ética en las comunicaciones sociales</i> (4/06/2002) ▪ <i>Ética en internet</i> (22/02/2002)
Pontificio Consejo Justicia y Paz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Compendio de Doctrina Social de la Iglesia</i>, 2004

a. Los inicios de la doctrina social de la Iglesia sobre los medios de comunicación

La prensa es, en efecto, el primer medio de comunicación objeto de una atención preocupada y defensiva de la Iglesia. La encíclica *Mirari vos* sobre los errores del mundo moderno, promulgada por Gregorio XVI en 1832, incluye entre estos errores la libertad de imprenta, “nunca suficientemente condenada” (MV 11). Tras la prensa, le toca el turno al cine. El primer documento oficial de la Santa Sede sobre este medio es un decreto de 1912, bajo el pontificado de San Pío X (1903-1914), prohibiendo en las iglesias cualquier tipo de proyección y espectáculos cinematográficos (Pérez Montoya, 1983, p.78). Pero la primera vez en la que la Iglesia dedica un documento completo del magisterio ordinario a un medio

de comunicación social es la encíclica *Vigilanti cura* promulgada en 1936 por Pío XI (1922-1939) y dedicada al cine, al que se reconoce su condición de arte y su “gran utilidad para la instrucción y la educación” (cit. por Pérez Montoya., op cit., p. 81). Será Pío XII (1939-1958), con todo, quien dé forma más definitiva al cuerpo doctrinal y normativo sobre el cine a través de 89 documentos en los que se aborda este medio durante su pontificado.

También la radio y la televisión se incorporan al magisterio de la Iglesia. Cabe recordar que Pío XI inauguró la Radio Vaticana en 1931 con un primer radiomensaje emitido el 12 de febrero con el que se iniciaría una tradición de alocuciones electrónicas continuada e intensificada por su sucesor, Pío XII (1939-1958). Y cine, radio y televisión constituyen el contenido de la encíclica *Miranda prorsus* publicada en 1957 por Pío XII. Esta encíclica marca un antes y un después en la mirada de la Iglesia hacia los medios de comunicación, caracterizada hasta entonces por dos rasgos que ya hemos comentado parcialmente: un interés sectorial por cada medio, que es abordado de manera separada; y una actitud defensiva ante lo que se percibe como posibles efectos negativos de dichos medios (Pérez Montoya, 1983).

b. La contribución de Pío XII y la encíclica *Miranda prorsus*

En la encíclica *Miranda prorsus* los medios son asumidos como “inventos maravillosos de la técnica”, “frutos del ingenio y del trabajo humano”, “dones de Dios, Creador del hombre e inspirador de toda obra buena” (MP 1), y “benéficos instrumentos que permiten difundir en el mundo los grandes tesoros de Dios, como buenas semillas destinadas a producir el fruto de la verdad y del bien” (MP 2). Asimismo esta encíclica aborda por primera vez el concepto de “comunicación” referido al conjunto de los medios, aunque lo identifica con la idea de “difusión” (Pérez Montoya, 1983, p. 83).

Pío XII, cuyos radiomensajes tuvieron especial impacto durante el período de la II Guerra Mundial, dedicó al menos 77 intervenciones a los medios de comunicación social. Fue también el primer Papa en aparecer en televisión, el 17 de abril de 1949, por petición de la televisión francesa, con ocasión de la festividad de la Pascua (Hernández, 2014). Cruaños (1993), en su tesis doctoral sobre “El derecho a la información en la Iglesia”, dirigida por José María Desantes, atribuye a Pío XII la primera inspiración acerca de un posible derecho a la información, cuando, en un discurso a editores, directores y periodistas de diarios norteamericanos pronunciado el 11 de julio de 1946, inmediatamente después de los horrores vividos en la II Guerra Mundial, afirma el derecho a saber la verdad frente a quienes quieren ocultarla. “El mundo no será rescatado del fango del inhumano sufrimiento e injusticia en el que agoniza, mientras la sospecha, la desconfianza y las ambiciones inconfesables ocultan la verdad a quienes tienen derecho a saberla, para bien de todos”, proclama.

Si la contribución de Pío XII a una comprensión actualizada de los medios de comunicación es considerada muy relevante, más aún lo es la de sus sucesores, Juan XXIII (1958-1963) y Pablo VI (1963-1978), los dos Papas del Concilio Vaticano II, inaugurado solemnemente por el primero el 11 de octubre de 1962 y clausurado el 8 de diciembre de 1965 por el segundo.

c. La formulación del derecho a la información en la encíclica *Pacem in terris*

Siguiendo la estela iniciada por su predecesor, la influencia de Juan XXIII en el pensamiento de la Iglesia sobre los modernos medios de comunicación aparece reflejada en 55 intervenciones y, sobre todo, en la encíclica *Pacem in terris*, en la que aparece ya una primera formulación del derecho a la información.

La carta encíclica *Pacem in terris*, promulgada por Juan XXIII el 11 de abril de 1963, en su quinto año de pontificado y en el periodo entre la primera y la segunda sesión del Concilio, merece relectura continua ya que a pesar del tiempo transcurrido sigue resonando la actualidad de su contenido, dedicado a “la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”, como reza su encabezamiento.

El documento entra en primer lugar a considerar el orden que debe regir entre los hombres y que se fundamenta en la consideración de la persona humana como sujeto de derechos y deberes que “dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto” (PT 8) e incluyen el derecho natural de cada persona a “manifestar y difundir sus opiniones” y a “disponer de una información objetiva de los sucesos públicos” (PT 12).

De las referencias de la *Pacem in terris* a la información cabe destacar, además, la relación directa que establece entre verdad y paz. El primer principio que debe regir las relaciones internacionales es la verdad (PT 86) y esto tiene consecuencias directas para los medios informativos, a los que se pide que observen (“de forma absoluta”) las “normas de una serena objetividad”, expresión extraordinaria que merece ser destacada. Una objetividad dentro de la cual cabe sin duda la posibilidad de que los pueblos subrayen los aspectos positivos de su vida pero que excluye tajantemente “los sistemas de información que, violando los preceptos de la verdad y de la justicia, hieren la fama de cualquier país” (PT 86).

Para Cruaños, es Juan XXIII el primer pontífice que “nos habla por primera vez del derecho a la información, tal como lo entiende la doctrina *iusinformativa* y lo formula la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Y Carlos Soria abunda en la relevancia de

este texto cuando lo cita como uno de los documentos que han tenido “una cierta significación para el progreso público del derecho a la información” (Soria, 1974, p.480).

2. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS DOCUMENTOS DEL CONCILIO VATICANO II

El 25 de enero de 1959, tres meses después de su elección como pontífice, Juan XXIII anunciaba a un grupo de dieciocho cardenales reunidos en San Pablo de Extramuros, su intención de convocar un Concilio Ecuménico y un Sínodo de la diócesis de Roma, y de proceder a la reforma del Código de Derecho Canónico. El texto que llevaba preparado Juan XXIII para este momento es revelador de la sencillez del propio Pontífice, quien confiesa que realiza el impactante anuncio de la doble convocatoria “temblando un poco por la emoción” pero a la vez con “humilde resolución de propósito”. Según el relato periodístico de Martín Descalzo (1967, cit. por Pascual, p.17), que cubrió informativamente todo el Concilio, una circunstancia fortuita hizo que el texto de este discurso fuera conocido por los periodistas unos minutos antes que por los cardenales, incidente que traemos a colación únicamente para ilustrar algo que constituye una característica importante de este Concilio ecuménico: su carácter mediático. El mismo tono directo, emotivo y sincero es utilizado por Juan XXIII en su discurso a los periodistas llegados a Roma para cubrir el evento, cuando en el marco de la Capilla Sixtina les pide ayuda a la vez que les transmite su afecto sincero. “La audiencia de hoy quiere ser un testimonio de la estima que Nos profesamos a los representantes de la prensa y de la importancia que damos a vuestro papel”, les dice el Papa.

Por lo que se refiere al pensamiento y discurso de la Iglesia Católica sobre los medios de comunicación, el Concilio Vaticano II marca también un antes y un después, en la medida en que aborda por primera vez, de manera global y conjunta, el fenómeno de los medios de comunicación social y su trascendencia en el mundo moderno, por medio del decreto *Inter*

mirifica, uno de los dos primeros documentos aprobados por los padres conciliares, al finalizar la primera sesión del Concilio.

a. El camino hacia el decreto *Inter mirifica*

Del decreto *Inter mirifica* sobre los medios de comunicación social cabe comenzar subrayando dos de sus circunstancias más significativas. La primera es que es el documento que mayor atención mediática suscitó. Citando un estudio de A. González Molina (1971), que analizó la cobertura de prensa del Concilio Vaticano II, Cruaños (1993, p. 483) señala que este decreto fue el documento que más cobertura recibió por parte de los grandes diarios, tanto los confesionales como los aconfesionales e incluso los menos próximos a la doctrina de la Iglesia, en las dos etapas conciliares (1962 y 1963) en que este documento fue tratado. Y la segunda circunstancia significativa es que el decreto *Inter mirifica* fue el que obtuvo mayor número de votos en contra de los padres conciliares durante todas las etapas de su gestación y en la votación final.

El recorrido del decreto puede trazarse en tres fases: una etapa antepreparatoria, en la que se trabaja en la elaboración de la agenda de temas del Concilio; una segunda etapa, de preparación de los documentos para su debate por parte de los padres conciliares; y una etapa conciliar final, de discusión y modificación de dichos documentos en las sesiones conciliares.

(a) La consulta al episcopado mundial y a las universidades

El 18 de junio de 1959 se pone en marcha una comisión antepreparatoria del Concilio, presidida por el Cardenal Tardini, que envía una carta-circular invitando al episcopado mundial a realizar sugerencias sobre temas y enfoques, “con toda libertad y sinceridad” (cit. por Pascual, p.18). Esta consulta al episcopado es acompañada de otra de carácter técnico a las universidades católicas. Como resultado de esta consulta se recibieron 9.348 propuestas de temas para el trabajo del futuro concilio, de los que solamente 18 hacían referencia al

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

ámbito de la comunicación, según el relato de Claudio María Celli (2015), Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, para quien estos datos demuestran que “en la fase preparatoria del Concilio Vaticano II, la Comunicación no fue considerada como un horizonte estratégico para la Iglesia o para el futuro de la humanidad”. La inclusión del tema de los medios de comunicación en la agenda del Concilio Vaticano II fue, según Monseñor Celli, una iniciativa propia e inspirada –una “moción”, afirma-- del Papa Juan XXIII.

También parece “inspirado” de la misma manera el itinerario seguido por los temas durante su tramitación y discusión durante el Concilio ya que, a juzgar por las respuestas a la consulta a la que nos referíamos más arriba, poco hacía presagiar resultados que pudieran ser de valor e interés para un mundo que tenía su mirada puesta en el Vaticano. Pascual resume su análisis de las respuestas recibidas de obispos y superiores generales en tres rasgos: pobreza de doctrina sobre la comunicación social y sus medios como tales; orientación defensiva hacia este ámbito; y sentido doméstico en las recomendaciones y sugerencias sobre actuaciones.

No es más alentador el balance sobre las respuestas recibidas de las cinco universidades (de las 65 consultadas) que contestaron en relación con los medios de comunicación social. De las 2.000 páginas que integran los tres tomos en los que se recogen los estudios y propuestas de los centros universitarios consultados, apenas ocho se ocupan de los medios de comunicación, prueba del limitadísimo interés que la cuestión suscitaba igualmente en el ámbito académico vinculado a la Iglesia. El tono de estos estudios y propuestas, concluye Pascual, refleja un “espíritu conformista”.

(b) El Derecho a la información en el esquema de constitución *De instrumentis communicationis socialis*

Finalizados los trabajos de consulta, los trabajos preparatorios del Concilio en lo que se refiere al tema de los medios de comunicación social son encomendados a un Secretariado preparatorio de Prensa y Espectáculos, integrado por 46 personas de 21 naciones (18 miembros y 26 consultores), ninguno de los cuales seglares ni profesionales de los medios, aunque en el grupo sí se incluyen estudiosos relevantes de la materia, entre los que Pascual (p.55) cita al P.Emilio Gabel, a Mons.Herrera Oria y a Mons.Salcedo.

El fruto del trabajo desarrollado por este secretariado es un esquema de Constitución bautizada con el nombre *De instrumentis communicationis sociales*, con 114 artículos, que a pesar del interés eminentemente pastoral de sus redactores, puesto de manifiesto en el predominio de cuestiones morales en su contenido, refleja un evidente “planteamiento magnánimo” (Gutián, p.624) de quienes prepararon el Concilio, en la medida en que el objetivo inicialmente trazado era una constitución y no un decreto, como resultó finalmente.

El esquema de constitución incluye una formulación del derecho a la información en el número 21, que lleva precisamente por título “Del Derecho a la Información” y se inspira en el discurso de Pío XII al III Congreso Internacional de la Prensa Católica, pronunciado con fecha 15 de febrero de 1950, y en el que el pontífice defiende una opinión pública libre a la que debe contribuir una prensa igualmente libre. De acuerdo con la redacción del número 21, “la sociedad humana tiene [por tanto] el derecho a la información sobre todas las cosas que interesan a los individuos y a las agrupaciones según las condiciones de cada uno”. Añade a continuación las condiciones para que este derecho sea ejercido de manera recta: “que, guardadas siempre la verdad, la justicia y la caridad, la comunicación sea íntegra en objeto, es decir, que la esencia de la realidad anunciada no se mutile o modifique injustamente por la elección o supresión de las noticias y que, además, sea honesta y conveniente en la

forma, es decir, que respete la santidad de las leyes morales y la dignidad del hombre tanto en la presentación como en la investigación de las noticias”.

(c) El derecho a la información en el decreto *Inter mirifica*

El esquema de Constitución, con el artículo dedicado al derecho a la información que se acaba de exponer, se incorporó a la agenda conciliar. El 11 de octubre de 1962 el Papa Juan XXIII inauguraba solemnemente las sesiones del Concilio Ecuménico Vaticano II con un discurso en el que señalaba la necesidad de afrontar la realidad de un mundo que presentaba cambios fundamentales a los que había que dar respuesta evangélica: “Es necesario, ante todo, que la Iglesia no se separe del patrimonio sagrado de la verdad recibida de los padres. Pero, al mismo tiempo, tiene que mirar al presente, considerando las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo moderno, que han abierto nuevos retos al apostolado católico” (cit. por Pascual, p.99).

Antes de continuar con el análisis del recorrido seguido por el esquema de constitución hasta su pase a decreto, conviene recordar algunas fechas clave del Concilio, que se desarrolló en cuatro etapas. Durante la primera, que va desde la apertura el 11 de octubre de 1962 hasta la clausura el 8 de diciembre del mismo año, se discuten los esquemas de varios documentos, incluido el relativo a los medios de comunicación. La segunda etapa, que va desde el 29 de septiembre hasta el 4 de diciembre de 1963, se cierra con la aprobación del decreto *Inter mirifica*. Entre la primera y segunda etapa se producen varios acontecimientos de especial impacto. El primero de estos es la promulgación por Juan XXIII, el 11 de abril de 1963, de la encíclica *Pacem in terris*, a la que hemos dedicado atención en otro apartado anterior. Dos meses después, el 3 de junio, fallece el Papa que había puesto en marcha el Concilio. Y el 21 de junio es elegido como sucesor Pablo VI, que solo una semana después, el 27 de junio, anuncia la apertura de la segunda sesión conciliar.

Nos situamos por tanto en la primera etapa del Concilio, en la que el esquema de constitución pasa a la deliberación de los padres conciliares. El interés de estos fue relativamente escaso si atendemos a las fuentes que maneja Pascual para describir el ambiente en el que transcurrieron los primeros debates. Apoyándose en el testimonio de dos observadores (Martínez Roura, 1967, p. 731 y Martín Descalzo, 1963, pp. 258-259), el relato que transmite Pascual es este: “El clima dista de ser apasionante. Los padres, que acusan el esfuerzo de tensión de las sesiones sobre el esquema de Fuentes de la Redención, se distienden, se relajan. Ni siquiera había oradores suficientes y hubo que pedir a algunos que rompieran el fuego” (108). Iribarren, por su parte, apunta que “el cansancio y la necesidad de alivio del espíritu hicieron resbalar la atención sobre el esquema de los medios de comunicación social, en el que pocos tenían directo interés” (1978, p.559).

La intrahistoria posterior del esquema de Constitución refleja la creciente oposición y críticas que fue suscitando este primer documento cuyos contenidos centrales habían sido aprobados, después de tan solo cuatro días de debate, por 2.138 votos a favor, 15 en contra y uno nulo. Los padres conciliares decidían a la vez reducir la extensión del documento y encomendar los detalles prácticos a una instrucción pastoral posterior. “Era una rapidez y facilidad excesiva, más explicable por el ambiente conciliar de aquellos días que por el contenido interno del esquema”, apunta Iribarren (pp. 560-561). Por eso la reflexión posterior y las críticas procedentes tanto de influyentes diarios como de grupos de obispos y cardenales tuvieron su reflejo en las sucesivas votaciones a las que fueron sometidos un segundo y un tercer texto, que ya había bajado de constitución a decreto y de 144 párrafos a solamente 24, y que fue registrando en cada votación cada vez mayor número de votos negativos, llegándose a barajar incluso su retirada definitiva. Finalmente, sin embargo, la

Inter mirifica fue aprobado el 4 de diciembre de 1963, junto con la Constitución sobre Liturgia.

Iribarren describe este texto como “el más humilde de los documentos conciliares, gestado prematuramente y nacido con el voto final más difícil de todo el Concilio (el menor número de votantes: 2.131; el menor número de aprobaciones, 1960; la mayor votación adversa, 164 ‘non placet’ y siete nulos)” (p.559).

- Formulación del derecho a la información

El decreto *Inter mirifica* mantiene prácticamente inalterado el núcleo del número 21 del esquema de Constitución relativo al derecho a la información, salvo la parte introductoria. También, dada la nueva estructura del texto, desaparece el título “Del Derecho a la información” con que se abría el número 21 del esquema de Constitución. La redacción final queda de la siguiente manera:

“Es especialmente necesario que todos los interesados se formen una recta conciencia sobre el uso de estos medios, sobre todo en lo tocante a algunas cuestiones más duramente debatidas en nuestros días.

La primera cuestión se refiere a la llamada información, es decir, a la búsqueda y divulgación¹ de noticias. Es evidente que, a causa del progreso de la sociedad humana actual y de los vínculos más estrechos entre sus miembros, resulta muy útil y la mayor parte de las veces, necesaria; en efecto, la comunicación pública y oportuna de los acontecimientos y de los asuntos ofrece a los individuos un conocimiento más pleno y continuo de éstos, contribuyendo así eficazmente al bien común y promoviendo más

¹ En la traducción realizada por Jesús Iribarren y publicada por la BAC se utiliza el término “difusión” en lugar del de “divulgación” que figura en el documento en castellano accesible a través de la página oficial del Vaticano y que es la versión que manejamos en este texto.

fácilmente el desarrollo progresivo de toda la sociedad civil. Por consiguiente, existe en la sociedad humana el derecho a la información sobre cuanto afecte a los hombres individual o socialmente considerados y según las circunstancias de cada cual.

Sin embargo, el recto ejercicio de este derecho exige que, en cuanto a su contenido, la comunicación sea siempre verdadera e íntegra, salvadas la justicia y la caridad; además, en cuanto al modo, ha de ser honesta y conveniente, es decir, debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los derechos legítimos y la dignidad del hombre, tanto en la búsqueda de la noticia como en su divulgación, ya que no todo conocimiento aprovecha, pero la caridad es constructiva (1 Cor 8,1)”. (IM 5)

Aunque en una primera lectura pueda parecer excesivamente vaga, esta formulación del derecho a la información --directamente heredada, como hemos visto, de la redacción previa del esquema de constitución--, ha sido considerada de manera general, aunque también con diferentes matices, uno de los grandes logros del decreto *Inter mirifica*. Citando a René Laurentin, otro de los observadores que siguieron el Concilio, Pascual afirma que la Iglesia es la primera sociedad internacional que reconocía oficialmente el derecho a la información. Y este logro, añade el autor, pudo deberse, en no poca parte, a la vaguedad de la fórmula empleada por los padres conciliares (p. 168). Concluye este autor: “Al reconocer paladinamente, en un documento conciliar, que existe en la sociedad moderna el derecho a la información (PT 5), añadiendo que corresponde a la autoridad defender la libertad de información ‘que la sociedad moderna necesita en forma absoluta para su desarrollo’ (PT 12), la Iglesia ha rendido un gran servicio a todos los hombres” (p. 168).

A pesar de algunas interpretaciones restrictivas de esta formulación, Pascual no tiene duda de que la redacción empleada por el decreto es amplia y se corresponde con el triple sentido que tiene este derecho como derecho a informarse, derecho a informar y derecho a

acceder a los medios de comunicación (p. 169). Respecto al ejercicio de este derecho, insiste en que la fórmula es “necesariamente vaga”, como cabe esperar de todas aquellas formulaciones nacidas con vocación de asenso. Por todo ello, concluye el autor, “importa insistir en que un texto de principios (...) basado en el derecho natural y con vocación de asenso universal, difícilmente podría alcanzar mayor concreción sin pérdida de aceptación. Lo verdaderamente notable, provechoso y digno de elogio es que la Iglesia, reunida en Concilio Ecuménico, lo haya aprobado y promulgado” (pp. 171,172). Cruañes coincide en señalar la relevancia de que el decreto hable de “derecho natural” al referirse al derecho a la información, aunque lo haga “de manera vaga e inconcreta”. Considera este autor, a la vez, que la formulación de este derecho presente en el decreto *Inter mirifica* “gana puntos” con respecto a la formulación presente en la encíclica *Pacem in terris* publicada pocos meses después (p. 489).

Gutián, al igual que Pascual, se hace eco de las críticas que recibió en su momento el decreto, al que se acusaba de pobreza doctrinal y escaso conocimiento de las realidades de los medios. Y apunta que debe entenderse en su justo contexto ya que los padres conciliares partían del acervo doctrinal existente antes del Concilio, acervo que aparece plenamente recogido en el decreto *Inter mirifica*. Otra posible explicación que aporta este autor sobre la posible pobreza del documento es la escasa preparación de los padres conciliares en estas materias ya que, aunque se pidió el parecer de laicos peritos, el reglamento general del concilio no permitió a los seglares formar parte de las comisiones lo que, para el autor, fue sin duda un condicionante del trabajo de estas. Es natural, por tanto, que la mayor pericia de los padres conciliares en el campo moral llevara a que adoptaran un enfoque eminentemente pastoral (p. 639). Pero el autor también considera que hubiera sido un error retirar el

documento. De hecho, afirma, “el primer y mayor mérito de *Inter mirifica* fue lograr salir adelante” (p. 640). Y hasta los más críticos, concluye, “han considerado que el documento conciliar sobre los medios de comunicación social ha marcado en todo caso un hito, un punto de partida” (p. 640). Según el Presidente del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, Monseñor Cellis (2015), a pesar de concitar el menor número de votos favorables de todos los documentos del Concilio, la aprobación del decreto *Inter mirifica* “fue providencial, ya que provocó un proceso de asunción de los medios de comunicación social en la vida de la Iglesia”. Carlos Soria, por su parte, considera fundamental este decreto como coadyuvante de la comprensión de la información como algo que pertenece al público, idea revolucionaria que constituye el núcleo de lo que el autor describe como “etapa universalista de la información” (1983, p. 84).

- Otros aspectos fundamentales

A los efectos del tema objeto del presente análisis, es fundamental destacar el expreso mandato de los padres conciliares, de trasladar a una instrucción pastoral los aspectos concretos del decreto, “para que todos los principios y normas de este santo Sínodo sobre los medios de comunicación social se lleven a la práctica” (IM 23). Esta instrucción pastoral, que sería publicada siete años después, es el fruto tardío pero de mayor calado del Concilio en todo lo que se refiere a los medios de comunicación social.

Por otra parte, el decreto contiene dos peticiones que los padres conciliares dirigen al Sumo Pontífice: la de que se amplíen y extiendan las competencias del organismo encargado hasta entonces de los medios de comunicación, incorporando además al mismo a expertos de todo el mundo, incluidos laicos (IM 19); y la de que se celebre cada año una jornada mundial para atraer la atención de todos los fieles hacia cuestiones morales relacionadas con los medios de comunicación social.

Otro aspecto de gran relevancia de este texto es el uso de la expresión “medios de comunicación social”, en lugar de la anglosajona “mass media”, que no incluye la dimensión social (Soukup, p. 101). Esta innovación representa otra de las aportaciones del Concilio a la sociedad en su conjunto ya que, como señala Pérez Montoya, “este nuevo nombre, gracias al magisterio eclesial, iba a ser adoptado universalmente por científicos y técnicos” (p. 84).

b. El discurso de Pablo VI ante el seminario europeo de la ONU sobre libertad de información

Cuatro meses después de promulgado el decreto *Inter mirifica*, el viernes 17 de abril de 1964, el Papa Pablo VI pronunció un extraordinario discurso dirigido a los participantes en el seminario regional europeo de las Naciones Unidas sobre la libertad de información que se celebraba en aquellas fechas. El texto del discurso, de tan solo 12 párrafos, tiene como objetivo transmitir “lo que piensa la Iglesia en tema tan grave y tan actual” como es la libertad de información. Comienza advirtiendo que el fenómeno de la información se presenta en el mundo actual de manera muy diferente de lo que era en siglos pasados, en razón de la evolución de la sociedad. Uno de los signos más notables de esta transformación social, continúa, es el reconocimiento de la información como un derecho. El Papa utiliza un lenguaje rotundo y vigoroso y, declarando su inspiración en la *Pacem in terris* de Juan XXIII, proclama el carácter “universal, inviolable e inalienable” del derecho a la información, que “responde a una profunda necesidad de su naturaleza social”.

Sigue el texto insistiendo en que este derecho no solamente debe ser proclamado, sino también defendido, y no deja dudas sobre el carácter dual del mismo: se trata de un derecho a buscar y a recibir información: “Dado que se trata de un derecho basado en la naturaleza del hombre, no basta evidentemente que sea proclamado en teoría; es necesario, además

reconocerlo en la práctica, defenderlo, servirlo y guiar su ejercicio para que resulte conforme a su naturaleza. Derecho a la vez activo y pasivo: la búsqueda de la información y la posibilidad de todos de recibirla”.

Como señala Hernández Rodríguez, la figura de Pablo VI es fundamental para comprender la evolución del pensamiento de la Iglesia en torno a los medios de comunicación: “Abordó con frecuencia el tema de los medios, recordando que la lucha por la libertad de la Iglesia no está libre de la lucha por la libertad de prensa. Por ello predicará con fuerza el derecho a la información y a la libertad de expresión, defendiendo la grandeza y la responsabilidad de los medios de comunicación, consciente de su importancia” (2014, p. 308).

c. Otros documentos del Concilio Vaticano II que abordan el tema de la comunicación

Además del decreto *Inter mirifica*, otros siete documentos conciliares contienen referencias a la comunicación social, aunque solo la Constitución Pastoral sobre la Iglesia *Gaudium et spes* aborda la cuestión del derecho a la información.

De las cuatro direcciones en que la *Gaudium et spes* aborda la temática de los medios, Pascual señala la que afirma los derechos de la persona, incluidos el derecho a expresar las propias opiniones y el derecho a la información en su triple vertiente (p. 93). En efecto, el número 59 recuerda que fe y razón constituyen dos órdenes de conocimiento distintos y que la Iglesia afirma la autonomía de la cultura. “Todo esto pide también –añade el texto- que el hombre, salvados el orden moral y la común utilidad, pueda investigar libremente la verdad y manifestar y propagar su opinión, lo mismo que practicar cualquier ocupación y, por último, que se le informe verazmente acerca de los sucesos públicos”.

Y el segundo párrafo del número 73 señala la íntima vinculación entre el derecho a la información y el derecho de participación, señalando que “la garantía de los derechos de la persona es condición necesaria para que los ciudadanos, como individuos o como miembros de asociaciones, puedan participar activamente en la vida y en el gobierno de la cosa pública”. (GS 73)

d. El contexto de la Instrucción Pastoral *Communio et progressio*

El 2 de abril de 1964, al cumplirse el primer año de su pontificado, el Papa Pablo VI daba cumplimiento de la petición de los padres conciliares de ampliar el órgano dedicado a los medios de comunicación, instituyendo la Comisión Pontificia para las Comunicaciones Sociales, que en 1989 pasaría a ser Pontificio Consejo. A través del *motu proprio In fructibus multis*, esta comisión es constituida a perpetuidad, extendiéndose sus competencias a todos los medios de comunicación social. Pablo VI recuerda que los padres del Concilio Vaticano II han creído necesario que esta Comisión cuente con la colaboración de expertos, incluidos seglares, de las diversas nacionalidades.

Además de las competencias que ya tenía atribuidas la anterior comisión instituida por Juan XXIII, se indica que será competencia específica la realización de las normas directrices del decreto *Inter mirifica* y la preparación de la instrucción pastoral que será sometida a la aprobación del Pontífice. Esta instrucción será promulgada por Pablo VI siete años más tarde, el 18 de mayo de 1971, coincidiendo con la V Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

El hecho de que transcurriera un periodo tan largo y que en el proceso de elaboración se generaran cuatro esquemas no refleja, afirma Pascual, el ritmo de trabajo de los redactores, sino el ritmo de evolución de unas ideas (p. 201). La madurez, el rigor y la elaboración

conceptual resultan evidentes ya en una primera lectura del texto, del que sorprende su permanente actualidad incluso en nuestros días. No es de extrañar que la instrucción pastoral *Communio et progressio* haya sido calificada como la “Carta Magna” del Magisterio de la Iglesia sobre la comunicación (Pérez Montoya, 1983) y que los expertos insistan en la necesidad de redescubrir su contenido. Sin embargo, observa Guitián, apenas hay alguien que conozca este documento que es, “sobre todo, el complemento doctrinal de IM, y debe ser mantenido en unidad con ella” (p. 627). La percepción mayoritaria de que el legado del Vaticano II en lo que respecta a los medios de comunicación es el decreto *Inter Mirifica*, insiste el autor, “es tan comprensible como parcial e injusta. Es comprensible porque al pensar en el Concilio Vaticano II o asomarse a una edición de sus documentos, lo que se ve es IM con todas sus virtudes y limitaciones. Pero así como no sería justo ni prudente juzgar un suceso por su titular (...) tampoco lo sería hacer una valoración global de lo que aportó el Vaticano II a la cuestión de los medios de comunicación, sin considerar qué sucedió con lo que auspiciaba el propio decreto en su texto” (p. 629).

Una de las fuentes principales de inspiración de la *Communio et progressio* es la constitución *Gaudium et Spes*, que es citada 11 veces como fuente de inspiración (las referencias al decreto *Inter mirifica* no pasan de 18), según Pascual, para quien esta constitución impregna a la instrucción pastoral “de su espíritu comprensivo”, inspirando directamente algunos de sus logros más granados” (p. 93). Guitián apunta, por su parte, a la influencia de la constitución *Dei Verbum*, que facilita el marco para abordar el fenómeno de la comunicación humana para la comunión. “Los medios, en este sentido, forman parte del plan de Dios para lograr la comunión entre los hombres”, señala (p. 633). La comunión y el progreso en la convivencia humana son “los fines principales de la comunicación social y de

sus instrumentos: la prensa: la prensa, el cine, la radio y la televisión”, proclama la instrucción en su primer párrafo (CP 1)

Durante los siete años de preparación, el grupo de trabajo, en el que participaron especialistas, generó cuatro esquemas. El primero de estos constaba de 624 números y se consideró que era excesivamente largo y carecía de unidad en la redacción. El segundo esquema no solamente no consiguió reducir la extensión, sino que la incrementó hasta 732 números. El tercer esquema bajó ya a 252 números. El cuarto los redujo a 181, y el texto finalmente aprobado el 18 de mayo de 1971 cuenta con 187 números. El segundo esquema suele ser citado como referente y contenedor de todos los avances logrados por el equipo de trabajo. La reducción del texto a la cuarta parte obligó a un ejercicio de síntesis y depuración de conceptos y eliminación de referencias y fuentes. Por ejemplo, el documento finalmente aprobado no incluye la vibrante referencia de Pablo VI al derecho a la información que comentamos más arriba, que sí estaba contenida en el segundo esquema. Y como aportación principal de este segundo esquema, Cruaños señala que es aquí cuando aparece, “por primera vez de un modo taxativo”, la expresión “derecho a la información” (p. 490).

Es preciso insistir en que el documento no es un reglamento que desarrolla el decreto *Inter mirifica*. En uno de los números introductorios se indica claramente que no tiene como objetivo entrar en “aquellos puntos concretos que sólo pueden ser determinados según las circunstancias de cada momento y lugar” (CP 3), tarea que corresponde a los obispos y sus conferencias (CP 4). Es más bien, como se ha señalado más arriba, un documento que desarrolla los principios y las normas pastorales del decreto y que tiene por tanto una densidad y calado que va más allá de la simple concreción práctica.

También merece la pena destacar la composición de la Comisión Pontificia para los medios de comunicación social que llevó a cabo el encargo de la instrucción pastoral. Además del Presidente (Mons.Martin O`Connor, Arzobispo titular de Laodicea de Siria), el Pro-presidente (Mons.Agostino Ferrari-Toniolo, Arzobispo titular de Tarasa di Bizacena), el Secretario (Mons.André M.Deskur) y el Subsecretario (P.Romeo Panciroli), formaban parte de la Comisión un total de 18 miembros, de los cuales solo uno era secolar: Jean Gelamur, Presidente de la Unión Católica Internacional de Prensa (UCIP). La procedencia geográfica de los miembros era muy variada. El único español presente era Mons.Pedro Cantero Cuadrado, Arzobispo de Zaragoza.

Además, la Comisión contaba con 37 consultores, entre los que había 11 seculares y, entre estos, dos españoles, de acuerdo con la relación publicada por Pascual (pp. 210,211), extraída a su vez de la documentación facilitada en marzo de 1971 por la citada Comisión Pontificia: Alberto Martín Artajo y Álvarez, Presidente y Director General de la Editorial Católica y Vicepresidente de la Federación Internacional de Periodistas Católicos; y Ángel Benito Jaén, ex-Director del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra y Presidente de la Asociación de Docentes e Investigadores en Ciencias y Técnicas de la Información. Además, era también consultor otro español: el sacerdote Jesús Iribarren, Secretario general de la Unión Católica Internacional de Prensa (UCIP), que dejó reflejada su visión sobre el desarrollo conciliar en una obra ampliamente citada (1968) y que fue secretario de la Conferencia Episcopal Española entre 1972 y 1982. Martín Artajo, de la Asociación Católica de Propagandistas, había sido ministro de Asuntos Exteriores y artífice del Concordato con la Santa Sede en 1953. Ángel Benito también dejó expuestos sus puntos de vista sobre el decreto *Inter mirifica* en un artículo titulado “la Iglesia y la Información”, publicado en 1964 en la revista *Nuestro Tiempo*. Para el autor, los tres puntos más relevantes

Madrid, 2016. ISBN: 978-84-617-6255-2

del documento son una nueva concepción de la “prensa católica”; el papel atribuido a los seglares; y el énfasis puesto en los receptores “como clave de la verdadera libertad de información”. Por otra parte, en el apartado dedicado a la Iglesia y los medios de comunicación social que publica Benito en la Gran Enciclopedia Rialp (edición de 1972) y cuya redacción se cierra en octubre de 1970, es decir, cuando la instrucción pastoral se encontraba ya en su cuarta versión, no incluye ni una sola referencia al derecho a la información al hablar del decreto *Inter mirifica*, lo cual no deja de resultar sorprendente, y mantiene un prudente silencio respecto al contenido de la instrucción pastoral.

Finalmente, como apunte histórico, tiene sentido recordar aquí que cuatro días antes de publicarse la *Communio et progressio*, Pablo VI había enviado al entonces presidente de la Comisión Pontificia “Justicia y Paz”, Cardenal Mauricio Roy, la carta apostólica *Octogesima Adveniens* (14 de mayo de 1971) con ocasión del 80 aniversario de la encíclica *Rerum Novarum*. En este documento, el Papa plantea interrogantes concretos sobre la cuestión de la dominación y el poder de los medios. “¿Cómo no plantearse, por tanto, la pregunta sobre los detentadores reales de este poder, sobre los fines que persiguen y los medios que ponen en práctica, sobre la repercusión de su acción en cuanto al ejercicio de las libertades individuales, tanto en los campos político e ideológico como en la vida social, económica y cultural? pregunta en el número 20.

e. El derecho a la información en la instrucción pastoral *Communio et progressio*

La instrucción está toda ella impregnada de una visión positiva de los medios de comunicación, “dones” de Dios (CP 2) y “maravillosos inventos de la técnica” (CP 12), que “ayudan a caminar hacia la paz y la comunión” y que son “elementos poderosísimos del

progreso humano” (CP 21). Esta mirada esperanzadora y positiva viene acompañada a la vez de una consideración acerca de la actitud abierta que corresponde a la Iglesia, que debe “leer los signos de los tiempos” (CP 22).

La estructura, ordenación y disposición de los contenidos pone de manifiesto la consistencia de los conceptos que se manejan en el mismo y entre los que destaca la vinculación entre libertad de expresión y derecho a la información.

- Con referencia directa a la *Gaudium et spes*, el documento proclama que la libertad de expresión es necesaria para la formación de la opinión pública y debe ser defendida, tanto para los individuos como para la colectividad (CP 26).
- El derecho a la información se configura como un derecho doble: a informarse y a informar (CP 33) que exige, en primer lugar, que todos los miembros de la sociedad tengan “acceso a las fuentes y los canales de información, así como la posibilidad de expresar libremente su pensamiento”. Señala a continuación que “la libertad de opinión y el derecho a informarse y a informar son inseparables” y cita como defensores de este derecho a Juan XXIII y su encíclica *Pacem in terris*, a Pablo VI en su alocución de 17 de abril de 1964 al seminario de las Naciones Unidas sobre la libertad de información, y el decreto *Inter mirifica* (CP 5 y 12).
- El derecho a informarse que tiene todo hombre exige la libertad de acceso a las fuentes y medios de transmisión de noticias (CP 34), que deben ser múltiples y diversos (exigencia de pluralismo). “Sin la diversidad real de fuentes de comunicación es ilusorio, queda anulado, el derecho de información” (CP 44).
- La libertad de comunicación, que es un “derecho primario” proclamado por la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, implica la “necesaria libertad de los

medios de comunicación social” (CP 46). En la práctica, “esta libertad de comunicación, incluye la libertad de los individuos y los grupos para investigar, para difundir a todas partes las noticias y para utilizar libremente los medios de información. Sin embargo, una libertad de comunicación que en su ejercicio no tenga en cuenta las exigencias intrínsecas y los límites del derecho a la información más serviría en realidad al difusor o informador que al público” (CP 47).

- La preocupación por el pluralismo, la diversidad de fuentes y la concentración, aparece también recogida en otras partes del documento. Este pluralismo puede ser amenazado por “la presión de los medios económicos”, que puede hacer peligrar “la libertad misma de los medios de comunicación”, en la medida en que la concentración de inversión publicitaria puede llevar a que subsistan solo aquellos que consigan mayores ingresos, abriendo así camino a los monopolios, y poniendo en peligro “el mismo diálogo social”. En consecuencia, “ha de garantizarse el pluralismo y defenderse con leyes adecuadas contra el peligro que nace de que las inversiones procedentes de la publicidad vayan a parar exclusivamente a los medios más poderosos” (CP 62).
- Los límites del derecho a la información aparecen más claramente delimitados que en otros documentos precedentes. Estos límites son otros derechos como “el derecho a la verdad que ampara la buena fama de los hombres y de toda la sociedad; el derecho a la vida privada, que defiende lo más íntimo de las familias y de los individuos; el derecho al secreto, si lo exigen las necesidades o circunstancias del cargo o el bien público.” (CP 42)
- La información a la que tiene derecho la sociedad y los individuos debe estar basada en la verdad pero el documento reconoce con realismo las dificultades que se suman a la

dificultad intrínseca que tiene el ser humano de “percibir y manifestar la verdad íntegramente” (CP 37). Los riesgos y dificultades personales en el caso de los corresponsales (CP 36), la frivolidad y la tendencia a la espectacularización (CP 37), la ausencia de criterios de jerarquización informativa (CP 37), la rapidez y las prisas (No. 38), la falta de profesionalidad (CP 38) o la tendencia a la dramatización y la apelación a la curiosidad por cualquier medio (CP 40) son algunas de las dificultades que tienen los profesionales para proporcionar la información que la sociedad necesita.

- Los profesionales y los medios deben hacer frente a dichas barreras pero, a la vez, los receptores o usuarios de los medios “deben tener en cuenta y comprender bien la situación de los profesionales de la información y no exigirles una perfección absoluta que rebase las posibilidades humanas” (CP 41).
- Esta perspectiva realista y comprensiva de la función de informar exige, en contrapartida, la rectificación cuando sea preciso, exigencia que puede venir garantizada tanto mediante mecanismos de autorregulación profesional, como por normas legales (CP 41).
- El deber de veracidad de los informadores es formulado utilizando conceptos modernos, que recuerdan al lector actual los criterios de verificación, contextualización y jerarquización informativa que se manejan en el periodismo de nuestros días. (CP 75)
- Las empresas informativas no pueden buscar exclusivamente el lucro y deben respetar la “legítima libertad” de los informadores, de los realizadores y del público” (CP 80)
- Las autoridades públicas tienen la obligación de proteger la libertad de expresión y el derecho a la información tanto frente al poder como frente a las presiones económicas, garantizando a la vez su variedad y multiplicidad (CP 87).

- Existe una relación directa entre subdesarrollo y carencias en materia informativa y de medios de comunicación: “La falta o insuficiencia de medios de comunicación social son signo de subdesarrollo de una sociedad; esta falta es a la vez causa y efecto del desarrollo.” (CP 92)

f. El legado de la instrucción pastoral *Communio et progressio* en relación con el derecho a la información

A la luz de lo expuesto hasta aquí, resulta evidente el salto cualitativo producido en la doctrina de la Iglesia sobre los medios de comunicación desde la encíclica *Mirari vos* (1832) a la instrucción pastoral *Communio et progressio* (1971). Un salto que es apreciado por intelectuales católicos de distintas sensibilidades y procedencias. Para el boliviano Gregorio Iriarte, sacerdote, defensor de los derechos humanos y formador de comunicadores sociales, uno de los rasgos fundamentales del cambio es que la Iglesia “insiste, sobre todo, en el derecho a la información”, un derecho cuyos sujetos no son solo los individuos sino también los grupos humanos (1996, pp. 86-87). Y para Pedro Arrupe, Prepósito General de la Compañía de Jesús, el derecho a la información es una exigencia evangélica tanto en lo que se refiere a su promoción y defensa como en lo que atañe a las relaciones entre la Iglesia y los medios de comunicación (1982, pp. 11-13).

3. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN TRAS EL CONCILIO VATICANO II

Los medios de comunicación social, sus contenidos y efectos, los profesionales que en ellos trabajan y las empresas que los promueven, han sido y siguen siendo objeto de la atención permanente de la Iglesia Católica tras el Vaticano II, puesta de manifiesto no solamente en los mensajes de los sucesivos Papas para las 50 jornadas mundiales de las comunicaciones sociales celebradas hasta la fecha, sino también a través de otros documentos

también de especial relieve. Un simple vistazo a la base de documentos contenida en la web oficial vaticana permite apreciar la intensidad y diversidad de este interés.

Tabla 2

**Referencias a la comunicación social en documentos
contenidos en la base de datos de www.vatican.va**

Voz	# referencias en castellano
Derecho a la información	26
Derecho a la comunicación	5
Derecho a comunicar	3
Libertad de expresión	144
Libertad de información	9
Acceso a la información	33
Comunicación social	1.740
Medios de comunicación	2.650
Medios informativos	18
Medios de información	63
Medios audiovisuales	77
Prensa	5.770
Cine	132
Radio	1.313
Televisión	1.068
Internet	4.200
Redes sociales	28
Informadores	313
Periodistas	1.270
<i>Fuente: elaboración propia [fecha de búsqueda: 22-23 / 04 / 2016]</i>	

a. El legado de la instrucción pastoral *Communio et progressio* en relación con el derecho a la información

En el primer mensaje, Pablo VI aludía al deseo de la Iglesia de contribuir al desarrollo del mundo de la comunicación sirviendo “de inspiración, de aliento, de exhortación, de orientación, de colaboración”. Y 50 años después, El Papa Francisco dedicaba su mensaje a la comunicación y la misericordia con una directa y explícita referencia a las redes sociales,

signo del cambio de tiempos y tecnologías que no afecta a la esencia de la comunicación humana: “No es la tecnología la que determina si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad para usar bien los medios a su disposición. Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y de promover el bien de la sociedad, pero también pueden conducir a una ulterior polarización y división entre las personas y los grupos. El entorno digital es una plaza, un lugar de encuentro, donde se puede acariciar o herir, tener una provechosa discusión o un linchamiento moral.”

El derecho a la información es objeto de referencia explícita en al menos tres mensajes dirigidos con motivo de la Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales:

- En 1975, cuando con motivo de la IX Jornada el Papa Pablo VI hacía referencia a que constituyen una violación del derecho a la información tanto la distorsión deliberada de los acontecimientos, como cuando este derecho se utiliza para “la exhibición de depravaciones”.
- En 1985, con motivo de la XIX Jornada, el Papa Juan Pablo II utiliza la siguiente fórmula para sintetizar las exigencias del derecho a la información: “Según el derecho a la información, que todo hombre posee, la comunicación debe responder siempre, en su contenido, a la verdad y, en el respeto de la justicia y de la caridad, debe ser íntegra.”
- Un año más tarde, en 1986, Juan Pablo II alude de nuevo al derecho a la información, como marco que ampara el derecho de la Iglesia a evangelizar a través de los medios.

b. La instrucción pastoral *Aetatis novae*

Publicada por el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales el 22 de febrero de 1992, con motivo del 20º aniversario de la *Communio et progressio*, la instrucción

pastoral *Aetatis Novae* dedica el número 15 a la “defensa del derecho a la información y las comunicaciones”, en el que introduce novedades significativas respecto de su predecesora.

En primer lugar, la terminología adoptada pone de manifiesto la evolución y maduración conceptual alcanzada con el paso de los años, al optar por el concepto “derecho a la comunicación” en lugar de “derecho a la información” (este solo se utiliza en el enunciado del párrafo), con el que se pretende asegurar la amplitud y alcance del derecho que se quiere promover.

En segundo lugar, destaca la preocupación social que respira el texto en relación con este derecho. El primer párrafo es taxativo en cuanto a la exigencia y universalidad del mismo: “El derecho a la comunicación pertenece a todos” y, por tanto, “no se puede aceptar que el ejercicio de la libertad de comunicación dependa de la fortuna, de la educación o del poder político”. La identificación con los más necesitados y marginados constituye una de las notas dominantes de este documento (Leon y Rodrigo, 1992).

En tercer lugar, la garantía de universalidad del derecho no se cubre solamente con facilitar a los socialmente más desfavorecidos el acceso a la información que necesitan, sino que exige a la vez un cierto derecho de participación social en las decisiones relativas a los contenidos y estructuras de los medios.

Finalmente, destaca el doble papel de la Iglesia como defensora del derecho a la comunicación para el conjunto de la sociedad y para sí misma, reclamando “su propio derecho al acceso a los medios de comunicación” y recordando que el derecho a la comunicación “forma parte del derecho a la libertad religiosa, el cual no debería estar limitado a la libertad del culto”.

c. Derecho a la información en los documentos sobre ética de la comunicación

del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales

El 4 de junio de 2000, coincidiendo con la Jornada Mundial de las Comunicaciones y el Jubileo de los Periodistas, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, entonces presidido por Mons. Foley, publicaba *Ética en las comunicaciones sociales*, un amplio documento en el que a partir del principio de que los medios de comunicación deben servir a la dignidad humana, el PCCS identificaba los abusos que se dan en los ámbitos económicos, políticos, culturales, educativos y religiosos, y proponía “algunos principios éticos importantes”.

El derecho a la información es mencionado en el número 23, que recuerda que “hay que estar siempre en favor de la libertad de expresión”, a la vez que señala que este principio no es absoluto y que existen casos en los que “no existe ningún derecho a comunicar”, como la difamación, la calumnia, el discurso del odio, la obscenidad, la pornografía o la violencia extrema.

También contiene referencias al derecho a la información el documento precedente de la PCCS, *Ética en la Publicidad*, de 22 de febrero de 1997. De mayor interés, sin embargo, es el documento *Ética en internet*, publicado el 22 de febrero de 2002, y en el que reclama con fuerza la libertad de expresión e información en internet, recuerda el carácter fundamental del derecho humano a la libertad de buscar y conocer la verdad, y denuncia las amenazas para este derecho que se dan no solo en los regímenes autoritarios, sino también en las democracias liberales.

d. El derecho a la información en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia

Son muchos y muy relevantes los conceptos e ideas que hemos encontrado en el repaso hecho por los principales documentos del magisterio de la Iglesia en materia de medios de comunicación y también es significativa la evolución de los mismos al hilo de las

propias transformaciones sociales y tecnológicas. Cabía, por tanto, esperar que todo ello apareciera reflejado en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia redactado por el Pontificio Consejo “Justicia y Paz” por encargo de Juan Pablo II y hecho público en 2004. En la conferencia de prensa para la presentación del documento, el entonces presidente del Pontificio Consejo apuntaba cuatro problemas a los que había tenido que enfrentarse la comisión de trabajo: “el hecho de que se trataba de elaborar un texto sin precedentes en la historia de la Iglesia; la formulación de algunas complejas cuestiones epistemológicas inherentes a la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia; y el deseo de ofrecer una enseñanza que resistiera el paso del tiempo, en una fase histórica caracterizada por cambios sociales, económicos y políticos muy rápidos y radicales.”

Las principales referencias al derecho a la comunicación se encuentran agrupadas en torno a dos grandes capítulos: el VIII de la segunda parte, relativo a la comunidad política y en el que se dedica un apartado a las relaciones entre información y democracia (CDSI 414, 415 y 416); y el capítulo XII de la tercera parte, que dedica amplia atención al servicio de los fieles laicos en los diversos ámbitos de la vida social y dedica atención a los medios de comunicación en el ámbito de servicio a la cultura (CDSI 557,560,561 y 562) y en el del servicio a la política (CDSI 569 y 572). En resumen, el contenido del CDSI en materia de medios de comunicación es el siguiente.

- El bien común está estrechamente vinculado a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales y a la prestación de servicios que le son esenciales, entre los cuales se incluye “la libre circulación de las informaciones” (CDSI 166).

- La participación, consecuencia del principio de subsidiariedad, es un deber mediante el cual el ciudadano contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. “La participación no puede ser delimitada o restringida a algún contenido particular de la vida social, dada su importancia para el crecimiento, sobre todo humano en ámbitos como el mundo del trabajo y de las actividades económicas en sus dinámicas internas, la información y la cultura y, muy especialmente, la vida social y política hasta los niveles más altos”. (CDSI 189).

- La verdad es uno de los valores fundamentales de la vida social, que en nuestros tiempos requiere “una intensa actividad educativa y un compromiso correspondiente por parte de todos”, para que sea promovida en todos los ámbitos”. “Es una cuestión que afecta al mundo de la comunicación pública y al de la economía. En ellos, el uso sin escrúpulos del dinero plantea interrogantes cada vez más urgentes, que remiten necesariamente a una exigencia de transparencia y honestidad en la actuación personal y social” (CDSI 198).

- La información, que se encuentra “entre los principales instrumento de participación democrática”, exige el “pluralismo real”, asegurando por una parte la multiplicidad de formas e instrumentos y facilitando por otra, mediante leyes apropiadas, “condiciones de igualdad en la posesión y uso de estos instrumentos”. Apoyándose en la *Pacem in terris*, recoge el concepto de “derecho a la objetividad en la información” y señala entre los obstáculos que se oponen a la plena realización de este derecho las concentraciones editoriales y televisivas, que tienen “peligrosos efectos sobre todo el sistema democrático cuando a este fenómeno corresponden vínculos cada vez más

estrechos entre la actividad gubernativa, los poderes financieros y la información” (CDSI 414).

- La información es un servicio al bien común (*Inter mirifica*) pero cabe preguntarse si el actual sistema informativo “contribuye a hacer a la persona humana realmente mejor” y si las nuevas tecnologías respetan “las legítimas diferencias culturales” (CDSI 415).

- La ética de la comunicación afecta no sólo a los contenidos, sino que tiene también dimensiones estructurales y sistémicas que, como señala el documento *Ética en las comunicaciones sociales*, “a menudo incluyen múltiples asuntos de política acerca de la distribución de la tecnología y productos de alta calidad (¿quién será rico y quién pobre en información?).” Por ello, “es necesaria una participación en el proceso de la toma de decisiones acerca de la política de las comunicaciones. Esta participación, de forma pública, debe ser auténticamente representativa y no dirigida a favorecer grupos particulares, cuando los medios de comunicación persiguen fines de lucro”. (CDSI 416)

- El compromiso social y político del laico en el ámbito cultural implica que debe buscar el que se asegure “a todos y cada uno el derecho a una cultura humana y civil”, derecho que viene exigido “por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o condición social”. Este derecho implica a su vez “el derecho de las familias y de las personas a una escuela libre y abierta; la libertad de acceso a los medios de comunicación social, para lo cual se debe evitar cualquier forma de monopolio y de control ideológico; la libertad de investigación, de divulgación de pensamiento, de debate y de confrontación. En la raíz de la pobreza de tantos pueblos se hallan también formas diversas de indigencia cultural y de derechos culturales no

reconocidos. El compromiso por la educación y la formación de la persona constituye, en todo momento, la primera solicitud de la acción social de los cristianos” (CDSI 537).

- Para la “promoción de una auténtica cultura”, los fieles laicos deben “dar gran relieve a los medios de comunicación”. En particular, tienen el deber de discernir y elegir, de realizar juicios morales sobre los medios (CDSI 560, 562).

- Los medios pueden ser “posibles y potentes instrumentos de solidaridad”, que aparece “como una consecuencia de una información verdadera y justa, y de la libre circulación de las ideas, que favorecen el conocimiento y el respeto del otro”. Pero esto no sucede si los medios de comunicación se usan para sostener sistemas económicos “al servicio de la avaricia y de la ambición”. Las consecuencias de una actitud no solidaria y abierta de los medios son graves. En el ámbito de los contenidos, “la decisión de ignorar completamente algunos aspectos del sufrimiento humano ocasionado por graves injusticias supone una elección indefendible”. Y en el ámbito de las estructuras y políticas de comunicación, los medios de comunicación “contribuyen a las injusticias y desequilibrios que causan ese mismo dolor que después reportan como información” (CDSI 561).

- Las estructuras y las políticas de comunicación y distribución de la tecnología contribuyen a las desigualdades entre personas “ricas” y “pobres” en información, “en una época en la que la prosperidad y hasta la supervivencia dependen de la información”. Las tecnologías de la comunicación y de la información y la formación en su uso deben estar orientadas a eliminar estas injusticias y desequilibrios (CDSI 562).

4. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN TRAS EL CONCILIO VATICANO II

A la luz de todo lo que hemos ido viendo a través de los documentos generados por el magisterio de la Iglesia, se puede comprobar la existencia de un *continuum* en el

pensamiento y en la doctrina eclesial sobre los medios de comunicación y, de manera más específica, en relación con el derecho a la información. Esta línea se inicia hace más de 50 años, con la promulgación del decreto *Inter mirifica* y la instrucción pastoral *Communio et progressio*, que forman una unidad. La doctrina de la Iglesia sobre esta cuestión ha ido perfilándose y evolucionando con el paso de los años y al compás también de los desarrollos sociales y tecnológicos. En esta evolución sobresale la preocupación por las condiciones estructurales y sistémicas del ejercicio del derecho a la comunicación. En particular, se insiste en la necesidad de una diversidad real de medios y fuentes de información como condición para el ejercicio de un derecho real a la información, y se alerta de las nuevas situaciones de pobreza que generan la tecnología y los modernos sistemas de comunicación cuando no atienden al bien común.

BIBLIOGRAFÍA

- Arrupe, Pedro, S.J. (1982). “La Iglesia y el derecho a la información”. *Signo y Pensamiento*, octubre 1982, 11-13
- Baragli, E. (1973). *Comunicazione, Comunione e Chiesa*. Roma: Studio Romano della Comunicazione Sociale.
- Benito Jaén, Ángel (1964). “La Iglesia y la información”. *Nuestro Tiempo*, 155, 67-73
- Benito Jaén, Ángel (1972). “Comunicación social”. En *Gran Enciclopedia Rialp*, Tomo VI, Madrid: Rialp, 119-124
- Celli, Claudio María (2015). “Del Concilio Vaticano II al Papa Francisco: 50 años de comunicación”. Artículo publicado en www.pccs.va el 20 de agosto de 2015. Recuperado de: es.catholic.net/op/articulos/58965/cat/159/del-concilio-vaticano-II-al-papa-francisco-50-años-de-comunicacion.html
- Concilio Vaticano II. Constitución Pastoral *Gaudium et Spes* sobre la Iglesia en el mundo actual. 7 de diciembre de 1965
- Concilio Vaticano II. Decreto *Inter mirifica* sobre los medios de comunicación social. 4 de diciembre de 1963

- Cruaños Cruaños, G. Augusto (1993). "El derecho a la información en la Iglesia". *Cuadernos doctorales: Derecho Canónico, Derecho Eclesiástico del Estado* (11), 1993, 481-521. Recuperado de <http://dadun.unav.edu/handle/10171/10703>
- Francisco I. Mensaje para la 50 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Comunicación y Misericordia: un encuentro fecundo. 24 de enero de 2016
- González Molina, A. (1971). *La Iglesia en la encrucijada de la comunicación social*. Madrid: Confederación española de Cajas de Ahorro
- Gutián, Gregorio (2011). "El Vaticano II y los medios de comunicación: a los cincuenta años de Inter Mirifica". *Scripta Theologica*, 43, 621-643
- Hernández Rodríguez, María Victoria (2014). "El servicio de los medios de comunicación social. Magisterio eclesial y disposiciones legislativas". *Anuario de Derecho Canónico*, 3, 295-323
- Iriarte, Gregorio (1996). "La Iglesia y los medios de comunicación". *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, 54, 86-87
- Iribarren, Jesús (1968). *El derecho a la verdad. Doctrina de la Iglesia sobre prensa, radio y televisión (1831-1968)*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos
- Iribarren, Jesús (1978). "Decreto sobre los medios de comunicación social. Introducción histórica", en *Documentos del Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones*. Madrid: BAC (32ª edición), 559-560
- Juan Pablo II. Carta Apostólica a los responsables de las comunicaciones sociales. 24 de enero de 2005
- Juan Pablo II. Discurso con motivo del jubileo de los periodistas. 4 de junio de 2000
- Juan Pablo II. Mensaje para la XIX Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales. 19 de mayo de 1985
- Juan Pablo II. Mensaje para la XX Jornada Mundial de las Comunicaciones sociales. 11 de mayo de 1986
- Juan XXIII. *Allocuzione del Santo Padre Giovanni XXIII con la quale annuncia il Sinodo romano, il Concilio Ecumenico e l'aggiornamento del Codice di Diritto Canonico*. Sala capitolare del Monastero di San Paolo. Domenica, 25 gennaio 1959
- Juan XXIII. Carta encíclica *Pacem in terris*. 11 de abril de 1963
- Juan XXIII. Discurso a los periodistas llegados a Roma para la apertura del concilio. 13 de octubre de 1962
- León Calderón, Andrés (1992). "La Iglesia, el mensaje y el mensajero". *Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación*, 43, 76-77

- Martín Descalzo, José Luis (1963). *Un periodista en el Concilio. Primera etapa*. Madrid: Propaganda Popular Católica
- Martínez Díez, Felicísimo (1994). *Teología de la Comunicación*. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos
- Martínez Roura (1967), Joaquín María. *Vaticano II. Historia, doctrina, documentos*. Barcelona: Regina
- Martino, Renato R., Card. . Conferencia de prensa de presentación del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Vaticano, 25 de octubre de 2004. Recuperado de www.vatican.va
- Migliore, Celestino (Mons.). Intervention by the Holy See at the Fourth Commission of the 60th Session of the General Assembly of the United Nations on item 33: “Questions relating to information. News York, 13 October 2005
- Pablo VI. Carta apostólica Motu proprio *In fructibus multis*. 2 de abril de 1964
- Pablo VI. Carta apostólica *Octogesima adveniens* en ocasión del LXXX aniversario de la encíclica «Rerum Novarum». 14 de mayo de 1971
- Pablo VI. Discurso a los participantes en el seminario regional europeo de las Naciones Unidas sobre la libertad de información. 17 de abril de 1964
- Pablo VI. Mensaje para la I Jornada de las Comunicaciones sociales. 7 de mayo de 1967
- Pascual, Javier María. *Los medios de comunicación social en la doctrina de la Iglesia*. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1976
- Pérez Herrero, Julio César (2001). *Líneas de investigación y aportaciones docentes de los teóricos españoles a la Teoría General de la Información (1971-1996): Primeras aproximaciones y desarrollo de un estatuto epistemológico propio*. Memoria para optar al grado de doctor. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad Complutense de Madrid. Departamento de Periodismo III.
- Pérez Montoya, Gabriel Jaime, S.J. (1983). “Iglesia y Comunicación. Evolución de la doctrina de la Iglesia sobre comunicación social”. *Signo y Pensamiento*, 77-85
- Pérez Montoya, Gabriel Jaime, S.J., (1983) “Iglesia y Comunicación II. La evangelización en el campo de la comunicación social”. *Signo y Pensamiento*, 89-100
- Pío XII. L’Importance. Discurso sobre la prensa católica y la opinión pública a los participantes en el I Congreso Internacional de Prensa católica, 17 de febrero de 1950.
- Pontificia Comisión para los medios de comunicación social: Instrucción pastoral *Communio et progressio* sobre los medios de comunicación social. 18 de mayo de 1971
- Pontificio Consejo “Justicia y Paz”. *Compendio de la doctrina social de la Iglesia*. Biblioteca de Autores Cirstianos, 2009

- Pontificio Consejo para las comunicaciones sociales. *Ética en internet*. 22 de febrero de 2002
- Pontificio Consejo para las comunicaciones sociales. *Ética en la Publicidad*. Vaticano, 22 de febrero de 1997
- Pontificio Consejo para las comunicaciones sociales. *Ética en las comunicaciones sociales*. 4 de junio de 2000
- Pontificio Consejo para las comunicaciones sociales. Instrucción pastoral *Aetatis Novae* sobre las comunicaciones sociales en el vigésimo aniversario de *Communio et progressio*. 22 de febrero de 1992
- Soria, Carlos (1974). “Perspectivas doctrinales del Derecho a la Información”. *Persona y Derecho*, 1, 471-492. Recuperado de: <http://dadun.unav.edu/handle/10171/12164>
- Soria, Carlos (1987): “Más allá del capitalismo informativo”. Lección inaugural del curso 1987-1988 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Navarra. Recuperado de <http://www.cuadernos.info/index.php/CDI/article/viewFile/357/663>
- Soukup, Paul A. (1993) “Los medios de comunicación social en los documentos de la Iglesia”. *Concilium, Revista Internacional de Teología*. Monográfico dedicado a los medios de comunicación social, 250, 99-109

LA ÉTICA EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS

Oscar Jaramillo
Lucia Castellón
Universidad Mayor, Chile

PERIODISTAS QUE MUESTRAN EL ROSTRO DE MENORES DE EDAD ABUSADAS POR REDES DE PROSTITUCIÓN INFANTIL O QUE EDITAN APROPÓSITO UNA ENTREVISTA DADA POR UNA DUEÑA DE CASA, PARA QUE DE ESA MANERA PARECIERA QUE DA DECLARACIONES DE CARÁCTER CLASISTA Y XENÓFOBAS, CONSTITUYEN UNA PEQUEÑA MUESTRA DEL ESTADO DE LA ÉTICA EN EL PERIODISMO CHILENO. En mayo de 2013 el hombre ancla del noticiero central de TVN (la cadena estatal) mostró una supuesta imagen que según él sería paradigmática e icónica y que demostraría el fracaso de todas las políticas de transporte del país. La fotografía, sacada de Twitter, según el periodista mostraba el gran atochamiento y gentío que existía en ese momento en una estación del tren subterráneo de Santiago.

Minutos más tarde el mismo periodista tuvo que dar disculpas porque la imagen no correspondía al Metro de Santiago y no era más que uno de los tantos engaños que circulan por las redes sociales.

Identificar a menores que son víctimas de abusos sexuales, no proteger a las fuentes informativas frente a posibles represalias por parte de delincuentes y narcotraficantes, explotar el morbo al entrevistar a personas que recién se acaban de enterar de que su hijo murió calcinado en un incendio o mostrar escenas con cadáveres que han quedado en muy malas condiciones, son alguna de las prácticas periodísticas que se han vuelto comunes en los medios de comunicación chilenos.

Es justamente dentro de este contexto que se inserta nuestro proyecto para insertar la ética como un electo rector dentro de la carrera, para que vaya más allá de un simple contenido o curso, de la malla curricular.

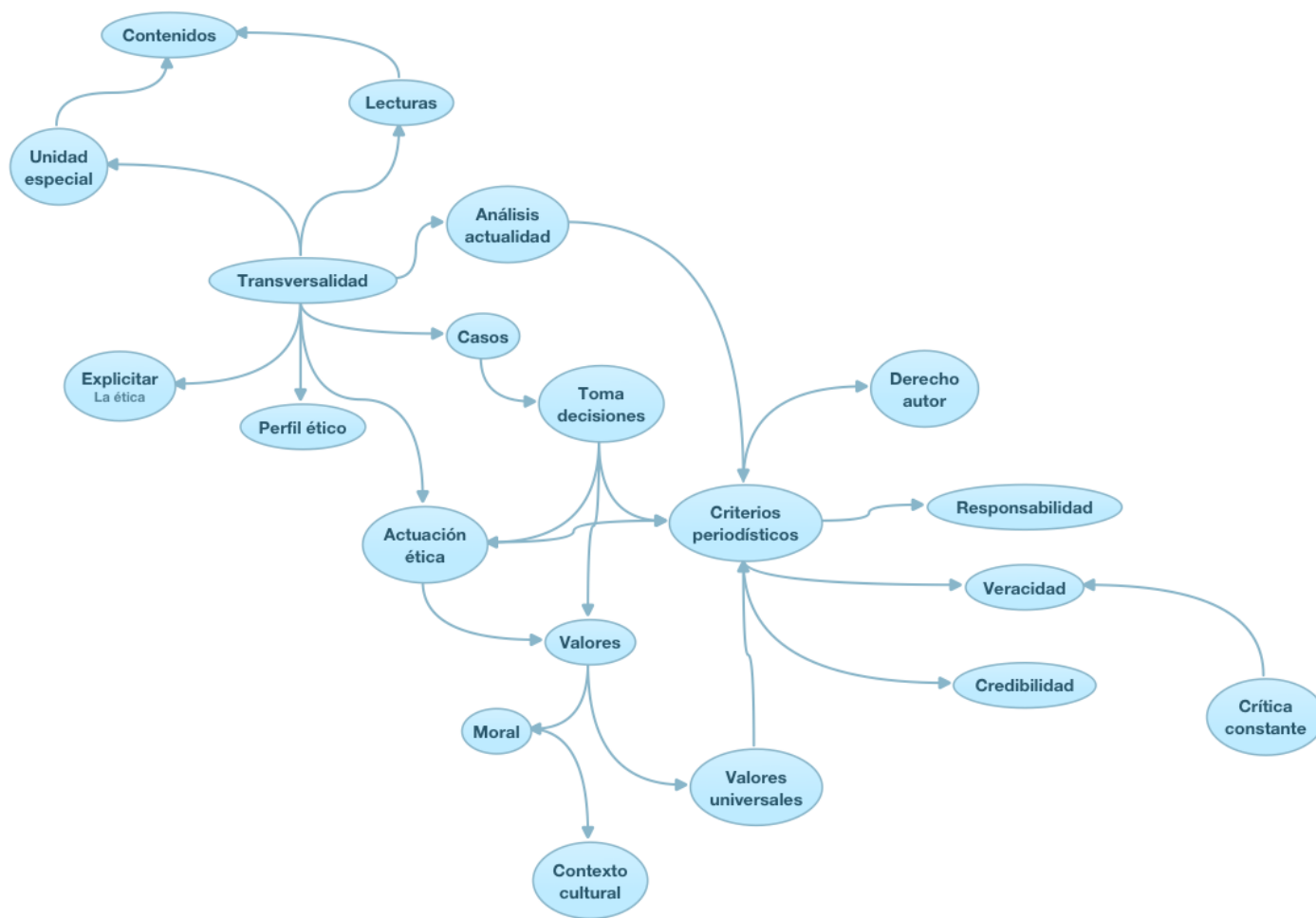
La actuación ética del periodista forma parte del perfil de egreso de los profesionales egresados de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor, en Chile. Es por eso que consideramos que la ética era algo más que un contenido a aprender, sino que constituía la competencia básica que justificaba al periodismo como una carrera universitaria.

Por otra parte, el actual momento que viven los medios de comunicación marcado por lo O'Reilly denominó como la Web 2.0 o Jenkins, la Cultura de la Convergencia, nos demostraron la necesidad de generar un plan de trabajo basada en los conceptos de inteligencia colectiva y cultura participativa.

Debido a que consideramos que la ética debe ser una competencia transversal y que debe estar presente en cada uno de los cursos de la malla académica, le preguntamos a todos los Profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor, cómo visualizan ellos el tema de la ética y cómo lo incorporarían al proceso de enseñanza y aprendizaje.

1. MARCO TEÓRICO

Desde el punto de vista metodológico, realizamos tres grupos focales con la totalidad de los profesores de la Escuela de Periodismo y los datos obtenidos los analizamos a través de la Teoría Fundada o Ground Theory. La razón por la cual seleccionamos este enfoque cualitativo, es que tal como lo señala Creswell (2007), permite ir más allá de la simple descripción y generar o descubrir una teoría.



Dadas las particularidades propias de esta ponencia y las limitaciones de espacio que ello conlleva, nos centraremos en los resultados generales, por lo que nos saltaremos algunas de las etapas propias de la teoría fundada. Cabe recordar que el **objetivo es insertar la ética en el ADN de la actividad académica de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor**, por esa razón nos iremos de manera directa al análisis de los resultados.

En la ilustración N° 1 podemos observar un diagrama que contiene los distintos hallazgos y la forma en que estos se relacionan entre sí. Debido a que la Teoría Fundada parte desde un tipo de razonamiento inductivo, al momento de realizar los grupos focales sólo señalamos **que el objetivo de estos era crear un para incorporar la ética en el quehacer académico, que proviniera desde las bases**. Es decir, desde las propuestas realizadas por los propios académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor.

No fueron impuestas limitaciones o condiciones a cumplir, que debiera tener este plan. Se dio total libertad para que los académicos discutieran entre sí, las distintas propuestas que ellos mismos formulaban.

El equipo que llevó a cabo los grupos focales, estaba compuesto por un moderador y una persona encargada del registro. Ambos forman parte de los académicos que confeccionaron esta ponencia.

La codificación axial, descrita en los términos de Creswell (2007), nos obliga a identificar la categoría o fenómeno central. En este caso podemos observar dicho fenómeno central en dos niveles, por lo que no hemos querido reducirlo a un sólo concepto. Si hiciéramos eso, correríamos el peligro de perder parte del análisis.

En primer lugar, podemos observar que el concepto transversalidad da origen a gran parte del análisis realizado durante los grupos focales, por los académicos de la Escuela de Periodismo. Pese a que al inicio de las discusiones, se planteó que una alternativa era colocar una unidad especial de ética en cada curso de la malla académica, esa posibilidad fue dejada de lado por los propios profesores al avanzar la discusión.

También se planteó la idea de colocar lecturas en cada asignatura, que desarrollaran contenidos propios de la ética general y de la deontología periodística. Al igual que en el

caso anterior, el mismo debate que se generó al interior de los grupos focales, desechó rápidamente la idea de colocar la ética como una unidad especial, que debiera estar en toda asignatura.

El peligro que se correría con dicho esquema, es que la ética quedara como un contenido estanco, cerrado en sí mismo, sin ninguna conexión con el resto del quehacer académico que se genera durante la asignatura. Incluso, podría llegar a tomarse como algo que hay que hacer como por obligación, sin ser compartido ni por alumnos, ni por los profesores.

Pese a que este hecho no formó parte de la discusión de los grupos focales, es necesario que hagamos el vínculo con lo que sucede en Chile con la forma en que la Pontificia Universidad Católica de Chile, imparte cursos de catecismo entre sus estudiantes.

Dentro de la malla curricular de todas sus carreras, hay asignaturas de carácter obligatorio sobre la doctrina social y religiosa de la Iglesia Católica. Pese a que su objetivo es evangelizar y que sus estudiantes adquieran un sello propio, marcado por catolicismo, la experiencia nos dice que la mayor parte de los alumnos considera este hecho como una obligación. Como un ramo absurdo que hay que pasar, pero que no tiene mayor impacto en sus vidas.

Ese es el peligro que queremos evitar. Es por eso que la transversalidad como lo que hemos denominado como el fenómeno central de primer nivel. Tal como fue definido en los debates generados en los grupos focales, la transversalidad debe ser entendida como el hecho de instalar la ética no como un contenido o competencia cognitiva, sino que como una competencia actitudinal, que deba ser desarrollada en cada asignatura de la malla académica.

Fue definida como una competencia transversal, que debiera estar presente en la forma de pensar, propia del periodista que estamos formando. Lo podríamos definir como el paradigma que debiera estar presente, tanto en la formulación de los programas académicos, como en cada una de las actividades a desarrollar, dentro y fuera del aula. Uno de los académicos lo definió como el “sello” que debieran tener nuestros estudiantes.

Frente a la pregunta de cómo podríamos llevar esto a cabo, surgieron cinco conceptos o ideas emergentes que pasamos a analizar a continuación: Explicitar, perfil ético, actuación ética, casos y análisis de la actualidad.

Explicitar fue definido por los propios docentes como la necesidad de identificar de manera expresa el razonamiento ético, dentro del quehacer docente. “Debe señalarse que en ese caso hay que considerar la ética”, afirmó uno de los profesores.

La idea es que la ética debe ser una lógica presente, que esté manera constante, pero que al analizar cualquier problema se identifique con claridad cuando se está recurriendo a ella. Eso nos lleva a otro de los hallazgos: el análisis de la actualidad.

Este concepto fue repetido de manera constante y es el que nos da paso al segundo nivel. El análisis de la actualidad fue definido como la necesidad de vincular la actividad académica, con lo que sucede día a día, en el mundo y, en especial, con los medios de comunicación.

Aquí se citaron varios casos del acontecer noticioso nacional y de la forma en los medios chilenos reaccionaron. Los académicos señalaron la necesidad de analizar la actualidad y la forma en que los medios de comunicación reaccionaron, para tener una postura crítica frente a su forma de actuar.

“Es imposible que pase un caso como el del video de una Universidad de Santiago de Chile y nosotros no tengamos una postura frente a ello”, señaló una de las profesoras, al momento de hacer alusión a un video en que dos jóvenes mantiene sexo durante una fiesta universitaria y que se convirtió en Trendic Topic gracias a Twitter. Después de ser difundido en las redes sociales, el video fue mostrado ampliamente por los medios de comunicación masivos.

Al analizar estos casos, los académicos dijeron que era necesario que el profesor citara el caso y junto con dar su opinión, permitiera el debate entre los estudiantes.

Otro concepto que surgió es el de casos. A diferencia del análisis de la actualidad que está marcado por el día a día y el acontecer noticioso, se refiere al imperativo de preparar debates en los que se analice un caso ético y se promueva la toma de decisiones éticas.

Decisiones éticas es otro de los hallazgos. Se refiere a que es necesario que los estudiantes sepan que el trabajo periodístico implica tomar decisiones éticas, como publicar o no publicar, proteger las fuentes o informar con justicia o compasión.

A través de la praxis y la ejercitación, de reportajes o crónicas, deben tomar decisiones éticas, tal cual como si estuvieran trabajando en un medio de comunicación. De esa manera, a través de la simulación, adquirirán la práctica y las habilidades y competencias necesarias para tomar este tipo de decisiones de índole ética.

Dentro de este nivel, un último hallazgo fue el perfil ético. Por él debemos entender como la especificación dentro del perfil de egreso de las características (valores y principios) que debe tener el periodista ético que deseamos formar.

Desde el punto de vista práctico e institucional, implica una modificación en el perfil de egreso, misión y la visión de la Escuela de Periodismo. Así se creará un objetivo, un punto

de llegada, que permitirá, tanto a los académicos, como a los estudiantes, tener un punto de referencia frente a los logros que se deben alcanzar.

Claramente la creación de un perfil ético del estudiante de la Escuela de Periodismo conlleva a un proceso de socialización para que éste sea conocido y aceptado, lo que implica varios procesos que analizaremos dentro de la propuesta.

2. SEGUNDO NIVEL: ÉTICA, VALORES Y CRITERIOS PERIODÍSTICOS

El segundo nivel, entorno al fenómeno central está entorno a los conceptos de actuación ética y criterios periodísticos. Cabe señalar que en este nivel se generó una discusión de corte filosófico, con respecto a la moral, la verdad y la existencia de valores universales.

Aquí se debatió en torno al dilema establecido por Habermas, en el entendido de que la moral depende en gran medida del entorno cultural en el que está inserta. Es por eso que lo que para una cultura puede ser considerado como aceptable y bueno, no lo es para para otra.

Se hizo alusión a las diferencias entre pueblos musulmanes y cristianos y la forma en que presentan distintos valores y moldean conductas totalmente distintas, en algunos casos extremos, como en el caso de los chiitas.

Es por eso que señaló la imposibilidad de hablar de valores universales. No obstante, en este punto la discusión adquirió otro matiz, que es necesario recalcar. Al momento de abandonar la idea de los valores universales, surgió la discusión de casos periodísticos, como el escándalo que sacudió a la BBC de Londres el año pasado, cuando se conocieron los abusos a menores de edad que realizaba uno de sus presentadores.

Pese a esta imposibilidad de hablar de valores universales, bajo el concepto de criterios periodísticos los docentes comenzaron a enumerar cuáles eran los criterios que a su juicio debían guiar la actividad periodística.

El hecho de que catalogaran cuestiones como el derecho de autor, responsabilidad y credibilidad, bajo el concepto de criterios periodísticos y no, valores universales, es interesante. Normalmente los valores se entienden como algo absoluto, que guía la conducta humana y que están asociados a un juicio de carácter moral.

La diferencia estaría en un criterio no es absoluto, sino que depende del contexto en el que suceda el caso. Tal como su nombre lo dice, es una ayuda para tomar decisiones éticas. Al abordar este punto uno de los profesores puntualiza que estaríamos haciendo una diferenciación entre el contexto cultural y el profesional.

Es decir, cuando hablamos de criterios periodísticos, nos estaríamos refiriendo de manera específica al desarrollo periodístico de la actividad. No deja de ser interesante que frente a la dificultad para encontrar los valores universales, no suceda lo mismo frente al ejercicio de la profesión.

Eso significaría que el periodismo es una subcultura en sí misma y por esa razón, los periodistas no tendrían problemas en definir criterios éticos de carácter universal para todos aquellos que comparten la misma profesión.

Al citar casos de índole ética sucedidos en la BBC de Londres, en Chile y otros países del mundo, los académicos le entregan una lectura simbólica a la ética, que no es posible apreciar en el esquema que hemos colocado al iniciar este análisis y que constituye un hallazgo por sí mismo.

La ética periodística es vista como un capital, que se asemeja bastante a las definiciones de capital cultural y económico dadas por Bourdieu (2000). Por una parte, constituiría una base que cimenta criterios, costumbres, valores y principios propios de la profesión, con los cuales los periodistas se identificarían. De alguna manera podríamos afirmar que allí se encontraría el eje o centro de la identidad del periodista.

Y por otra, habría una asociación con el capital económico en un sentido bastante especial. Si el capital económico es el que permite el acceso a los distintos artefactos culturales, la ética sería el capital que daría acceso a la credibilidad y con ello, al renombre, fama u honor en términos profesionales.

Durante los grupos focales se citó constantemente la credibilidad como un capital, como algo que se podría perder al caer en el plagio o en una falta a la ética profesional. Desde los datos entregados por las sesiones, los académicos conciben la credibilidad en un sentido al concepto de honor. Para ellos sería como el buen nombre, el derecho a la honra de un periodista.

Es decir, un periodista sin credibilidad no tendría honor, por lo que su actividad profesional quedaría reducida al mínimo. Esa es la razón por la que la credibilidad jugaría un rol central, dentro de la actividad periodística, de acuerdo a los académicos de la Escuela de Periodismo de la Universidad Mayor.

Todos los esfuerzos, consejos, trabajos, simulaciones y adiestramientos deberían estar encaminados entonces, para el logro y mantención de la credibilidad. Dentro de este contexto, la credibilidad sería el resultado, lo que se obtiene al actuar de una manera ética.

Al hablar de los criterios éticos, los docentes citaron varios, muchos de ellos que están contenidos dentro del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile. Es interesante,

que pese a que la universidad se define como una institución laica, al igual que la gran mayoría de los docentes que formaron parte de los grupos focales, citaran estos principios de una forma bíblica.

“No le hagas a tu prójimo, lo que no te gusta que te hagan a ti”, es uno de los principios que fueron citados en más de una oportunidad en este modo bíblico. También fue citado el “ama a tu prójimo como a ti mismo”.

También se abordaron aspectos sobre el respeto a la vida privada de las personas, la honra y la protección de menores. La precisión y la necesidad de verificar, tanto los hechos, como las fuentes informativas, fueron otro de los imperativos éticos identificados por los académicos. Se señaló la necesidad de que la triangulación fuera una estrategia de trabajo constante, que debiera ser aplicada siempre.

Uno de los académicos señaló que éste sería uno de los problemas más importantes a su juicio del periodismo chileno. Aclaró que durante años envió información y comunicados de prensa a medios nacionales y nunca lo llamaron para corroborar la información. Explica que no sucedía lo mismo cuando se trataba de corresponsales extranjeros. “Ellos siempre me llamaban para preguntarme si efectivamente era yo quien les había mandado el comunicado y hacía algunas preguntas para corroborar la información”, explicó.

Otro de los principios nombrados fue el hecho de que el periodista no puede obtener beneficios pecuniarios a partir del uso de la información que maneja.

Derecho de autor y responsabilidad los hemos colocado como dos conceptos aparte, debido a la centralidad que adquirieron en los debates. El plagio y el respeto al derecho de

autor fue un tema que adquirió un rol central, tanto para la actividad profesional, como para la académica.

En reiteradas oportunidades se lo citó como una de las causales primordiales por las cuales, tanto un estudiante como un periodista, puede perder la credibilidad. Por lo mismo el plagio y el respeto a los derechos de autor sería algo transversal, debido a la práctica de copiar y pegar de los alumnos al momento de hacer trabajos universitarios.

La conversación que se generó aquí, debido a las estrategias que desarrollan los académicos para detectar estas prácticas, derivó en un hecho que es necesario recalcar. A juicio de muchos de los docentes, el plagio no sería visto por los estudiantes de primer año como algo malo o indebido, sino que sería algo casi natural para ellos.

Por lo mismo sería una labor de los profesores señalar que es una conducta anti ética, que no deben repetir debido a que acarrearía la pérdida de la credibilidad.

Otro de los conceptos que adquirió vida propia fue el de la responsabilidad. Fue visto como un imperativo por los académicos que debía ser transmitido a los estudiantes. El concepto de responsabilidad fue definido como el hecho de las decisiones periodísticas tomadas por los profesionales o los estudiantes pueden tener consecuencias sobre ellos mismos u otras personas. Por lo mismo, habría que actuar de manera seria, prudente, medir las posibles consecuencias y hacerse cargo de los errores cometidos.

Por otra parte, el concepto de actuación ética estuvo más centrado en la actividad académica, que en la profesional. Fue definido por los académicos como la necesidad de “predicar con el ejemplo” y promover una actuación ética dentro y fuera del aula. Aquí se hizo alusión constante al tema del plagio y la convivencia entre los mismos estudiantes. En

más de una ocasión de hizo alusión al tema del bullying y la necesidad de validar la actuación ética de las personas.

El concepto valores fue definido como el hecho de que al momento de realizar las clases no basta con entregar información, contenidos, sino que es necesario entregar valores. Esto lo separamos del concepto de criterios periodístico, debido a que fue definido en una esfera personal y no, profesional.

Aquí el profesor adquiere un rol más ligado a la educación, en un espectro formativo integral asociado a la entrega de valores que guíen la formación del estudiante como una persona de bien para la sociedad.

Es interesante que en este caso se hiciera alusión a la soledad y la falta de guía de muchos de los estudiantes. En más de una oportunidad alguno de los profesores recordó casos, en los cuales los alumnos le pedían consejo frente a problemas de carácter personal.

3. PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS GRUPOS FOCALES Y PLAN DE TRABAJO

Al mirar los resultados de los grupos focales, uno de los principales aspectos que salta a la vista es la imposibilidad de hablar de valores universales, sustentados por la moral. Eso haría alusión a diferencias de carácter cultural, incluso, al interior de nuestros académicos.

Lo anterior significaría que no estamos ajenos al fenómeno de la multiculturalidad y la existencia de distintas escalas axiológicas. Lo interesante del caso, es que al remitirnos al campo periodístico en los términos definidos por Bourdieu (2000), se identifican con claridad “criterios periodísticos”, que en la práctica vendrían suplir la falta de valores universales.

No obstante, la diferencia entre valor y criterios, tendría dos parámetros básicos. El primero de ellos, sería su carácter profesional. Y el segundo, el hecho de ser un criterio, un

instrumento de análisis del contexto, con el cual se toma la decisión ética. Por lo tanto, este criterio nos puede llevar a resultados distintos, al depender de las circunstancias del caso.

Asimismo los resultados sugieren que la ética debe ser una competencia actitudinal, que debe ser desarrollada de manera transversal y no, como una unidad especial, al interior de cada asignatura. De acuerdo a lo planteado por los propios académicos se correría el peligro de que se convirtiera en una especie de quiste, al interior de la asignatura.

Al ser una competencia actitudinal, significaría que todos los contenidos tendrían que ser abordados desde una perspectiva ética. Esto nos lleva a la pregunta de cómo debiéramos desarrollar esta competencia ética, para que esté presente a lo largo de todas las asignaturas, y respete la lógica propia de la inteligencia colectiva y la cultura participativa. Es decir, cómo lograr que este sea un trabajo que surja desde las bases, tal como lo señala Jenkins (2013).

Eso nos lleva a la necesidad de crear espacios de participación. Significa que debe ser un proceso en que tanto los académicos, como los estudiantes deben poder aportar con ideas de trabajo concreto. Eso significa que la lógica con la cual se formulará este plan, es la inteligencia colectiva.

Los hitos u objetivos de este plan son los siguientes:

1. Construcción de un perfil de salida ético, que todo alumno deba poseer al momento de egresar de la Escuela de Periodismo.
2. Construcción colectiva de un Manual de Criterios Periodísticos a través de foros presenciales y virtuales.
3. Incorporación de los criterios periodísticos como competencia actitudinal en los programas de estudio de las diferentes asignaturas.

4. Socialización de los criterios periodísticos a través de actividades de extensión e inducción en los académicos y estudiantes.

La construcción de un perfil de egreso de carácter ético, fue una idea que emanó de los grupos focales. De esta manera se construye un objetivo, una suerte de visión en términos organizacionales, que define con claridad hacia dónde deben apuntar todos los esfuerzos académicos. Al abordar este punto es necesario aclarar, que la difusión del perfil de salida será explicado en la socialización de los criterios periodísticos.

Para la construcción del perfil de egreso ético, existirán dos etapas:

a) Discusión.

b) Validación.

Cabe señalar que ambas etapas serán desarrolladas a través de herramientas presenciales y virtuales, que operarán de manera complementaria. Como herramientas presenciales se propone la utilización de grupos de discusión, tanto con académicos de la Escuela de Periodismo, como con estudiantes.

La idea es realizar distintos grupos de discusión por separado, con profesores y estudiantes. A través de esta herramienta de investigación se podrán conocer cuáles son las competencias actitudinales, cognitivas y procedimentales, que debiera tener el egresado de la Carrera de Periodismo.

De forma paralela se propone la creación de un foro virtual para recolectar ideas, con respecto a cuáles debieran ser las competencias éticas del perfil de egreso.

La etapa de validación tiene por objetivo reunir todas las ideas emanadas de la etapa de discusión, para llegar a construir el perfil definitivo. Para ello se propone la creación de una asamblea, en que tengan participación los distintos estamentos de la Escuela de Periodismo.

La construcción de un manual o decálogo de criterios periodísticos, tiene por objetivo identificar, definir y darle cuerpo a los criterios periodísticos que den origen a discusiones y debates al interior de las asignaturas. Para ello se propone la creación de una wiki, en la que pueden participar, tanto académicos, como estudiantes.

Como una forma de realizar el lanzamiento y motivar a los estudiantes y profesores, se propone la creación de un foro o seminario sobre ética. Asimismo, sería bueno que cada semestre o año, se realice un evento de este tipo.

La incorporación de los criterios periodísticos como una competencia en todos los programas académicos de las asignaturas, debe ser realizada una vez que esté definido el perfil ético. Este es un proceso que la coordinación académica de la Escuela de Periodismo debe realizar en estrecha relación con cada uno de los profesores. Ella es la encargada de generar reuniones grupales e individuales, para que esto se lleve a cabo.

Por último, tenemos la etapa de socialización, que debe ser desarrollada a través de actividades de extensión e inducción. Por extensión nos referimos a seminarios, foros u otro tipo de eventos de carácter profesional y académico. Y por inducción, a sesiones mediante las cuales cada vez que un nuevo académico se incorpore a la Escuela de Periodismo, le sea explicado, tanto el perfil de egreso, como la necesidad de que la ética sea una competencia transversal en nuestra escuela. La idea es que le quede claro que ese es el sello que se le quiere imprimir al estudiante.

Cabe señalar que en este punto es necesario definir y crear elementos de carácter ritual, que permitan la transformación de los criterios periodísticos en algo simbólico, en el cual los estudiantes se puedan identificar.

Los ritos son importantes para el desarrollo humano, porque marcan hitos en su desarrollo y forman parte de la construcción simbólica de cada cultura. Además, los ritos son iniciáticos, ya que marcan el principio o fin de una etapa de la vida y la pertenencia a un grupo humano.

Eso crea la necesidad de generar ritos, tales como un juramento ético que se realice al momento de recibir el título profesional o al ingresar a la Escuela de Periodismo.

4. CONSIDERACIONES FINALES

A modo de conclusión, debemos señalar que el objetivo de este plan de trabajo fue la idea de convertir a la ética periodística en un sello que distinguiera a nuestra Escuela de Periodismo. Por otra parte, los movimientos sociales y los cambios tecnológicos y comunicacionales que nos rodean, generaron la necesidad de trabajar con una lógica participativa o desde las bases.

Es por eso que cada una de las acciones, implementaciones y herramientas de investigación que hemos considerado, tienen como finalidad promover la discusión y el debate. La idea es que se discuta, debata y critique la realidad que nos rodea. Que se tenga una postura activa, frente a lo que sucede día a día en los medios de comunicación, nacionales e internacionales.

Cuando Jenkins (2006) habla de aparición de las audiencias activas, creemos que es un fenómeno que debe ser tomado en cuenta, desde la otra perspectiva, desde la del periodismo.

Es decir, el periodista y el estudiante de periodismo también debe ser activo, para ser un actor relevante en los acontecimientos de la actualidad. Más aún si pensamos que la

actuación ética implica un estado activo, reflexivo, que implica analizar y resolver los problemas porque eso es lo bueno, lo correcto.

BIBLIOGRAFÍA

Desantes, José María (1991). *Información y derecho*. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago.

Desantes, José María (1994). *La información como deber*. Universidad Austral: Buenos Aires.

Bourdieu, Pierre (2000) *Poder, derecho y clases sociales*. Palimpsestos, Derechos Humanos y Desarrollo. Bilbao, España.

Jenkins, Henry. (2006) *Convergence Cultura: Where Old and New Media Collide*. New York University Press: New York.

Jenkins, Henry. (2006) *Fans, bloggers and gamers*. New York University Press: New York.

Jenkins, Henry; Ford, Sam; Green, Joshua (2013). *Spreadable media: Creating value and meaning in a networked Culture*. New York University Press: New York

EL DISCERNIMIENTO PRUDENCIAL EN ORDEN AL EJERCICIO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL INFORMADOR

José Ángel Agejas Esteban
Teresa de Dios Alija
Universidad Francisco de Vitoria, España

LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ABIERTA EN PRECEDENTES TRABAJOS YA PUBLICADOS POR EL EQUIPO ESTABLE DE INVESTIGACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA (UFV), BUSCA PONER EN RELACIÓN LAS EXIGENCIAS DEL DISCERNIMIENTO PRUDENCIAL CON LOS NIVELES DE PRÁCTICA PROFESIONAL DEL INFORMADOR. La comprensión de la virtud de la prudencia ofrece la mejor perspectiva para lograr que la comunicación sea un ejercicio de responsabilidad para el pleno desarrollo de la persona y de la sociedad. Poner en relación la virtud de la prudencia con dimensiones profesionales de responsabilidad social contribuye a aclarar si informar es un derecho o un deber.

OBJETIVO

El trabajo que aquí presentamos tiene un objetivo doble: tras recoger algunas de las conclusiones de trabajos precedentes acerca de la Responsabilidad Social de Comunicador y de la formación universitaria en la Responsabilidad Social, buscamos mostrar de qué manera consideramos que en la formación del periodista podemos aunar el sentido de la responsabilidad moral, por un lado, con el necesario discernimiento prudencial propio del ejercicio profesional. Estamos convencidos de que hay una serie de elementos específicos de la labor periodística que deben ser integrados en esa formación en la Responsabilidad. Como

esperamos mostrar, es precisamente la virtud de la prudencia la que permite articular de manera armónica el orden técnico de la formación con el orden moral. En este sentido, la pregunta dilemática que encabeza nuestro encuentro “Informar, ¿derecho o deber?”, queda a nuestro juicio resuelta por elevación, ya que no hay pleno ejercicio de la libertad de información más que desde el desarrollo responsable de la capacidad de informar libremente.

1. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA

En una formación universitaria que insiste, por imperativo legal, cada día más en la dimensión práctica del conocimiento, se impone la exigencia de reagrupar los distintos modos de conocimiento de manera que, como ya prevenía Aristóteles en el inicio de su *Metafísica*, no se dé la experiencia sin ciencia, ni la ciencia sin arte. Como esperamos mostrar a lo largo del trabajo, el itinerario formativo que esta implementación nos ha obligado a diseñar, junto con los fines propios de la auténtica formación universitaria, nos ha permitido poner en evidencia cómo la prudencia, virtud intelectual y práctica a un tiempo, es el mejor medio para integrar todas esas exigencias. Empezamos el recorrido analizando la formación en la Responsabilidad Social porque, al tratarse de una asignatura promovida por la UFV en su ideario y cursada de manera obligatoria por todos los alumnos, hemos querido darle un seguimiento evaluativo específico que permitiera corroborar o enmendar sus objetivos y logros.

Una de las principales pretensiones de la educación universitaria es la formación y el desarrollo de competencias que faciliten el desempeño de la profesión de los que hoy son estudiantes y mañana ejercerán como periodistas, redactores, empresarios, etc. Sin embargo, la principal labor de la universidad debería centrarse en contribuir a la construcción de una sociedad orientada al bien común, que incremente las oportunidades de hacer viable una vida

plena para las personas. Es precisamente en el ámbito universitario dónde tenemos una de las mejores oportunidades formativas para impactar sobre los estudiantes y contribuir a su desarrollo integral como personas, ayudándoles a analizar, comprender y valorar la repercusión que cada una de sus actitudes y actos tienen en la sociedad.

El estudiante universitario es un ser en desarrollo que necesita la educación, la comunicación y la cultura para conquistar la libertad a la que aspira. Se puede formar al universitario para que lleve una vida moral, útil en la comunidad, o dicho de otro modo, se puede guiar el desenvolvimiento de la persona en la vida social, despertando y fortaleciendo el sentido de su libertad, de sus derechos y obligaciones. En este ámbito la comunicación es una dimensión esencial del obrar humano, que permite por medio del diálogo descubrir puntos de encuentro sobre lo justo. Así, el universitario se desarrolla en un contexto social y es capaz de conocerse a sí mismo a través de la relación de reciprocidad con otros, depende de otros para desarrollarse como persona (Agejas Esteban y De Dios-Alija, 2011).

La interacción por sí misma es una fuente de satisfacción porque propicia el encuentro con el otro (López-Quintás, 2009), es decir provee de un bien relacional que no puede ser producido ni consumido pues sólo puede disfrutarse si se comparte (reciprocidad). La recompensa es la propia relación y no es posible sin la comunicación que se hace posible a través de un lenguaje común. Cada persona se descubre a sí misma a través del otro, a través de la relación de encuentro con el entorno.

2. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como dice la *Declaración de principios de conducta de la Federación Internacional de Periodistas*, el deber primordial de su profesión es “respetar la verdad y el derecho que tiene el público a conocerla”, el ejercicio de la responsabilidad social de los medios de comunicación, el servicio a la sociedad, vendrá siempre dado por la afirmación y defensa

constantes, por encima de intereses de parte o de otro tipo de consideraciones, de los derechos inalienables de la persona, de la defensa de las libertades sociales básicas, de la apuesta por la cooperación en el bien común (Agejas 2007, p. 80).

La consideración de la persona como ser social facilita la comprensión del grado de responsabilidad que cada uno tiene sobre sus propios actos. La acción personal repercute en el hecho social. La observación y apreciación de los comportamientos nos permite conocernos mejor, ponernos en el lugar de otro nos ayuda a entender las razones de su conducta, facilitar el encuentro con la realidad nos acerca a la comprensión del hecho social.

Desarrollar la responsabilidad social implica contemplar la posibilidad de poner en práctica de forma integrada aquellos conocimientos adquiridos, aptitudes y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas desde el enfoque de la virtud de la prudencia. Esta pretensión debe ir va más allá de contribuir a la ampliación del conocimiento o la adquisición de destrezas, debe implicar más que el "saber", "saber hacer", incluye también "saber ser" y "saber estar ". El hecho de ser responsable exige el manejo de conocimientos y destrezas en contextos y situaciones diferentes, con una adecuada predisposición para hacer posible lo mejor en cada momento y esto implica prudencia en la toma de decisiones previa a la ejecución de las acciones, implica incluso una consideración moral de la intención.

La persona es un ideal que debe perseguirse sin descanso, que no puede ser definido perfectamente ni alcanzarse plenamente. Se va haciendo a través de su historia, no es una realidad acabada, se constituye en cada acción, se crea en cada uno de los actos que lleva a cabo. A través del análisis de la propia experiencia cada persona puede llegar a responder a las preguntas que todo ser humano se hace cuando quiere avanzar hacia su plenitud. La mejor

manera de comprender al ser humano es la apreciación de sus acciones. La reflexión sobre la experiencia debe ser el punto de partida de la formación y el desarrollo de la persona, sobre todo en la etapa universitaria.

Cada estudiante universitario, en cuanto ser en desarrollo, dotado de inteligencia, voluntad, sensibilidad y conciencia de sí, está constituido por diferentes dimensiones integradas (biológica, cognitiva, afectiva, social, espiritual) y conformado por aspectos físicos y psíquicos que la hacen única, singular e irrepetible y que se desarrolla durante la vida en tendencia a la plenitud. Tiene la capacidad de comprender una realidad que le trasciende. Por medio de la inteligencia puede conocer lo que las cosas son. Por medio de la voluntad puede llegar al autodomínio de sí mismo y decidir cómo actuar. Gracias a la dimensión emocional puede tomar conciencia de la repercusión que sus acciones tienen sobre él y sobre su entorno y por tanto llegar a ser responsable de sus actos. La virtud es la excelencia de la conducta humana, lograrla depende de en qué medida somos capaces de controlar nuestros sentimientos y emociones. La razón nos ayuda a controlar el egoísmo y el amor propio. La conciencia moral nos guía en la búsqueda de la conducta responsable, nos orienta en la toma de decisiones correctas. Cada persona tiene la capacidad de evolucionar de manera espontánea aprendiendo de sus errores, puede corregir si no se ajusta a lo moralmente deseable.

Un estudio realizado entre los principales directores de medios de comunicación y editores españoles acerca de la ética en la empresa periodística y sus profesionales en el año 2012 “destaca la importancia que la sociedad otorga a la búsqueda de la verdad por parte de los periodistas, a la vez que exige el ejercicio de cuestionar las informaciones recibidas y la búsqueda de fuentes fiables que confirmen la autenticidad de las mismas” (cfr. Agejas 2016, p.61). La formación universitaria debe contribuir a lograr este reto y para ello debe cuidar

con esmero la formación que proporciona a sus estudiantes, que en todo caso deberá integrar de manera expresa la educación del compromiso social y el ejercicio de la virtud de la prudencia en intenciones, decisiones y acciones.

3. LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

Parece necesario invertir en el diseño e implementación de un modelo de Educación Superior que forme en la libertad y la unidad de la persona, en la creatividad, en los valores de relación, diálogo y comunicación. Es conveniente una estrategia pedagógica diferente que permita considerar como educativos no sólo el proceso de enseñanza aprendizaje, sino toda la acción formadora, incluida la experiencia fuera del centro de estudios. Atendiendo a esta demanda, en la UFV se integra en todos los planes de estudio, incluidos los Grados de la Facultad de comunicación, una asignatura transversal que trata de contribuir al desarrollo de la responsabilidad social de los estudiantes universitarios para que orienten su futuro profesional y personal desde el discernimiento prudencial (De la Calle y De Dios-Alija, 2014). La asignatura se desarrolla en tres ámbitos distintos pero complementarios. A través del trabajo teórico en el aula, las prácticas sociales y un programa de mentorías, se pretende que los estudiantes universitarios descubran su compromiso social y el valor de la virtud de la prudencia.

En el aula se trabajan los contenidos teóricos que versan sobre los fundamentos y porqués de la responsabilidad social, la contemplación de la persona como el ser que está llamado a cambiar el mundo, la comunidad como el lugar de desarrollo del ser humano, los principios de la ética social y la reflexión sobre los valores necesarios para lograr una mirada integradora que contribuya a la formación integral del universitario como persona socialmente responsable (De la Calle, Giménez y al, 2016). A través de las prácticas sociales

que se realizan en instituciones sociales se proporciona al universitario un encuentro con la realidad que incita el planteamiento de las preguntas existenciales más profundas. En el estudio de las repercusiones de las propias experiencias se constata que solo desde la propia vivencia es posible la comprensión y la toma de conciencia del peso que la solidaridad tiene en la pretensión de un mundo mejor. Mediante el acompañamiento personalizado el mentor pretende que alumno conecte la teoría del aula y la experiencia de las prácticas sociales, con su vida universitaria y su futuro profesional. A través de la reflexión sobre sus propias inquietudes, interrogantes y retos, el alumno experimenta la fragmentación entre lo que espera y lo que vive en el momento presente, entre lo que desea y lo que puede provocar, entre lo que necesita y lo que ambiciona. El mentor ayuda a descubrir la esperanza, la oportunidad y el valor de la experiencia propia en el encuentro con los demás. (De la Calle y al., 2014)

No es tarea fácil medir el grado de transformación que experimenta el alumno tras cursar esta asignatura, pero se ha intentado evaluar el impacto a través de un instrumento de medida que se estructura en cuatro dimensiones: compromiso con los demás y el entorno, descubrimiento personal de los valores, formación de la responsabilidad social, planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso social (García Ramos; De la Calle, Valbuena y De Dios, 2015).

Empleando un método analítico sobre una muestra de 404 estudiantes, se han obtenido los siguientes resultados (con una fiabilidad de entre 0,85 y 0,92). La asignatura de Responsabilidad Social tiene un impacto significativo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UFV. La dimensión compromiso con los demás y el entorno y formación de la responsabilidad social presentan una clara transformación entre los alumnos. Sin embargo, el planteamiento del ejercicio profesional desde el compromiso

social es la dimensión que menos varía, es posible que sea debido a que algunos de los estudiantes, que cursan 2º curso en el momento de aplicar el cuestionario, aún no vean de manera directa su involucración en la vida profesional, el horizonte laboral es aún lejano.

4. LA FORMACIÓN PERIODÍSTICA Y LA RAZÓN PRUDENCIAL

La importancia de la recta formación profesional, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho más arriba acerca de la formación universitaria en Responsabilidad Social estriba en la capacidad de aunar, gracias a la prudencia, el discernimiento acerca de la verdad y el modo de contarla, con la obligación de decir bien lo verdadero. En este punto, que constituye el bloque central de nuestra exposición, queremos mostrar cómo la experiencia guiada de la Responsabilidad Social por un lado, y la formación explícitamente ética por otro, permiten la articulación de una formación en competencias que exigen la formación teórica y el desarrollo personal como elementos esenciales de la formación universitaria.

Es por ello que una de las líneas de trabajo e investigación que hemos iniciado tras los resultados anteriores y que proponemos en sus fundamentos en esta comunicación, es la de mostrar cómo se aúna la búsqueda de la objetividad periodística con el desarrollo de las rutinas informativas y el discernimiento prudencial. A nuestro entender, es precisamente el esfuerzo por formar en la objetividad por parte de los docentes que preparan a los profesionales de la información, el que debe integrar técnica y moral de una manera cada vez más clara.

Como decíamos al inicio de este trabajo, ya el propio Aristóteles, cuando en el inicio de su *Metafísica* habla de los distintos tipos de conocimiento, distingue entre el conocimiento por experiencia y el conocimiento por ciencia. El primero particular y el segundo abstracto, reservando el nombre de ciencia a este último. De todos modos, y usa el ejemplo de la

medicina que podía servirnos de manera análoga para el periodismo, hay disciplinas en las que lo relevante es el arte, la “competencia” diríamos hoy, de quien sabe aplicar el conocimiento general al caso particular. Porque de nada vale saber medicina si uno no es capaz de curar al paciente que tiene delante. La comparación con el periodismo, como es lógico, no es directa, pero la analogía que proponemos nos permitirá entender mejor la vinculación entre todos los elementos del estudio, de la formación y del ejercicio de la profesión. Vayamos por partes.

a. La razón prudencial: saber universal en la acción particular

Aunque es imposible establecer un divorcio entre realidad y ética, y más aún, entre ejercicio profesional y acción moral, necesitamos distinguir los elementos implicados para ver qué es lo que aporta cada uno de los elementos de la formación y por qué podemos decir que la prudencia los aúna. Todo conocimiento, toda disciplina académica busca el conocimiento de la verdad, así como el ejercicio del periodismo busca la difusión de la verdad. Del mismo modo que el médico tiene la obligación moral de aplicar bien su conocimiento, el periodista tiene la obligación moral de difundir la verdad. Ahora bien, como en el caso del periodista la verdad conocida no es una realidad empírica (síntomas de una infección vírica) sino una realidad social, se establece una clara diferencia en los métodos que ha de usar para ese conocimiento. Pero no una rebaja en las exigencias morales acerca de la verdad que ha de conocer y del bien que ha de procurar.

Tenemos así que el periodista ha de cuidar de manera especial que los modos en el ejercicio de la profesión no le lleven a caer en el mero objetivismo empirista, por un lado, ni en el constructivismo subjetivista por otro. En el aprendizaje y el ejercicio del periodismo queda plenamente de manifiesto que una sola acción puede ser contemplada como *praxis* y como *póiesis*, en términos clásicos aristotélicos. Hacer bien el bien. La clave está en que en

todo momento el sujeto sea consciente de los fines que persigue con su acción y del modo de buscarlos. Por eso, cuando luego santo Tomás desarrolle la virtud de la prudencia, llegará más lejos que Aristóteles en el modo de entender esa correlación entre los fines: él sabía que la razón no se mueve de manera abstracta. La voluntad que quiere el bien influye en que la razón los busque. Y por eso la prudencia tal y como la explica el Aquinate ofrece un mejor acercamiento a la realidad personal: del mismo modo que nadie se mueve en abstracto, nadie quiere la verdad en abstracto. Lo que es necesario para el ejercicio de la prudencia, que desemboca en la elección recta es, como señala Deman (2012) “la verdad en la razón y la rectitud en el apetito” (p. 12).

No es fácil explicar la virtud de la prudencia (sobre todo después de unos siglos de racionalismo e idealismo filosófico que nos han marcado tanto en Occidente), mostrando, como hace santo Tomás, que la articulación entre lo universal y lo particular se da en cada uno de los tres pasos clásicos del acto prudencial, y no sólo en el salto del discernimiento de los medios a la determinación final. Así, “santo Tomás concede, pues, que si sólo se tratara de conocer cosas, la prudencia, visto su objeto, no podría ser una virtud intelectual. Pero en esta ocasión el conocimiento se refiere a una acción. Y la verdad en materia de acción se entiende de tal manera que la movilidad de la acción no la compromete. Vinculada a la prudencia persiste una cierta infalibilidad, la que le proviene de la conformidad con el apetito recto. Por esta razón, en el orden práctico la prudencia mantiene el rango de virtud intelectual” (Deman 2012, p. 103).

La dificultad que se sigue de esta afirmación de que el bien de la inteligencia práctica es la verdad (no absoluta sino) en consonancia con el apetito recto, es que parece caer en una cierta circularidad, pues el apetito recto se establece en conformidad con la razón verdadera;

circularidad que ya se adelantó el propio Aquinate a mostrar que no es tal, adelantando en su comentario a la *Ética a Nicómaco* lo que será la doctrina más elaborada que propondrá en la *Suma*, que en resumen, dirá que “sólo le corresponde a la razón y en conformidad con sus leyes propias la determinación de la manera de conseguir un fin y de realizar una acción (...) la razón sólo procede a esta determinación a partir del apetito de un fin: ella recibe su verdad del apetito, pues todo juicio relativo al fin (cuando se trata de un juicio práctico, destinado a tener un efecto) traduce la disposición del apetito. Es verdadero si el apetito es recto; falso si el apetito es malo. En este caso, la verdad se toma en relación con el apetito, es decir, es expresión de una rectitud cuyo sujeto es el apetito” (Deman 2012, p. 104).

La nota distintiva de la virtud de la prudencia es la certeza práctica, no la teórica. Es muy interesante insistir en esto porque muchas veces uno espera contar con una certeza intelectual antes de tomar una decisión, lo que en el campo de las decisiones prácticas (y las morales también lo son) es imposible. El conocimiento de lo universal es sobre los principios, no sobre la decisión. Y es que la verdad no es una idea, un concepto, es la experiencia de lo real. La razón es la facultad de esa experiencia, no la facultad de los conceptos (aunque como es lógico los elabore).

Llegados a este punto, siguiendo la excelente exposición de Deman (2012), podemos comprender mejor en qué sentido empezar por la razón prudencial nos permite esta integración que buscamos de todos los elementos de la formación del profesional del periodismo. Si el periodista tuviera que ser un sociólogo, tendría que estudiar sociología, no periodismo. O historiador, o filólogo... Pero es que el periodista tiene que ser, tras el conocimiento de la realidad, el profesional que busque la objetividad del juicio práctico (qué he de publicar y cómo lo hago). El objetivo de la prudencia no es teórico, es práctico: no busca llegar a una conclusión, sino formar una acción. Lo teórico y lo práctico están

entrelazados desde el primer momento. No se trata de que la inteligencia haga una serie de lucubraciones teóricas, y tras una conclusión, dé el mandato a la voluntad. Es por ello que la voluntad que quiere el bien ha de estar implicada desde el primer momento: “la verdad en la razón y la rectitud en el apetito” (Deman 2012, p. 12).

Gilbert ha sintetizado esto mostrando además claramente, cómo este modo de entender la razón y la prudencia es, en el fondo, mucho más acorde con la estructura propia del ser personal, del sujeto llamado a la relación con el otro. O dicho de otra manera, mostrando cómo la exigencia de bien y de verdad no puede quedar relegada al mundo de los conceptos, pues en ese momento entra en el ámbito de lo ideológico, lejos de lo real: “La racionalidad remite a la universalidad de la razón, y por tanto, a la prudencia práctica; de hecho, la razón es la función del universal concreto. La universalidad de la razón implica que el hombre no es una libertad que tendría significado por sí misma, aisladamente. Una libertad absoluta sería abstracta: por su naturaleza, el hombre tiende hacia los otros, se une a quienes están hecho de su misma sustancia. (...) El hombre en su esencia concreta y racional, es relacional: una ‘persona’. Ahora bien, la racionalidad de la persona no hace que su universalidad sea vivida inmediatamente. Es más bien una vocación. La persona está llamada a universalizarse, a salir de su soledad y de las pretensiones angustiosas de su sí mismo. Por eso el universal que lo llama no puede ser un género homogéneo en el que la originalidad de cada persona llamada llegaría a desaparecer. De esto se sigue que la práctica recta del hombre se hace atenta a la diferencia de cada uno, esto es, se hace prudente” (Gilbert 2004, p.152).

Como esperamos mostrar a continuación, pues, en la medida en la que la experiencia práctica, la responsabilidad social y la formación teórica van entrelazadas, es más fácil

comprender que la genuina formación periodística ha de conducir al profesional a ese saber estar atento a la diferencia de cada uno.

b. Información y verdad

Tras el análisis anterior, nos queda por apuntar en los siguientes incisos cómo vemos que se van uniendo desde los elementos teóricos a los más prácticos en la formación del periodista, los distintos elementos. De alguna manera seguiremos el mismo orden que se sigue en el ejercicio de la virtud de la prudencia (atención y respeto a la realidad, deliberación de los medios y elección de los fines, determinación correcta). Sabemos que una elaboración más detallada de los mismos no sólo es aquí imposible por la limitación espacial de esta intervención, sino también porque exige un trabajo que podemos afrontar tras este primer fundamento teórico y en relación con el trabajo conjunto de la universidad en el resto de las áreas.

Empezamos, pues, mostrando cómo la relación entre información y verdad, entre la formación teórica y el necesario interés del periodista por saber la verdad, es el *leit-motiv* de la profesión. Como decía Galdón, “el periodismo es un saber prudencial que consiste en la comunicación adecuada del saber sobre las realidades humanas actuales que a los ciudadanos les es útil saber para su actuación libre y solidaria” (2006, p. 46). Ese saber sobre las realidades humanas actuales implica, por tanto, una formación académica suficiente que permita comprender la actualidad y todas sus dimensiones. Lo cual no significa ni formación ideológica, ni especulación teórica. Decía Aguirre en el primer congreso CIEDI, que “la labor informativa es un acto de justicia, y supone buscar la verdad, encontrar la verdad, dar la verdad relevante que sirva al destinatario... y para eso se requieren cualidades que tipifican a la persona y no al objeto informativo, aunque vividas esas cualidades, los mensajes obtienen la más alta calidad. La sabiduría tradicional nos enseña que, en el fondo, la formación es dar

a la persona la posibilidad de desarrollar sus facultades. Una auténtica formación informativa debe ir, necesariamente, por ese conjunto de verdades decantadas por la historia sobre el auténtico modo de ser del hombre y sabemos que todo lo que no perfecciona al hombre lo deshumaniza. El servicio representa un alto contenido intelectual y tiene implicaciones culturales de gran significación humanista; la tarea informativa es servicio y por eso tiene una gran dimensión perfeccionadora del hombre y de la sociedad.” (2003, p.35)

La excelencia académica, por tanto, es un requisito ineludible en la formación del periodista, de modo que además comprenda cómo la verdad, que es el encuentro con lo real, exige el respeto a la naturaleza de cada una de las fuentes de información como lo que son, y por tanto, ha de conocer bien los métodos propios de cada ciencia, su alcance y sus límites, o de otra manera romperá ese encuentro con la verdad y caerá en el relativismo al que conduce la confusión y mezcla de datos, fuentes y criterios.

Verdad que no es ideología, como ya hemos dicho antes al explicar el alcance de la prudencia, puesto que la razón no es la facultad del concepto, sino del encuentro con lo real. Cuanto más y mejor esté formado el profesional en lo teórico, más y mejor sabrá distinguir qué es lo que en lo particular (y toda realidad humana lo es) está en juego. Este es el verdadero juego del pluralismo informativo: el respeto a cada sujeto y su acción concreta: es lógico, pues el juicio prudencial es de lo particular.

c. Objetividad y praxis

El siguiente paso es el que incorpora el quehacer diario del profesional. Y aquí es donde tanto la formación práctica como el ejercicio de la responsabilidad social, tienen un papel fundamental. De hecho, como ya mostró Greene González en un interesante trabajo (2012), uno de los medios con los que, en los Estados Unidos, por ejemplo, se buscó facilitar

que los periodistas pudieran respetar de la mejor manera posible la objetividad exigida a su labor, fue la implantación de rutinas profesionales. Parecía una solución muy práctica y eficiente: la implantación de las rutinas laborales en los medios, desde el punto de vista de la sociología laboral, buscaban facilitar el trabajo de selección de los materiales, aprovechar mejor la escasez de tiempo, señalar mejor lo noticioso... Para los sociólogos de los medios, como señala la autora, “la noticia, que constituye una realidad es reconocida como tal por el público porque es ‘objetiva’. Esta objetividad está, a su vez, garantizada por la forma rutinaria de producir esa noticia. Los contenidos que los periodistas producen son objetivos —se deduce de su argumentación— ya que utilizan procedimientos sistematizados a los que han llegado mediante consenso” (Greene González 2012, p. 100).

Ahora bien, como se ve por el análisis de dicho trabajo (al que remitimos al estudioso para su conocimiento en detalle) este enfoque está en clara dependencia del consenso en torno a los estándares de calidad por un lado, y vincula la objetividad con el hecho de que la noticia como producto, y por tanto como constructo, está garantizada por unos procesos formales. Y aquí es donde el interés de este trabajo nos ayuda a nuestro discurso sobre la formación prudencial. La formación en cuestiones meramente técnicas, sin la capacidad de hacer juicios sobre los contenidos, no sólo anula al sujeto personal y profesional, sino que realmente tampoco consigue los objetivos buscados, a no ser que nos conformemos con las apariencias de objetividad.

Está claro que la discusión sobre qué es la objetividad y cómo se lleva a la práctica no es ni una cuestión de la que se ocupen los sociólogos laborales, ni algo que otros quieran dejar desvinculado de los lobbies que tienen el poder económico, político o informativo. Formar en competencias, rutinas o procesos técnicos sí, claro, pero no como criterios de verdad ni de bien.

A nuestro juicio, por tanto, tras el interesante y valioso trabajo de análisis de Greene González recién citado, nos parece que la formación universitaria ha de compaginar lo que de valioso hay en estas tradiciones, provenientes sobre todo del periodismo norteamericano, y que son también las que más han influido no sólo en los estilos informativos, sino también, en los estándares técnicos de redacción de la noticia. Como dice la propia autora en sus conclusiones, “muy lejos de la concepción de la objetividad como rutina, se encuentra la manera clásica como se ha concebido la objetividad en la profesión, que es como un *ideal ético* del periodista” (2012, p. 191).

d. La determinación de informar

Llegamos así al tercer momento, en el que la formación teórica y la formación práctica se integran gracias no sólo al conocimiento de la virtud prudencial, sino también gracias a la formación en el sentido de la responsabilidad que el contacto con la realidad ha impuesto. Porque en la asignatura de responsabilidad social lo que el alumno ha tenido que aprender no sólo es el conocimiento teórico de los fundamentos del bien común y de la sociedad, sino también la necesidad de tener que tomar decisiones reales que solucionen problemas reales.

Por tanto, si, como hemos expuesto, la realidad es el punto de partida y el referente de la acción humana, hemos de tener en cuenta qué es lo específico del ejercicio del periodismo que ha de ser tenido en cuenta por el sujeto moral para saber cómo encauzar su quehacer moral también en esa faceta de su vida. Toda acción humana es acción moral. De modo que toda acción periodística es una acción moral, lo que significa que la decisión, antes de tener que atender a los códigos deontológicos de la profesión, es ante todo una determinación decidida de informar sobre lo real. Ya en otra comunicación mostramos cómo

aplicar el método del discernimiento prudencial en el ejercicio del fotoperiodismo. Entonces afirmábamos que “los códigos deontológicos, por su propia naturaleza, no son más que regulaciones formales de deberes, y en consecuencia, estrechamente vinculadas con la racionalidad técnica más que moral, puesto que su eficacia estriba en su capacidad de concreción y vinculación” (Agejas 2004, p.104).

En conclusión, la formación prudencial en el universitario permite integrar los distintos elementos desde la comprensión de la experiencia personal como apertura racional a los demás y al conjunto de lo real, no como meras impresiones subjetivas, ni como estados o reacciones emocionales. A partir de aquí, se comprende cómo la formación integral del universitario articula: el estudio teórico de las disciplinas científicas que permiten el acceso inteligente a la realidad, la formación en rutinas o métodos prácticos del ejercicio de la profesión, la atención al bien común como ideal de servicio y la realización personal como meta.

e. Una formación integral, una formación prudencial

Creemos, por tanto, que una adecuada comprensión de la formación periodística universitaria no ha de plantear ni una disyuntiva entre la objetividad y la prudencia, ni tampoco un paso escalonado de una a otra, sino una integración. En la UFV lo hemos formulado con la expresión de “formación integral y aprendizaje con competencias”, lo que, a nuestro modo de ver, permite aunar dinámicamente los distintos niveles de la formación. Es así como las dimensiones técnicas, prácticas, teóricas y sapienciales se aúnan en el relato que cada alumno está llamado a escribir con su propia existencia. De este modo, la formación no es ni un ejercicio abstracto de erudición, ni una construcción arbitraria, sino el resultado de la integración personal de estudio, experiencia y vida, con el acompañamiento de una comunidad universitaria.

Una de las consecuencias que de la experiencia y los análisis de estos años hemos sacado de cara a la renovación de la docencia de las asignaturas, especialmente de las denominadas de formación humanística o moral, apunta al método: el fin último de la asignatura ha de dar luz y sentido a cada uno de los elementos de la misma, no sólo en un discurso teórico, sino vital. De modo que la docencia, la materia, las actividades y los resultados de aprendizaje perseguidos estén realmente en sintonía.

El objetivo último, por tanto, ha de ser “intencionado”, podríamos decir forzando un poco el lenguaje, pero de manera que exprese que se trata de algo querido de manera explícita por todos, profesor y alumnos.

Y como el mismo ejercicio de la virtud de la prudencia establece, la determinación última es la que conduce a buen fin todo el ejercicio intelectual previo. De manera que la materia ha de estar pensada y querida también de forma “moral”, esto es, inteligentemente práctica, y en la medida de lo posible, mostrando cómo todos y cada uno de los pasos de la prudencia se dan no sólo en las grandes decisiones, sino también en las más pequeñas y parciales.

En este sentido, cuando la reforma educativa del Espacio Educativo de Enseñanza Superior (EEES) habla de competencias, una recta comprensión de las mismas como la que aquí planteamos, nos permite poner en práctica de forma integrada aquellos conocimientos adquiridos, aptitudes y rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas. La competencia en este sentido, por tanto, no es una mera rutina como aquellas a las que hemos aludido más arriba y que “industrializaban” el periodismo como si de una mera factoría de productos se tratara. Que un periodista sea competente implica no sólo que sabe, que sabe hacer, sino también que sabe ser y estar.

5. EL DEBER DE INFORMAR Y LA REALIZACIÓN EFECTIVA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Llegados a este punto, nos queda por mostrar cómo esta formación del periodista contribuye a poner en relación efectiva el cumplimiento del deber de informar con el derecho de la información. En realidad, se trata de una vinculación no sólo formal, desde el punto de vista de la configuración de los regímenes políticos democráticos o sistemas de libre opinión pública, sino, sobre todo, de una vinculación moral. Por eso hablamos de una realización efectiva, ya que la formación prudencial vincula, como hemos visto, desde el primer momento, inteligencia y voluntad en el discernimiento de la acción.

Como señala López Talavera, el periodista o comunicador tiene que ser íntegro en el desempeño de su profesión “fundamentalmente por dos razones: para no perder su libertad, su independencia profesional, y sobre todo, para no perder su credibilidad ante sus lectores, público o audiencia” (López Talavera 2016: 59). Si derecho y deber son siempre correlativos, en el caso de la información, es una correlación que en todo caso está mediada por la sociedad.

A este respecto, es muy significativo cuanto en su ensayo *La prensa libre*, señalaba Belloc hace exactamente un siglo, cuando trataba de diagnosticar el estado de la prensa y de los medios de su tiempo, pensando en las luchas de poder entre la propiedad y los trabajadores, desde el anhelo de esa realización efectiva del derecho a la información de la que estamos hablando. No hay prensa libre sin periodistas libres, venía a decir.

“La persona que dice la verdad cuando sus colegas mienten alrededor, goza siempre de un pequeño poder de profecía. (...) Los efectos de la prensa libre en todos esos casos pueden compararse a los efectos acumulativos de una de las grandes ofensivas de la guerra actual. Cada golpe individual no es ni dramático ni de efecto decisivo; no hay apenas avance.

El mapa no anima al optimismo. Pero cada golpe cuenta, y *cuando llegue el final* todos verán de repente cuál fue el efecto acumulativo” (Belloc 2007, pp. 120 y 123)

Sólo un ejercicio responsable del deber de informar nos permitirá establecer el marco genuino de relaciones entre periodistas y ciudadanos. La formación prudencial nos conducirá a una renovación de ese pacto, desde el momento en el que será el modo en que el profesional pueda ofrecer un servicio. Un servicio que será lo más personal posible porque no obedecerá, en principio, a conceptos, ideas o empresas, sino al ejercicio de un discernimiento desde el compromiso personal y al servicio del bien común. Como concluyen Kovach y Rosensteil su conocido ensayo, *los elementos del periodismo*: “la civilización ha producido una idea más poderosa que cualquier otra, la idea de que las personas pueden gobernarse a sí mismas, y ha creado una teoría de la información, que en gran parte aún no ha sido articulada, para sostener esa idea. Esa teoría se llama periodismo. Pues bien, esa idea y esa teoría nacieron y caerán juntas” (Kovach 2012, p.266)

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre, M. (2003) La formación en la ética informativa. En *Veracidad y Objetividad. Desafíos éticos en la sociedad de la información* (pp. 27-42). Primer CIEDI. Valencia: Fundación COSO

Agejas Esteban, J.A. (2004) La enconada disputa sobre una fotografía, ¿manipulada o manipuladora? En *Información, libertad y derechos humanos. La enseñanza de la Ética y del Derecho de la Información* (pp.87-107). II CIEDI. Valencia: Fundación COSO

Agejas Esteban, J. A (2016) Responsabilidad moral en la comunicación. En Prado (del) R. (coord.) *Ética y derechos de las audiencias*. México: Universidad Anáhuac-Editorial LIMUSA.

Agejas Esteban, J.A y De Dios-Alija, T. (2011) Aplicación a la empresa periodística de un nuevo paradigma de Responsabilidad Social Corporativa. En *La responsabilidad ética y social de las empresas informativas* (pp.97-117) IX CIEDI. Valencia: Fundación COSO

Belloc, H. (2007) *La prensa libre*. Granada: Nuevo Inicio.

De la Calle Maldonado, C; De Dios-Alija, T. (2015) La formación de la responsabilidad social en universitarios. En Aldeanueva Fernández, I. (Ed), *Experiencias iberoamericanas en responsabilidad social universitaria*. Medellín, Colombia: Fundación Universitaria Luis Amigo (FUNLAM).

Demam, T. (2012) *La prudencia. Notas doctrinales tomistas*. Navarra: Gaudete.

Galdón López, G. (2006) De la objetividad a la prudencia. Hacia un paradigma informativo humanista” *Comunicación y Hombre*, 2, 43-54.

García Ramos, J.M., De la Calle, C., Valbuena, C., De Dios-Alija, T. (2015) Hacia la validación del constructo Responsabilidad Social del estudiante universitario (RSEU) *Bordón. Revista de Pedagogía*, 68 (1) 153-170.

Gilbert, P. Dono, simbolo, reciprocità. *Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze*,1, 143-153.

Greene González, M.F. (2012) *La objetividad como rutina periodística*. Pamplona: EUNSA.

Kovach, B. – Rosenstiel, T. (2012) *Los elementos del periodismo*. Madrid: Aguilar.

López Quintás, A. (2009) *Descubrir la grandeza de la vida*. Bilbao: Desclée De Brouwer.

López Talavera, M. (2016) *Ética en los medios de comunicación*. Barcelona: Editorial UOC.



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

